

# DIARIO DE SESIONES

## Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba

04 de Mayo de 2005

### 17ª Reunión – 15º Sesión Ordinaria

*Vicegobernador:*

*Presidente Provisorio:*

*Vicepresidente:*

*Vicepresidente 1ª:*

*Vicepresidente 2ª:*

*Secretario Legislativo:*

*Secretario Técnico Parlamentario:*

*Secretario Administrativo:*

*Secretario de Coordinación*

*Operativa y de Comisiones:*

*Prosecretario Legislativo:*

*Prosecretario Técnico Parlamentario:*

*Prosecretario de Coordinación*

*Operativa y de Comisiones:*

**SCHIARETTI**, Juan.

**FORTUNA**, Francisco José.

**FERNÁNDEZ**, María Irene.

**FONSECA**, Ricardo.

**KARL**, Abelardo Guillermo.

**ARIAS**, Guillermo

**PASCHETTI**, Jorge Juan.

**GIGENA**, Raúl Enrique.

**NÚÑEZ**, Gustavo Eduardo.

**FUNES VÉLEZ**, Ernesto.

**ALVAREZ**, Luís Alberto.

**HUNICKEN**, Nicolas.

#### Legisladores presentes:

ARIAS, Luis Guillermo.

BASSO, Omar Antonio.

BENASSI, Julián.

BIANCIOTTI, Isabel del Carmen.

CARBONETTI, Domingo Ángel.

CARRARA, Luís Elías

CARRILLO, Juan Antonio.

CASTELLANO, Raúl Oscar.

CASTRO, Nora del Valle.

CEBALLOS, Norma Beatriz.

CID, Juan Manuel.

CIOCATTO, Alider Tiburcio.

COSTA, Raúl Omar.

DOMÍNGUEZ, Lucía Nélica.

DRESSINO, Ana María.

ECHEPARE, Juan Domingo.

FERAUDO, Evelina Margarita.

FERNÁNDEZ, Eduardo Gabriel.

FERNÁNDEZ, María Irene.

FLORES DURAN, Amado Narciso.

FONSECA, Ricardo Oscar.

FONTANINI, Raúl.

FORTUNA, Francisco José.

GAMAGGIO, Héctor Hugo.

GARAVAGLIA, Miguel Angel.

GASTALDI, Enrique José.

GAUMET, Graciela Elba.

GIUSTINA, Jorge Alejandro.

GUTIERREZ, Mónica Edith.

HEREDIA, Dante Fortunato.

HERNÁNDEZ, Zulema Dora.

JUNCOS, Liliana Josefa.

KARL, Abelardo Guillermo.

LASCANO, Sonia Marcela.

LEIVA, María Fernanda.

LOBO, Héctor Reinaldo.

LUJÁN, Nélica Beatriz.

MAIOCCO, José Antonio.

MASSA, Eduardo Manuel.

MASSEI, Juan Carlos.

MÉNDEZ, Jorge Alejandro.

MENTA, Alicia Susana.

MONIER, José Omar.

MOSCOSO, Carlos Gustavo.

MOSQUERA, Alfonso Fernando.  
 MUSSI, María Mirtha.  
 NICOLÁS, Miguel Osvaldo.  
 NOUZERET, Carlos María.  
 OLIVERO, María Liliana.  
 PODVERSICH, Norberto Luís.  
 POGGIO, Oscar Francisco.  
 PRATO, Mónica Graciela Adriana.  
 RAMOS, María Ernestina.  
 RECALDE, Argentino Ramón.  
 ROMERO, Juana Manuela.  
 ROSAS, Blanca del Valle.  
 RUIZ, Graciela Raquel.  
 SÁNCHEZ, Raúl Hernando.  
 SANTOS, José Gustavo.  
 SCARLATTO, José Luís.

SELLA, Enrique.  
 SOLERI, Santiago Luís.  
 TAQUELA, María Eugenia.  
 TRAD, Luis Jacobo.  
 VALINOTTO, Jorge Anselmo.  
 VEGA, Horacio Daniel.  
 VIGO, Alejandra María.

**Legisladores ausentes justificados:**

CARRERAS, José Benito.  
 GUZMÁN, Marcelo Damián.  
 MARTÍNEZ ODDONE, Heriberto Agustín.

**Legisladores ausentes no justificados:**

## SUMARIO

- 1.- Izamiento de la Bandera Nacional ... 936
- 2.- Intendente de la localidad de Melo, don Jorge Abod y trabajadores de esta Legislatura: señor Luis Fernando Ribotta y señor Jorge Juez. Fallecimiento. Homenaje. Proyectos de declaración (07281/L/05 y 07288/L/05) del legislador Carrara y de la legisladora Ceballos, respectivamente ... 936
- 3.- Versión taquigráfica. Aprobación ... 936
- 4.- Asuntos entrados:
  - I.- Comunicaciones oficiales ... 936

**De los señores legisladores**

- II.- Establecimiento de Asistencia y Rehabilitación Villa Bustos, EPAR, de Santa María de Punilla. Nuevas unidades prestacionales. Inauguración. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (07230/L/05) de la legisladora Domínguez ... 937
- III.- Mayu-Sumaj, Departamento Punilla. Fiestas Patronales de Nuestra Señora del Valle. Adhesión. Proyecto de declaración (07231/L/05) de la legisladora Domínguez ... 937

- IV.- Campeonato Mundial 2005 de Vuelo Libre, en Embalse de Río Tercero. Interés Legislativo. Proyecto de declaración (07234/L/05) del legislador Gastaldi ... 937

- V.- Jefe de Gobierno del Distrito Federal de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador. Desafuero y proscripción política. Posibles derivaciones disvaliosas. Preocupación. Proyecto de declaración (07235/L/05) de los legisladores Vigo y Arias ... 938

- VI.- Provincia. Demanda ante el CIADI desde el año 2001 a la fecha por empresa privada. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07237/L/05) de la legisladora Hernández ... 938

- VII.- Día de la Minería. Interés Legislativo y adhesión. Proyecto de declaración (07240/L/05) del legislador Recalde ... 938

- VIII.- E.R.Se.P. Función que desarrolla o desarrolló para el estudio jurídico Arriagoni y Asociados. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07242/L/05) de los legisladores Fonseca, Gutiérrez y Eduardo Fernández ... 938

IX.- Día Internacional de la Enfermera. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (07244/L/05) de la legisladora Ceballos..... 938

X.- Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (07245/L/05) de las legisladoras Ceballos, Vigo, Feraudo, Romero, Juncos, María Irene Fernández, Rosas, Mussi, Domínguez y Lascano..... 938

XI.- Tratado Constitucional de la Unión Europea. Inclusión de las Islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur. Rechazo. Proyecto de declaración (07246/L/05) de los legisladores Eduardo Fernández, Prato y Fonseca..... 938

XII.- Campeonato Mundial de Aeromodelismo Vuelo Libre FIA–FIB–FIC, en Embalse. Adhesión. Proyecto de declaración (07247/L/05) del legislador Carrillo..... 938

XIII.- Conferencia: La importancia del golf en el desarrollo turístico de una región. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (07248/L/05) del legislador Echepare..... 938

XIV.- Acto cívico institucional y anticipo de las fiestas patronales en honor a San José Obrero, en Villa Santa Cruz del Lago. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (07249/L/05) de la legisladora Domínguez..... 938

XV.- Ley 8431 (Código de Faltas). Art. 80 bis (ofrecimiento de alquiler, venta o permuta de inmuebles en la vía pública sin habilitación municipal). Modificación. Proyecto de ley (07250/L/05) de las legisladoras Bianciotti, Dressino, Castro y Luján..... 938

XVI.- Día Mundial de la Libertad de Prensa. Adhesión. Proyecto de declaración (07253/L/05) de los legisladores Gutiérrez, Fonseca y Eduardo Fernández..... 939

XVII.- Hinchas de Talleres. Portación de banderas con la cruces esvásticas. Actitud. Repudio. Proyecto de declaración (07257/L/05) de los legisladores Carrara y Echepare..... 939

XVIII.- Piloto Marcos Ligato. Ganador del Grupo N/4. Rally Corredor de Los Lagos de San Carlos de Bariloche. Beneplácito y felicitaciones. Proyecto de declaración (07258/L/05) del legislador Echepare..... 939

XIX.- Sr. Oreste Berta. Título de Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba por su trayectoria a la investigación de la ingeniería mecánica automovilística. Beneplácito y felicitaciones. Proyecto de declaración (07259/L/05) de los legisladores Carrara y Carrillo..... 939

XX.- Islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur. Inclusión en la Constitución prevista para la Comunidad Europea. Repudio e indignación. Poder Ejecutivo Nacional. Instancia para agotar las instancias diplomáticas para salvaguardar los intereses del país. Proyecto de declaración (7260/L/05) de los legisladores Luján, Dressino, Nicolás, Poggio, Castro, Santos y Bianciotti..... 939

XXI.- Tenistas argentinos David Nalbandian, en Alemania y Gastón Gaudio, en Portugal. Triunfo obtenido. Beneplácito. Proyecto de declaración (07261/L/05) de la legisladora Ceballos..... 939

XXII.- Islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur y Antártida Argentina. Inclusión en la Constitución prevista para la Comunidad Europea. Objeción. Reino de Inglaterra. Propuesta de incluirlas como territorios británicos. Actitud. Repudio. Proyecto de declaración (07263/L/05) de los legisladores Gaudet y Massa..... 939

XXIII.- Córdoba subsele del Campeonato Mundial de Tango, en Villa Dolo-

res, finalizando en la Sala Mayor del Teatro del Libertador San Martín de Córdoba. Adhesión. Proyecto de declaración (07264/L/05) de la legisladora Ceballos..... 939

XXIV.- Banderas con las cruces esvásticas. Exhibición por grupúsculo de personas en un estadio de fútbol. Manifestaciones racistas, discriminatorias y delictivas. Repudio. Proyecto de declaración (07265/L/05) de los legisladores Massei y Fortuna..... 939

XXV.- Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha, en El Añaño. Interés Legislativo. Proyecto de declaración (07266/L/05) de los legisladores Basso, Giustina y Feraudo..... 940

XXVI.- Tenista David Nalbandian. Victoria en el Abierto de Tenis de Munich. Beneplácito y felicitaciones. Proyecto de declaración (07267/L/05) del legislador Echepare..... 940

XXVII.- Plan de alfabetización cubano "Yo sí puedo", aplicado en Argentina a través de "Un Mundo Mejor es Posible". Interés Legislativo. Proyecto de declaración (07268/L/05) de los legisladores Eduardo Fernández, Prato, Leiva y Gutiérrez..... 940

XXVIII.- Transformadores eléctricos que operan las Federaciones de Cooperativas Eléctricas. Transformadores que se les detectó PCBs. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07269/L/05) del legislador Benassi..... 940

XXIX.- Transformadores eléctricos a los que se les detectó PCBs. Reemplazo. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07270/L/05) del legislador Benassi..... 940

XXX.- Ruta Provincial 1, tramo San Francisco - límite con la Provincia de Santa Fe. Reparación y señalización. Solicitud al PE. Proyecto de declaración (07271/L/05) del legislador Benassi..... 940

XXXI.- Jornadas Nacionales La Danza Folklórica en la Argentina, en Cosquín. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (07272/L/05) de la legisladora Domínguez..... 940

XXXII.- Escritoras Mugas, Tagliasachi y Validakis. Selección para participar en distintas antologías que editará Nuevo Ser Editorial de Buenos Aires. Beneplácito. Proyecto de declaración (07273/L/05) de los legisladores Sella y Menta..... 940

XXXIII.- Fábrica Militar de Río Tercero. Supuesta emisión de gases químicos y efluentes de líquidos sin tratar al Río Citalamochita. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07274/L/05) de los legisladores Sella y Menta..... 940

XXXIV.- Impuesto a los Ingresos Brutos. Exenciones subjetivas receptadas, otorgadas y rechazadas durante el período Enero/2001 a Marzo/2005. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07275/L/05) de los legisladores Dresino, Castro, Bianciotti y Santos..... 940

XXXV.- Venta y compra de energía eléctrica y servicio de telefonía durante los años 2002 al 2005, sobre cuestiones laborales, contractuales y concesionarias de la E.P.E.C.. Montos facturados. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07276/L/05) de la legisladora Prato..... 941

XXXVI.- Ley Nacional 25.936, (Día del Donante de Sangre). Adhesión. Proyecto de ley (07277/L/05) de la legisladora Prato..... 941

XXXVII.- Arroyos Los Mistoles, Macha y Simbolar. Extracción y utilización del agua. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07278/L/05) de la legisladora Prato..... 941

XXXVIII.- Lucha Contra la Obesidad. Interés Provincial. Declaración. Proyecto de ley (07279/L/05) de los legisladores Maiocco, Valinotto, Gaumet y Hernández..... 941

XXXIX.- Camino “La Legua”, tramo Laguna Larga - autopista Córdoba-Oncativo. Pavimentación. Solicitud al PE. Proyecto de declaración (07280/L/05) de los legisladores Maiocco, Valinotto, Gaumet y Hernández..... 941

XL.- Don Jorge Abod. Intendente de la Localidad de Melo. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de declaración (07281/L/05) del legislador Carrara..... 941

XLI.- Puestos de peaje y otros puntos estratégicos. Plan de control vehicular permanente para la prevención de accidentes de tránsito. Implementación. Solicitud al Ministerio de Seguridad. Proyecto de declaración (07282/L/05) del legislador Valinotto..... 941

XLII.- Reglamento Interno. Arts. 47 y 48 (Jefaturas y Direcciones). Modificación. Proyecto de resolución (07283/L/05) de los legisladores Fonseca y Gutiérrez.... 941

XLIII.- Tribunal de Conducta Policial. Personal policial sumariado. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07284/L/05) del legislador Fonseca..... 941

XLIV.- Dirección Provincial de la Vivienda. Traslado y licencias compulsivas otorgadas al personal. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07285/L/05) del legislador Fonseca..... 942

XLV.- Ley de Prevención y Sanción de la Violencia Laboral. Proyecto de ley (07286/L/05) de las legisladoras Ceballos, Juncos, Vigo, Ruiz, Rosas, Lascano, Feraudo, Mussi, María Irene Fernández, Romero y Domínguez..... 942

XLVI.- Festival de Bandas en el Estadio Chateau Carreras de Córdoba. Adhesión. Proyecto de declaración (07287/L/05) de la legisladora Ceballos..... 942

XLVII.- Crio. Luis Fernando Ribotta. Fallecimiento. Memoria. Homenaje. Proyecto de declaración (07288/L/05) de la legisladora Ceballos..... 942

XLVIII.- I.P.E.M. 177 Antonio Sobral, de Laboulaye. Aniversario. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (07289/L/05) de la legisladora Gaumet...942

XLIX.- Maestría en Política y Gestión de Desarrollo Local, aprobada por las Universidades Nacionales de Córdoba y Villa María. Interés Legislativo. Proyecto de declaración (07290/L/05) de los legisladores Feraudo, Rosas, Ceballos, Podversich, Poggio, Romero y Sánchez... 942

L.- Jornadas de Historia de los Pueblos de Paravachasca, Calamuchita y Xanáes, en el Museo Nacional de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers. Interés Legislativo. Proyecto de declaración (07291/L/05) de los legisladores Feraudo, Sánchez, Podversich, Romero, Rosas, Gutiérrez y Poggio..... 942

LI.- Logosofía. Aniversario. Actos conmemorativos. Adhesión. Proyecto de declaración (07292/L/05) de los legisladores Feraudo, Rosas, Romero, Sánchez, Ceballos y Podversich..... 942

LII.- Encuentro Argentino del Instituto Jacques Maritain “Los Derechos Humanos en Latinoamérica”, en Córdoba. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (07293/L/05) del legislador Soleri..... 942

LIII.- Levantamiento del Ghetto de Varsovia y del Iom Ha Shoa, Día de Recordación del Holocausto. Aniversario. Actos conmemorativos. Adhesión. Víctimas del horror nazi. Homenaje. Proyecto de declaración (07294/L/05) de los legisladores Massei y Fortuna... 942

LIV.- Islas Malvinas, Sándwich y Georgias de Sur y del Territorio Antártico. Inclusión en el Tratado Constitucional de la Unión Europea como territorio de ultramar de Gran Bretaña. Rechazo. Países miembros de la Unión Europea. Abstención de ratificar la Constitución

Europea en estos términos. Solicitud. Proyecto de declaración (07295/L/05) de los legisladores Massei, Scarlatto y Cioccatto.....943

### Del Poder Ejecutivo

LV.- Ley Nacional 25.917, (creación del Régimen Federal de responsabilidad Fiscal). Adhesión. Proyecto de ley (07296/E/05) del Poder Ejecutivo Provincial.....943

LVI.- Despachos de comisión .....943

5.- A) Complejo Asistencial Regional de Bell Ville. Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (06884/L/05) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, para su archivo. Se aprueba .....944

B) Ministerio de Solidaridad. Tratamiento de rehabilitación a personas carecientes de la localidad de Deán Funes. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07053/L/05) de las legisladoras Leiva y Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, para su archivo. Se aprueba .....944

C) Agencia Córdoba Deportes. Contrato con los hermanos Barattero. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07086/L/05) de los legisladores Eduardo Fernández, Leiva, Prato y Fonseca. Moción de vuelta a comisión, para su archivo. Se aprueba ... ..944

6.- A) Hospital Neonatal de la Provincia. Fallecimientos de recién nacidos. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (06739/L/05) de los legisladores Hernández, Maiocco, Benassi, Castellano, Ramos, Gaumet, Fonseca, Prato, Massa, Eduardo Fernández, Valinotto, Gutiérrez y Guzmán, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba ... ..944

B) Hospital Materno Neonatal de Córdoba. Desaparición de un recién nacido

fallecido. Pedido de informes. Proyecto de resolución (06764/L/05) de los legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba ... ..944

7.- A) Aseguradora de Riesgos del Trabajo Consolidar A.R.T. Contratación a través del IPAM. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (06867/L/05) de los legisladores Hernández, Olivero, Castellano, Massa, Guzmán, Gaumet, Castro y Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ..945

B) Fondo de Infraestructura Eléctrica creado por Ley 9165. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07010/L/05) del legislador Gastaldi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....946

C) Penitenciarías de la Provincia y presunta vinculación de agente policial en el llamado tráfico de blancas. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (06906/L/05) de los legisladores Fonseca, E. Fernández, Hernández, Gutiérrez y Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ....946

D) Gobierno provincial. Compra de avión Beechcraft. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (06933/L/05) de los legisladores Leiva y Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....946

E) Gobierno provincial. Compra del avión Beechcraft. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (06955/L/05) del legislador Maiocco, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ..946

F) Río San Antonio. Contaminación y construcción edilicia en sus orillas. Ríos

del Valle de Punilla. Control. Pedido de informes. Proyecto de resolución (06697/L/04) de la legisladora Ramos, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... 946

G) Dique La Quebrada. Baja de las aguas. Causas ambientales determinantes. Pedido de informes. Proyecto de resolución (06837/L/05) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... 946

H) Río Ctalamochita. Controles para evitar la extracción de áridos. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (06910/L/05) de los legisladores Sella y Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .... 946

I) Escuelas rurales. Riesgo de contaminación por pesticidas. Prevención. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (06932/L/05) de los legisladores Hernández, Prato y Eduardo Fernández, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ..... 946

J) James Craik. Empresa láctea Punta del Agua. Volcamiento de líquidos cloacales y olores nauseabundos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07025/L/05) de los legisladores Sella y Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ..... 947

K) Tribunal de Conducta Policial. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07030/L/05) de los legisladores Gauget y Massa, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ..... 947

L) I.P.E.M. N° 266, General Savio, en Río Tercero. Cargos vacantes. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07102/L/05) de los legisladores Sella y

Menta. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... 947

M) Comisión Permanente de Prevención de la Violencia Doméstica y programas de prevención de la violencia familiar. Funcionamiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07112/L/05) de los legisladores Bianciotti, Dressino, Martínez Oddone, Karl, Cioccatto, Castro, Luján, Poggio y Nicolás. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... 947

8.- A) Ministerio de Salud. Inspección de farmacias. Pedido de informes. Proyecto de resolución (06832/L/05) de los legisladores del bloque Frente Nuevo, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba. .... 948

B) Arroyo Colanchanga. Niveles de contaminación. Patologías oncológicas registradas en Río Ceballos. Estudios sobre la situación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (06838/L/05) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba..... 948

C) Ex cárcel de mujeres "Buen Pastor". Edificio. Proyecto de refuncionalización. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (06944/L/05) de la legisladora Olivero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba. .... 948

D) B° Altos de Santa Ana. Posible contaminación ambiental. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (06953/L/05) de los legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba. ... 948

E) Plan 100 Escuelas Nuevas. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (06744/L/05) de la legisladora Olivero, con moción de preferen-

cia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba. ....948

F) Dirección Provincial de la Vivienda. Operatorias y/o planes de viviendas paralizadas y vuelto a adjudicar. Pedido de informes. Proyecto de resolución (06745/L/05) de la legisladora Olivero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba. ....948

G) Dirección Provincial de la Vivienda / FO.NA.VI. Cartera hipotecaria. Recategorización, escritura y posterior venta, o securitización de la deuda de los adjudicatarios de viviendas por planes. Pedido de informes. Proyecto de resolución (06746/L/05) de la legisladora Olivero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba. ....948

9.- A) Dirección General de Rentas de Río Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (06413/L/04) de los legisladores Gaumet y Massa, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba. ....949

B) Régimen de redeterminación de precios por reconocimiento de variación de costos, justificado por el ministro de Obras y Servicios Públicos. Decreto. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07032/L/05) de los legisladores Bianciotti, Poggio, Luján, Nicolás, Dressino, Cioccatto, Karl y Castro, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba. ....949

C) Dr. Joaquín González, abogado de organizaciones del Movimiento Campesino de Córdoba. Agresiones sufridas. Rechazo. Investigación y castigo. Reclamo. Proyecto de declaración (07018/L/05) de los legisladores del bloque Frente Nuevo y los legisladores Mosquera, Olivero, Gastaldi y Sella, con moción de preferencia. Moción de vuel-

ta a comisión, con preferencia. Se aprueba. ....949

10.- A) Desnutrición infantil y programas de asistencia alimentaria. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07100/L/05) de los legisladores Castro, Santos, Bianciotti, Cioccatto, Dressino y Nicolás, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba. ... 950

B) Marcos Ligato. Tercer puesto en el Rally de Nueva Zelanda. Beneplácito y felicitaciones. Proyecto de declaración (07140/L/05) del legislador Echepare, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba. .... 950

C) Torneo Argentino de Patinaje Artístico – Categoría Internacional. Adhesión. Proyecto de declaración (07154/L/05) de los legisladores Fortuna y Massei, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba. .... 951

D) Torneo Argentino de Patinaje Artístico – Categoría Internacional. Interés Provincial. Proyecto de declaración (07156/L/05) de los legisladores Fortuna y Massei, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba. .... 951

E) Localidades de Chuña Huasi y Totorillas. Agua potable. Provisión. Estudio de factibilidad. Solicitud. Proyecto de declaración (07113/L/05) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba. ... 952

F) Departamento Sobremonte. Gestiones de estudio, aprovechamiento, financiamiento, preservación, protección y conservación hídrica. Consejo Hídrico Provincial. Prioridad. Solicitud al PE. Proyecto de declaración (07126/L/05) de los legisladores Poggio, Luján, Cioccatto, Santos, Martínez Oddone, Nicolás, Castro y Dressino, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba. .... 953



- G) Curso seminario sobre Seguridad en el Tránsito y Educación Vial, en Morteros. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (07130/L/05) de los legisladores Giustina, Feraudo y Basso, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba. .... 954
- H) Sra. María Eva Duarte de Perón. Nuevo aniversario de su nacimiento. Homenaje a su memoria. Proyecto de declaración (07157/L/05) de las legisladoras Ceballos, Rosas, Feraudo, Junco, Mussi, María Irene Fernández, Romero y Lascano, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba. .... 954
- I) Diario Puntal, de Río Cuarto. 25º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (07178/L/05) de los legisladores Vega y Méndez, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba. .... 955
- 11.- Ley de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba. Establecimiento. Proyecto de ley (06567/E/04) del Poder Ejecutivo, con moción de preferencia y despacho de comisión conteniendo dos propuestas. Se considera y aprueba, en general y en particular. .... 956
- 12.- Obras viales y de viviendas. Llamado a licitación. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (06266/L/04) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia. Tratamiento por la Cámara constituida en comisión y despacho de la misma. Se considera y aprueba el despacho aconsejando el rechazo del proyecto ..... 1036
- 13.- Asuntos entrados a última hora:
- LVII.- Día Mundial de la Libertad de Prensa. Adhesión. Proyecto de declaración (07301/L/05) de los legisladores Feraudo y Basso .... 1040
- LVIII.- Ley de Prevención y Sanción de la Violencia Laboral de los Superiores Jerárquicos hacia el personal dependiente de cualquier organismo instituidos por los Títulos Primero y Segundo de la Segunda Parte de la Constitución Provincial. Proyecto de ley (07302/L/05) de los legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical... ..... 1040
- LIX.- Día Mundial de la Libertad de Prensa. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (07303/L/05) de los legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical..... 1040
- LX.- Subsidios, fondos, planes sociales o cualquier tipo de ayuda material o en efectivo distribuida en Dalmacio Vélez Sársfield. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07304/L/05) de los legisladores Fonseca, Valinotto y Eduardo Fernández..... 1040
- LXI.- Medidas de promoción industrial comprometidas a la Cristalería Quilino. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07306/L/05) de los legisladores Eduardo Fernández y Prato..... 1040
- LXII.- Plan de Promoción Industrial. Radicación de empresas e industrias. Empresa Indu-Agro S.A. de Quilino. Ayuda monetaria o de otra naturaleza que haya recibido. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07307/L/05) de los legisladores Bianciotti, Santos, Dresino, Cioccatto, Nicolás, Luján, Poggio y Castro... ..... 1040
- LXIII.- Despachos de comisión ..... 1040
- 14.- A) Juez de Primera Instancia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia, de la Novena Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Deán Funes. Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego (06992/P/05) del Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto sobre tablas. Se considera y aprueba ..... 1041

B) Juez de Primera Instancia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia, de Segunda Nominación de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Río Tercero. Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego (06992/P/05) del Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto sobre tablas. Se considera y aprueba ... 1041

15.- Síndico de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado. Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota (7165/N/05) del Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba ... 1043

16.- A) 5º Aniversario de la Plaza Federal, en San Roque. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (07202/L/05) de la legisladora Domínguez. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba. ... 1047

B) Campeonato Mundial 2005 de Vuelo Libre, en Embalse de Río Tercero. Interés Legislativo. Proyecto de declaración (07234/L/05) del legislador Gastaldi. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba. ... 1047

C) Día de la Minería. Interés Legislativo y adhesión. Proyecto de declaración (07240/L/05) del legislador Recalde. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba. ... 1047

D) Tratado Constitucional de la Unión Europea. Inclusión de las Islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur. Rechazo. Proyecto de declaración (07246/L/05) de los legisladores Eduardo Fernández, Prato, Fonseca y Olivero. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y des-

pacho de la misma. Se considera y aprueba. ... 1048

E) Campeonato Mundial de Aeromodelismo Vuelo Libre FIA-FIB-FIC, en Embalse. Adhesión. Proyecto de declaración (07247/L/05) del legislador Carrillo. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba. ... 1047

F) Día Mundial de la Libertad de Prensa. Beneplácito y Adhesión. Proyectos de declaración compatibilizados (07253/L/05, 07301/L/05y 07303/L/05) de los legisladores Gutiérrez, Fonseca y Eduardo Fernández, de los legisladores del bloque del Frente Nuevo, de los legisladores Feraudo y Basso y de los legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, respectivamente. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba. .... 1049

G) Hinchas de Talleres. Portación de banderas con la cruces esvásticas. Actitud. Repudio. Proyecto de declaración (07257/L/05) de los legisladores Carrara y Echepare. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba. ... 1049

H) Sr. Oreste Berta. Título de Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba por su trayectoria a la investigación de la ingeniería mecánica automovilística. Beneplácito y felicitaciones. Proyecto de declaración (07259/L/05) de los legisladores Carrara y Carrillo. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba. ... 1050

I) Islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur. Inclusión en la Constitución prevista para la Comunidad Europea. Repudio e indignación. Poder Ejecutivo Nacional. Instancia para agotar las instancias diplomáticas para salvaguardar

los intereses del país. Proyecto de declaración (7260/L/05) de los legisladores Luján, Dressino, Nicolás, Poggio, Castro, Santos y Bianciotti. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba. .... 1048

J) Tenistas argentinos David Nalbandian, en Alemania y Gastón Gaudio, en Portugal. Triunfo obtenido. Beneplácito. Proyecto de declaración (07261/L/05) de la legisladora Ceballos. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba. .... 1053

K) Islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur y Antártida Argentina. Inclusión en la Constitución prevista para la Comunidad Europea. Objeción. Reino de Inglaterra. Propuesta de incluirlas como territorios británicos. Actitud. Repudio. Proyecto de declaración (07263/L/05) de los legisladores Gaumet y Massa. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba. ... 1048

L) Córdoba sub sede del Campeonato Mundial de Tango, en Villa Dolores, finalizando en la Sala Mayor del Teatro del Libertador San Martín de Córdoba. Adhesión. Proyecto de declaración (07264/L/05) de la legisladora Ceballos. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba. ... 1050

M) Banderas con las cruces esvásticas. Exhibición por grupúsculo de personas en un estadio de fútbol. Manifestaciones racistas, discriminatorias y delictivas. Repudio. Proyecto de declaración (07265/L/05) de los legisladores Massei y Fortuna. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba. .... 1050

N) Tenista David Nalbandian. Victoria en el Abierto de Tennis de Munich. Beneplácito y felicitaciones. Proyecto de declaración (07267/L/05) del legislador Echepare. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba. ... 1050

Ñ) Escritoras Mugas, Tagliasachi y Validakis. Selección para participar en distintas antologías que editará Nuevo Ser Editorial de Buenos Aires. Beneplácito. Proyecto de declaración (07273/L/05) de los legisladores Sella y Menta. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba. .... 1050

O) Don Jorge Abod. Intendente de la Localidad de Melo. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de declaración (07281/L/05) del legislador Carrara. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba. .... 1051

P) Festival de Bandas en el Estadio Chateau Carreras de Córdoba. Adhesión. Proyecto de declaración (07287/L/05) de la legisladora Ceballos. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba. .... 1051

Q) I.P.E.M. 177 Antonio Sobral, de Laboulaye. Aniversario. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (07289/L/05) de la legisladora Gaumet. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba. .... 1051

R) Maestría en Política y Gestión de Desarrollo Local, aprobada por las Universidades Nacionales de Córdoba y Villa María. Interés Legislativo. Proyecto

de declaración (07290/L/05) de los legisladores Feraudo, Rosas, Ceballos, Podversich, Poggio, Romero y Sánchez. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba. .... 1051

S) Encuentro Argentino del Instituto Jacques Maritain "Los Derechos Humanos en Latinoamérica", en Córdoba. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (07293/L/05) del legislador Soleri. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba. .... 1051

T) Levantamiento del Ghetto de Varsovia y del Iom Ha Shoa, Día de Recordación del Holocausto. Aniversario. Actos conmemorativos. Adhesión. Víctimas del horror nazi. Homenaje. Proyecto de declaración (07294/L/05) de los legisladores Massei y Fortuna. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba. .... 1052

U) Islas Malvinas, Sándwich y Georgias de Sur y del Territorio Antártico. Inclusión en el Tratado Constitucional de la Unión Europea como territorio de ultramar de Gran Bretaña. Rechazo. Países miembros de la Unión Europea. Abstención de ratificar la Constitución Europea en estos términos. Solicitud. Proyecto de declaración (07295/L/05) de los legisladores Massei, Scarlatto y Cioccatto. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba. .... 1048

17.- E.R.Se.P. Función que desarrolla o desarrolló para el estudio jurídico Arrigoni y Asociados. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07242/L/05) de los legisladores Fonseca, Gutiérrez y Eduardo Fernández. Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza. ... 1065

18.- Reglamento Interno. Arts. 47 y 48 (Jefaturas y Direcciones). Modificación. Proyecto de resolución (07283/L/05) de los legisladores Fonseca y Gutiérrez. Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza. .... 1066

19.- Tribunal de Conducta Policial. Personal policial sumariado. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07284/L/05) del legislador Fonseca. Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza. .... 1066

20.- Dirección Provincial de la Vivienda. Traslado y licencias compulsivas otorgadas al personal. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07285/L/05) del legislador Fonseca. Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza..... 1067

21.- Subsidios, fondos, planes sociales o cualquier tipo de ayuda material o en efectivo distribuida en Dalmacio Vélez Sársfield. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07304/L/05) de los legisladores Fonseca, Valinotto y Eduardo Fernández. Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza ..... 1067

22.- A) Medidas de promoción industrial comprometidas a la Cristalería Quilino. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07306/L/05) de los legisladores Eduardo Fernández y Prato. Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza ... 1068

B) Plan de Promoción Industrial. Radiación de empresas e industrias. Empresa Indu-Agro S.A. de Quilino. Ayuda monetaria o de otra naturaleza que haya recibido. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07307/L/05) de los legisladores Bianciotti, Santos, Dresino, Cioccatto, Nicolás, Luján, Poggio y Castro. Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza..... 1068

23.- Plan de alfabetización cubano "Yo sí puedo", aplicado en Argentina a través de "Un Mundo Mejor es Posible". Interés Legislativo. Proyecto de declaración (07268/L/05) de los legisladores Eduardo Fernández, Prato, Leiva y Gutiérrez. Moción de preferencia. Se aprueba. ... 1070

24.- Puestos de peaje y otros puntos estratégicos. Plan de control vehicular permanente para la prevención de accidentes de tránsito. Implementación. Solicitud al Ministerio de Seguridad. Proyecto de declaración (07282/L/05) del legislador Valinotto. Moción de preferencia. Se aprueba. ... 1070

25.- Constitución Provincial. Artículo 51. Reglamentación. Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. Artículo 221. Modificación. Proyecto de ley (05340/L/04) de los legisladores Gutiérrez y Fonseca. Moción de preferencia. Se rechaza ..... 1071

- En la ciudad de Córdoba, a cuatro días del mes de mayo de 2005, siendo la hora 16 y 09:

### - 1 -

#### IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Con la presencia de 54 señores legisladores, declaro abierta la decimoquinta sesión ordinaria del 127 período legislativo.

Invito al señor legislador Luis Trad a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

- Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Trad iza la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

### - 2 -

#### HOMENAJE

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión voy a solicitar un minuto de silencio con motivo de los fallecimientos del señor Intendente de la localidad de Melo, don Jorge Abod, y de quienes fueron trabajadores de esta Legislatura, el señor Luis Fernando Ribotta y el señor Jorge Juez, e invito a los señores legisladores y público presente a ponerse de pie.

- Así se hace.

### - 3 -

#### VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior.

- Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobada.

### - 4 -

#### ASUNTOS ENTRADOS

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar con una edición de los mismos en cada una de las bancas de los señores legisladores; les recuerdo que pueden solicitar la inclusión de coautores o el giro de los proyectos a otras comisiones.

Tiene la palabra el señor legislador Fernández.

**Sr. Fernández.**- Señor presidente, solicito

que se incluya como coautora del proyecto 7246/L/05 a la legisladora Liliana Olivero.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Así se hará, señor legislador.

Tiene la palabra la señora legisladora Gutiérrez.

**Sra. Gutiérrez.**- Señor presidente, solicito la extensión de la autoría del proyecto 7253/L/05 a todo el bloque del Frente Nuevo.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Así se hará, señora legisladora.

Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.

**Sr. Fonseca.**- Señor presidente, solicito la extensión de la autoría del proyecto 7304/L/05 al legislador Jorge Valinotto.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Así se hará, señor legislador.

Tiene la palabra el señor legislador Santos.

**Sr. Santos.**- Señor presidente, es para hacer extensiva la autoría de los proyectos 7302 y 7303/L/05 a todo el bloque de la Unión Cívica Radical.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Así se hará, señor legislador.

Tiene la palabra el señor legislador Santos.

**Sr. Santos.**- Señor presidente, discúlpeme pero he omitido, en el mismo sentido, incorporar a todo el bloque del radicalismo en el proyecto 7275/L/05.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Así se hará, señor legislador.

### I

#### COMUNICACIONES OFICIALES DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

07236/N/05

**De la Señora Legisladora Taquela:** Solicitando la rehabilitación del Proyecto N°:

05063/L/04

**Proyecto de declaración:** Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, arbitre las medidas pertinentes a fin de investigar el circuito de comercialización de los cables del servicio de telefonía fija que son objeto de robo permanente.

**A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía**

07252/N/05

**De la Señora Legisladora Gutiérrez:** Solicitando la rehabilitación del Proyecto N°:

**05097/L/04**

**Proyecto de ley:** Iniciado por los Legisladores Fonseca, Gutiérrez y Olivero, por el que crea el Registro de Artistas Cordobeses en el ámbito de la Agencia Córdoba Cultura S.E., asegurando la participación de los mismos en eventos artísticos auspiciados o subsidiados por la provincia.

**A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización**

**DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES**

**07262/N/05**

**De la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones:** Remitiendo para el Archivo, conforme el Artículo 111 del Reglamento Interno, los Proyectos N°: 04884, 05073, 05076, 05077, 05080, 05108 y 05137/L/04.

**Al Archivo**

**DEL PODER EJECUTIVO**

**07251/N/05**

**Del Ministerio de Finanzas:** Remitiendo la Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo de 2005.

**A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda**

**DE LA FISCALÍA DE ESTADO**

**07256/N/05**

**De la Fiscalía de Estado de la Provincia:** Respondiendo la Resolución N° 1693/04, correspondiente al Proyecto N° 05003/L/04, Pedido de Informes, iniciado por los Bloques del Frente Nuevo e Izquierda Unida, referido a la detención de una ciudadana de la provincia por contravención al Código de Faltas.

**A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales**

**DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN**

**07254/N/05**

**De la Presidencia de la Nación:** Acusando re-

cibo de la Declaración N° 6900/05, correspondiente al Proyecto N° 06981/L/05, referida a la licitación para la repavimentación, bacheo y limpieza de banquetas de la Ruta Nacional N° 158, tramo Villa María – General Deheza.

**Al Archivo**

**DE LEGISLATURAS PROVINCIALES**

**07255/N/05**

**De la Legislatura de la Provincia de Neuquén:** Remitiendo Declaración N° 715, por la que repudia el Golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976.

**Al Archivo**

**PROYECTOS DE LOS SEÑORES LEGISLADORES**

**II**

**07230/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por la Legisladora Domínguez, por el cual adhiere y expresa beneplácito por la inauguración de nuevas unidades prestacionales en el Establecimiento de Asistencia y Rehabilitación Villa Bustos, EPAR, de Santa María de Punilla, llevado a cabo el 29 de Abril.

**A la Comisión de Salud Humana**

**III**

**07231/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por la Legisladora Domínguez, por el cual adhiere a las Fiestas Patronales de Nuestra Señora del Valle, realizadas entre los días 28 de Abril y 1° de Mayo en la Comuna de Mayu-Sumaj, Departamento Punilla.

**A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales**

**IV**

**07234/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual declara de Interés Legislativo al Campeonato Mundial 2005 de Vuelo Libre, a desarrollarse en la Localidad de Embalse de Río Tercero, entre los días 21 y 28 de Mayo.

**A la Comisión de Deportes, Recreación y su Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción**

## V

07235/L/05

**Proyecto de declaración:** Iniciado por los Legisladores Vigo y Arias, por el cual expresa preocupación por las posibles derivaciones disvaliosas por el desafuero y la proscripción política del Jefe de Gobierno del Distrito Federal de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador.

**A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos**

## VI

07237/L/05

**Proyecto de resolución:** Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe si la Provincia ha sido demandada ante el CIADI, desde el año 2001 a la fecha, por alguna empresa privada.

**A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda**

## VII

07240/L/05

**Proyecto de declaración:** Iniciado por el Legislador Recalde, por el cual declara de Interés Legislativo y adhiere a la celebración del Día de la Minería, a conmemorarse el 7 de Mayo.

**A la Comisión de Industria y Minería**

## VIII

07242/L/05

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores Fonseca, Gutiérrez y Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la función que desarrolla ó desarrolló para el E.R.Se.P. el Estudio Jurídico Arrigoni y Asociados.

**A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía**

## IX

07244/L/05

**Proyecto de declaración:** Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere y expresa beneplácito por la celebración del “Día Internacional de la Enfermera”, a conmemorarse el 12 de Mayo.

**A la Comisión de Salud Humana**

## X

07245/L/05

**Proyecto de declaración:** Iniciado por las Legisladoras Ceballos, Vigo, Feraudo, Romero, Juncos, María

Irene Fernández, Rosas, Mussi, Domínguez y Lascano, por el cual adhiere y expresa beneplácito por la celebración del “Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, a conmemorarse el 28 de Mayo.

**A la Comisión de Salud Humana**

## XI

07246/L/05

**Proyecto de declaración:** Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández, Prato y Fonseca, por el cual rechaza la inclusión de las Islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur en el Tratado Constitucional de la Unión Europea.

**A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos**

## XII

07247/L/05

**Proyecto de declaración:** Iniciado por el Legislador Carrillo, por el cual adhiere al Campeonato Mundial de Aeromodelismo Vuelo Libre FIA-FIB-FIC, a realizarse del 21 al 27 de Mayo en la Localidad de Embalse.

**A la Comisión de Deportes, Recreación y su Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción**

## XIII

07248/L/05

**Proyecto de declaración:** Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito y adhesión a la conferencia sobre el tema “La importancia del golf en el desarrollo turístico de una región”, realizada el 28 de Abril en la Ciudad de Córdoba.

**A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional**

## XIV

07249/L/05

**Proyecto de declaración:** Iniciado por la Legisladora Domínguez, por el cual adhiere y expresa beneplácito por el acto cívico institucional y el anticipo de las fiestas patronales en honor a San José Obrero, realizado en la Comuna de Villa Santa Cruz del Lago, el 30 de Abril.

**A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes**

## XV

07250/L/05

**Proyecto de ley:** Iniciado por las Legisladoras Bianciotti, Dressino, Castro y Luján, por el que modifica



el Artículo 80 Bis de la Ley N° 8431, Código de Faltas, referido al ofrecimiento de alquiler, venta o permuta de inmuebles en la vía pública sin habilitación municipal.

**A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos**

# XVI

**07253/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por los Legisladores Gutiérrez, Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual adhiere al “Día Mundial de la Libertad de Prensa”, celebrado el 3 de Mayo.

**A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática**

# XVII

**07257/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por los Legisladores Carrara y Echepare, por el cual repudia la actitud de un grupo de hinchas de Talleres portando banderas con la cruces esvásticas, el pasado 28 de Abril

**A la Comisión de Deportes, Recreación y su Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción**

# XVIII

**07258/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito y felicitaciones al piloto Marcos Ligato, por haber ganado el Grupo N/4 en la 10ª Edición del Rally Corredor de Los Lagos de la Ciudad de San Carlos de Bariloche.

**A la Comisión de Deportes, Recreación y su Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción**

# XIX

**07259/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por los Legisladores Carrara y Carrillo, por el cual expresa beneplácito y felicitaciones al Sr. Oreste Berta, por haber sido distinguido con el título de Doctor Honoris Causa, otorgada por la Universidad Nacional de Córdoba, por su trayectoria a la investigación de la ingeniería mecánica automovilística.

**A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática**

# XX

**07260/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por los Legisladores Luján, Dressino, Nicolás, Poggio, Castro, Santos y Bianciotti, por el cual expresa repudio e indignación por la inclusión de las Islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur en la Constitución prevista para la Comunidad Europea, instando al Poder Ejecutivo Nacional a agotar las instancias diplomáticas para salvaguardar los intereses del país.

**A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos**

# XXI

**07261/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual expresa beneplácito por el doble triunfo obtenido por los tenistas argentinos David Nalbandian, en Alemania y Gastón Gaudio, en Portugal.

**A la Comisión de Deportes, Recreación y su Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción**

# XXII

**07263/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por los Legisladores Gaumet y Massa, por el cual repudia la actitud del Reino de Inglaterra de proponer incluir como territorios británicos a las Islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur y Antártida Argentina y objeta la inclusión en la Constitución prevista para la Comunidad Europea.

**A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos**

# XXIII

**07264/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere al lanzamiento de “Córdoba subsele del Campeonato Mundial de Tango”, cuyo certamen preliminar dará comienzo el 6 de Mayo en la Ciudad de Villa Dolores y finalizará el 22 de Junio en la Sala Mayor del Teatro del Libertador de la Ciudad de Córdoba.

**A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática**

# XXIV

**07265/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por los Legis-

ladores Massei y Fortuna, por el cual repudia las manifestaciones racistas, discriminatorias y delictivas que realizó un grupúsculo de personas al exhibir en un estadio de fútbol dos banderas con las cruces esvásticas.

**A la Comisión de Deportes, Recreación y su Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción**

## XXV

07266/L/05

**Proyecto de declaración:** Iniciado por los Legisladores Basso, Giustina y Feraudo, por el cual declara de Interés Legislativo la 68ª Edición de la "Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha", a llevarse a cabo del 20 al 25 de Mayo, en la Localidad de El Arañado.

**A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática**

## XXVI

07267/L/05

**Proyecto de declaración:** Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito y felicitaciones al tenista David Nalbandian, por la victoria obtenida en el Abierto de Tenis de Munich.

**A la Comisión de Deportes, Recreación y su Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción**

## XXVII

07268/L/05

**Proyecto de declaración:** Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández, Prato, Leiva y Gutiérrez, por el cual declara de Interés Legislativo el plan de alfabetización cubano "Yo sí puedo", y aplicado en Argentina a través de "Un Mundo Mejor es Posible".

**A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática**

## XXVIII

07269/L/05

**Proyecto de resolución:** Iniciado por el Legislador Benassi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del E.R.Se.P. (Art. 102 C.P.), informe sobre la cantidad de transformadores eléctricos que operan las Federaciones de Cooperativas Eléctricas y respecto de los transformadores al que se les detectó PCBs.

**A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía**

## XXIX

07270/L/05

**Proyecto de resolución:** Iniciado por el Legislador Benassi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la E.P.E.C. (Art. 102 C.P.), informe sobre el reemplazo de transformadores eléctricos a los que se les detectó PCBs.

**A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía**

## XXX

07271/L/05

**Proyecto de declaración:** Iniciado por el Legislador Benassi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la reparación y señalización de la Ruta Provincial Nº 1, en el tramo que une la Ciudad de San Francisco y el límite con la Provincia de Santa Fe.

**A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía**

## XXXI

07272/L/05

**Proyecto de declaración:** Iniciado por la Legisladora Domínguez, por el cual adhiere y expresa beneplácito por las Primeras Jornadas Nacionales "La Danza Folklórica en la Argentina", a realizarse del 26 al 29 de Mayo, en la Ciudad de Cosquín.

**A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática**

## XXXII

07273/L/05

**Proyecto de declaración:** Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual expresa beneplácito por la selección de las escritoras Mugas, Tagliaschi y Validakis para participar en distintas antologías que editará Nuevo Ser Editorial de la Ciudad de Buenos Aires.

**A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática**

## XXXIII

07274/L/05

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la supuesta emisión de gases químicos y efluentes de líquidos sin tratar al Río Ctalamochita, por parte de la Fábrica Militar de Río Tercero.

**A la Comisión de Asuntos Ecológicos**

## XXXIV

07275/L/05

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores Dressino, Castro, Bianciotti y Santos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las solicitudes de exenciones subjetivas al impuesto a los ingresos brutos receptadas, otorgadas y rechazadas durante el período Enero/2001 a Marzo/2005.

**A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda**

## XXXV

07276/L/05

**Proyecto de resolución:** Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre montos facturados por venta y compra de energía eléctrica y servicio de telefonía durante los años 2002 al 2005, sobre cuestiones laborales, contractuales y concesionarias de la E.P.E.C..

**A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía**

## XXXVI

07277/L/05

**Proyecto de ley:** Iniciado por la Legisladora Prato, por el que la Provincia adhiere a la Ley Nacional N° 25.936, Día del Donante de Sangre.

**A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización**

## XXXVII

07278/L/05

**Proyecto de resolución:** Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspectos relativos a la extracción y utilización del agua de los Arroyos Los Mistoles, Macha y Simbolar.

**A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía**

## XXXVIII

07279/L/05

**Proyecto de ley:** Iniciado por los Legisladores Maiocco, Valinotto, Gaumet y Hernández, por el que declara de Interés Provincial, la Lucha Contra la Obesidad.

**A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización**

## XXXIX

07280/L/05

**Proyecto de declaración:** Iniciado por los Legisladores Maiocco, Valinotto, Gaumet y Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la pavimentación del tramo conocido como el camino "La Legua", que une la Localidad de Laguna Larga con la autopista Córdoba–Oncativo.

**A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía**

## XL

07281/L/05

**Proyecto de declaración:** Iniciado por el Legislador Carrara, por el cual expresa pesar por el fallecimiento del Sr. Intendente de la Localidad de Melo, Don Jorge Abod.

**A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales**

## XLI

07282/L/05

**Proyecto de declaración:** Iniciado por el Legislador Valinotto, por el cual solicita al Ministerio de Seguridad de la Provincia, implemente un plan de control vehicular en forma permanente en los puestos de peaje y otros puntos estratégicos para la prevención de accidentes de tránsito.

**A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía**

## XLII

07283/L/05

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores Fonseca y Gutiérrez, por el cual modifica el Artículo 47 y agrega el Artículo 48 Bis al Reglamento Interno, referidos a Jefaturas y Direcciones.

**A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos**

## XLIII

07284/L/05

**Proyecto de resolución:** Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el personal policial que se encuentra sumariado en el Tribunal de Conducta Policial.

**A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentrali-**

zación

**XLIV****07285/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el traslado y licencias compulsivas otorgadas al personal por parte del titular de la Dirección Provincial de la Vivienda.

**A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía**

**XLV****07286/L/05**

**Proyecto de ley:** Iniciado por las Legisladoras Ceballos, Juncos, Vigo, Ruiz, Rosas, Lascano, Feraudo, Mussi, María Irene Fernández, Romero y Domínguez, por el que establece la Ley de Prevención y Sanción de la Violencia Laboral.

**A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización**

**XLVI****07287/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere al "IV Festival de Bandas", a llevarse a cabo el 7 de Mayo en el Estadio Chateau Carreras de la Ciudad de Córdoba.

**A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática**

**XLVII****07288/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual rinde homenaje a la memoria del Cro. Luis Fernando Ribotta, fallecido el 28 de Abril próximo pasado.

**A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización**

**XLVIII****07289/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por la Legisladora Gaumet, por el cual adhiere y expresa beneplácito al cumplirse el 7 de Mayo el 20° Aniversario del I.P.E.M. N° 177 "Antonio Sobral", de la Ciudad de Laboulaye.

**A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,**

**Tecnología e Informática****XLIX****07290/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por los Legisladores Feraudo, Rosas, Ceballos, Podversich, Poggio, Romero y Sánchez, por el cual declara de Interés Legislativo la Maestría en Política y Gestión de Desarrollo Local, carrera aprobada por las Universidades Nacionales de Córdoba y Villa María.

**A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática**

**L****07291/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por los Legisladores Feraudo, Sánchez, Podversich, Romero, Rosas, Gutiérrez y Poggio, por el cual declara de Interés Legislativo las "V Jornadas de Historia de los Pueblos de Paravachasca, Calamuchita y Xanáes", a llevarse a cabo los días 26 y 27 de Mayo en el Museo Nacional de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers.

**A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática**

**LI****07292/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por los Legisladores Feraudo, Rosas, Romero, Sánchez, Ceballos y Podversich, por el cual adhiere a los actos conmemorativos del 75° aniversario de la Logosofía, que tendrá lugar en Agosto del 2005.

**A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática**

**LII****07293/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por el Legislador Soleri, por el cual adhiere y expresa beneplácito por el Encuentro Argentino del Instituto Jacques Maritain "Los Derechos Humanos en Latinoamérica", a realizarse en la Ciudad de Córdoba los días 6 y 7 de Mayo.

**A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática**

**LIII****07294/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por los Legisladores Massei y Fortuna, por el cual adhiere a los actos conmemorativos del 62° Aniversario del Levantamiento del Ghetto de Varsovia y del Iom Ha Shoa, Día de Recordación del Holocausto, y rinde homenaje a todas las

víctimas del horror nazi.

**A la Comisión de Asuntos Constitucionales,  
Justicia y Acuerdos**

**LIV**

**07295/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por los Legisladores Massei, Scarlatto y Cioccatto, por el cual rechaza la inclusión de las Islas Malvinas, Sándwich y Georgias de Sur y del Territorio Antártico en el Tratado Constitucional de la Unión Europea como territorio de ultramar de Gran Bretaña y solicita a los países miembros de la Unión Europea se abstengan de ratificar la Constitución Europea en estos términos.

**A la Comisión de Asuntos Constitucionales,  
Justicia y Acuerdos**

**PROYECTOS DEL  
PODER EJECUTIVO**

**LV**

**07296/E/05**

**Proyecto de ley:** Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que la Provincia adhiere a la Ley Nacional N° 25.917, por la que se crea el Régimen Federal de responsabilidad Fiscal.

**A las Comisiones de Economía, Presupuesto  
y Hacienda y de Legislación General, Función Pública,  
Reforma Administrativa y Descentralización**

**LVI**

**DESPACHOS DE LAS COMISIONES**

**Despachos de la Comisión de Educación,  
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática**

**1)07182/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por la Legisladora Domínguez, por el cual expresa adhesión al “Congreso Internacional de Educación Emprendedora”, llevado a cabo durante los días 27, 28 y 29 de Abril, en la Ciudad de La Falda.

**Al Orden del Día**

**2)07185/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por las Legisladoras Lascano, Ceballos, Domínguez, María Irene Fernández y Mussi, por el cual declara de Interés Legislativo el proyecto educativo “Capacitación Docente Integral de Nivel Inicial, Primario y Secundario”, que se realiza entre

los meses de Julio de 2004 y Diciembre de 2005.

**Al Orden del Día**

**Despacho de la Comisión de Obras, Servicios  
Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y  
Energía**

**07173/L/05 – 06947/L/05**

**Compatibilizados**

**Proyectos de declaración:** Iniciados por la Legisladora Prato y por las Legisladoras Prato y Leiva, respectivamente, por el cual verían con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, implemente los medios necesarios a efectos de estudiar la factibilidad de concretar las obras en la segunda etapa de la Red de Accesos a Córdoba (RAC), especialmente en el sector Noroeste de la ciudad.

**Al Orden del Día**

**Despacho de la Comisión de Asuntos Institucionales,  
Municipales y Comunes**

**07202/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por la Legisladora Domínguez, por el cual adhiere y expresa beneplácito al “5° Aniversario de la Plaza Federal”, ubicada en la Comuna de San Roque, a conmemorarse el día 5 de Mayo de 2005.

**Al Orden del Día**

**Despacho de la Comisión de Salud Humana**

**07100/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores Castro, Santos, Bianciotti, Cioccatto, Dressino y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la desnutrición infantil y los programas de asistencia alimentaria.

**Al Orden del Día N° 14**

**- 5 -**

**A) COMPLEJO ASISTENCIAL REGIONAL  
DE BELL VILLE. FUNCIONAMIENTO.  
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE  
INFORMES.**

**B) MINISTERIO DE SOLIDARIDAD.  
TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN A**

**PERSONAS CARECIENTES DE LA LOCALIDAD DE DEÁN FUNES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.**

**C) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES. CONTRATO CON LOS HERMANOS BARATTERO. PEDIDO DE INFORMES. PROYECTO**

Moción de vuelta a comisión, para su archivo.  
Se aprueba

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Para dar tratamiento al Orden del Día tiene la palabra el señor legislador Massei.

**Sr. Massei.**- Señor presidente, con respecto al Orden del Día, solicito el archivo para los puntos 19, 27 y 28.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración la moción del legislador Massei en el sentido de enviar a archivo, por contar con respuesta, los proyectos que corresponden a los puntos 19, 27 y 28 del Orden del Día.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobada.

**PUNTO 19**

**Moción de Preferencia**

**- Artículo 122 y Concordantes -**

**06884/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Complejo Asistencial Regional de la Ciudad de Bell Ville.

**Comisión:** Salud Humana

**PUNTO 27**

**Moción de Preferencia**

**- Artículo 122 y Concordantes -**

**07053/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por las Legisladoras Leiva y Prato, por el cual solicita al Ministerio de Solidaridad (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos al tratamiento de rehabilitación a personas carecientes de la Ciudad de Deán Funes.

**Comisiones:** Solidaridad y de Salud Humana

**PUNTO 28**

**Pedido de Informes - Artículo 195**

**07086/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández, Leiva, Prato y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el contrato celebrado entre la Agencia Córdoba Deportes S.E.M. y los hermanos Barattero de la Ciudad de Almagre.

**Comisión:** Deportes, Recreación y su Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción

**- 6 -**

**A) HOSPITAL NEONATAL DE LA PROVINCIA. FALLECIMIENTOS DE RECIÉN NACIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.**

**B) HOSPITAL MATERNO NEONATAL DE CÓRDOBA. DESAPARICIÓN DE UN RECIÉN NACIDO FALLECIDO. PEDIDO DE INFORMES.**

Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra el señor legislador Massei.

**Sr. Massei.**- Señor presidente, es para solicitar una vuelta a comisión de los puntos 1 y 2 del Orden del Día.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración la moción del legislador Massei, de vuelta a comisión de los proyectos que corresponden a los puntos 1 y 2 del Orden del Día.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobada.

**PUNTO 1**

**Moción de Preferencia**

**- Artículo 122 y Concordantes -**

**06739/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores Hernández, Maiocco, Benassi, Castellano, Ramos, Gaumet, Fonseca, Prato, Massa, Eduardo Fernández, Valinotto, Gutiérrez y Guzmán, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos hechos acaecidos en el Hospital Neonatal de la Provincia.

**Comisión:** Salud Humana

**PUNTO 2**

**Moción de Preferencia**

**- Artículo 122 y Concordantes -**

**06764/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la desaparición de un recién nacido muerto el día 9 de Enero, en el Hospital Materno Neonatal de la Ciudad de Córdoba.

**Comisión:** Salud Humana

- 7 -

**A) ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO CONSOLIDAR A.R.T. CONTRATACIÓN A TRAVÉS DEL IPAM. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.**

**B) FONDO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CREADO POR LEY 9165. PEDIDO DE INFORMES.**

**C) PENITENCIARIAS DE LA PROVINCIA Y PRESUNTA VINCULACIÓN DE AGENTE POLICIAL EN EL LLAMADO TRÁFICO DE BLANCAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.**

**D) GOBIERNO PROVINCIAL. COMPRA DE AVIÓN BEECHCRAFT. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.**

**E) GOBIERNO PROVINCIAL. COMPRA DEL AVIÓN BEECHCRAFT. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.**

**F) RÍO SAN ANTONIO. CONTAMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EDILICIA EN SUS ORILLAS. RÍOS DEL VALLE DE PUNILLA. CONTROL. PEDIDO DE INFORMES.**

**G) DIQUE LA QUEBRADA. BAJA DE LAS AGUAS. CAUSAS AMBIENTALES DETERMINANTES. PEDIDO DE INFORMES.**

**H) RÍO CTALAMOCHITA. CONTROLES PARA EVITAR LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.**

**I) ESCUELAS RURALES. RIESGO DE CONTAMINACIÓN POR PESTICIDAS. PREVENCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.**

**J) JAMES CRAIK. EMPRESA LÁCTEA PUNTA DEL AGUA. VOLCAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES Y OLORES NAUSEABUNDOS. PEDIDO DE INFORMES.**

**K) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.**

**L) I.P.E.M. N° 266, GENERAL SAVIO, EN RÍO TERCERO. CARGOS VACANTES. PEDIDO DE INFORMES.**

**M) COMISIÓN PERMANENTE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.**

Moción de vuelta a comisión, con preferencia.  
Se aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra el señor legislador Massei.

**Sr. Massei.**- Señor presidente, es para solicitarle una vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 16° sesión ordinaria, de los puntos 11, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 y 31 del Orden del Día.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración la moción formulada por el legislador Massei de dar preferencia para la 16° sesión ordinaria a los puntos 11, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 y 31 del Orden del Día.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobada.  
Se incorporan al Orden del Día de la 16° sesión ordinaria.

#### PUNTO 11

##### Moción de Preferencia

– Artículo 122 y Concordantes –

06867/L/05

**Proyecto de resolución:** iniciado por los Legisladores Hernández, Olivero, Castellano, Massa, Guzmán, Gaumet, Castro y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la contratación, a través del I.P.A.M., de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo Consolidar A.R.T..

**Comisiones:** Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Salud Humana

#### PUNTO 13

##### Moción de Preferencia

– Artículo 122 y Concordantes –

**07010/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el Fondo de Infraestructura Eléctrica creado por la Ley N° 9165.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

**PUNTO 16**

**Moción de Preferencia**  
– Artículo 122 y Concordantes –

**06906/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores Fonseca, Eduardo Fernández, Hernández, Gutiérrez y Prato, por el cual solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 C.P.), para que informe sobre diversos aspectos relativos a la presunta vinculación de un agente policial en el llamado tráfico de blancas, y respecto de las Penitenciarías de la Provincia.

**Comisión:** Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

**PUNTO 17**

**Moción de Preferencia**  
– Artículo 122 y Concordantes –

**06933/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores Leiva y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a la compra por parte del Gobierno del avión Beechcraft.

**Comisiones:** Economía, Presupuesto y Hacienda y de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

**PUNTO 18**

**Moción de Preferencia**  
– Artículo 122 y Concordantes –

**06955/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la compra del avión Beechcraft 350 turbohélice.

**Comisiones:** Economía, Presupuesto y Hacienda y de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

**PUNTO 21**

**Moción de Preferencia**  
– Artículo 122 y Concordantes –

**06697/L/04**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por la Legisladora Ramos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la contaminación y construcción edilicia en las orillas del Río San Antonio, y respecto del control de los Ríos del Valle de Punilla.

**Comisión:** Asuntos Ecológicos

**PUNTO 22**

**Moción de Preferencia**  
– Artículo 122 y Concordantes –

**06837/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Agencia Córdoba Ambiente S.E. (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a las causas ambientales determinantes de la baja de las aguas del Dique La Quebrada.

**Comisión:** Asuntos Ecológicos

**PUNTO 23**

**Moción de Preferencia**  
– Artículo 122 y Concordantes –

**06910/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre qué controles se están llevando a cabo para evitar la extracción de áridos en el Río Citalamochita.

**Comisión:** Asuntos Ecológicos

**PUNTO 24**

**Moción de Preferencia**  
– Artículo 122 y Concordantes –

**06932/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores Hernández, Prato y Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre medidas gubernamentales con el objeto de preservar a las escuelas rurales de los riesgos de contaminación por agroquímicos.

**Comisión:** Asuntos Ecológicos



**PUNTO 25****Moción de Preferencia****– Artículo 122 y Concordantes –****07025/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el volcamiento de líquidos cloacales y olores nauseabundos producidos por la empresa láctea Punta del Agua en la Localidad de James Craik.

**Comisión:** Asuntos Ecológicos**PUNTO 26****Moción de Preferencia****– Artículo 122 y Concordantes –****07030/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores Gaumet y Massa, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al Tribunal de Conducta Policial.

**Comisión:** Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

**PUNTO 30****Pedido de Informes – Artículo 195****07102/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los cargos docentes, directivos y administrativos que faltarían cubrir en el I.P.E.M. N° 266, General Savio, de la Ciudad de Río Tercero.

**Comisión:** Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

**PUNTO 31****Pedido de Informes – Artículo 195****07112/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores Bianciotti, Dressino, Martínez Oddone, Karl, Ciocatto, Castro, Luján, Poggio y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el funcionamiento de la Comisión Permanente de Prevención de la Violencia Doméstica, creada por la Ley N° 7861, y otros programas de prevención de la violencia familiar.

**Comisión:** Solidaridad**- 8 -**

**A) MINISTERIO DE SALUD. INSPECCIÓN DE FARMACIAS. PEDIDO DE INFORMES.**

**B) ARROYO COLANCHANGA. NIVELES DE CONTAMINACIÓN. PATOLOGÍAS ONCOLÓGICAS REGISTRADAS EN RÍO CEBALLOS. ESTUDIOS SOBRE LA SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.**

**C) EX CÁRCEL DE MUJERES “BUEN PASTOR”. EDIFICIO. PROYECTO DE REFUNCIONALIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.**

**D) B° ALTOS DE SANTA ANA. POSIBLE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.**

**E) PLAN 100 ESCUELAS NUEVAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.**

**F) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA VIVIENDA. OPERATORIAS Y/O PLANES DE VIVIENDAS PARALIZADAS Y VUELTO A ADJUDICAR. PEDIDO DE INFORMES.**

**G) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA VIVIENDA / FO.NA.VI. CARTERA HIPOTECARIA. RECATEGORIZACIÓN, ESCRITURA Y POSTERIOR VENTA, O SECURITIZACIÓN DE LA DEUDA DE LOS ADJUDICATARIOS DE VIVIENDAS POR PLANES. PEDIDO DE INFORMES.**

Moción de vuelta a comisión, con preferencia.  
Se aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra el legislador Massei.

**Sr. Massei.**- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia para la 17° sesión ordinaria, de los puntos 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 del Orden del Día.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración la moción formulada por el legislador Massei en el sentido de dar preferencia para la 17° sesión ordinaria a los puntos 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 del Orden del Día.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 17°

sesión ordinaria.

**PUNTO 3**  
**Moción de Preferencia**  
**– Artículo 122 y Concordantes –**

**06832/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relativos a la inspección de farmacias por parte del Ministerio de Salud.

**Comisión:** Salud Humana

**PUNTO 4**  
**Moción de Preferencia**  
**– Artículo 122 y Concordantes –**

**06838/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 C.P.), informe sobre los niveles de contaminación del Arroyo Colanchara, y estudios sobre la situación de las patologías oncológicas registradas en la Ciudad de Río Ceballos.

**Comisión:** Salud Humana

**PUNTO 6**  
**Moción de Preferencia**  
**– Artículo 122 y Concordantes –**

**06944/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al proyecto de refuncionalización del edificio de la ex cárcel de mujeres "Buen Pastor".

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

**PUNTO 7**  
**Moción de Preferencia**  
**– Artículo 122 y Concordantes –**

**06953/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la posible contaminación ambiental en el Barrio Altos de Santa Ana de la Ciudad Capital.

**Comisiones:** Salud Humana y de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

**PUNTO 8**  
**Moción de Preferencia**  
**– Artículo 122 y Concordantes –**

**06744/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al "Plan 100 Escuelas Nuevas".

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

**PUNTO 9**  
**Moción de Preferencia**  
**– Artículo 122 y Concordantes –**

**06745/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca de las operatorias y/o planes de viviendas paralizadas y vueltas a adjudicar por parte de la Dirección Provincial de Vivienda.

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

**PUNTO 10**  
**Moción de Preferencia**  
**– Artículo 122 y Concordantes –**

**06746/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la recategorización, escritura y posterior venta de la cartera hipotecaria o securitización de la deuda de los adjudicatarios de viviendas por planes de la D.P.V./FO.NA.VI..

**Comisión:** Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

- 9 -

**A) DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.**

**B) RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS POR RECONOCIMIENTO DE VARIACIÓN DE COSTOS, JUSTIFICADO POR**

**EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DECRETO. PEDIDO DE INFORMES.**

**C) DR. JOAQUÍN GONZÁLEZ, ABOGADO DE ORGANIZACIONES DEL MOVIMIENTO CAMPESINO DE CÓRDOBA. AGRESIONES SUFRIDAS. RECHAZO. INVESTIGACIÓN Y CASTIGO. RECLAMO.**

Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra el legislador Massei.

**Sr. Massei.**- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia para la 18ª sesión ordinaria, de los puntos 5, 14 y 20 del Orden del Día.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración la moción formulada por el legislador Massei en el sentido de dar preferencia para la 18ª sesión ordinaria a los puntos 5, 14 y 20 del Orden del Día.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobada. Se incorporan al Orden del Día de la 18ª sesión ordinaria.

**PUNTO 5**

**Moción de Preferencia**

**– Artículo 122 y Concordantes –**

**06413/L/04**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores Gaumet y Massa, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la Delegación de la Dirección General de Rentas de la Ciudad de Río Cuarto.

**Comisión:** Economía, Presupuesto y Hacienda

**PUNTO 14**

**Moción de Preferencia**

**– Artículo 122 y Concordantes –**

**07032/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores Bianciotti, Poggio, Luján, Nicolás, Dressino, Ciocatto, Karl y Castro, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre un decreto que establece un “régimen de redeterminación de precios por reconocimiento de variación de costos”, justificado por el Ministro de Obras y Servicios Públicos.

**Comisión:** Economía, Presupuesto y Hacienda

**PUNTO 20**

**Moción de Preferencia**

**– Artículo 122 y Concordantes –**

**07018/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo y los Legisladores Mosquera, Olivero, Gastaldi y Sella, por el cual rechaza las agresiones sufridas por el Dr. Joaquín González, abogado de organizaciones del Movimiento Campesino de Córdoba y reclama la investigación y el castigo a los responsables del hecho.

**Comisión:** Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

**- 10 -**

**A) DESNUTRICIÓN INFANTIL Y PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA. PEDIDO DE INFORMES.**

**B) MARCOS LIGATO. TERCER PUESTO EN EL RALLY DE NUEVA ZELANDA. BENEPLÁCITO Y FELICITACIONES.**

**C) TORNEO ARGENTINO DE PATINAJE ARTÍSTICO – CATEGORÍA INTERNACIONAL. ADHESIÓN.**

**D) TORNEO ARGENTINO DE PATINAJE ARTÍSTICO – CATEGORÍA INTERNACIONAL. INTERÉS PROVINCIAL.**

**E) LOCALIDADES DE CHUÑA HUASI Y TOTORILLAS. AGUA POTABLE. PROVISIÓN. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. SOLICITUD.**

**F) DEPARTAMENTO SOBREMONTÉ. GESTIONES DE ESTUDIO, APROVECHAMIENTO, FINANCIAMIENTO, PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN HÍDRICA. CONSEJO HÍDRICO PROVINCIAL. PRIORIDAD. SOLICITUD AL PE.**

**G) CURSO SEMINARIO SOBRE SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO Y EDUCACIÓN VIAL, EN MORTEROS. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.**

**H) SRA. MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN. NUEVO ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO. HOMENAJE A SU MEMORIA.**

**I) DIARIO PUNTAL, DE RÍO CUARTO. 25º**

**ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.**

Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra el legislador Massei.

**Sr. Massei.**- Señor presidente: solicito que los puntos 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Orden del Día, por tener despacho unánime de la comisión respectiva, sean aprobados en virtud de lo establecido en el artículo 146 del Reglamento Interno.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración la moción formulada por el legislador Massei en el sentido de que los puntos 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Orden del Día, por tener despacho unánime de la comisión respectiva, sean aprobados en virtud de lo establecido en el artículo 146 del Reglamento Interno.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobada.

**PROYECTO DE RESOLUCIÓN - 07100/L/05  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
RESUELVE:**

**Artículo 1.-** REQUERIR, al Poder Ejecutivo de la Provincia, por intermedio del Ministerio de Salud, para que en los términos del Art. 102º de la Constitución Provincial, se sirva responder, en el plazo de 14 días, el siguiente cuestionario:

1.- ¿En qué fecha se realizó el relevamiento provincial que arrojó la cifra de 4.500 niños al borde de la desnutrición, de acuerdo al informe que tomara público conocimiento a fines del año próximo pasado, en distintos medios de prensa locales?

2.- Informe el número de niños de 0 a 6 años que se encuentran desnutridos y cuántos en riesgos de desnutrición, discriminados por localidad, en los siguientes departamentos: Pocho, Minas, Sobremonte y Capital.

3.- Informe, si tiene conocimiento, a partir de qué fecha se otorgó a estos niños la asistencia alimentaria a través del plan "Ayudando a crecer" del Ministerio de la Solidaridad.-

4.- Informe si dicha asistencia es complementada por ayuda alimentaria provenientes de otros programas o jurisdicciones? En caso afirmativo, precise programa y jurisdicción.

**Nora Castro, Gustavo Santos, Isabel Bianciotti, Alíder Cioccatto, Ana Dressino, Miguel Nicolás.**

**FUNDAMENTOS**

Los índices publicados en distintos medios de información locales indicando un alto porcentaje de niños

desnutridos y de niños en riesgo de desnutrición, siguen alarmando a la sociedad toda. Por ello, las respuestas oficiales cobran mayor importancia a la hora de poner blanco sobre negro y conocer fehacientemente cuales de aquellas publicaciones tienen veracidad y en su caso, cuales han sido las acciones realizadas para disminuir esas cifras.

El bloque de la Unión Cívica Radical, presentó en los últimos meses del año pasado un pedido de informes sobre los casos de desnutrición en la provincia, el que no tuvo aprobación efectiva, manteniéndose en su consecuencia, las dudas, incertidumbres y preocupación de las cifras señaladas y quedando vigente la necesidad de conocer los datos solicitados en aquellas oportunidad.

El proyecto de resolución que se plantea en esta circunstancia, si bien en su génesis responde a los informes publicados en Octubre del año 2004, se han acotado los universos, en algunos casos, y ampliado en otros, en la esperanza de tener la respuesta oficial que con precisión muestre la realidad de Córdoba, aún cuando se traten de situaciones y escenarios adversos y lamentables.

Por los fundamentos vertidos en ocasión de la presentación del Proyecto N° 6406/L/04, que ratificamos en todos sus términos en esta iniciativa, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.

**Nora Castro, Gustavo Santos, Isabel Bianciotti, Alíder Cioccatto, Ana Dressino, Miguel Nicolás.**

**DESPACHO DE COMISIÓN**

Vuestra Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur, al dictaminar acerca del Proyecto de declaración N° 07534/L/05, iniciado por los legisladores Fernández y Fonseca, por el cual expresa satisfacción al Poder Ejecutivo Nacional por la implementación de medidas tendientes a establecer restricciones al ingreso al país de capitales financieros especulativos de corto plazo OS ACONSEJA le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.

**DIOS GUARDE A UDS.**

**Scarlatto José Luis, Dressino Ana, Prato Mónica, Vigo Alejandra, Recalde Argentino, Gamaggio Héctor, Nouzeret Carlos, Massa Eduardo, Gaumet Graciela**

**PROYECTO DE DECLARACION - 07140/L/05  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CORDOBA  
DECLARA:**

Beneplácito y felicitaciones a Marcos Sebastián Ligato (Subaru) por el tercer puesto obtenido en el Rally de Nueva Zelanda, en el Mundial del Grupo N/4, el día 10 de abril de 2005 en la localidad de Auckland, Nueva

Zelanda.

**Juan Echepare.**

#### **FUNDAMENTOS**

Marcos Ligato, a bordo del Subaru, obtuvo el tercer puesto en el Mundial del Grupo N/4, Rally de Nueva Zelanda, que se realizó el 10 de abril de 2005 en Auckland.

Fue una competencia muy pareja, pero supo conseguir un excelente puesto en el mencionado mundial, en base a su esfuerzo y talento, salvando todos los obstáculos que se le presentaron. El festejo fue doble porque además del logro obtenido, fue un muy buen debut del Córdoba Rally Team (CRT).

Ligato ha dejado muy bien posicionada a Córdoba en el exterior, ya que ha realizado una gran competencia, compitió con pilotos de gran nivel y ha demostrado una vez más que es un corredor de nivel internacional en este deporte, con un excelente desempeño y gran destreza en la conducción de estos automóviles por las distintas rutas mundiales.

Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito la aprobación del siguiente proyecto.

**Juan Echepare.**

#### **DESPACHO DE COMISIÓN**

Vuestra Comisión de DEPORTES, RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de declaración N° 07140/L/05, iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito y felicitaciones a Marcos Ligato por el tercer puesto obtenido en el Rally de Nueva Zelanda, en el mundial del Grupo N/4, el 10 de Abril, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.

**DIOS GUARDE A UDS.**

**Carrara, Basso, Echepare, Carrillo.**

#### **PROYECTO DE DECLARACION - 07154/L/05 LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DECLARA:**

Su adhesión al Torneo Argentino de Patinaje Artístico - Categoría Internacional -, Organizado por la Federación Cordobesa de Patín, a desarrollarse del 31 de agosto al 04 de septiembre del año en curso.

**Francisco Fortuna, Juan Carlos Massei.**

#### **FUNDAMENTOS**

Este evento que reunirá a más de 350 patinadores, de las distintas provincias argentinas que practican y fomentan esta disciplina deportiva, no resulta un torneo más, sino, lo mejor del patinaje artístico sobre ruedas de nuestro país.

Estos números revelan la importancia del evento; y el reconocimiento a la labor que ha desarrollado la federación cordobesa de patín al obtener la designación de sede de este campeonato argentino y lograr traer a nuestra provincia un espectáculo que es motivo de orgullo para el deporte cordobés.

Entre los fundamentos esgrimidos por los organizadores se resalta que “detrás del evento deportivo propiamente dicho se encolumnan una cantidad de niños y jóvenes de nuestra Provincia y hasta de algunas poblaciones extraprovinciales limítrofes”...que se beneficiarán directamente al poder asistir y presenciar en vivo la espectacularidad y el arte del patín sobre ruedas....”

Reconociendo la importancia y trascendencia de esta actividad deportiva, y por otra parte las limitadas posibilidades que tenemos de acceso al disfrute del mismo, resulta oportuno acompañar este encuentro, reconociendo el esfuerzo y compromiso de los organizadores en pos de la divulgación y el crecimiento de esta disciplina deportiva.

Por las razones expresadas y las que se verterán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.

**Francisco Fortuna, Juan Carlos Massei.**

#### **DESPACHO DE COMISIÓN**

Vuestra Comisión de DEPORTES, RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de declaración N° 07154/L/05, iniciado por los Legisladores Fortuna y Massei, por el cual adhiere al Torneo Argentino de Patinaje Artístico – Categoría Internacional–, a desarrollarse del 31 de Agosto al 4 de Septiembre, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.

**DIOS GUARDE A UDS.**

**Carrara, Luján, Basso, Echepare, Carrillo.**

#### **PROYECTO DE DECLARACION - 07156/L/05 LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DECLARA:**

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo

Provincial evalúe la posibilidad de declarar de Interés Provincial el Torneo Argentino de Patinaje Artístico - Categoría Internacional -, Organizado por la Federación Cordobesa de Patín, a desarrollarse del 31 de agosto al 04 de setiembre del año en curso.

**Francisco Fortuna, Juan Carlos Massei.**

#### FUNDAMENTOS

En virtud de la nota que la Federación Cordobesa de Patín enviara a esta Legislatura, informándonos sobre la realización de este evento internacional y la necesidad de contar con el apoyo de las diferentes instancias de gobierno para la concreción óptima del mismo, considero oportuno hacer llegar esta solicitud al Poder Ejecutivo Provincial para que analice la factibilidad de dicha petición.

Entre los fundamentos esgrimidos por los organizadores se resalta que “detrás del evento deportivo propiamente dicho se encolumnan una cantidad de niños y jóvenes de nuestra Provincia y hasta de algunas poblaciones extraprovinciales limítrofes... esta Federación con muchísimo esfuerzo ha logrado la adjudicación, por parte de la Confederación Argentina de Patín, y pretende mostrar en vivo al público cordobés la espectacularidad y el arte del patín sobre ruedas....”

Reconociendo la importancia y trascendencia de esta actividad deportiva, y por otra parte las limitadas posibilidades que tenemos de acceso al disfrute del mismo, resulta oportuno acompañar este encuentro, reconociendo el esfuerzo y compromiso de los organizadores en pos de la divulgación y el crecimiento de esta disciplina deportiva.

Por las razones expresadas y las que se verterán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.

**Francisco Fortuna, Juan Carlos Massei.**

#### DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestra Comisión de DEPORTES, RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de declaración N° 07156/L/05, iniciado por los Legisladores Fortuna y Massei, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial declare de Interés Provincial el Torneo Argentino de Patinaje Artístico – Categoría Internacional–, a desarrollarse del 31 de Agosto al 4 de Septiembre, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.

**DIOS GUARDE A UDS.**

**Carrara, Luján, Basso, Echepare, Carrillo.**

#### PROYECTO DE DECLARACION - 07113/L/05 LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DECLARA:

La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través de la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento, realice un estudio de factibilidad para proveer de agua potable a las localidades de Chuña Huasi y Totorillas, del Departamento Sobremonte.

**Isabel Bianciotti, Ana Dressino, Heriberto Martínez Oddone, Abelardo Kart, Alider Ciocatto, Nora Castro, Nélica Luján, Oscar Poggio, Miguel Nicolás, Gustavo Santos.**

#### FUNDAMENTOS

Las localidades de Chuña Huasi y Totorillas ubicadas en la pedanía del mismo nombre, se encuentran ubicadas al oeste del Departamento Sobremonte, conformadas por poblaciones rurales que realizan actividades de campo como economía de producción agrícola-ganadera, contando además con servicios comunales, sanitarios y sendos establecimientos educativos.

El desarrollo social y económico de las comunas se encuentra severamente contenido a raíz de la falta de agua potable, que no permite lograr una expansión de la región, por los costos que implica su traslado, como así también, desalienta el asentamiento poblacional por los inconvenientes que presenta la falta del vital elemento.

Las poblaciones sufren periódicamente las consecuencias de no beber agua de red, generando problemas de salud profundizados por el contexto socioeconómico, de familias de escasos recursos, que atenta contra la calidad de vida de todos sus habitantes.

El Departamento Sobremonte esta atravesando una situación de sequía profunda, lo que ha generado a pedido de los diferentes representantes del departamento, que el Poder Ejecutivo decretara la emergencia agropecuaria para la región, consustanciado con la problemática descrita y la ausencia de obras de infraestructura que lleven un paliativo a la misma.

En tal sentido es imprescindible que el Gobierno Provincial realice los estudios pertinentes para que estas poblaciones más distantes de la capital, gocen de los mismos derechos como cualquier habitante de esta provincia, amparado en los principios que establece nuestra constitución provincial.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares prestéis aprobación al presente Proyecto de declaración.

**Isabel Bianciotti, Ana Dressino, Heriberto Martínez Oddone, Abelardo Kart, Alider Ciocatto, Nora Castro, Nélica Luján, Oscar Poggio, Miguel Nicolás, Gustavo Santos.**

#### DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca del Proyecto de declaración 07113/L/05, iniciado por los Legisladores Bianciotti, Dressino, Martínez Oddone, Karl, Cioccatto, Castro Luján, Poggio, Nicolás y Santos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la realización de un estudio de factibilidad para proveer de agua potable a las Localidades de Chuña Huasi y Totorillas, Departamento Sobremonte, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:

**LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y de la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento, realice estudios de prefactibilidad de provisión de agua potable a las Localidades de Chuña Huasi y Totorillas, Departamento Sobremonte

**DIOS GUARDE A UDS.**

**Garavaglia, Basso, Maiocco, Recalde, Scarlatto, Vega.**

**PROYECTO DE DECLARACION – 07126/L/05  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CORDOBA  
DECLARA:**

La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para solicitarle que, por su digno intermedio, disponga en el Consejo Hídrico Provincial creado por Decreto N° 1544, la prioridad en las gestiones de estudio, aprovechamiento, financiamiento, preservación, protección y conservación hídrica, al Departamento Sobremonte.

**Oscar Poggio, Nélica Luján, Alider Cioccatto, Gustavo Santos, Heriberto Martínez Oddone, Miguel Nicolás, Nora Castro, Ana Dressino.**

**FUNDAMENTOS**

El Poder Ejecutivo Provincial ha dispuesto con acertada política, la creación de un Consejo Hídrico Provincial, a través del Decreto N° 1544, de diciembre del año 2004, con publicación oficial del 02/02/05, con la intención de propiciar un órgano permanente de consulta, discusión y asesoramiento en todo lo referente al recurso hídrico provincial.

Lo decimos con satisfacción, porque el organismo, creado viene a cubrir una serie de falencias existen-

tes en materia de recursos hídricos de la provincia, fundamentalmente en lo que respecta a un foro de discusión y proposición de acciones estructurales de manera tal, que el acceso al agua potable sea igualitario para todos los cordobeses.

En tal sentido nos dirigimos al Sr. Gobernador a los efectos de que considere la necesidad de incluir al Departamento Sobremonte como prioritario en las gestiones de estudio, aprovechamiento, financiamiento, preservación, protección y conservación hídrica, a raíz de las difíciles condiciones climáticas que padece y la ausencia de inversiones en infraestructura.

Sabemos de la preocupación que ha expresado el Poder Ejecutivo Provincial al declarar la emergencia agropecuaria para el Departamento Sobremonte y es en razón de esta manifiesta preocupación, que estamos solicitando se profundicen las acciones en virtud del Organismo creado.

El departamento Sobremonte viene padeciendo desde hace años las consecuencias de la ausencia de una verdadera política hídrica para nuestra región; razón por la cual, la misma, no puede desarrollarse ni constituirse en sector alternativo para la producción, tanto agrícola como ganadera provincial, a raíz de esta situación y la falta de energía eléctrica de red.

Resulta indispensable que el Norte provincial sea objeto definitivamente de los estudios o investigaciones sobre agua y saneamiento, acompañado de una legislación hídrica concreta, y conforme la prioridad en el Plan Director de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba en defensa de los derechos a gozar de un medio sano donde el agua es materia de protección especial por parte de nuestra Constitución provincial.

Por todo lo expuesto solicito a los Sres. Legisladores la aprobación del presente Proyecto de declaración.

**Oscar Poggio, Nélica Luján, Alider Cioccatto, Gustavo Santos, Heriberto Martínez Oddone, Miguel Nicolás, Nora Castro, Ana Dressino.**

**DESPACHO DE COMISIÓN**

Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca del Proyecto de declaración N° 07126/L/05, iniciado por los Legisladores Poggio, Luján, Cioccatto, Santos, Martínez Oddone, Nicolás, Castro, y Dressino, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, disponga en el Consejo Hídrico Provincial la prioridad en las gestiones de estudio, aprovechamiento, financiamiento, preservación, protección y conservación del Departamento Sobremonte, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aproba-

ción con las siguientes modificaciones:

**LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del organismo que corresponda, arbitre los mecanismos pertinentes a efectos de lograr que en el Consejo Provincial Hídrico, se considere al Departamento Sobremonte en las gestiones de estudio, aprovechamiento, financiamiento, preservación, protección y conservación.

**DIOS GUARDE A UDS.**

**Garavaglia, Basso, Maiocco, Recalde, Scarlatto, Vega.**

**PROYECTO DE DECLARACION – 07130/L/05  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CORDOBA  
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por el curso-seminario sobre “Seguridad en el Tránsito y Educación Vial”, a desarrollarse en Morteros desde el día 16 al 20 de Mayo de 2005.

**Jorge Giustina, Evelina Feraudo, Omar Basso.**

**FUNDAMENTOS**

La Inspectoría General de la Municipalidad de Morteros organiza el curso – seminario sobre “Seguridad en el Tránsito y Educación Vial” con el objeto de reconocer valores y aclarar conceptos para formar habilidades y actitudes necesarias y además, para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio físico. La educación vial, también incluye la práctica en la toma de decisiones y la propia elaboración de códigos de compartimiento relacionados con la calidad del entorno inmediato al ciudadano.

El curso estará a cargo de reconocidos profesores como: la Sra. Graciela Lozano y el Sr. Víctor Lastreto (expertos en tránsito), la Dra. Mónica Gaziano (juez de faltas de Río Gallegos), el Sr. Abel Sberna (concejal de Ushuaia), el Sr. Félix Pérez (com. Policía caminera de General Roca), la Sra. Amalia García (dirección de tránsito de Rawson), el Dr. Ismael Machuca (juez de faltas de Caleta Olivia), el Ing. Emilio Saab (Mercedes, Bs. As), entre otros.

Este seminario “Por la Vida” espera la participación de autoridades, invitados y, no sólo de los vecinos de la ciudad de Morteros sino también, de todos aquellos ciudadanos que vivan en la Región.

Por estas razones es que pedimos a ésta Legislatura nos acompañe en la aprobación del presente proyecto.

**Jorge Giustina, Evelina Feraudo, Omar Basso.**

**DESPACHO DE COMISIÓN**

Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca del Proyecto de declaración N° 07130/L/05, iniciado por los Legisladores Giustina, Feraudo y Basso, por el cual adhiere y expresa beneplácito por el Curso-Seminario sobre Seguridad en el Tránsito y Educación Vial, a desarrollarse del 16 al 20 de Mayo en la Ciudad de Morteros, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:

**LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

Su beneplácito y adhesión, por el Curso-Seminario sobre Seguridad en el Tránsito y Educación Vial, a desarrollarse del 16 al 20 de Mayo en la Ciudad de Morteros, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba.

**DIOS GUARDE A UDS.**

**Garavaglia, Basso, Maiocco, Recalde, Scarlatto, Vega.**

**PROYECTO DE DECLARACION - 07157/L/05  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

Su homenaje a la memoria de Eva Duarte de Perón, en ocasión de celebrarse un nuevo Aniversario de su nacimiento. Mujer especial de la historia argentina, luchadora por los derechos de los que nada tenían, supo ganarse de ellos la simpatía y un profundo amor hacia su persona.

**Norma Ceballos, Blanca Rosas, Evelina Feraudo, Liliana Juncos, Mirta Mussi, María Fernández, Juana Romero, Sonia Lascano.**

**FUNDAMENTOS**

Su nombre era María Eva Duarte nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, Argentina.

Eva Perón fue, es y será una figura destacada del peronismo. Sus días fueron una cadena de hechos sorprendentes, casi maravillosos. De origen humilde y provinciano, llega a la capital en plena adolescencia y triunfa: llega a ser una actriz de cierto nombre y a encauzar un programa radial muy escuchado. Después, conoce a Perón y a él liga su destino. Se convierte en el alma del movimiento peronista, en su esencia y en su



voz.

En su rol de primera dama, Eva Perón desarrolló un trabajo intenso, tanto en el aspecto político como en el social.

En cuanto a la política fue Evita la que con tesón logró que la mujer argentina fuera la primera que votara en nuestra América. El voto femenino es un logro suyo casi exclusivo.

Además fue organizadora y fundadora de la rama femenina del peronismo. Esta organización se formó reclutando mujeres de distintas extracciones sociales por todo el país. Las dirigentes de la nueva agrupación recibieron el nombre de "delegadas censistas".

En el aspecto social su trabajo se desarrolló en la Fundación Eva Perón. Especialmente se ocupaba de llegar con la acción social directa a los niños, las mujeres desamparadas, los ancianos y los sectores marginales que no podían beneficiarse directamente con la reciente y revolucionaria legislación social que alcanzaba a obreros, empleados y peones de campo.

La propia Evita resumía esa misión: -fue creada para cubrir lagunas en la organización nacional, porque en todo el país donde se realiza una obra siempre hay lagunas que cubrir, y para ello se debe estar pronto para realizar una acción rápida, directa y eficaz.

Con exiguos ingresos en sus comienzos (la donación de un sueldo de \$ 10.000,- del presidente Perón), la Fundación cobró rápidamente importancia, y su acción se fue extendiendo a todos los rincones del país. Así se consiguió crear hospitales, hogares para ancianos y madres solteras, policlínicos, escuelas, una Ciudad Infantil, la Ciudad Estudiantil para adolescentes del interior que estudiaban en la Capital Federal, las Ciudades Universitarias de Córdoba y de Mendoza (para 2.000 estudiantes argentinos y 400 extranjeros).

Complementariamente, organizó los Campeonatos Infantiles de Fútbol Evita y Juveniles Juan Perón, que se ampliarían luego a torneos de atletismo, natación, básquetbol, esgrima, etcétera, los que trascendiendo el encuentro deportivo y la formación física se convirtieron también en un sistema que chequeaba la salud de 300.000 jóvenes por año. Implementó asimismo para los niños y preadolescentes de todo el país Colonias de Vacaciones en Córdoba, Mar del Plata y Buenos Aires, que trasladaban anualmente a 70.000 de ellos hacia esos lugares de esparcimiento.

Las obras que se realizaron a través de la Fundación fueron innumerables, fue en sí una labor social muy profunda. Explica Eva en La razón de mi vida: - el trabajo que yo hago no es filantropía ni es caridad, ni es limosna ni es solidaridad social, ni es beneficencia. Ni siquiera es ayuda social, aunque por darle un nombre aproximado yo le he puesto ése... Para mí es estrictamente justicia.

En el plano sindical, la figura de Eva Perón fue

fundamental ya que actuó como correa de transmisión entre los sindicatos y el Gobierno; de esta manera, el régimen contaba también con el apoyo de los trabajadores que sustentaron de manera inestimable su política.

"Eva Perón Eterna en su Pueblo". Así será recordada ella y su magnífica obra por esta Patria.

**Norma Ceballos, Blanca Rosas, Evelina Feraudo, Liliana Juncos, Mirta Mussi, María Fernández, Juana Romero, Sonia Lascano.**

#### DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de declaración N° 07157/L/05, iniciado por las Legisladoras Ceballos, Rosas, Feraudo, Juncos, Mussi, María Irene Fernández, Romero y Lascano, por el cual rinde homenaje a la memoria de Eva Duarte de Perón, en ocasión de celebrarse un nuevo aniversario de su nacimiento el día 7 de Mayo, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.

#### DIOS GUARDE A V.H.

**Podversich, Flores Durán, Rosas, Ceballos, Sánchez, Olivero.**

#### PROYECTO DE DECLARACION - 07178/L/05 LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DECLARA:

Su adhesión y beneplácito al 25º Aniversario de la Fundación de El Diario Puntal de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a realizarse el día 9 de Agosto, en la dicha Localidad.

**Horacio Vega, Jorge Méndez.**

#### FUNDAMENTOS

El Diario Puntal de la ciudad de Río Cuarto cumplirá el 9 de agosto del presente año sus primeros 25 años de su fundación.

El acontecimiento es motivo más que suficiente para que los pueblos de la ciudad y de todo el sur de la provincia puedan celebrarlo como corresponde.

Puntal no es solamente motivo de información constante y veraz a los largo de los 365 días del año. Considero que es primordial dar a conocer algunos aspectos de este evento:

Es el único medio periodístico que también forma parte hasta del más pequeño de los pueblos del sur provincial, donde más de una vez suele verse a algún

cronista reflejando a cientos de kilómetros de distancia, algún acontecimiento.

Supo sobrellevar tiempos difíciles, aún cuando el país se veía envuelto en los grises nubarrones de la incertidumbre.

En todos estos años pasaron por sus instalaciones hombres y mujeres que posteriormente alcanzaron a otros medios nacionales, o que ocuparon diversos espacios destinados a la cultura, la docencia y la educación de las personas, siendo la semilla de su formación lo más importante para el crecimiento intelectual de quienes allí se desempeñan.

El diario de Río Cuarto guarda una virtud enorme. En sus páginas pueden verse las crónicas más serias y preocupantes que el diario vivir ofrece y que con profesionalismo y objetividad se reflejan.

Pero no podemos negar que los hechos más insólitos, simples y plenos de ternura también son tenidos en cuenta por la dirección del citado periódico.

A la emoción de un gol, del rugir de los motores, de la marcha del campo, se agrega la mujer, la fe, el municipio, las instituciones deportivas, culturales y sociales de todas las localidades que comprenden a su vasta área de cobertura.

El hecho de cumplir 25 años habla de la responsabilidad empresarial para llevar adelante un emprendimiento que además de ser una importante fuente laboral, es motivo para que la gran familia periodística encuentren en su sala de redacción o en los distintos talleres gráficos, parte de su misma casa.

Por este motivo, por ser un acontecimiento de importante índole cultural, informativo, entretenimiento y de cotidiana compañía, es que propongo sea considerado este aniversario de interés cultural periodístico en el ámbito provincial.

Los miles de lectores a diario, forman parte directa de uno de los cumpleaños más esperados y seguramente que toda la región –así como participa diariamente en las noticias- se suma con júbilo.

Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.-

**Horacio Vega, Jorge Méndez.**

#### **DESPACHO DE COMISIÓN**

Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de declaración N° 07178/L/05, iniciado por los Legisladores Vega y Méndez, por el cual adhiere y expresa beneplácito al 25° Aniversario de la Fundación del diario El Puntal de la Ciudad de Río Cuarto, a celebrarse el 9 de Agosto, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.

**DIOS GUARDE A V.H.**

**Podversich, Flores Durán, Rosas, Ceballos, Sánchez, Olivero.**

**- 11 -**

### **LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ESTABLECIMIENTO.**

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Corresponde dar tratamiento al punto 12 del Orden del Día, proyecto de ley 6567, que cuenta con despacho de comisión y que toma estado parlamentario.

Tiene la palabra el legislador Arias.

**Sr. Arias.**- Señor presidente, señores legisladores: al comienzo mismo de este segundo período de Gobierno de Unión por Córdoba nuestro Gobernador, el doctor José Manuel De la Sota, puso especial énfasis en el tema seguridad, a tal punto que se le otorgó el rango de ministerio a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Asuntos Institucionales, con competencia exclusiva en el tema seguridad, a través de una ley orgánica y en cumplimiento de una promesa efectuada el mismo día de su asunción.

Esto ha significado un enorme avance y un explícito reconocimiento a la importancia que reviste la problemática de la seguridad pública, teniendo en cuenta que si bien se ha hecho una importante inversión en política de seguridad durante el primer mandato del Gobernador De la Sota, había que tomar en consideración que las condiciones políticas, económicas, sociales e institucionales habían variado en nuestro país y, como lógica consecuencia, también en nuestra Provincia.

Además, todo gobierno debe garantizar la integridad física y patrimonial de la población y una provincia segura con justicia para todos, es fundamental para la vigencia del Estado de Derecho, abordando los problemas de manera completa y actuando con firmeza e imparcialidad.

Se ha escrito y se ha dicho mucho acerca del fenómeno de la inseguridad, principalmente ahora que se ha convertido en una de las demandas más sentidas de la población. La seguridad de las personas y de sus bienes, además de ser una demanda social, es una obligación insoslayable del Estado. El combate contra la violencia y el crimen constituye una responsabilidad básica e irrenunciable, por ello, asume un capítulo vertebral de

las políticas públicas, sin perjuicio de las responsabilidades que le corresponden a la comunidad en su conjunto.

En el año 1999 el actual Poder Ejecutivo provincial a cargo del doctor De la Sota, a través del Decreto 1915, reglamentaba la Ley 8574 promulgada por el anterior Gobernador, doctor Mestre, y ya definía de manera por demás acertada a la seguridad pública, estableciendo que es uno de los valores supremos de la sociedad cuya vigencia se alcanza dentro del Estado de Derecho, mostrándose como el goce y el pleno ejercicio por parte de la sociedad provincial de las libertades, derechos y garantías constitucionalmente consagradas.

Podemos aseverar que la seguridad es una condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para medir la calidad de vida. En consecuencia, la inseguridad vulnera sensiblemente las condiciones de convivencia porque modifica las tendencias del comportamiento de la sociedad y provoca necesariamente un proceso de descomposición comunitaria al fragmentarla y aislarla. La sociedad moderna requiere de una institución que garantice las necesidades de seguridad y protección de sus derechos y que prevenga la violación de las normas jurídicas.

Por otra parte, la victimización aumenta y a diario aparecen nuevas formas de criminalidad cada vez más organizadas y sofisticadas. Esta situación demanda gran capacidad de reacción coordinada entre gobierno y sociedad para poder cumplir las necesidades que se detectan a fin de diseñar una política de seguridad acorde a ello.

A partir del año 2002 fueron cambiando las necesidades de la gente y sus expresiones de sensaciones respecto de la temática relacionada con la seguridad. Hoy existe una nueva dimensión del concepto de seguridad, ya no referido solamente a la desviación del comportamiento humano tratado por medios represivos; una reflexión más profunda acerca del problema de la inseguridad ha conducido a una ampliación en su definición y en los temas que abarca, tales como desigualdad social, analfabetismo, movimientos demográficos, problemas de salubridad, así como los problemas generados por un inadecuado desarrollo urbano o por la modernidad misma, factores

estos que a veces impulsan a las personas a desarrollar conductas delictivas.

Este innovador concepto ya había sido incorporado en la definición contenida en el decreto antes citado. En un escenario social complejo emergieron nuevas formas de violencia e ilegalidad cuya expresión más significativa estuvo dada por el creciente aumento y complejidad del fenómeno delictivo desplegado principalmente en las grandes urbes, así como por la aparición de nuevas formas de criminalidad organizada. Ello, por cierto, no dejó de estar vinculado a la situación social descripta pero también ha derivado de ciertas condiciones institucionales reinantes.

La abarcativa pauperización social producida en la Argentina no ha sido la causa directa del aumento y de la forma de criminalidad sino que en su determinación han concurrido una serie de condiciones sociales, culturales y económicas que han favorecido la conformación de situaciones de violencia que propiciaron el crecimiento tanto de la criminalidad común -en particular de la criminalidad violenta- como de la organizada.

Esta es la autorizada opinión vertida en el documento denominado “Seguridad Ciudadana y Violencia en América Latina”, de la serie Política Social número 32 brindada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas en Santiago de Chile en agosto de 1999.

Dichas falencias asentaron dos características que han estado presentes desde la propia instauración de la democracia. En primer lugar, la permanente desatención política sobre los asuntos de la seguridad pública y, como consecuencia de ello, la recurrente delegación de la administración de esos asuntos a las fuerzas policiales, todo lo cual ha redundado en una sistemática ausencia de políticas y estrategias de seguridad apropiadas a los desafíos impuestos por las nuevas formas de conflictividad social y especialmente al aumento y complejidad criminal.

En segundo término, las deficiencias del sistema de seguridad policial para dar cuenta del crecimiento del delito y, como derivación de ello, para prevenir, enfrentar y conjurar exitosamente sus diferentes manifestaciones, como así también la intervención de determinados organismos o sectores estatales, especialmente policiales, en la

producción y reproducción de ciertas modalidades delictivas, ya sea por omisión, por complejidad o por participación directa en su desenvolvimiento.

En suma, como resultado de este proceso histórico se conformó un modelo tradicional de organización y funcionamiento de la seguridad pública en nuestro país cuyas características más importantes están centradas en el desgobierno político sobre los asuntos de seguridad pública y policial.

El autogobierno policial de la seguridad pública y del sistema provincial mismo y la exclusión comunitaria de los asuntos de la seguridad pública respondió principalmente a la permanente falta de voluntad gubernamental para ejercer la conducción del sistema de seguridad pública y provincial, dando lugar a una serie de deficiencias institucionales significativas, tales como la ausencia de un marco legal y organizacional adecuado para el diseño y formulación de políticas o programas de seguridad pública y para la gestión, administración y mando operativo civil sobre la seguridad, específicamente sobre la institución policial.

En consecuencia, la dirección, administración y control integral de los asuntos de la seguridad pública, así como la organización y funcionamiento del sistema policial, quedaron en manos de las propias instituciones policiales, generando así una suerte de "policialización" de la seguridad pública.

La nueva problemática de seguridad y la insuficiencia del sistema policial a raíz de profundos cambios sociales, económicos y políticos producidos en Argentina durante los años '80 y '90, dieron lugar en la emergencia a nuevas formas de conflictividad social para cuya producción convergieron una serie de condiciones sociales e institucionales.

En estos años la Argentina atravesó por un profundo proceso de desintegración y de diferenciación social signado por el creciente deterioro de las condiciones de vida de los sectores medios y bajos, la desagregación de los grupos familiares y vecinales bajos, la ruptura de los lazos de solidaridad comunitaria tradicionales, la consolidación de la estructura altamente regresiva de distribución de los ingresos y la riqueza, y la sumisión de vastos sectores sociales en una situación de pobreza, indigencia y vulnerabilidad. Esta situación en su conjunto ha moldeado una estructura social compleja y heterogénea, en cuyo seno se ha produci-

do un significativo crecimiento de exclusión y marginación de importantes sectores comunitarios.

En definitiva, durante las dos últimas décadas la Argentina pasó de ser una sociedad signada por el pleno empleo, la estabilidad laboral, el trabajo altamente regulado y los elevados índices de integración social, a una sociedad caracterizada por el desempleo estructural de larga duración, la profundización de la pobreza permanente y la aparición de nuevas formas de indigencia, contorneando una de las situaciones sociales más deterioradas y regresivas de América Latina. Ello produjo en Argentina, a lo largo de los últimos años, que la violencia y el delito hayan aumentado significativamente la tasa de criminalidad, esto es, la tasa de hechos delictuosos registrados cada cien mil habitantes. Ese parámetro ha ido en crecimiento desde los años '70, aunque a partir de los '90 ha aumentado hasta el punto de superar sensiblemente los niveles alcanzados durante las décadas anteriores, según el trabajo contenido en la serie Políticas Sociales, número 43, también elaborado por la CEPAL en Santiago de Chile.

En el 2001, en todo el territorio nacional, la tasa de criminalidad fue de 3182 hechos delictivos registrados, mientras que esa misma tasa en el año 1990 había sido de 1722 delitos. Es decir, durante los últimos años se ha producido un constante aumento de la tasa de hechos delictuosos registrados equivalente a casi un cien por ciento. Al respecto, el mayor aumento a lo largo de la década ha sido el que se observó entre los años 1998 y 1999, con un índice de 349 delitos registrados cada cien mil habitantes.

Las estadísticas oficiales brindadas por la Dirección Nacional de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, indican que a lo largo de la década del '90 la evolución de la tasa de delitos contra la propiedad registrada en el país fue muy similar a la de la totalidad de los hechos presuntamente delictuosos, registrándose un descenso en el paso de 1990 a 1991, creciendo progresivamente a partir de ese momento hasta el 2001, para llegar a 2114 cada cien mil habitantes, a lo que se agrega que en el caso de los delitos contra las personas la evolución a lo largo de la década presenta una tendencia creciente de carácter gradual, llegando al año 2001 con una tasa de 569 delitos registrados cada 100 mil habitantes.

Por su parte, en el 2001 se registraron

3048 homicidios dolosos y 888 tentativas en todo el país. En valores relativos, ello significó una tasa nacional de 8,23 homicidios dolosos cada 100 mil habitantes. En conjunto, estos datos, absolutos y relativos, cuyas cifras tienen origen en la misma fuente oficial antes citada, no son tan elevados en comparación con los registros nacionales e internacionales. Dentro del grupo de delitos contra las personas registrados en 2001 en todo el país, el homicidio doloso, incluyendo las tentativas, es uno de los delitos que menor frecuencia presenta, 2 por ciento, ocupando inclusive un rango menor con relación al total de hechos presuntamente delictuosos. No obstante, la singularidad de este tipo de delitos está dada por su gravedad e irreversibilidad. Además, es un expresivo indicador del grado de violencia existente.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Perdón, señor legislador, lo voy a interrumpir brevemente para saludar al segundo año de la carrera de Turismo del Instituto Superior Mariano Moreno quienes nos están visitando en el día de la fecha. (Aplausos).

Continúe en el uso de la palabra, señor legislador.

**Sr. Arias.**- En este sentido, la distribución territorial de los homicidios dolosos consumados que fueron registrados en el año de referencia en términos de valores absolutos presenta una fuerte condensación en las jurisdicciones que poseen las mayores concentraciones urbanas. La Provincia de Buenos Aires presenta una frecuencia de 1632 hechos, lo que equivale a más de la mitad del total de homicidios dolosos ocurridos en el país. En un rango muy inferior le sigue la Provincia de Santa Fe con 204 hechos, luego Córdoba, con 162, la ciudad de Buenos Aires con 152 y la Provincia de Mendoza con 127 hechos. Estos valores son iguales a los producidos en años anteriores por lo que se ha observado una cierta estabilización de este tipo de eventos delictivos.

Asimismo, entre los años 1998 y 2001 ha habido una tendencia a la estabilidad general de los niveles de victimización. Sin embargo, en 1999 hubo un pequeño decrecimiento aunque desde entonces se produjo un incremento leve pero sostenido hasta el año 2001.

En esos años los delitos sin violencia o amenaza han disminuido relativamente mientras que han aumentado aquellos cuya modalidad ha

sido violenta. En efecto, el robo con violencia en 1998 significó el 8,2 por ciento mientras que en 1999 subió al 11,9 por ciento y a partir de ese año comenzó a decrecer levemente; el 9,8 por ciento y el 9,4 por ciento para los años siguientes.

Sin embargo, si tomamos el valor del año 1998 como base, la tendencia general en estos años fue a la suba; además, el valor menor de 8,2 por ciento resulta muy elevado con relación a los parámetros internacionales.

Estas tendencias se han desenvuelto en un escenario social e institucional signado por el repliegue y la evaporación del Estado en zonas o regiones del territorio urbano y en considerables sectores de su estructura social, haciendo que la efectividad de la ley se extienda irregularmente, dando lugar a que en ciertos espacios territoriales “fabelizados” -entre comillas-, de estas grandes urbes y la ausencia de regulación estatal sea reemplazada por interacción signada por la violencia y extendidas redes delictivas.

En estas comunidades, al amparo del desempleo permanente, la falta de ingresos regulares, el retiro del Estado benefactor y las intervenciones policiales exclusivamente represivas y/o regulatorias de las actividades criminales allí desenvueltas, se ha producido un quiebre en los lazos sociales tradicionales dando lugar a una lógica social que combina dramáticamente formas incipientes de solidaridad con hechos cotidianos de violencia y criminalidad.

Todo esto ha generado un nuevo régimen de marginalidad urbana en el que la proliferación de ciertas formas de delincuencia común, la distribución y venta del consumo de drogas dentro y fuera de estos verdaderos ghettos ha pasado a constituir un rasgo novedoso y una actividad que impacta sensiblemente sobre la vida social de estas villas miseria y sus barrios lindantes. Estas actividades se han convertido en una alternativa de vida para muchos jóvenes de esas zonas marginalizadas.

En consecuencia, la violencia y el dominio coactivo del crimen signan la cotidianeidad de esos territorios aislados y vulnerados que marcan un conjunto de interacciones signadas por el temor, la estigmatización negativa frente al resto de la sociedad y la alta conflictividad violenta en los planos individual y grupal.

En muchas villas miseria de las principales ciudades de la Argentina estas condiciones han favorecido la conformación de poderes locales autónomos respecto de la legalidad formal y han permitido la articulación de formas violentas de dominación social protagonizadas en general por grupos o bandas delictivas que despliegan sus actividades en el interior de estas nuevas favelas cuyas actividades predominantes giran en torno al tráfico y distribución minorista de drogas.

En el interior de estos territorios así como en los barrios y zonas lindantes, se concentra la mayor cantidad de hechos de violencia y actos delictivos y en particular de homicidios dolosos.

En este contexto no solamente se incrementó la delincuencia común, en particular los robos con violencia o los hechos delictivos cometidos por marginales cuyas modalidades típicas han supuesto el accionar tanto de delincuentes ocasionales y no asociados como de grupos organizados como reducidos, sino que también creció la criminalidad protagonizada por organizaciones delictivas que cuentan con amplio despliegue logístico y operativo, cuyas actividades ilegales apuntan a la generación de un alto nivel de rendimiento económico.

Las modalidades delictivas de estas asociaciones ilícitas poseen un importante despliegue territorial, en algunos casos de alcance internacional y en otros nacional o regional. Su grado de complejidad organizacional, compartimentación funcional, profesionalización y coordinación operativa entre los diferentes grupos y subgrupos componentes le otorgan una relativa gravitación social.

Entre las actividades delictivas desarrolladas por estos grupos y consorcios se destacan el tráfico y la comercialización de drogas, el tráfico y venta ilegal de armas, el robo, doblaje y desarme de automóviles y venta ilegal de autopartes, los robos calificados bajo las modalidades de asaltos cometidos por los denominados "piratas del asfalto" y el secuestro de personas.

El robo, desarme de automóviles y la venta ilegal de autopartes constituye una de las actividades delictivas de mayor crecimiento, complejidad y rentabilidad consolidada durante los últimos años en las grandes urbes de la Argentina. Este problema delictivo conlleva, además, altísimos niveles de violencia, particularmente en ocasión de robo de automóviles, ya que es una de las principales causas de los homicidios dolosos; además

implica una compleja interrelación entre los diferentes grupos que participan del negocio, esto es, los encargados del robo del vehículo, los que regentean los desarmaderos -en donde los vehículos robados son desarmados y se lleva a cabo la venta de autopartes- y las denominadas empresas recuperadoras de autos robados.

La envergadura y complejidad que ha adquirido la problemática criminal en la Argentina pone en evidencia las deficiencias organizativas y de funcionamiento que porta el sistema de seguridad local, muy particularmente las fuerzas policiales que lo componen. En efecto, existe un profundo anacronismo y desactualización orgánica, funcional y doctrinal del sistema de seguridad pública y policial argentino frente al aumento de la complejización delictiva desarrollada durante las últimas décadas. En este marco la modernización de los sistemas policiales y su adecuación a la imperiosa necesidad de llevar a cabo estrategias eficientes en materia de seguridad preventiva y de investigación criminal, requiere de la implementación de una serie de políticas y medidas que tiendan a construir verdaderas policías ciudadanas, direccionando y reforzando la labor policial destinada a la prevención o conjuración temprana de delitos, así como el desarrollo de una deficiente investigación criminal de aquélla.

La vigencia efectiva del Estado de Derecho y el ejercicio exitoso del monopolio legítimo y legal del Estado sobre los medios de violencia, configuran las condiciones institucionales indispensables de la democracia. Los Estados democráticamente organizados proclaman legal, institucional y simbólicamente estas condiciones y se estructuran social y políticamente en función de hacerlas vigentes en sus comunidades. Su sistema de seguridad pública encuentra en estas funciones sus respectivos horizontes legales y simbólicos.

Desde una perspectiva social e institucional, el sistema de seguridad pública es el conjunto de instituciones y actores que intervienen en el abordaje, regulación, mediación y resolución del conjunto de los conflictos sociales derivados de la comisión de hechos socialmente dañinos o ilícitos mediante el proceso institucional y social de criminalización de los hechos conocidos y registrados.

Entre los elementos y actores componentes del sistema de seguridad pública se destacan: el Estado, a través del sistema penal en su conjunto, esto es las instituciones policiales, los órganos ju-

diciales y el sistema penitenciario, así como la comunidad, a través de la intervención de sus diferentes agentes o grupos constitutivos.

No obstante, en el proceso de democratización política desarrollado desde mediados de los '80 en Argentina, si bien resultó exitosa la reversión de la autonomía y la tutela militar sobre la vida institucional y se puso fin al ciclo de violencia que caracterizó la vida política local durante varias décadas, no fue posible la estructuración de una situación de seguridad pública signada por la regulación y conjuración efectiva del conjunto de los conflictos sociales, vulneratorios de los derechos y libertades ciudadanas básicas de toda democracia consolidada.

De este modo en Argentina, al igual que en otras experiencias regionales, la democratización política enmarcó la conformación de un Estado fallido, esto es, un Estado que se ha mostrado incapaz de asegurar la efectividad de sus leyes, disposiciones y políticas a lo largo del territorio y del sistema de estratificación social, moldeando con ello un escenario en el que las relaciones entre ese Estado y la sociedad pasaron a estar signadas, en muchos aspectos, por un bajo grado de institucionalización.

De lo expuesto podemos diferenciar claramente dos aspectos: el delito surgido como consecuencia de la exclusión social, de la marginalidad, de la situación política, institucional, económica y de crisis que ya describiéramos -que es donde se observó que comenzó a aumentar la violencia juvenil y la escolar en el barrio donde muchos excluidos sociales cometían ilícitos para sobrevivir- y, por otro lado, la lamentable subsistencia de las bandas organizadas, conformadas por aquellos cuyo único modo de vida es delinquir a través del crimen organizado.

Una política de seguridad que no atiende estos problemas en su conjunto está condenada a tener sólo efectos limitados y secundarios, por lo tanto, con poco éxito y sin repercusión en la comunidad. Esta concepción debe conducirnos a la participación de expertos de otras áreas del gobierno para el adecuado tratamiento del fenómeno y la valoración de diversas variables que afectan directa e indirectamente el grave problema de la inseguridad.

Si bien se atacaron los problemas coyuntu-

rales, ante este problema la intención prioritaria es darle sustentabilidad en el tiempo a una política de prevención en serio. Para eso se prevé la creación de equipos interdisciplinarios conformados por profesionales de todas las áreas de los distintos ministerios en sintonía con las áreas especializadas de la Policía de la Provincia de Córdoba, que para combatir el crimen organizado cuenta con áreas de Prevención, de Coordinación Comunitaria, de Prevención de Drogas Peligrosas y de Protección de las Personas, entre otras.

Hay muchos que hablan de seguridad y no la conocen. Muchos creen que la seguridad es cada vez más policías, más móviles, más personal. Por un lado, esto está bien, pero para el crimen organizado, para luchar contra los delincuentes y sus bandas, para luchar en forma integral contra la delincuencia, debemos tener en cuenta otros muchos aspectos.

Esta nueva modalidad de trabajo, esta nueva forma de combatir los distintos tipos de delito, el intento de contar con nuevas herramientas acordes a los tiempos que estamos transitando siempre han tenido una sistemática resistencia de los partidos políticos que hoy son oposición. Prueba de ello lo ha sido la enorme cantidad de pedidos de informe y de interpelación relacionados con el área de seguridad durante los períodos legislativos 2004 y 2005. Es justo decir y reconocer que siempre ese Ministerio ha tenido la mejor predisposición para dar respuesta a todos los cuestionamientos planteados, que siempre estuvieron reñidos con la memoria o la falta de conocimientos profundos y objetivos de la problemática.

Cabe recordar –a simple título de ejemplo- que cuando nuestro Gobierno asumió la conducción de esta Provincia en julio de 1999, en la ciudad Capital contábamos solamente con 70 móviles policiales, lo que determinaba una ecuación de un móvil por cada 64 manzanas. Hoy podemos señalar que cada móvil policial cubre ocho manzanas. No obstante ello, somos conscientes de que el problema de la seguridad no debe descuidarse nunca; todo lo contrario, debemos estar atentos continuamente a los cambios sociales, determinantes primordiales de la conducta de la ciudadanía.

El espectro en el que se desenvuelve el área de seguridad es muy extenso, muy amplio, y

además de formular las políticas de seguridad, debe ejecutar los planes, programas y proyectos de la prevención delictiva y el mantenimiento del orden en pos de la convivencia social, en paz y armonía. Para ello se debe desarrollar la prevención de accidentes de tránsito, la planificación y coordinación de la defensa civil, la prevención del uso indebido de drogas y la lucha contra el narcotráfico; la organización y supervisión del servicio penitenciario, la coordinación de la asistencia pospenitenciaria, el funcionamiento del Tribunal de Conducta Policial, la regulación y fiscalización de normas de actividad náutica, el ejercicio del poder de policía y la regulación de los servicios de seguridad privada.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos que hacen a las funciones esenciales del Ministerio de Seguridad, el Poder Ejecutivo envió esta Ley de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba con la intención de dotar al área mencionada con un plan integral de seguridad pública, que prevé fundamentalmente salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, asegurando la convivencia y la cohesión social en el marco de las libertades, los derechos y garantías consagrados por nuestra Constitución. Sus objetivos prioritarios son el mantenimiento del orden y la tranquilidad en todo el territorio provincial, la protección de las personas y de sus bienes, la promoción de programas de prevención de delitos y contravenciones, la conjura temprana de los mismos a través de la persecución y sanción de sus autores, el control de la ejecución de las penas y de la reinserción social de los condenados, y la asistencia de la población en casos de desastres.

Para llevar adelante esos objetivos, el Sistema Provincial de Seguridad Pública contará fundamentalmente con la participación directa de la Policía de la Provincia de Córdoba y del Servicio Penitenciario Provincial, siendo a su vez auxiliado por la Dirección de Defensa Civil, los Cuerpos de Bomberos y Rescate, las Juntas de Participación Ciudadana, la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito y las dependencias encargadas de la seguridad náutica y del control de los prestadores de seguridad privada.

El proyecto en tratamiento, para su mejor estructuración, está dividido de la siguiente forma: Parte I, comprende el Sistema Provincial de Seguridad Pública y el objeto mismo de la ley, compuesto por dos títulos, el primero de los cuales

consta de tres capítulos y el restante de dos. Parte II, referida a la Policía de la Provincia de Córdoba, en su Título 1, conformado por tres capítulos, se mencionan las bases del funcionamiento de esa fuerza de seguridad, mientras que el Título 2, a través de seis capítulos, establece la organización policial. La Parte III, referida a la organización del Servicio Penitenciario de Córdoba, está compuesta de dos títulos, con cuatro capítulos el primero y seis el segundo. Por último, la Parte IV se refiere a las disposiciones complementarias.

En el modelo tradicional de seguridad en nuestro país la relación existente entre la comunidad y la Policía ha estado caracterizada por la ausencia de toda modalidad e instancia de intervención o participación comunitaria en los asuntos de la seguridad pública y, particularmente, en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de seguridad y en el control del desempeño policial. En efecto, a la ya mencionada relación de externalidad existente entre la Policía y la comunidad, expresada en la total ausencia de modalidades de policiamiento comunitario proactivo, se ha sumado la profunda brecha que históricamente distanció a la Policía de la comunidad.

Desde la última dictadura que implantó el terrorismo de Estado, en cuyo marco las fuerzas policiales y de seguridad constituyeron una instancia clave del aparato represivo estatal, tal como lo sostiene Martin Edwin Andersen en "La Policía, Pasado, Presente y Propuestas para el Futuro".

Estas fuerzas vigorizaron la impronta de regulación delictiva y de autofinanciamiento ilegal que ya caracterizaba su funcionamiento anterior. En ese marco, lejos de conformarse en una instancia activa en la prevención de delitos, la policía se fue convirtiendo, en gran medida, en una fuente significativa de criminalidad.

Frente a la ciudadanía en general esta situación, es decir, la manifiesta ineficacia policial en la prevención y represión del delito, así como el creciente conocimiento público de recurrentes abusos y extralimitaciones institucionales cometidas por agentes policiales durante las últimas décadas, dieron lugar a una notoria y extendida desconfianza comunitaria hacia dichas fuerzas.

En el modelo tradicional, el principal contacto establecido entre la policía y la ciudadanía está dado históricamente por la formulación de denuncias de la población en general y en solicitudes básicamente por vía telefónica para la inter-



vención policial frente a hechos delictivos consumados. Sin embargo, la desconfianza relativa por parte de la población acerca del accionar policial y, en particular, la creencia o sensación generalizada de que gran parte de los delitos menores se producen bajo el amparo policial directo o indirecto, han puesto en tela de juicio inclusive a la misma denuncia como un hecho fiable y eficaz para prevenir y luchar contra el delito.

De todos modos las solicitudes de intervención policial formulada por las víctimas o testigos de algún delito solamente han dado lugar a un tipo de intervención policial de carácter exclusivamente reactivo, ya que aquel requerimiento se ha producido generalmente durante la comisión de hechos delictivos o en el momento inmediato posterior a los mismos.

En general, la policía no consideró que la interacción de la ciudadanía y la intervención colaborativa de ésta en la labor policial frente al delito pudiesen constituir, en el caso posible, la elaboración e implementación de estrategias de eficacia en la prevención del delito.

No solamente se rechazó en el ámbito policial la posibilidad de que los ciudadanos pudiesen identificar la naturaleza y envergadura de los problemas, situaciones de violencia y credibilidad existente en la esfera de su vecindad, sino que además la misma policía se posiciona como la única institución capaz de identificar y accionar sobre esos problemas y situaciones.

En este sentido, las fuerzas policiales le adjudicaron a la ciudadanía un papel esencialmente pasivo e inerte en materia de seguridad, es decir, la administración de la seguridad pública-Estado está exclusivamente en manos de los órganos policiales.

La inexistencia de un sistema de policiamiento comunitario perfilado a la prevención y conjugación de delitos leves, los conflictos sociales menores, los desórdenes y las faltas cercenatorias del orden público local, han alterado sensiblemente el vínculo articulado entre la comunidad, la institución policial y el poder político local o municipal.

La sistemática desatención policial de este tipo de incidentes menores ha deteriorado la necesaria relación que debe mantener la policía con la comunidad, lo que ha contribuido al desmejo-

ramiento de la vida colectiva e impactado significativamente en la competencia de los gobiernos locales para gestionar esa situación de crisis.

En sectores importantes de las comunidades locales de diferentes países, entre ellos el nuestro, se ha observado una importante insatisfacción con el servicio policial recibido y una extendida desconfianza hacia la policía y, por extensión, hacia el poder político local, sea el encargado o no de la conducción policial.

Fundamentalmente debemos intentar transformar una política de gobierno en una política de Estado, implementando programas que se integren conjuntamente con las organizaciones no gubernamentales y con centros vecinales, de salud, educativos, etcétera, porque ellos van a armar una red comunitaria, en la que se van a ir nutriendo los equipos que trabajan en el terreno.

Cuando la comunidad hace suyo un proyecto podemos comenzar a hablar de política de Estado, de política de gobierno; pero si la comunidad, a través de sus entes organizados no hace suya esa política seguramente tenderá a fracasar.

Al decir de Nils Christie, criminólogo noruego reconocido mundialmente y cuyos trabajos han sido publicados en gran número de idiomas, los actos deplorables existen, pero ¿existen los delitos?, y, si así fuera, ¿cuántos delitos serían suficientes o demasiados? El delito no es un concepto estático o fijo, y cuáles son las acciones consideradas delictivas varía históricamente y de una sociedad a otra.

A raíz de esta apreciación me voy a permitir rescatar un breve relato de una de sus obras publicadas el año pasado, denominada “Una Sensata Cantidad de Delito”, donde relata una situación “que tiene lugar en un pequeño parque rodeado por edificios de departamentos. Es junio, el mes de la celebración de la luz, el sol, y el comienzo del verano en el norte. Es domingo antes del mediodía, hora de ir a misa, según el viejo modo de referirse a las horas más tranquilas de la semana. En algunos balcones que dan al parque la gente disfruta de desayunos tardíos o está leyendo o descansando.

Un hombre llega al parque. Arrastra bolsas de plástico y se sienta entre ellas. Las bolsas contienen botellas de cerveza. El hombre abre una botella, dos, varias, habla un rato solo, luego con

algunos niños que juegan a su alrededor. Habla y canta, para disfrute de su audiencia. Después de un tiempo, el hombre se levanta, camina hacia unos arbustos y se desabrocha la bragueta del pantalón. Varios niños lo siguen.

Aquí necesitamos dos edificios de departamentos, exactamente iguales, contruidos en base al mismo plan. Pero sus historias no son las mismas. Uno de los edificios fue construido de manera moderna, por una empresa constructora profesional. Todo estaba listo cuando los ocupantes se mudaron, totalmente terminado, con llave en mano, y con un eficiente ascensor desde el garage hasta el último piso. Llamemos a este edificio 'la casa de la perfección'. El otro edificio tiene una historia más turbulenta. El constructor había quebrado, no quedaba más dinero. Sin ascensor que funcionara, sin puertas de entrada en los pasillos, sin cocinas instaladas; en conjunto una situación desesperante.

Los futuros propietarios -que habían pagado antes de la quiebra- se vieron forzados a remediar los peores defectos; se realizaron acciones conjuntas para reparar puertas, techos, pisos defectuosos, y asfaltar el camino de entrada. Se creó un comité de crisis para demandar al constructor. Fue un trabajo pesado y requirió de sociabilidad. Llamemos a este edificio 'la casa de la turbulencia'.

Volvamos ahora al hombre del parque. El hombre, medio oculto entre los arbustos, rodeado de niños, desabrochando los botones de su pantalón, es una situación abierta a interpretaciones sumamente divergentes. En 'la casa de la turbulencia' la situación es clara: El hombre en los arbustos es Pedro, el hijo de Ana. Tuvo un accidente cuando niño, su comportamiento es algo extraño, pero es tan amable como los días de verano son largos en el norte. Cuando bebe demasiado, simplemente, hay que llamar a su familia y alguien viene para llevarlo a su casa.

En 'la casa de la perfección' la situación es diferente. Nadie lo conoce. Un hombre extraño rodeado de niños expone su pene. Los decentes espectadores de los balcones corren al teléfono para llamar a la policía. Un caso de exhibiciones obscenas fue denunciado, un serio hecho de abuso sexual probablemente prevenido.

¿Qué más podían hacer los buenos vecinos de 'la casa de la perfección', disminuidos como estaban por la modernidad? Su constructor no

había quebrado. Ellos no se habían visto obligados a cooperar entre vecinos. No se vieron en la necesidad de prestarse herramientas, de cuidar de los niños de los vecinos mientras otros asfaltaban el camino de entrada, ni de encontrarse en interminables sesiones para ver cómo no perder todavía más con la quiebra. No se vieron obligados a conocerse, a crear un sistema de cooperación y de información compartida.

De esta forma, Pedro y Ana no eran conocidos en este edificio como sí lo eran en el otro. Sus habitantes, como ciudadanos precavidos, tenían una sola alternativa: llamar a la policía. Pedro se volvió un delincuente potencial debido a la ausencia de bancarrota en 'la casa de la perfección' mientras en 'la casa de la turbulencia' hubiera sido devuelto a casa de su madre. O dicho de modo general: en casos como éste, una cantidad limitada de conocimiento dentro de un sistema social nos da la posibilidad de darle a un acto el significado de delito.

Esto tiene consecuencias para la percepción sobre qué es delito y quiénes delincuentes. En sistemas sociales con mucha comunicación interna obtendríamos más información sobre la gente que nos rodea. Entre gente desconocida, los funcionarios oficiales se convierten en la única alternativa de control; pero algunas categorías de tales funcionarios generan delito por su mera existencia.

La institución penal está en una situación análoga a la del Rey Midas: todo lo que él tocaba se convertía en oro, y, como todos sabemos, murió de hambre. Mucho de lo que la policía toca y todo lo que la prisión toca se convierte en delitos y delincuentes, y se desvanecen las interpretaciones alternativas de actos y actores.

En este tipo de sociedad nuestras propias actividades tendientes a la supervivencia pueden estar ligeramente fuera de la zona legalmente aceptada. Una amplia red también aumentará las posibilidades que de vez en cuando nos crucemos con personas definidas por las autoridades como delincuentes. Con esto volvemos a mi tema principal: los actos no son, se construyen; la gente no es, se hace. Una amplia red social con lazos en todas direcciones crea por lo menos incerteza sobre qué es delito y también sobre quiénes son delincuentes.

Los vecinos de 'la casa de la perfección' vivían una vida moderna en casas donde estaban

aislados de sus vecinos; eso significaba que también estaban aislados de la información sobre cuestiones locales. Esta falta de información los forzaba a llamar a la policía. El caso se transformó en un caso criminal porque estos vecinos conocían demasiado poco”.

Un claro ejemplo de participación ya lo ha dado el sector agropecuario cuyos productores han venido colaborando activamente en estrecha cooperación con los intendentes municipales y presidentes de comunas surgiendo el Consejo Permanente Asesor Agropecuario para la Prevención del Delito Rural, que incluye a todas las organizaciones agropecuarias y cuenta hoy con más de 150 patrullas, de las cuales 45 son mixtas, es decir que trabajan tanto en el área urbana de cada localidad como también en sectores de la red secundaria rural. Esto no hubiera sido posible sin la participación de los productores rurales.

Como conclusión, podemos aseverar que no hay posibilidades de un plan de prevención a nivel urbano si no hay participación comprometida de todos los estamentos del Gobierno provincial, de los gobiernos municipales y fundamentalmente de la gente. Con orgullo podemos decir que Córdoba es la primera provincia que plantea esto dándoles a los propios actores no sólo un ámbito de discusión de política de seguridad sino también un ámbito pleno de participación.

Es importante destacar que ya existen esfuerzos internacionales orientados a dar un concepto de seguridad pública a partir del desarrollo social. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo considera el ámbito de la seguridad pública o ciudadana como parte integrante de una visión integral de la Justicia, dado que una de las funciones esenciales de la política es garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.

Es justamente éste uno de los pilares más importantes y novedosos en el que se asienta este plexo legal: la participación comprometida de la ciudadanía a través de un plan provincial estratégico para la prevención integral, porque entendemos que la problemática surgida de la crisis política, económica, institucional y social que explotara a fines de la década del '90 y que terminara repercutiendo muy duramente a comienzos de este siglo hizo que el tejido social no sólo se resintiera

sino que prácticamente se desintegrara.

Por eso, si bien permanentemente el Poder Ejecutivo ha estado especializando y capacitando a nuestra policía para la lucha contra esos estamentos que constituyen el denominado delito organizado, es fundamental instaurar un plan de prevención porque tenemos que lograr ir rearmando ese tejido social en función de este plan, cuya finalidad sea promover el desarrollo humano, estimulando el compromiso social y privilegiando la reconstitución de las redes sociales a través de la acción preventiva y la atención de aquellos sectores en condiciones evidentes de vulnerabilidad social.

El Plan Provincial Estratégico para la Prevención Integral merece un capítulo aparte en la ley porque entendemos que no hay plan, no hay posibilidades de desarrollar una política de seguridad que tenga sustentabilidad en el tiempo si no existe una participación comprometida de la ciudadanía a través de sus estamentos naturales.

Con esta nueva legislación se prevé la derogación de la Ley 8574, que crea el Programa de Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana, donde se hablaba de los consejos vecinales de apoyo y de seguridad, pero que en la práctica se pudo constatar que se constituían exclusivamente cuando había un problema serio de inseguridad. En su reemplazo, el Ministerio de Seguridad propiciará la constitución de juntas de participación ciudadana para la prevención integral, por la paz y la convivencia social, como ámbitos de encuentros comunitarios.

Estas juntas de participación ciudadana podrán conocer y opinar sobre política de seguridad pública, sugerir medidas específicas y acciones concretas para mejorar esta función, realizar labores de seguimiento, denuncias o quejas respecto a irregularidades y auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas, participando en actividades no confidenciales o que pongan en riesgo el buen desempeño de la seguridad pública. Esto servirá para recuperar la confianza que existía hacia los policías cuando se trabajaba en conjunto.

Lógicamente los tiempos han cambiado, porque los policías ahora no pueden estar sin los chalecos anti-balas y su armamento bien preparado, pero de todas maneras es importante hacer

ese trabajo conjunto para recuperar la confianza, ya que hemos podido observar que muchas veces la relación del ciudadano con la autoridad se basa en la desconfianza en las instituciones y no en el respeto a la ley. Esta concepción se refleja en el actual sistema de seguridad, que no ha logrado ser todo lo participativo, influyente y eficaz que se pretende.

Generar un sistema de seguridad pública más participativo y eficiente representa, entonces, un desafío significativo para la evolución y consolidación de nuestro sistema democrático. Esto nos obliga a replantear las políticas de seguridad y diseñar nuevos modelos de participación y corresponsabilidad ciudadana que posibiliten el restablecimiento de estándares de seguridad aceptable; sólo así, mediante la participación social organizada, será posible encontrar soluciones duraderas a la inseguridad.

Con la participación del gobierno, los sectores privados y las sociedades civiles, se lograrán generar oportunidades de interacción que permitan encontrar soluciones a largo plazo, atendiendo las prioridades que determinen el establecimiento de mecanismos y procedimientos de participación de la sociedad. Esto permite que las instituciones y los ciudadanos articulen sus intereses mediante sus distintos roles y el ejercicio legal de sus derechos y obligaciones.

El compromiso es estimular y promover la cultura de la prevención mediante la capacitación de los actores sociales. Ya existen programas orientados en tal sentido, como son el Programa de Prevención de Adicciones, el Programa de Jóvenes Preventores, el Programa contra la Violencia -principalmente en escuelas y barrios- y el Programa de Prevención de la Violencia en los Espectáculos Públicos.

Entre las diversas variantes delictivas están las bandas que operan alquilando mano de obra, alimentadas por aquellos excluidos sociales que están por debajo de la línea de pobreza, que no pueden acceder a la educación, a la salud, con necesidades básicas insatisfechas, los ciudadanos más pobres, los marginales, quienes se encuentran al borde de la dignidad y sin un trabajo honrado. Para combatir esta grave problemática es necesario apostar fuertemente no sólo a los planes de prevención sino a la activa participación de un equipo técnico interdisciplinario, explícitamente planteado en el proyecto de ley, para que

atienda este tipo de dificultades mediante la diagramación de programas específicos, estrategias y metodologías de actuación y control de gestión del plan.

De la misma manera, consideramos importante la participación de la ciudadanía no solamente a través de sus representantes sino también promoviendo la intervención de municipios y comunas, legisladores, concejales y, fundamentalmente, de organizaciones no gubernamentales, como centros comunitarios, centros educativos, centros vecinales y clubes, entre otros, que conforman la pluralidad de canales para la participación ciudadana en la creación de una gran política provincial de prevención de delitos y conductas violentas, que busquen inhibir los factores de riesgo e incrementen los factores de protección.

Asimismo, se necesita realizar actividades de educación y de comunicación para fomentar los valores de tolerancia, legalidad, diálogo, dignidad humana, convivencia, responsabilidad ciudadana, libertad y civismo proactivo, elementos todos indispensables para crear una cultura de orden y respeto entre los cordobeses. Según Javier Llop, en su obra "Policía y Constitución", en una democracia las tres funciones básicas de la institución policial son las siguientes: primero, la prevención de delitos, lo que implica la efectivización de un conjunto de intervenciones institucionales tendientes a evitar o a abortar la decisión de cometer un delito o impedir la realización de hechos o actos que impliquen un delito. Segundo, la intervención en la represión de delitos a través de su participación en la investigación criminal, lo que abarca la constatación de los hechos delictivos perpetrados, la búsqueda y reunión de los elementos de prueba, y la identificación y localización de las personas sospechadas de ser responsables de los mismos, todo ello bajo la conducción judicial. Tercero, el mantenimiento de la situación de seguridad pública mediante acciones que apuntan a prevenir, neutralizar y conjurar cualquier tipo de hecho, falta o comportamiento, violento o no, que actúe, limite o cercene la paz social y la libertad personal o vulnere la situación de seguridad de las personas.

Así, el horizonte funcional de la Policía es la protección ciudadana frente a determinados riesgos o actos que suponen una lesión concreta a las personas en una situación de inseguridad pública o a ciertos derechos y libertades.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que dicha acción limitativa no implica extralimitaciones, abusos o arbitrariedades que no solamente impidan prevenir o conjurar aquellas conductas violentas de derechos sino, peor aún, que se constituyan en una fuente de violaciones de derechos y, por ende, de cercenamientos y vulneraciones a la situación de seguridad institucional efectiva.

Por ello, la función policial implica el ejercicio de un servicio de protección a los derechos y libertad de las personas frente a eventos o actos que supongan la vulneración de una situación aceptable de seguridad pública.

Pero dicha función general debe ser ejercida respetando y adecuando siempre la actuación policial a la legalidad que enmarca esos mismos derechos y de los que derivan el conjunto de las normas regulatorias de su accionar. Esto significa que en un Estado democrático y de derecho esta actuación está regida siempre y en todo momento por el principio de legalidad.

Ahora bien, en su conjunto, el sistema de seguridad público en la Argentina -del que el sistema policial configura apenas una dimensión particular del mismo- se estructura sobre la base de un conjunto de parámetros tradicionales que resultaron de un largo proceso histórico. En su contexto, la institución policial argentina se fue conformando básicamente como un organismo al servicio de los gobiernos estatales y de turno más que de la comunidad, en el marco de una concepción de la seguridad sentada en el deber de protección del Estado y no de los derechos y libertades ciudadanas, adquiriendo así una impronta fuertemente estatal.

Asimismo, durante los regímenes autoritarios, los gobiernos militares asumieron un férreo control de la policía y posicionaron a ésta como pieza e instancia claves del control y diseño represivo interno dirigido por las Fuerzas Armadas. Todo ello trajo aparejada una abarcativa militarización organizativa y funcional de la policía.

Así las instituciones policiales de nuestro país lejos de constituirse como policías civiles y ciudadanas se fueron conformando como guardianas del orden político, militarizadas y estatistas, más sensibles a la orientación e intereses de los gobiernos de turno y de sus respectivas cúpulas que a los dictados de la ley, atravesadas por prác-

ticas ilegales y clandestinas altamente difundidas y validadas en el interior de la propia institución.

El modelo tradicional estuvo signado por un recurrente desgobierno político sobre los asuntos de la seguridad pública a través del cual la dirigencia política y en particular las autoridades gubernamentales delegaron en los organismos policiales el monopolio de la administración de la seguridad pública.

Es decir, la seguridad pública configuró una esfera institucional exclusivamente controlada y gestionada por la policía sobre la base de criterios, orientaciones e instrucciones autónomas y corporativamente definidas y aplicadas sin intervención determinante de otras agencias estatales no policiales.

Ello respondió principalmente a la falta de conducción política del sistema de seguridad pública y de la policía en particular, dando lugar a una serie de deficiencias institucionales significativas tales como la ausencia de un marco legal organizado y adecuado para el diseño y formulación de políticas o programas de seguridad pública y para la gestión, administración y mando operativo civil sobre la institución policial.

Escucho mucho ruido, ¿podría poner un poco de orden?

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Solicito a los señores legisladores guardar silencio.

Continúe en el uso de la palabra, legislador Arias.

**Sr. Arias.**- Gracias, señor presidente.

En consecuencia, la dirección, administración, control integral, así como la organización y funcionamiento del sistema policial quedaron en manos de las propias fuerzas policiales, generando una suerte de policialización de la seguridad pública.

Esta delegación de las fuerzas policiales en el ejercicio de la administración de la seguridad pública trajo aparejada la automatización política de la policía permitiendo que estos definieran sus propias funciones, misiones y fines institucionales; proporcionando sus propios criterios y medios para cumplirlos o alcanzarlos y, en ese marco, también se establecieron los objetivos y orientaciones generales de la seguridad pública en su conjunto.

De cara al interior de las instituciones policiales ello apuntaló una marcada independencia

doctrinal orgánica y funcional en su desarrollo y proyección institucional frente al gobierno estatal y a la sociedad política y civil, permitiendo que estas agencias actuaran con frecuencia como si estuvieran por encima y más allá de la autoridad institucional del gobierno, protegiendo cada vez más sus logros e intereses autodefinidos y resistiendo con relativo éxito a toda iniciativa gubernamental tendiente a erradicar, reducir o cercenar dicha autonomía. En ciertas situaciones, dentro del modelo tradicional, se ha estructurado un tipo de vinculaciones entre el gobierno central y la policía sentada básicamente en la existencia de un pacto explícito o tácito entre ambas instancias.

Conforme lo observado en la experiencia institucional de nuestro país a través de dicho pacto, el gobierno delegó la administración de la seguridad pública y, en particular, la formulación e implementación de su política criminal a la policía, así como la conducción estratégica y operativa de la propia institución policial, aceptando no intervenir en la organización y funcionamiento de dicha institución, o hacerlo conforme a los criterios indicados por la cúpula de ésta. Asimismo, esta orientación se concretó a través del predominio de una fórmula de policiamiento disuasivo y reactivo, centralmente asentado en el uso directo de la fuerza.

En este sentido, en el modelo tradicional la asimilación de la prevención con la disuasión se ha basado en la consideración de que una adecuada tarea preventiva requiere básicamente un número elevado de policías en la calle, llevando a cabo intervenciones reactivas y de choque basadas en el uso directo de la fuerza, más que intervenciones planificadas sobre la base de recolección y tratamiento analítico de información fidedigna sobre la dinámica delictiva.

La policía, desde esta perspectiva, tendría que garantizar una suerte de omnipresencia en todos los sectores de la jurisdicción territorial de su responsabilidad. Esto explica el permanente reclamo efectuado por los jefes policiales partidarios de este modelo preventivo en favor del aumento de la presencia de agentes en la calle, secundarizando toda modalidad de policiamiento centrado en el desarrollo de estrategias focalizadas en la prevención del delito y en la consecuente existencia de policías de proximidad o cercanía a la vecindad.

En nuestro país los abusos y extralimitaciones que han resultado de la utilización innece-

saria de la fuerza por parte de la policía en el cumplimiento de sus tareas preventivas o investigativas, en general, no han sido vividos como tales por parte de los agentes policiales que los protagonizaron y en numerosas situaciones tal utilización de la fuerza ha sido considerada por ellos como un medio legítimo y necesario, tanto para el desempeño de sus labores como para la obtención de resultados positivos de sus funciones.

Asimismo, en numerosas oportunidades, esta subcultura policial también ha estado incentivada y avalada por las propias autoridades políticas al proclamar sistemáticamente la necesidad de endurecer la actuación policial, ampliando sus márgenes de discrecionalidad operativa y validando comportamientos institucionales netamente represivos y compulsivos.

En este contexto de modelo tradicional de seguridad pública, la Institución Policial se fue estructurando sobre la base de ciertos patrones organizativos y funcionales que, como se dijo, aparecen desactualizados y anacrónicos frente a la compleja situación delictiva existente en nuestro país y en el mundo. En efecto, la problemática criminal en la Argentina ha puesto en evidencia las deficiencias institucionales existentes en su sistema de seguridad y muy particularmente de las instituciones policiales que lo componen.

En cuanto a las modalidades de conducción y mando policial, la dirección institucional del grueso de las fuerzas policiales de nuestro país es ejercida por una jefatura centralizada, generalmente organizada en un Estado Mayor de tipo castrense con estructura cerrada e hiperjerarquizada. Ello apuntaló aquella impronta delegativa, y en este marco ese Estado Mayor, lejos de funcionar como un órgano de trabajo y coordinación policial, encargado de la implementación de las políticas definidas por los gobiernos administrativos y en algunos casos ejercida por un ministro de Seguridad, se constituyó en un verdadero mando policial altamente autónomo del poder político.

En general dicha autonomía ha sido utilizada por las cúpulas policiales para reproducir las condiciones de delegación política y autogobierno policial existente y casi nunca para formular políticas institucionales tendientes a modernizar la Institución Policial y ponerla a tono con las necesidades de desarrollar labores eficientes de seguridad preventiva y de investigación criminal. En este sentido ha sido recurrente la incapacidad demos-

trada por la mayoría de las cúpulas policiales, partidarias del modelo tradicional, para formular un diagnóstico apropiado de la problemática delictiva y, de acuerdo con ello, establecer prioridades estratégicas, planificar lineamientos operativos y evaluar los resultados de los mismos, lo que redundó en el ejercicio deficiente de la dirección, coordinación y control real del conjunto del sistema policial.

Todo esto fue apuntalado por la existencia de una marcada macrocefalia institucional, dada por una alta concentración de personas y recursos humanos policiales en el marco de los estados mayores policiales, y la existencia de excesiva cantidad de direcciones y superintendencias generales abocadas a la administración y conducción operativa de los diferentes sectores o cuerpos policiales, emulando con ello viejas jefaturas militares.

Por su parte, en el modelo tradicional la legitimidad del Estado Mayor policial ha sido amplia y se ha asentado en la extendida subcultura policial militarista que ha considerado al titular de la misma –casi siempre el jefe de policía– como la autoridad institucional superior, en detrimento de la figura del ministro del ramo o del primer mandatario del gobierno administrativo, el Presidente de la Nación o el Gobernador, según el caso.

En lo relativo a las tareas policiales en materia de seguridad preventiva, la deficiencia de los sistemas policiales tradicionales ha respondido, en gran medida, a la existencia de una inadecuada estructura de personal policial. En la mayoría de las fuerzas policiales de nuestro país la estructura de personal y operativa del sistema dedicado a la seguridad preventiva ha sido portadora de una serie de factores estructurales que han cercenado su eficiencia e implicado tanto una distribución deficiente del personal policial dedicado a labores operativas entre los distintos cuerpos como la ocupación de una parte significativa de ese personal en el desempeño de tareas no policiales, como la custodia y traslado de detenidos, el desarrollo de labores administrativas o la custodia de funcionarios judiciales, políticos, legisladores y otros.

En su momento, el colapso de los sistemas penitenciarios ha hecho que una porción significativa de la población carcelaria fuese alojada en dependencias policiales muy por encima, inclusi-

ve, de los cupos admitidos de personas detenidas en sede policial.

Asimismo, otro factor estructural que ha cercenado la eficiencia del sistema de seguridad preventiva ha sido la existencia de un elevado número de dependencias policiales de carácter administrativo, destacamentos, seccionales o comisarías, según los casos, absorbiendo una enorme cantidad de recursos humanos en el desenvolvimiento de tareas no policiales.

En tono a estas deficiencias, ha sido habitual que en estas policías no exista un cuerpo doctrinal de inteligencia criminal y muy especialmente de una dependencia técnico-policial especializada en la producción de inteligencia criminal conducente a la prevención del delito. En las modalidades tradicionales de labor policial el núcleo principal de las tareas de inteligencia se restringió a la mera recolección de la información surgida de la investigación de hechos delictivos ya ocurridos, del aporte de informantes confidenciales o de ciertas operaciones encubiertas. Dicha información ha sido apenas útil para diagramar formas de policiamiento reactivas frente a hechos consumados, pero resultó limitada para planificar y desarrollar estrategias y tácticas policiales preventivas o investigativas eficaces y proactivas, dado que no hicieron posible identificar, analizar y describir patrones, series y modalidades específicas de delitos, como así tampoco vinculaciones y asociaciones criminales existentes en vista de reconocer tendencias y ocurrencias delictivas futuras, proveer líneas de prevención o de investigación posibles y la consecuente formulación y gestión de políticas de seguridad.

Un aspecto destacable del modelo tradicional del sistema policial de nuestro país ha sido el de la profesión policial. Históricamente las carreras profesionales, y en su marco la estructura del personal de las fuerzas policiales locales, se han conformado sobre la base de la existencia de un único agrupamiento policial, en cuyo marco las labores propias de la seguridad preventiva de la investigación criminal han sido ejercidas indistintamente por el conjunto del personal policial.

Ambas tareas han sido desempeñadas por el personal asignado como consecuencia de la distribución administrativa de los diferentes destinos policiales más que como resultado del desa-

rollo de una carrera policial especializada decida vocacionalmente por los efectivos y asentadas en criterios de profesionalización.

En este contexto, el grueso del personal policial ha desarrollado su carrera institucional cumpliendo indistintamente funciones y tareas de diversa índole, sustantivamente diferentes entre sí y altamente complejas en su configuración lo que, por cierto, ha vulnerado el principio de formación y capacitación especializada y permanente y ha impedido el establecimiento de criterios institucionales integrales de evaluación por desempeño.

Asimismo, ha existido una inadecuada organización funcional, en la que se encontraban diluidas las tareas y responsabilidades de cada función o cargo policial, lo que imposibilitó la determinación de perfiles profesionales o funcionales específicos de los agentes y funcionarios policiales a lo largo de su carrera institucional para el desempeño de tales funciones o la ocupación de dichos cargos.

Ahora bien, este conjunto de parámetros no solamente favoreció la conformación de un sistema policial ineficiente a la hora de registrar, prevenir y conjurar las nuevas manifestaciones delictivas en ciernes, sino que ha marcado la reproducción institucional de comportamientos, formas de organización y funcionamiento alejadas de la legalidad.

El presente proyecto de ley plantea potenciar todas las estructuras de la Policía en las áreas de prevención; de tal manera, un Consejo Asesor Permanente será conformado por los Departamentos Policiales de Coordinación Comunitaria, de Prevención Social de Drogas Peligrosas, de Patrulla Ambiental y de la Dirección General de Investigaciones Criminales. Debe rescatarse la figura del policía preventor en el sentido que el policía no está solamente para reprimir el delito sino también para disuadir y prevenir. En la medida en que desarrollemos esta idea de la policía preventiva, que en algunos lugares se llama "Policía Comunitaria", vamos a contribuir a este Plan de Prevención para que haya paz y convivencia social.

Por lo expresado podemos advertir una vez más que la seguridad no solamente significa más policías, más móviles, más informática, más comunicaciones; esto está perfecto para el combate efectivo contra las bandas organizadas, pero no hay forma de combatir el delito no estructural si no planteamos una política social integral.

Otro de los aspectos fundamentales de este proyecto se sustenta en la importancia que tiene la reingeniería de la Policía, esta institución civil armada cuya misión principal es el mantenimiento del orden y de la tranquilidad pública. En estos dos últimos años, fundamentalmente durante el 2004, el Ministerio de Seguridad llevó adelante un programa de consultas a la ciudadanía obteniendo importantes conclusiones, pudiendo observarse las carencias internas que había en la institución policial en cuanto a su administración y operatividad. Es decir, la Policía quedó presa de su propia estructura burocrática.

Con toda esta valiosa información y en base a los elementos reunidos se hizo un diagnóstico sobre el terreno que determinó la necesidad de plantear una reestructuración de la Policía en materia de seguridad, en Córdoba Capital como en el interior provincial, para que sea más operativa y sirva a la gente en una etapa como la que hoy se vive, tanto en el país como en nuestra Provincia. Es decir, señor presidente, el Poder Ejecutivo no elaboró este nuevo proyecto de ley de seguridad para luego trasladarla al terreno operativo, sino que, por el contrario, primero se percató de cuál era la realidad, cuál la verdadera situación de la seguridad de Córdoba Capital y el interior, y a partir de allí reformuló esta propuesta de proyecto de ley de seguridad, que tiende a establecer las relaciones entre los integrantes del Sistema Provincial de Seguridad Pública, las autoridades provinciales y la comunidad.

En tal sentido, la Policía de la Provincia de Córdoba contará con una organización centralizada en lo referido al área administrativa y descentralizada en lo operativo y funcional. La estructura orgánica contará con los niveles de jefatura, subjefatura, direcciones generales, subdirecciones generales, unidades regionales departamentales, departamentos, divisiones, comisarías, secciones y subcomisarías. La escala jerárquica del personal estará dividida en personal superior y personal subalterno y, a su vez, dentro de cada uno de estos tramos, en oficiales superiores, oficiales jefes, oficiales subalternos y suboficiales superiores, suboficiales subalternos y agentes, respectivamente. Existirán seis direcciones generales: de Tácticas Operativas, de Investigaciones Criminales, Departamentales Norte, Departamentales Sur, de Formación Profesional y de Lucha contra el Narcotráfico.



Esta reestructuración de la Policía no es una reforma más porque después de 133 años, que son los que tiene esta institución, es la primera vez en la historia que las direcciones de Logística y Administración, y de Recursos Humanos y Relaciones Laborales e Institucionales, van a ser conducidas por civiles, es decir que las tareas meramente administrativas serán desempeñadas por personal que no tendrá estado policial y, por lo tanto, no podrá ser convocado para ejercer funciones de policía de seguridad.

Con esta reorganización policial será la primera vez en la historia de la institución que la Dirección General de Administración baja a nivel de dirección y pasa a ser conducida por civiles, para hacer realidad aquello que la policía no está para prestar servicio de servicios sino que está para prestar servicio de seguridad, que es para lo que han sido formados en la Escuela General San Martín.

Asimismo, la Dirección de Personal, que históricamente fue ejercida por un oficial superior con rango de comisario general o comisario mayor, pasa a ser una dirección, la de Recursos Humanos y Relaciones Laborales e Institucionales, que será conducida por un civil y conformada también por civiles en su estructura, para que todos esos policías que están prestando funciones meramente administrativas pasen a cumplir aquellas para las cuales fueron profesionalmente formados. Y es justamente la Dirección de Formación Profesional la que tiene a su cargo las escuelas de formación y capacitación, como son la Escuela de Oficiales General San Martín y la Escuela Superior.

Desde este punto de vista debemos decir que es permanente el tema de la capacitación, a la cual indudablemente se le debe dar gran relevancia ya que hoy no sólo cuenta la cantidad de policías sino su calidad y formación, ya que la sociedad así lo exige y merece.

También se sistematizará toda la legislación existente, trasladando el peso legal a algunas reglamentaciones, decretos y resoluciones de años atrás.

Se plantea también la reingeniería de la institución, dividiendo a la Provincia en un departamento capital y en 25 unidades regionales departamentales, en coincidencia con el mapa políti-

co, debiéndose posteriormente modificar esta división, de acuerdo a las necesidades que el servicio de seguridad plantea, atendiendo a factores como territorio, población y actividad delictiva. Estas unidades regionales departamentales, lógicamente, tendrán a su cargo la ejecución de las operaciones propias de la fuerza policial, y los funcionarios responsables de cada una de ellas dispondrán sobre la oportunidad y conveniencia de la inversión de las asignaciones presupuestarias previamente determinadas.

Muchas veces me he preguntado si es necesaria una política específica para la seguridad, si vale la pena, si es conveniente y si este tema requiere que haya una ley general de seguridad, un ministerio de gobierno con ese nombre y toda una infraestructura específicamente destinada a hacer más segura la vida del ciudadano. Reconozco que más de una vez me ha surgido este interrogante porque, aunque parezca una verdad de Perogrullo, no podemos desconocer ni dejar de decir que el combate de la delincuencia nunca será cien por ciento eficaz si no se atacan las causas que llevan a las personas a delinquir y que si las políticas de seguridad se reducen solamente a la represión del delito, por perfecta, eficaz y humana que ésta resulte, la seguridad no se instalará entre nosotros y será insuficiente mientras subsistan los por qué del delito.

La sociedad verá saciada su sed de justicia si sus instituciones logran –logramos, debemos decir quienes integramos esas instituciones- detener, juzgar y sancionar a quienes delinquen, pero mientras no se ataquen los motivos socio económicos, que son el caldo de cultivo de la delincuencia, esa misma sociedad seguirá sintiéndose insegura.

El escritor uruguayo Eduardo Galeano dice: “En un mundo que prefiere la seguridad a la Justicia, hay cada vez más gente que aplaude el sacrificio de la Justicia en los altares de la seguridad”.

Me parece que debemos bregar por ambas virtudes, por los dos valores, sin sacrificar a uno en aras del otro; ambas: justicia y seguridad deben ser, en estos momentos, el norte hacia el cual caminar sin descuidar a ninguno en favor del otro. No podemos concebir la seguridad pública sin la justicia, y la primera justicia que se debe dar para alcanzar una sociedad segura es la justicia social.

De allí nace el interrogante que hace un rato expresé me asaltaba mientras estudiaba este proyecto de ley. Habiendo justicia social quizás hagan falta menos policías, menos guardias privados, menos alarmas en los autos y menos rejas en las casas. Por ello, hablando mal y pronto, quedaría renga o nacería mal parida una política en seguridad que no esté acompañada o no sea el complemento de políticas tendientes a lograr la justicia social, atacando entonces las causas de los delitos que generan la inseguridad en la gente.

En este sentido, nuestro Gobierno provincial ha implementado políticas tendientes a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, orientadas a la inclusión social, a paliar los efectos devastadores de una economía en ruinas como la que estalló en diciembre de 2001, a tratar de revertir los escandalosos niveles de desocupación y pobreza, de falta de oportunidades laborales y educacionales. Ha implementado políticas cuya intención es que todos los ciudadanos nos sintamos y formemos parte de la sociedad sin tener que atentar contra ella o sus otros integrantes; así se prioriza la educación, construyendo cientos de escuelas en lugares donde son necesarias, para que la distancia no sea motivo de deserción, manteniendo los muy buenos planes de otras administraciones, como el PAICOR; incentivando a nuestros muchachos a un mayor esfuerzo en sus estudios para acceder a nuevas becas de estímulo y de excelencia.

Si bien la creación de empleo no es una herramienta que dependa en mayor medida de las provincias, la Provincia de Córdoba no se cruzó de brazos ya que se han creado los planes Primer Paso, Volver al Trabajo y otros, en los cuales los beneficiarios deben estar activos, sentirse útiles y saber que la beca o el pago no es porque son pobres o están en una lista manejada con vaya a saber qué criterio clientelista o no, sino que tiene la forma de una contraprestación a su labor.

De la misma manera, hemos instituido la promoción industrial, la exención impositiva a los creadores de puestos de trabajo, la ayuda y los beneficios a las cooperativas de trabajo de empresas recuperadas. Para todos aquellos que por distintas razones no están insertos plenamente en el mundo laboral, se brinda la ayuda solidaria desde distintos planes de los respectivos ministerios.

No quiero hacer propaganda ni nada que se le parezca con esta incompleta enumeración de

políticas gubernamentales que buscan la inserción social, pero quiero señalar y recordar que, más allá de cualquier crítica u oposición sincera, firme, razonable y atendible que desde algún sector pueda realizarse, haciendo oídos sordos a la crítica mal intencionada y a la chicana política, no puede negarse que estamos realizando actos y políticas de gobierno tendientes a atemperar los efectos de un contexto socioeconómico que preocupa y desespera a todo un continente, situación de la que no escapa la Provincia de Córdoba.

No puede desconocerse que estamos en la búsqueda, con hechos concretos, de la justicia social, que es "conditio sine qua non", punto de arranque de la seguridad pública. Debemos reconocer que vivimos en un mundo injusto, donde la brecha entre los que todo lo tienen y los que nada tienen es muy grande. Somos parte de una sociedad donde el treinta por ciento de ella vive por debajo de la línea de pobreza, donde la desocupación alcanza índices obscenos, donde mucha gente se muere de enfermedades curables, y todo ello me tienta a caer en el lugar común de decir que mientras la cosa siga así no habrá política de seguridad que triunfe; la ley que estamos tratando será inútil, las regulaciones baladíes, las guardias policiales inocuas y la seguridad privada un placebo.

Fundado en hechos, tengo la seguridad – usando el término con otra acepción– de que los gobiernos nacional y provincial, así como una saludable corriente que recorre Latinoamérica, están en el camino correcto para paliar, modificar y revertir esta situación e imponer la justicia social, no con el objeto de prevenir ni atacar las causas del delito, aunque ello sea así, sino como dogma, como el fin y el objetivo de la comunidad organizada.

Ahora bien, mientras ello ocurra, mientras con marchas y contramarchas se ejecutan y empiezan a dar fruto las políticas sociales progresistas y de avanzada tendiente a la inclusión social con la justicia social, ¿puede la sociedad darse el lujo de esperar sentada, de soportar impávida la sensación de miedo que le produce el delito? ¿Tiene que tolerar la sociedad que sus miembros quizás menos favorecidos atenten contra ella? ¿Los integrantes de esta sociedad tienen la obligación de soportar el ataque de otros, sus pares? La respuesta es no, decididamente no. Y es aquí donde desaparece el interrogante que me planteé al principio sobre la necesidad o no de una política

específica de seguridad.

Sostengo que es necesaria una política de seguridad, es necesaria una ley que refleje esa política, es necesario que los ciudadanos a través de sus instituciones defiendan sus bienes, su honor, su vida y su tranquilidad. Paralelamente a las políticas de reversión de las desigualdades, es necesaria e imprescindible la política de prevención y represión del delito, de depuración constante y mejoramiento material y espiritual de las fuerzas encargadas de hacerlo, de juzgamiento célere e imparcial de quienes delinquen.

Si me permite, señor presidente, voy a volver a citar a Galeano: "Los técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo, capaces de traducir en dinero la vida y la muerte, calculan que América Latina pierde cada año 168 mil millones de dólares por el auge del delito. Estamos ganando el campeonato mundial del crimen, los homicidas latinoamericanos superan en 6 veces el promedio mundial".

No me importa cuánto cuesta, y hasta me parece inmoral ponerle precio al delito, porque al delito hay que combatirlo y tratar de prevenirlo sin importar su costo económico. Córdoba, provincia de este Continente subdesarrollado, tiene que combatir este flagelo y creo que no lo está haciendo mal, aunque lo hará mejor cuando contemos con la normativa precisa.

La política de seguridad del Gobierno provincial no se agota ni comienza con estas leyes que hoy tratamos. Este es un mojón, quizás el más importante, entre los hechos normativos que regulan y reflejan legislativamente la política de seguridad pública. Hemos dictado muchas normas que forman parte de esta política, todas ellas se engarzan y complementan. Algunas son importantes óbolos, granitos de arena que también contribuyen en la política de seguridad, como la limitación de la venta de uniformes e insignias policiales a través de una ley de autoría del bloque radical de la anterior Legislatura, o la prohibición de la venta de juguetes bélicos que puedan ser utilizados como verdaderos que, aunque a algunos les cauce gracia, basta darle una ojeada a las revistas jurídicas para saber la cantidad impresionante y el enorme problema doctrinario y jurisprudencial que implica el juzgamiento de delitos que se cometen utilizando estos juguetes.

Hay otras normas que son parte esencial de la política de seguridad del Estado, como la creación de un ministerio específico encargado exclusivamente de la seguridad, la creación de un foro para el delito llamado de "guantes blancos", el establecimiento del juicio por jurados para el juzgamiento de delitos aberrantes, la suscripción de diferentes convenios con la Nación y organismos internacionales tendientes a la adquisición de equipamiento y al fortalecimiento del servicio de seguridad, la fructífera instrucción a nuestros diputados nacionales para la desgravación de la adquisición de vehículos y pertrechos policiales.

Como no somos tercos ni obcecados, también debemos reconocer cuando erramos y tratar de corregir el error. Así es como, luego de sancionar la ley que oficializaba a todo el personal policial, y al darnos cuenta de la imposibilidad temporaria de llevar a la práctica esta buena intención, no nos avergonzamos en reconocerlo y en derogar esa ley. Tampoco nos tembló el pulso en dar marcha atrás en la creación de la Dirección de Asuntos Internos independiente de otras áreas de la policía en el año 2002. Pero más que una marcha atrás fue un importantísimo salto hacia adelante, ya que en julio de 2003 se suprimió esa dirección y se creó el Tribunal de Conducta Policial, algo inédito en la Argentina, y por el cual el poder civil, ajeno a cualquier sospecha de espíritu de cuerpo que trabee investigaciones por supuestos hechos de corrupción cometidos por policías, investiga y sanciona a quienes, encargados de cuidar a los ciudadanos, atentan contra ellos. Contra estas conductas hay tolerancia cero, y como integrante de ese cuerpo encargado de controlar la prestación regular del servicio policial, puedo decir que en estos escasos diez meses de existencia del Tribunal de Conducta Policial la experiencia ha sido provechosa, ya que hemos podido investigar, detectar y sancionar conductas reprochables de aquellos que, incumpliendo su deber -ínfima minoría, debemos decir- decepcionaron la confianza que la sociedad depositó en ellos, encargándoles su seguridad y tranquilidad.

Hoy, como complemento y parte integrante de ese conglomerado de normas que reflejan legislativamente la política de seguridad, venimos a tratar estas leyes que, como todos sabemos, nacieron como un solo proyecto enviado por el Eje-

cutivo en noviembre de 2004. Debo recordar que nuestro bloque tenía previsto tratarlo y aprobarlo con algunas modificaciones en diciembre del año pasado, pero a instancias de nuestros pares de la oposición sólo diferimos su tratamiento en el recinto pero no así en las comisiones donde siempre estuvo presente y fuera motivo de más de una discusión. También sugerimos y aceptamos algunas importantes modificaciones.

Por lo expresado, señor presidente, adelantando el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba al proyecto de ley 6567/E/04, de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba, solicito a mis pares de la oposición el acompañamiento en igual sentido.

Muchas gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra la señora legisladora Mussi.

**Sra. Mussi.**- Señor presidente, señores legisladores, lo que acaba de expresar con tanta claridad el presidente de la Comisión de Legislación General, legislador Luis Arias, constituye un concepto general de seguridad y específicamente lo concerniente a la refuncionalización de la Policía de la Provincia de Córdoba, pero este proyecto contempla también como integrante del sistema de seguridad, además de la Policía, a otra fuerza de seguridad, que es el Servicio Penitenciario Provincial, institución civil armada, centralizada en el Poder Ejecutivo en lo administrativo y descentralizada en lo funcional, cuya misión es la custodia de detenidos, procesados y condenados alojados en establecimientos carcelarios, procurando luego su adecuada reinserción social, complementando de tal manera la tarea de la Policía de la Provincia.

De igual forma que lo previsto para el personal policial, el personal de seguridad, los profesionales y técnicos que cumplan guardia o misiones similares en el ámbito del Servicio Penitenciario Provincial serán los únicos investidos de estado penitenciario. De tal manera, las tareas administrativas serán ejecutadas por personal designado por el Poder Ejecutivo, que por carecer de estado penitenciario no podrán desempeñar funciones de seguridad.

La estructura orgánica del Servicio Penitenciario contará con niveles de Jefatura, Subjefatura, las Direcciones Generales de Técnica Penitenciaria y Criminología, de Seguridad, de Tratamiento Penitenciario y Obras, de Formación Pro-

fesional y las Direcciones de Administración, de Asuntos Jurídicos y de Secretaría General.

Bajo la comandancia del subjefe del Servicio Penitenciario y con la integración de los titulares de todas las direcciones generales habrá de funcionar el Consejo Superior Penitenciario, organismo éste que proporcionará asesoramiento y asistencia a la Jefatura del Servicio con el firme propósito de lograr el mejor servicio posible y el mayor aprovechamiento de sus medios y recursos.

Las Direcciones Generales estarán a cargo de oficiales superiores, excepto la Dirección General de Trabajo Penitenciario y Obras, cuyo titular será designado por el Poder Ejecutivo provincial al igual que los titulares de todas las Direcciones.

La Dirección General de Técnica Penitenciaria y Criminológica tendrá a su cargo la organización del sistema de asistencia aplicable a todos los detenidos procesados, condenados como también la confección y actualización de los legajos criminológicos.

La Dirección General de Seguridad será la responsable de cumplir con esa premisa en el ámbito de la institución penitenciaria y colaborará con la Jefatura, tanto en la selección del personal como de asegurar su bienestar y el de su familia.

La Dirección General de Tratamiento Penitenciario y Obras será la encargada de organizar, orientar y fiscalizar la capacitación laboral de los internos, además de la ejecución de los estudios, proyectos, obras y tareas de mantenimiento en materia edilicia en el ámbito de los establecimientos carcelarios.

Por último, la Dirección General de Formación Profesional, como su nombre lo indica, será el área responsable de la capacitación y perfeccionamiento del personal penitenciario en la búsqueda constante de lograr una profesionalidad acorde a la política penitenciaria que se pretende instrumentar.

En cuanto a las Direcciones, podemos señalar sintéticamente que la de Administración, al igual que la de Asuntos Jurídicos, de Secretaría General y de Trabajo, Producción y Comercialización Penitenciaria, estarán a cargo de un director designado por el Poder Ejecutivo provincial, mientras que las Unidades Especiales Antimotín y de Establecimientos Penitenciarios serán conducidas por un oficial superior o jefe.

Dentro de esta política integral sobre la

problemática de seguridad, el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha tenido como objetivo primordial incorporar a la sociedad civil para la formulación e implementación de esta política.

Al proyecto original se le han efectuado modificaciones, atendiendo las inquietudes y sugerencias de quienes fueron invitados a exponer en el seno de la Comisión de Legislación General, como así también de legisladores de nuestro bloque y de otros bloques parlamentarios, orientadas a dejar plasmado en la ley un texto normativo que refleje acabadamente el espíritu que el mismo contiene.

De tal manera, se ha puesto especial énfasis en garantizar a los internos todos los derechos que les asisten en materia de educación, salud, asistencia espiritual, trabajo y respeto irrestricto a los derechos humanos.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Perdón, señora legisladora, la legisladora Mónica Gutiérrez está solicitando una intervención breve. ¿Se la concede?

**Sra. Mussi.**- Señor presidente: si me permite, es muy poco lo que me queda por informar, por eso, término y luego le otorga la palabra.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Continúe, señora legisladora.

**Sra. Mussi.**- Señor presidente: en el mismo sentido, el proyecto ya contemplaba la creación de una cuenta especial denominada “Trabajos Penitenciarios”, donde se derivarán todos los fondos que se generen como producto de la venta de bienes y servicios realizados por los propios internos y que luego se reinvertirán en la compra de equipamientos e insumos.

En general, las fuerzas de seguridad de nuestro país se conformaron sobre la base de una estructura orgánico funcional centralista. Esta estructura ha supuesto, por un lado, la unicidad funcional dada por la concentración en un mismo cuerpo de las funciones de seguridad preventiva y de investigación criminal bajo la conducción institucional y la dependencia orgánica de un único mando policial.

Por otro lado, implicó un centralismo organizacional basado en la existencia de una conducción policial centralizada y ejercida por un estado mayor de carácter castrense con estructura cerrada, hiperjerarquizada y militarizada.

Así, este tipo de estructura orgánico funcional sirvió como mecanismo de control político institucional interno por parte de la cúpula policial sobre el resto de las fuerzas. Dicho control no solamente abarcó el conjunto de las prácticas y decisiones ajustadas formalmente a las normas legales y reglamentarias que han regido la vida institucional de la organización policial sino también aquellas prácticas paralelas; esto es, aquellos usos o costumbres desarrollados al margen de las leyes y las normas.

Las prácticas policiales regulares, en la mayoría de las policías de nuestro país, estuvieron caracterizadas por un trazo autoconservativo; es decir, fueron centralmente orientadas a reproducir las condiciones de delegación gubernamental, de autogobierno policial mencionadas y a preservar la institución policial en forma autodefinida y autosustentada impidiendo el desarrollo de una labor eficiente.

En el año 2003, con la sanción de la Ley 9210, se introdujeron importantes cambios estructurales en los métodos de control y sanción de conductas de la fuerza policial para lograr el objetivo propuesto. Se impuso entonces el control de la policía por parte de la sociedad civil a través de un Tribunal de Conducta Policial constituido por representantes de los tres Poderes de la Provincia por cuanto la seguridad de las personas frente al delito debe ser abordada con la importancia que la misma reviste, interesándose no sólo por el delito cometido por ciudadanos comunes sino también el perpetrado por el personal policial, que contribuye aún más a la sensación de inseguridad.

La Policía de la Provincia ha visto así interrumpida una antigua tarea de controlarse y juzgarse a sí misma, lo que indudablemente -y así lo ha demostrado en los hechos el Tribunal de Conducta- caracteriza el correcto accionar de una institución democrática, afianzando la división de Poderes, pilar básico de nuestra Constitución.

Conforme surge de estudios criminológicos, una fuerza de seguridad que se investiga y juzgue a sí misma es proclive a crear en la sociedad una fuerte sensación de impunidad que queda despejada cuando la investigación y el juzgamiento de las conductas irregulares de los integrantes de esta institución es delegada a un órgano ajeno a la misma objetivamente capacitado para ello.

La integración del tribunal con representantes de los tres Poderes del Estado tiene la virtud de garantizar a la sociedad la investigación y juzgamiento de las irregularidades de modo transparente, respetándose acabadamente los derechos y garantías consagrados.

El Tribunal de Conducta Policial, en su corta existencia, ha demostrado acabadamente un funcionamiento eficaz y eficiente logrando con creces superar los objetivos propuestos, atendiendo la inspección y control interno de la prestación regular de los servicios policiales y la detección y sanción de las conductas reprochables.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Disculpe, señora legisladora.

Solicito a los legisladores y público que no hablen porque no podemos escuchar el informe de la legisladora.

Continúe con el uso de la palabra, señora legisladora.

**Sra. Mussi.**- Gracias, señor presidente.

Por toda esa experiencia recogida es que en esta nueva normativa se establece que la Ley provincial 9120 será de aplicación también al Servicio Penitenciario de Córdoba, debiendo entender el Tribunal de Conducta Policial en las causas en trámite y en las que se susciten a partir de la vigencia de la presente ley.

Por todo lo expresado, consideramos que resulta necesario e imprescindible que nuestra Provincia cuente con un adecuado y moderno marco jurídico legal que posibilite la modernización y adecuación de nuestras fuerzas de seguridad.

En el convencimiento de que mis pares sabrán dar la misma interpretación, solicito el acompañamiento de ellos tendiente a obtener la aprobación del presente proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra el señor legislador Eduardo Massa.

**Sr. Massa.**- Señor presidente...

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Perdón, señor legislador, la legisladora María Irene Fernández me está solicitando una interrupción. ¿Se la concede?

**Sr. Massa.**- Sí, señor presidente.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.

**Sra. Fernández.**- Señor presidente, simplemente no funcionaba mi sistema de audio.

Como miembro informante del bloque de Unión por Córdoba, quiero informar sobre la seguridad privada.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Vamos a continuar con el informe del bloque de la mayoría, como se acordó en Labor Parlamentaria.

Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.

**Sra. Fernández.**- Señor presidente, señores legisladores: en primer término debo hacer una aclaración con relación a la forma en que ha sido despachado este proyecto de ley. En efecto, durante el intenso tratamiento dado en la Comisión de Legislación General se advirtió la conveniencia de desdoblar en dos leyes la iniciativa originalmente remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de aplicar una adecuada técnica legislativa y lograr una mejor comprensión del plexo normativo.

De tal manera, en la primera parte a que se refería el presidente de la comisión, legislador Luis Arias, están contempladas las normas relacionadas con el sistema provincial de seguridad pública, mientras que en la segunda parte, constituyendo una ley independiente de la anterior, están establecidas las pautas legales que regulan el régimen de los servicios de prestación privada de seguridad, vigilancia e investigación.

Como ya se dijera, la seguridad representa uno de los pilares básicos de la convivencia y, por lo tanto, su garantía constituye una actividad esencial que hace a la existencia misma del Estado moderno. Sin embargo, progresivamente se ha ido extendiendo por todas las sociedades de nuestro entorno la realización de actividades de seguridad prestada por otras instancias sociales o agencias privadas, llegando a adquirir en las últimas décadas un auge hasta entonces desconocido. De aquí que países como Bélgica, Francia, el Reino Unido o Italia hayan aprobado recientemente leyes de nueva concepción o modificado sus anteriores legislaciones para integrar funcionalmente la seguridad privada en el monopolio de la seguridad que corresponde insoslayablemente al Estado.

En este marco se inscribe la presente ley, en su consideración de los servicios privados de seguridad como servicios complementarios y subordinados respecto a los de la seguridad pública. A partir de allí se establecen un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionan el ejercicio de las actividades de seguridad prestadas por particulares.

Con estas normas se busca articular las facultades que puedan tener los ciudadanos de crear o utilizar los servicios privados de seguridad con las razones profundas sobre las que se asienta el Servicio Público de la Seguridad.

El desarrollo de la seguridad privada que se ha producido en nuestra Provincia nos obliga a revisar el tratamiento legal para permitir un control eficaz del elevado número de empresas del sector, actuales prestadoras de seguridad, cuya existencia no puede ser cuestionada toda vez que se trata de un medio de prevención del delito y contribuye, consecuentemente, al mantenimiento de la seguridad pública.

Además, debe tenerse en cuenta que la presencia de vigilantes en controles de acceso y seguridad interior no suele tener una trascendencia externa que perjudique el quehacer de los cuerpos públicos de seguridad porque están llamados a actuar como elementos colaboradores en tareas que aquellos difícilmente podrían cubrir por sí solos.

El análisis del sector y de sus circunstancias pone de relieve que paralelamente a este crecimiento han aparecido numerosos problemas, tales como empresas clandestinas, falta de normas de homologación de productos, deficiente formación de vigiladores, irregularidades en su funcionamiento y comisión de numerosas infracciones, así como la ausencia sobrevenida de requisitos esenciales.

La proyección del Gobierno provincial sobre la prestación de servicios de seguridad por parte de empresas privadas y su personal se basa en el hecho de que los servicios que prestan forman parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado, de acuerdo a lo establecido en nuestra propia Constitución provincial, y en la misión fundamental de regular las actividades de todos los sectores involucrados en proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Ello significa que los organismos de seguridad del Estado han de estar permanentemente presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad, conociendo la información trascendente para la seguridad pública que en las mismas se genera y actuando con protagonismo indiscutible, siempre que tales acti-

vidades detecten el acaecimiento de hechos delictivos.

La defensa de la seguridad no puede ser ocasión de agresiones, coacciones, desconocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas o patrimoniales de otras personas. Esta es una de las razones que justifican la intensa intervención en la organización y desarrollo de las actividades de las empresas privadas de seguridad por parte de las esferas gubernamentales, que tienen la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y garantizar su seguridad.

Ante un panorama como el descripto se hacía necesario realizar un esfuerzo clarificador que, estudiando todos los hechos que giran en torno a la seguridad privada, permitiese hacer una diagnosis de su situación a partir de la cual se buscasen las soluciones adecuadas para ordenar un sector que sigue en alza y que, además, pretende acceder a nuevas áreas y actividades dentro de la seguridad.

Una de las críticas más abiertamente expresadas a la actual legislación en esta materia se refiere no tanto a la deficiencia en las normas como a su dispersión y a la falta de estructura unitaria y sistemática, lo que produce -claro está- lagunas o desfases propios de una legislación que envejece y que ha sido superada por la rápida evolución del sector.

Ello ha dado lugar al surgimiento de actividades prohibidas o no prohibidas estrictamente pero sí carentes de cobertura legal suficiente, cuyo tratamiento jurídico con rango legal necesario resulta sumamente urgente.

Además de los aspectos relativos a la formación profesional del personal de seguridad privada, se considera necesario incorporar al ordenamiento jurídico, primero a través de la ley y posteriormente por medio de la correspondiente reglamentación, las previsiones demandadas por la evolución que se ha operado en el sector de la seguridad privada.

La prestación del servicio sin armas, propio de los vigilantes de seguridad, constituye una modalidad que ha nacido al calor de los convenios laborales del sector, a través de la figura del denominado "guardia de seguridad", revelándose al propio tiempo que en la mayoría de los casos re-

sultaba innecesaria y desproporcionada la realización de tales actividades con armas, y sólo se autorizaba el uso de las mismas cuando lo exigían circunstancias concretas.

La existencia en nuestro país de los servicios de protección personal es una realidad que no podemos desconocer. Estos servicios son prestados, en la mayoría de los casos, por vigiladores al servicio de algunas empresas de seguridad inscriptas y, en otros casos, por personal propio de las entidades donde se cubre el servicio.

Respecto a la profesión de investigador privado, de ya larga tradición en general en los países occidentales, se detectaron múltiples problemas, entre los cuales los más importantes son los de insuficiencia de la normativa vigente y de determinación de controles o intervenciones de la administración pública, que planteaba también la alternativa de su incorporación a las disposiciones sobre seguridad privada. La incorporación de la regulación de los investigadores a una Ley de Seguridad Privada ha sido objeto de estudios y deliberaciones; sin embargo, hay que tomar en cuenta razones de urgencia en resolver los problemas normativos de la profesión, de los que devienen otros por derivación, también graves, como el de la falta total de habilitación y control.

Es también preciso y necesario, desde luego, la incorporación en el plexo normativo del régimen sancionador aplicable a la materia, precisamente porque dicho régimen se considera la clave para garantizar el cumplimiento de las finalidades del ordenamiento global de la seguridad privada a través de la tipificación de todas las infracciones posibles, la determinación de las sanciones a imponer y el diseño del procedimiento sancionador, con especificación de las autoridades competentes para aplicar las distintas sanciones. Para que la administración realice un control eficaz de las actividades que deben ser reguladas resulta fundamental abordar, a la hora de elaborar una nueva disposición, la parte sancionadora a efectos de garantizar adecuadamente la seguridad de personas y bienes.

En la mayoría de los países la seguridad privada va en aumento, y ello no significa que se deba solamente al exponencial incremento de la criminalidad. En Italia o Alemania, e incluso en Inglaterra, que en los últimos dos años mantienen un equilibrio en este aspecto, el comportamiento de la sociedad respecto de su seguridad va en

una proyección de inevitable crecimiento. En este aspecto, se remarca el crecimiento y desarrollo de toda la gama de actividades que integran, normativa y jurídicamente, la utilización de toda la armadura que integra esta compleja actividad.

La globalización empresarial ha constituido, sin dudas, un aspecto más que significativo, ya que empresas que debieron expandirse en diferentes áreas han tenido que desarrollarse contratando empresas locales de seguridad privada. El aumento en las transacciones y comunicaciones vía red, informaciones reservadas, nuevas áreas de trabajo o de lugares, cambio de culturas y de etnias en la contratación de personal, han motivado la necesidad de demandas cada vez mayores de seguridad privada.

En este punto es donde el Estado debe intervenir activamente, sancionando nuevas normas que puedan brindar una respuesta acorde a las necesidades de la comunidad. En este ámbito, estimamos que debemos mostrar la misma seriedad que otros países del mundo, sobre todo europeos, que han debido tomar nota de hechos puntuales sucedidos para comenzar a poner sobre la mesa las distintas posibilidades de regulación de la actividad.

A título de ejemplo podemos mencionar que en España los denominados "vigilantes jurados" custodian la propia Academia Militar de la ciudad de Zaragoza, constituyéndose en el primer centro castrense del país en contar con vigilancia privada, como un claro ejemplo de una política de externalización de servicios para que las fuerzas de seguridad pública puedan dedicarse a tareas operativas en vez de consumir su tiempo en interminables guardias de vigilancia, toda vez que la seguridad privada es prevención y no represión, constituyendo un elemento subsidiario a la labor de la policía.

En distintas regiones de Italia varias empresas de seguridad privada, en conjunto con el personal policial, llevaron a cabo pruebas de control y vigilancia, donde se utilizaron las centrales de alarmas y circuitos cerrados de televisión, con un éxito tan rotundo ante los resultados observados que fue contemplada la posibilidad de que guardias de seguridad privada puedan actuar en hospitales, cárceles, patrullamiento nocturno y otras cuestiones para que la ciudadanía posea mayor seguridad.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Perdón, señora



legisladora, le voy a solicitar a los legisladores y público presente que por favor guarden silencio para poder escuchar el informe de la legisladora.

Continúa en el uso de la palabra la legisladora Fernández.

**Sra. Fernández.-** Señor presidente, esta operación hecha realidad a principios del 2003 en la zona de Lombardía es denominada: “Mil ojos para Milán”. En la Lombardía de Milán y Torino y en sus principales ciudades cuentan con 82 institutos de seguridad privada, que poseen alrededor de 7 mil guardias y una facturación anual de aproximadamente 360 millones de dólares, mientras que el Estado Lombardo tiene 10 mil carabinieri, 9 mil agentes de seguridad pública y 8 mil vigilantes urbanos.

Esta preocupación se produce debido a los hechos acaecidos el 11 de setiembre del 2001 en los Estados Unidos. El Estado Lombardo tiene la necesidad de desconcentrar parte de su fuerza policial de las tareas administrativas o meramente sencillas, para volcarlas en otras tareas que seguramente serán más redituables para la seguridad.

En una ronda europea sobre la seguridad privada llevada a cabo en la ciudad de Milán se discutieron varios problemas en común, pero especialmente se analizaron dos aspectos: primero, el rol de las empresas de seguridad de vigilancia privada y, segundo, la necesidad de crear o reformar las legislaciones, que a juicio de muchos han quedado obsoletas.

En Alemania se sabe que en los últimos años la explosión de las compañías de seguridad ha sido un hecho por demás elocuente, por eso su actividad está regulada desde el año 1995, supervisando las tareas de vigilancia, custodia individual de personas jurídicas y de las personas delegadas a la conducción de la actividad. El mercado de la seguridad privada en ese país alcanza casi unos 3 mil millones de euros anuales, y los servicios de seguridad han crecido en los últimos 5 años un 34 por ciento. Existen unas 2.500 agencias de seguridad con alrededor de 140 mil empleados, una proporción similar a los Estados Unidos, es decir, un policía privado por cada 2 policías públicos.

En ciudades donde la rapiña y la alta criminalidad se hacen notorias, como Düsseldorf, las empresas de seguridad han llevado a cabo convenios con los policías locales, creando cuerpo

policial cívico-militar y patrullaje en conjunto. Esto trajo como beneficio la posibilidad de estabilizar la problemática, logrando que las fuerzas policiales puedan dedicarse a otros menesteres más importantes, descentralizando parcialmente su labor hacia el sector privado.

En Francia, las actividades de seguridad privada están reguladas desde junio de 1983; la misma abre un abanico en la seguridad privada, transporte de valores, seguridad de bienes muebles e inmuebles, prestaciones a las personas, instalación y mantenimiento de sistemas de alarmas, centrales de televigilancia, etcétera. Existen unas dos mil centrales operativas con dos millones de alarmas instaladas.

En síntesis, la actividad de la seguridad privada en el mundo va camino a llevar a cabo ciertas funciones que hasta hace no mucho tiempo estaban pensadas sólo para el sector público. Sobre todo, los estados están abocados a repensar una política de seguridad con instrumentos legislativos modernos, que provean la cobertura de una parte del riesgo de la inseguridad de parte de los privados y obviamente de los institutos o compañías de seguridad.

Si bien algunos estados han dejado de invertir en sus policías e incluso en materia de defensa, las compañías privadas de seguridad han llevado políticas contrarias; se han constituido en estructuras sólidas, con fuerte formación profesional, utilizando tecnologías de avanzada, como centrales de alarmas o circuitos cerrados de televisión y patrullaje para sus clientes, llevando a cabo políticas de prevención que hoy son esenciales para la vida ciudadana.

Con este proyecto de ley, en materia de prestadores privados de seguridad, el Poder Ejecutivo provincial intenta plasmar en una normativa de fondo las necesidades y requerimientos de la puesta en marcha de la Ley 8908 y su decreto reglamentario, poniendo de relieve los aspectos esenciales para su correcta operativización, aplicación y contralor de la actividad en materia de prestadores privados de seguridad.

Asimismo, se ha puesto el acento en cuestiones contravencionales que dieron lugar a disputas judiciales entre los prestadores y la Provincia, buscando de esta manera los correctivos que logren el equilibrio entre las necesidades del siste-

ma y las obligaciones propias del Estado en su carácter de titular de la seguridad pública.

Entre otras cuestiones, este proyecto prohíbe expresamente el uso de armas por parte de las agencias de seguridad privada, y se regula minuciosamente el procedimiento para la aplicación de sanciones ante el incumplimiento de la ley.

Por otra parte, en la nueva normativa se introduce el contralor de todo aquel personal dependiente de empresas ajenas a la actividad regulada por esta ley y que realiza tareas de seguridad dentro de su ámbito, para que cumpla con los requisitos exigidos por la presente para ser habilitados como vigiladores, contando con un supervisor a cargo, el cual deberá cumplir con las exigencias que establece esta ley para ser director responsable.

Todo ello tiende a armonizar la injerencia de la actividad privada en la seguridad, aunando criterios en cuanto a requisitos y unificando la normativa a fin de evitar el resquebrajamiento del sistema de seguridad privado, persiguiendo de esta manera el perfeccionamiento y la capacitación del personal que cumpla este tipo de tareas.

Podemos sintetizar...

**Sr. Presidente (Fortuna).**-Disculpe, señora legisladora. Pido a los legisladores y público que guarden silencio ya que resulta dificultoso escuchar a la oradora.

Por otra parte, señora legisladora Fernández, el señor legislador Nicolás le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

**Sra. Fernández.**- No, señor presidente, ya que estoy terminando mi exposición.

Decía que podemos sintetizar en tres los elementos básicos sobre los cuales se asienta este proyecto que hoy proponemos convertir en ley: la participación activa y comprometida de la ciudadanía; la reingeniería de la Policía de la Provincia de Córdoba y del Servicio Penitenciario Provincial; y el control civil y objetivo que comprende el Tribunal de Conducta Policial y el Régimen de Prestación Privada de Seguridad, Vigilancia e Investigación. La actuación de todas estas instituciones de seguridad se regirá por el principio de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, además de coordinarse en los términos que esta ley señala para impulsar decididamente un verdadero Sistema Provincial de Seguridad Pública.

Es trabajo de todos, Gobierno provincial, gobiernos municipales y organismos comunitarios

la construcción de un verdadero Estado de Derecho que no se limite al ámbito de la prevención del delito y de la seguridad pública. Es necesario comprometer la acción de los ciudadanos en la promoción de una cultura de la legalidad que abarque a todos los sectores a fin de superar los problemas ligados a la violación de las leyes.

Por las razones apuntadas y las que minuciosamente desplegarán los legisladores de mi bloque, solicito a mis pares el acompañamiento en la sanción del presente proyecto de ley.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.

**Sr. Nicolás.**- Señor presidente: quiero dejar bien claro, para que no se preste a malas interpretaciones porque en este tema tan importante para los cordobeses como es la Ley de Seguridad la mayoría de los bloques opositores pedimos más tiempo para tratarla y, que en este momento no tienen quórum propio -salvo que esté equivocado en el conteo-, por lo que le pediría -para no vernos tentados como nos pasó en diciembre próximo pasado- que llame a los legisladores del bloque oficialista, que son los que tienen la responsabilidad del quórum propio. Así, repito, no nos vemos tentados a retirarnos del recinto, dejándolos sin quórum, lo que luego traerá como consecuencia que se nos sancione con esa medida que no era costumbre aplicar en esta Legislatura, quitándonos parte de la dieta por hacer abandono del recinto.

Como moción le solicito que les diga a los legisladores del oficialismo que tengan la voluntad política de tratar este tema, ya que nosotros pedimos más tiempo para profundizarlo; caso contrario que se les aplique la sanción que se nos aplicó a nosotros, con excepción de los que estén con permiso.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Señor legislador, el tema del quórum lo define la Presidencia en el momento del voto. Usted con su bloque, puede hacer lo que considere más conveniente.

Tiene la palabra el señor legislador Massa.

**Sr. Nicolás** (fuera de micrófono).- No he concluido mi intervención, señor presidente

**Sr. Presidente (Fortuna).**- No es mi intención polemizar con usted, señor legislador.

Continúe con el uso de la palabra.

**Sr. Nicolás.**- Solicito que a aquellos que sin permiso abandonaron su banca se les aplique la misma sanción que nos aplicaron a nosotros. Lo

hago como moción de orden, por lo tanto, debe ponerla a consideración.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- No entiendo que lo que usted está proponiendo sea una moción de orden.

Tiene la palabra el señor legislador Massa.

**Sr. Nicolás** (fuera de micrófono).- Señor presidente, lo que hice fue una moción de orden.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Por Secretaría se va a dar lectura a las mociones de orden de acuerdo al Reglamento.

**Sr. Nicolás** (fuera de micrófono).- La moción la hice yo, no el Secretario.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

“**Clases. Art. 119.-** Es moción de orden toda proposición que tenga algunos de los siguientes objetos: 1) Que se levante la sesión; 2) Que se pase a cuarto intermedio; 3) Que se declare libre el debate; 4) Que se cierre el debate; 5) Que se pase al Orden del Día; 6) Que se trate una cuestión de privilegio; 7) Que se aplase la consideración de un asunto pendiente por tiempo determinado o indeterminado; 8) Que el asunto se envíe o vuelva a comisión; 9) Que la Cámara se constituya en comisión; 10) Que la Cámara se constituya en sesión permanente; 11) Que la Cámara se aparte de las prescripciones del Reglamento en punto relativo a la forma de discusión de los asuntos; 12) Que se omita, total o parcialmente, la discusión y votación en particular de un asunto.”

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra el señor legislador Massa.

**Sr. Massa.**- Gracias, señor presidente, a través del proyecto 6567/E/04 se propone a esta Legislatura unificar en un solo texto legal tres normas vigentes en la actualidad, bajo el nombre de Sistema Provincial de Seguridad.

La propuesta que viene del Poder Ejecutivo propone unificar la legislación que regula la Policía de la Provincia, el Servicio Penitenciario de Córdoba y el Programa de Seguridad Ciudadana en un sólo texto.

Dijo el legislador que fundó el voto por la mayoría que se trataba de una sistematización de aquellos textos. Discrepo con tal apreciación: en realidad, no se trata nada más que de la transposición de los textos legales actualmente vigentes a un nuevo texto único, con pequeñas e insignificantes variantes que no hacen al meollo de la cuestión ni son generadoras de políticas de seguridad.

Sin lugar a dudas, las políticas públicas de seguridad deben atender a las razones que motivan el delito. Largamente se han exployado en esta sesión los motivos u orígenes de las actividades delictuales, o de las actividades marginales violatorias de las reglas de convivencia, agrupándolas desde su origen en la marginación social hasta el delito organizado. No está en el criterio ni es la intención de este bloque opinar o debatir estas causas del delito, pero sí entendemos que si del sistema de seguridad provincial hablamos, si pretendemos regular políticas públicas de seguridad, debemos hacerlo atendiendo estos factores y no tan sólo procurar una reingeniería policial.

También se ha expuesto largamente que en tiempos pasados se hacía hincapié en que la seguridad se mejoraba con una corrección, reorganización o reingeniería de la institución policial. Sin embargo, hoy la propuesta no excede a una mera reingeniería institucional; se cambian algunas organizaciones y sistemas directrices pero se mantiene la sustancia y la esencia de lo que es la Ley 6701, dictada en la época del proceso militar; se mantiene un sistema anticuado -por más que hoy se pretenda demostrar como democratización la incorporación de civiles en la estructura policial- de división en cuadros superiores y de subordinados; no se atiende a la capacitación ni al perfeccionamiento del personal, ni se le reconocen estas condiciones ni su especialidad para los ascensos, los que quedan sujetos a dictámenes de juntas de calificación, añadiéndosele ahora la información del Tribunal de Conducta Policial.

Todas estas son reglas centrales, esenciales, que hacen a los aspectos casi filosóficos de la institución policial; si no se modifican no podemos hablar de cambios sustanciales que ameriten asentar expectativas de que a partir de ahora hay una nueva política de seguridad en la Provincia de Córdoba.

La Policía, como tantas otras instituciones de nuestra comunidad, ha sufrido las consecuencias de los desgobiernos y de los gobiernos autoritarios, no es justo ni correcto atribuirle o achacarle las consecuencias que luego se generaron en la comunidad. No es la Policía la que se fue transformando en fuente de delito, aunque algunos de sus componentes cayeran en él; pero no es la Policía ni sus componentes individuales los destina-

tarios de la insatisfacción social sino las políticas erráticas en la conducción de la institución que no acertaron con los objetivos planteados para que recibiera y ratificara día a día la confianza que merecían y necesitaban para ejercer su función.

Cuando las políticas públicas no se ejecutan a partir de consensos y capitalizando la experiencia, cuando no se modifican sustancialmente los aspectos que generan las consecuencias que hoy nos tocan sufrir y padecer, nos estamos equivocando y no estamos diseñando políticas públicas.

La Ley 6701 fue reemplazada en el año 2000 por la 8889, la que durante cuatro años jamás entró en vigencia, es decir, nunca fue reglamentada. Pues bien, la Ley 6701 es la que hoy se nos propone como el gran cambio en este mecanismo, pero la realidad actual de la institución policial y de la seguridad es el fruto de la aplicación de ese texto legal. Entonces, mal podemos suponer que a partir de ese texto en esta nueva ley podamos lograr un cambio sustancial en la seguridad pública.

Lo mismo ocurre cuando hablamos del Servicio Penitenciario de Córdoba. Si no hacemos hincapié en que aquellos funcionarios que exteriorizan vocación y voluntad para trabajar en ese marco y contribuir a la reinserción social y reeducar a aquellos que cayeron en el delito, si no potenciamos su preparación, actualización y capacitación, por más que aumentemos el número de efectivos o cambiemos algunos aspectos estructurales, nada va a variar. El error nace cuando se incorpora al personal del Servicio Penitenciario de Córdoba como parte de la fuerza civil armada. En realidad, estamos hablando de las personas y funcionarios responsables de procurar la reinserción, reeducación y readaptación de quienes cayeron en el delito, por lo que este marco inicial errado lleva a trasladar el Servicio Penitenciario del Ministerio de Justicia hacia el Ministerio de Seguridad; a establecer rangos o estamentos de personal penitenciario en contraposición del administrativo, olvidando el objetivo central de esta institución.

La Seguridad Ciudadana es un programa generado hace muchos años -1995, si mal no recuerdo-; la Ley es la 8574, que también durante cuatro años permaneció sin reglamentar, es decir, no fue aplicada. En el '99 -como bien se afirmara en esta sala- se dictó el Decreto 1915, con el cual comenzó a aplicarse embrionariamente, tratando

de vencer las circunstancias adversas y largos años de desestimulación de la participación ciudadana. Lo digo con la experiencia de haber estado en el marco de esas responsabilidades durante dos años. La participación ciudadana, nadie puede negarlo, es una condición esencial para la vigencia de la seguridad.

Sin embargo, no sólo no se han estimulado sino que se han desarticulado y desestimado todos los intentos de participación, reduciéndolos a la mera contribución económica para el sostenimiento de ciertos elementos, efectos y recursos materiales necesarios para el funcionamiento policial, cuyo deber de provisión correspondía al Estado provincial. Yo he vivido y he experimentado la adhesión voluntaria de la ciudadanía en el aporte de la seguridad, creo que no podemos tomar exclusivamente como ejemplo las juntas rurales, a partir del aprovisionamiento de algunas camionetas cuatro por cuatro para facilitar el control de los caminos rurales.

La ciudadanía aspira a participar en el diseño de las estrategias y que su opinión y su propuesta sean respetadas. Esto significa un largo proceso de capacitación y reconocimiento mutuo y recíproco entre el funcionario policial y el ciudadano para que entre ambos logren el ideal que significa alcanzar niveles de seguridad aceptables para una convivencia digna.

En materia de seguridad, estos textos legales existen, están vigentes. La Ley 8574 permite conformar las organizaciones vecinales llamadas Juntas de Participación.

Los objetivos, los mecanismos y la organización de la estructura policial de la Ley 6701 no ha sufrido modificaciones sustanciales en este proceso que hoy se nos ofrece como la síntesis de este Sistema Provincial de Seguridad. Quizás alguna dirección general desaparezca, otra pase a cambiar su nombre, quizás en lugar de precintos haya seccionales, pero esto no hace a la esencia ni al aspecto central de la potenciación ni recuperación de la institución policial.

Entiendo que la profesionalización de sus componentes y un sistema permanente, regular, estable y sostenido en el tiempo, donde la capacitación, la actualización, el entrenamiento y la especialización sean las bases sobre las cuales se promuevan los nuevos oficiales y asignen las nuevas responsabilidades, implica reconocerles a los funcionarios policiales la dignidad que merecen.

Es decir, el reconocimiento a su dedicación, capacitación, especialización, además de salarios adecuados, promoción por concurso respecto a la carrera policial, no dejándolos sujetos a dictámenes que pueden estar teñidos de la subjetividad que significa el ejercicio de liderazgo dentro de la institución.

Señor presidente: es evidente que subsisten estos aspectos dentro del nuevo texto que se propone; veamos si no el artículo 32, inciso f), que atribuye al jefe de policía “Proponer al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, las designaciones, ascensos, retiros y bajas de personal...”.

Esta ley –que según se dice trata de un sistema provincial de seguridad novísimo y va a ser la cimiento o punto de partida de una política de seguridad- se refiere exclusivamente a una reforma policial. Lo denuncia claramente el artículo 3º, inciso 4), cuando establece que la seguridad pública tiene por objeto “Establecer los mecanismos de coordinación y colaboración para la investigación y conjuración temprana de contravenciones y delitos, la persecución y sanción de sus autores -en el caso de las primeras-...” y esta sanción corresponde exclusivamente a la autoridad policial. Es decir, allí se evidencia claramente que se está pensando en la institución policial antes que en un sistema integrado de seguridad provincial.

También se evidencia cuando se afirma que los únicos integrantes del sistema provincial lo constituyen la Policía y el Servicio Penitenciario y deja como auxiliar de ese mismo sistema –vaya contradicción con la participación ciudadana que se proclama- la Defensa Civil, los Cuerpos de Bomberos Voluntarios y Rescate, las Juntas de Participación Ciudadana, la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, cuya ley prevé la generación de un consejo con debida intervención de municipios en toda la Provincia, donde aportarán sus experiencias, sus conocimientos, su apreciación de la realidad y del entorno geográfico donde ejercen su función para generar las reglas de la prevención de accidentes de tránsito. Lo mismo sucede con las dependencias de Seguridad Náutica, además del control de las prestadoras privadas de seguridad.

En suma, señor presidente, el proyecto falla por base y queda implícitamente reconocido en

la fundamentación de la mayoría, cuando se pone énfasis en que a partir de ahora existirá una política de seguridad, que con esto están dadas las condiciones para generarla, y que ésta es la base para que pueda desarrollarse esa política de seguridad. Este es el verdadero reconocimiento de que actualmente, tal como varias veces lo hemos denunciado en este recinto, no existen políticas de seguridad; porque si hasta hoy tenemos estos textos legales en condiciones de ser aplicados, y no ejecutan estas políticas de seguridad que proclaman, ¿qué nos garantiza que a partir de mañana, cambiando de número esta ley y reunificándola en un solo texto, vamos a tener una política de seguridad?

Hace falta la decisión política de ejecutar esas declamadas políticas de seguridad. Con eso comenzaremos realmente a caminar con rumbo cierto y previsible, que acordaría a esta Provincia mayores y mejores resultados en materia de seguridad.

Evidentemente, señor presidente, nuestra discrepancia con el texto legal propuesto es con respecto a la filosofía central de la propuesta que hoy se nos trae a debate, más allá de artículos e incisos. No creemos, no aceptamos ni nos convence que democratización sea la incorporación de civiles, que participación en el control ciudadano sea el Tribunal de Conducta Policial y que esta ley vaya a evitar la inteligencia delictual. Se están transpolando los mismos artículos que permiten generar ciertos seguimientos y registros, nada más que a los fines de la acumulación de información que luego va a ser utilizada mecánicamente a la hora de esclarecer delitos en lugar de seguir la ilación de pruebas para llegar lógicamente a la individualización del autor del supuesto delito.

Los cambios propuestos en la Institución Policial y en el Servicio Penitenciario, que se destacan como uno de los aspectos centrales que justifican esta decisión, o mejor dicho que avalan este proyecto, no alcanzan a nuestro juicio para generar, a partir de ellos, una política criminal.

Entonces, si no existe un verdadero y sustancial cambio, si no están dadas las condiciones para la verdadera inserción activa y comprometida de la ciudadanía en el sistema de seguridad, y si el control civil se va a transformar en un reconoci-

miento o en una legalización del Tribunal de Conducta Policial a partir de la atribución también de la posibilidad de juzgar al personal del Servicio Penitenciario, no estamos en condiciones de convalidar esta propuesta, porque entendemos que no va a dar resultado y que constituiría nada más que una promesa incumplible hacia la ciudadanía de la Provincia de Córdoba.

Por ello es que no vamos a acompañarlos en este proyecto y adelanto el voto negativo de nuestro bloque.

Nada más. Muchas gracias.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.

**Sr. Fonseca.**- Señor presidente, aquí se dijo que la situación económica ayudó a que la criminalidad violenta y organizada aumentara, según una estadística de la CEPAL. Se dijo también que la criminalización urbana aumentó en territorios aislados y olvidados y que las villas miseria son nuevas favelas que conforman el mapa delincuencial, siendo éste el nicho para la droga y el narcotráfico; olvidando que a "los carteles" los hacen los delincuentes de guantes blancos y no los que viven en las villas, —agrego yo. Se ha expresado que muchos hablan de seguridad y no conocen el tema, creyendo que con más policías y más unidades se soluciona el problema. Pues bien, ésta ha sido la política de este Gobierno: más unidades, más policías para combatir la delincuencia. Pero luego, contradictoriamente, se habló sobre la relación que había entre móviles y ciudadanos.

Se habló de planear y potenciar todas las tareas de prevención; entre ellas, destacar el papel del policía preventor. Pero he aquí que quieren civiles en la Fuerza en desmedro de la capacidad, la intelectualidad, la profesionalidad, la honradez y la honestidad de muchos funcionarios policiales de carrera y de otros que no han hecho carrera pero que son verdaderamente honestos, porque no todos en la Policía son corruptos. Aunque el General decía: "el pescado se pudre por la cabeza", no porque la cabeza está podrida el resto del pescado también tiene que estarlo.

También se ha dicho que no podemos concebir la seguridad pública sin justicia y que si hay justicia social tendría que haber menos policías, delincuentes y armas. Si el ideario peronista no hubiese sido destruido durante los últimos once años —muchos de los que aquí están en el oficialismo aplaudían los beneficios frívolos—; si no se

hubieran comido 4 mil millones de dólares en sobresueldos; si no existiera la injusticia de los delincuentes devenidos en políticos, que ahora están por presentarse en Tribunales, tal vez habría una política de justicia social para los pobres.

Además se dijo que el policiamiento comunitario es una necesidad para transformar la política de gobierno y de Estado, y si no se hace y la comunidad no las entiende, tiende a fracasar. La política de Estado y de gobierno no fracasa porque la comunidad no la entienda, señor presidente, sino cuando el gobierno responsable del Estado es incapaz, incompetente y quiere responsabilizar a la sociedad por la falta de entendimiento. Esto es un infantilismo o un rasgo autoritario, y el autoritarismo es una práctica endémica del Poder que la criminología ha desdenado especialmente para aquellos que no tienen el poder, al igual que la expresión "seguridad", que en Argentina estaba vinculada a la aplicación de la ley y orden para la contención de la protesta social, o a la seguridad nacional en las épocas de la dictadura militar, a la que se refería mi compañero Eduardo Massa.

Señor presidente: fue clara la exposición de la miembro de la Comisión Intersectorial, de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y de la cátedra de Criminología cuando afirmó —ante la teatralización que llevó a cabo la Comisión de Legislación General para debatir la ley un día antes, ridícula e irrisible, lo que deteriora más la imagen de esta Legislatura, desprestigiada por la sociedad— lo siguiente: "la primer disidencia se plantea a nivel legal e ideológico". El titular de esa comisión dijo que tenía una gran confusión mental porque la doctora Luque sentenció que el marco teórico al que se refería el presidente de la Comisión de Legislación General no ha sido desvirtuado por las modificaciones que se han introducido últimamente.

El concepto de "seguridad humana" con el que trabaja la ONU hace referencia a las eficiencias de las políticas públicas, que son en definitiva las que reducirían a largo plazo la conflictividad social porque la seguridad, señor presidente, no significa necesariamente la no posibilidad de las víctimas de la inseguridad de tener empleo, educación y trabajo; es decir, aquí se ha pretendido criminalizar la pobreza para justificar la sanción de esta ley. O sea, buscar delincuentes, violencia escolar, pobres, villas, "fabelas", etcétera.

El otro es un concepto de seguridad prove-

niente de ideologías que tienen que ver con la seguridad nacional, sobre la que nuestro país ha tenido una vasta experiencia. Esta ley toma en tratamiento tres ejes: participación ciudadana, Policía y Servicio Penitenciario y, además, seguridad privada; ejes estos con contradicciones flagrantes, lo que nos llevaría a decir que el concepto que se toma no es el de "seguridad humana" de la ONU sino es de "seguridad nacional", como decía el legislador Eduardo Massa.

Que se entienda bien, señor presidente: nuestra crítica no impone estar, en última instancia, en contra de una ley de seguridad; las leyes existen, lo que hay que hacer es aplicarlas o modificar las que vinieron de la época de la dictadura, pero a través de una política de Estado, de una política de Gobierno -como aquí se dijo-, porque si no después se le traslada la responsabilidad a la sociedad, cuando en realidad es del Gobierno.

Estamos a favor de un documento legítimo, que no huela al atrevimiento de vulnerar la democracia con instrumentos de tufillo dictatorial o concentrador de poder, que finalmente impone una verticalidad para que la autocracia reemplace a la democracia. El autoritarismo, señor presidente, se sostiene muchas veces en una propuesta de seguridad y sirve para encubrir la incapacidad; y cuando ésta surge y se extiende en el descontrol se apela a la política represiva, a una ley represiva como argumento que suple la torpeza, como con este desmañado argumento de participación ciudadana, sin soporte estructural de capacitación; o, por caso, se determina que esa participación dependa del Ministerio del cual depende la Policía, que es en realidad con la que la sociedad, o parte de esa Policía, mantiene un conflicto de credibilidad por su accionar. Es decir, se trata de una patraña, mal disfrazada, de genuina participación de la sociedad, cuando ésta, como se sabe, necesita -ya lo decía el legislador Massa- de leyes que se cumplan, con funcionarios honestos que las apliquen. Y esto es lo que falla, señor presidente, lo cual ha demostrado, hasta ahora, la incompetencia el Gobierno de la Provincia de Córdoba y, por ende, del ministro de Seguridad y de la Policía.

Si leemos los artículos 2º y 3º del proyecto de ley -algo expresó el legislador Massa en tal sentido- nos damos cuenta de que recién ahora este Gobierno de Córdoba ha descubierto cuál es

su responsabilidad sobre el delito y el resguardo de las libertades constitucionales de los ciudadanos, más allá de que haya existido una ley con similares características, que por los resultados tenía poco valor instrumental y era nula en lo conceptual si nos atenemos a los niveles delictivos. Pero si vamos a los artículos 4º y 5º vemos con preocupación que los mismos organismos que han demostrado incapacidad para preservar esos derechos serán los encargados de controlarlo. Entonces, ¿de qué participación ciudadana hablamos, señor presidente? ¿O se trata vincular la desesperación de la sociedad a un instrumento jurídico que la va a terminar convirtiendo en vigilante de su vecino, enfrentando odios y discriminaciones étnicas, religiosas, sexuales, patrimoniales, etcétera? Con estos argumentos van a convertir a la participación ciudadana en una verdadera caza de brujas entre vecinos.

La doctora Luque, de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, fue clara en ese sentido al expresar: "Consideramos que a esto -la participación ciudadana- hay que definirlo para que no termine en vigilantismo o para que no ocurra lo que en Venezuela, donde la participación ciudadana terminó con el linchamiento de vecinos".

Lo que aquí tiene que quedar en claro, señor presidente, es que el concepto de seguridad humana de la ONU es contrario al concepto de seguridad nacional, en el sentido de que en primer lugar la participación ciudadana debería ser devolver el conflicto a la gente para que ésta decida, y no considerar a los vecinos como instrumento de los brazos de la represión del Estado o la policía, que ante la imposibilidad de reprimir va a armar a los ciudadanos para que sean ellos los que ejecuten los actos represivos. ¿Dónde estamos, señor presidente, en Córdoba o en el Mississippi del Ku Klux Klan? Si nos atenemos a la orientación del Manhattan Institute y al concepto sui generis de defensa de los derechos civiles del señor Carlos Medina, teniendo en cuenta su procedencia, un país gobernado por un fascista descerebrado como George Bush, cuyo hijo quiere armar a la población al estilo Far West, ¿por qué no pensar que aquí sucederá lo mismo?, que el comisario departamental se convertirá en un sheriff, o que el artículo 23, inciso i), donde la policía colaborará con

los organismos de minoridad, podría estar sugiriendo por el señor Carlos Medina, que calificó a los limpia vidrios como "terroristas urbanos".

Si esto fuera así entonces deberíamos estar debatiendo el concepto de seguridad humana y seguridad nacional, porque una cosa es cómo lo explica la Comisión de Derechos Humanos: "una facultad sujeta a control" y otra "un derecho que puede ser ejercido arbitrariamente". Es decir, no le pertenece al Estado sino que se concede para que controle, cuide o reglamente.

Ahora hablemos de la otra pata, del otro integrante del sistema provincial de seguridad pública, la Policía de la Provincia. ¿Qué podemos decir de ella, señor presidente? ¿Qué podemos decir de algunos miembros de la Policía de la Provincia de Córdoba sospechada por la propia ciudadanía que desconfía de su capacidad para brindarle seguridad? ¿Sabe por qué? Porque la gente no confía en esta policía o en alguna policía. Como dice el miembro de CONINAGRO: "La Policía está jaqueada en su accionar, cuando no limitada, además y en ocasiones espantan a los que están en falta o avisan en un operativo con la sirena para evitar enfrentamientos que la comprometan". Repito, la gente no confía porque parte de la policía mira hacia otro lado, especialmente desde el alto mando, cuando el torbellino de cambios secuenciales —del que se habló aquí con respecto a la socioeconomía—, atropellaba la incapacidad de un jefe de policía, que es el prototipo de la incompetencia y la necesidad.

Ayer expresaron todo esto, en una movilización histórica, los ex miembros de la Fuerza que denostaron la actitud del jefe de Policía, al cual tuvo que salir a defender —en otro de los "bloopers" a los que nos tiene acostumbrados— el señor ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba.

A propósito de este tema, se dijo aquí que se respondían todos los pedidos de informes. Siempre el Ministerio ha tenido la responsabilidad de contestar los pedidos de informes con prontitud, pero nunca le vimos la cara al ministro, a pesar de que lo citamos varias veces. Es un ministro "missing", desaparecido.

¿Saben por qué la sociedad no confía en su Policía? Porque no se puede hacer responsable de parte de sus integrantes, es una fuerza que se descontrola con facilidad, que pierde el equilibrio. La pregunta es: ¿por qué sigue en su cargo su jefe cuando por mucho menos se han echado a

miembros de la fuerza, algunos de los cuales se encuentran en situación pasiva, originando juicios contra la Provincia?

Esto sucede porque la Policía de la Provincia y el Ministerio de la Seguridad han estado ocupados en atender al delito como parte funcional de un negocio que tiene a la prostitución, la droga, los desarmaderos y la venta de armas como ejes nomencladores, si nos atenemos a las numerosas y comprometedoras denuncias que vinculan a miembros de la repartición.

No hay que seguir seleccionando falencias, irregularidades y corrupción, ni enumerando hechos de algunos policías de gatillo fácil, cuyo colofón fue el asesinato del joven Castro luego del partido de Talleres, que vincula a un miembro de la fuerza, al expresar: "Jefe, me mandé un macanón".

¿Esta es la Policía que nos va a brindar seguridad? ¿De qué orden y tranquilidad pública se habla si se mantienen en la Provincia las pústulas que revientan; por caso, en Río Segundo, donde la droga y la prostitución tenían un comisario que luego fue trasladado a Villa María, un lugar donde la droga y la prostitución no pueden ser combatidos porque, se dice, son amparadas por la misma Policía?

¿De qué protección física de personas, derechos y bienes se habla si en muchos casos la Policía es sospechada de vulnerarlos? ¿De qué prevención y disuasión hablamos si la represión es una constante y siempre lo fue en esta Policía?

¿De qué mecanismo de coordinación para investigar hablan cuando se les escapó un preso buscado por todo el país porque no supieron detectar sus antecedentes cuando lo detuvieron?

¿De qué Dirección para la Reinserción hablan si en esta Legislatura hay un proyecto de ley para mejorar la rehabilitación del liberado, que duerme desde hace un año y hace unos días tuvieron que suspender un seminario sobre este tema luego de que un periodista de "La Voz del Interior", Sergio Carreras, diera a conocer el estado en que se encuentra el Patronato del Liberado y los fondos con que cuenta?

No nos digan que con esta ley todo esto se va a solucionar, porque tuvieron instrumentos parecidos y no los supieron aplicar; no será con esta novedad, extraída de algún compendio de la dictadura militar —como decía mi colega Massa—, que lo van a lograr.



Hablemos de la otra pata. ¿Qué podemos decir del Servicio Penitenciario Provincial?, verdadero desastre organizativo, con falta de idoneidad para controlar el incremento delictivo, que no supo prever el Gobierno de la Provincia. Este Servicio Penitenciario tiene que controlar y dar seguridad a los internos.

¿De qué Servicio Penitenciario hablamos? ¿Del que hablaba “La Voz del Interior” el día de ayer acerca de la denuncia de familiares de presos sobre golpizas, torturas, vejaciones, sexo oral y robo en una auténtica venganza?

¿De qué Servicio Penitenciario hablamos, del que sus integrantes son excelentes tiradores al blanco humano, previa orden “priebkeniana”, con responsabilidad intelectual incluida de quien quiso emular a Erich Priebke cuando eliminó a más de trescientos italianos con tiros en la nuca en las Fosas Adriáticas? ¿De qué Servicio Penitenciario hablamos, del que está sospechado de pasar drogas y venderlas dentro de la cárcel?

Debemos preguntarnos para qué sirve esta ley de seguridad con esta Policía, este Servicio Penitenciario, este jefe de Policía, este ministro de Seguridad y este Gobernador.

¿Para qué sirve una ley de seguridad si la dinámica de la agresividad de la fuerza es incontrolable y se constituye en un problema político que no ha podido resolver el poder político que gobierna la provincia de Córdoba? ¿Para qué sirve una ley de seguridad cuando la opción es tener más presos con menos precio en cárceles que devienen en campos de concentración donde pasa de todo y donde la prisión se ha convertido en una pena de muerte indiscriminada y por azar?

¿Para qué sirve una ley de seguridad si la sociedad tiene la sospecha que detrás de toda ley funciona la UTE Gerencial de Unidad de Negocios de la provincia de Córdoba, que es muy bien administrada desde arriba? ¿Para qué sirve una ley de seguridad si después se ocultan datos para hacerle creer algo a la prensa y a la sociedad que percibe otra cosa?

Quieren hacernos creer que disminuyó el delito en Córdoba y obviamente la sociedad sabe que no es así. Una ley de seguridad –y ratifico lo que decía mi colega Eduardo Massa- responde a una política de Estado, y de esto adolece en tal sentido. El hecho de llevar adelante una ley y pre-

tender que esa ley solucione las grietas que parten de la inopia política para aplicar una verdadera estrategia preventiva y de contención, nos parece al menos inviable, porque quienes la aplican son los mismos que adolecieron de incapacidad y de ingenio para llevar adelante las otras.

¿Por qué con leyes cambiarían las actitudes si el problema fundamental es quiénes las deben aplicar? Al sancionar esta ley de seguridad –que así será porque hay mayoría automática- se está convalidando una conducta gregaria que traerá serios perjuicios de cara al futuro. No queremos ser responsables de eso, por lo tanto, ratifico el rechazo a la misma.

Muchas gracias.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra la señora legisladora Bianciotti.

**Sra. Bianciotti.**- Señor presidente, hoy es la gran función. Esto diríamos si estuviésemos en un circo pero estamos en la Legislatura de la Provincia, razón por la cual diremos que hoy, una vez más, vamos a ser testigos directos –pero no cómplices- de una nueva maniobra de la mayoría que pretende hacerle creer a la ciudadanía de Córdoba que ésta es una ley que va a regular la seguridad pública de la provincia.

Conviene decir desde ya que este proyecto, que el oficialismo bautizó con el nombre de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba, no es una ley que diseñe una política de Estado, mucho menos una política seria, eficaz, responsable y que atienda integralmente la problemática de una de las prioridades más sensibles y urgentes de la población.

Este proyecto de ley es una especie de digesto o cuasi digesto que compila instrumentos legales ya vigentes en la Provincia, intentando ordenarlos en un texto único con leyes, a saber: Orgánica de la Policía de la Provincia de Córdoba, Ley 6701; Orgánica del Servicio Penitenciario, Ley 8816; de Creación del Programa de Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana, Ley 8574; y Ley de Régimen de los Servicios de Prestación Privada de Seguridad, Vigilancia e Investigación, leyes todas éstas maquilladas, cortadas, pegadas, algunas derogadas en el despacho en tratamiento.

Para certificar lo que acabo de expresar quizás valga la pena hacer una pequeña reseña histórica -no como hicieron los miembros infor-

mantes de la mayoría- de este expediente 6567, enviado por el Poder Ejecutivo Provincial con fecha 17 de noviembre de 2004. Desde esa fecha han pasado aproximadamente seis meses, y las únicas oportunidades que hemos tenido -recalco que digo "oportunidades" y no "tiempo"- de discusión, de debate, de poder escuchar a gente relacionada con la materia en la Comisión de Legislación General, ha sido con un grupo de ex policías y en el día de ayer con miembros del Consejo Económico Social y de la Comisión Intersectorial para la Observación y el Seguimiento de la Situación Carcelaria. Nada más que esto. Y que quede claro que estas tres instituciones no fueron especialmente invitadas por la comisión sino que ellas pidieron ser invitadas, lo que es totalmente distinto. Ni que hablar -como ya lo decía un legislador del Partido Nuevo- de que haya venido a informar el proyecto del Gobierno el propio Ministro de Seguridad. Eso ni soñarlo.

Llama la atención que quien vino a informarnos o a comentar el por qué del proyecto del Poder Ejecutivo haya sido el señor Secretario de Seguridad, el doctor Senn, cuando paradójicamente ninguna de las áreas que se legislan dependen orgánica, funcional o jerárquicamente de esa Secretaría. No obstante, el doctor Senn vino a informar, y me voy a permitir leer algunas partes de la versión taquigráfica correspondiente al 14 de diciembre de 2004. Allí nos explicaba por qué enviaban este proyecto, y decía: "Enviamos esta Ley de Seguridad Pública de acuerdo con nuestro Plan Integral de Seguridad Pública, que se asienta en tres ejes fundamentales: por un lado, lo que llamamos el control civil objetivo, que significa un salto cualitativo en el control de la fuerza policial; el segundo elemento que tiene que ver con esta Ley, y que para nosotros es fundamental, es la reingeniería de la Policía". Y nos explicaba por qué no es una reforma más, diciendo: "Porque reingeniería es inventar algo. Después de 133 años que tiene esta institución es la primera vez en su historia que va a tener las direcciones de Administración y de Personal conducidas por civiles. El tercer elemento donde se asienta este plexo legal es casualmente la participación comprometida de la ciudadanía a través, como bien dice este proyecto de ley, de un Plan Provincial Estratégico de Prevención Integral".

Respecto del primer eje al que nos hacía alusión el doctor Senn, se refería al juzgamiento

del personal policial por parte del Tribunal de Conducta, pero esta Ley del Tribunal de Conducta es la 9120, que no es nueva y que ¡oh sorpresa! en el primer despacho estaba y ahora no. Eso no quiere decir que deje de existir, pero ¿cómo puede ser eje fundamental si no está?

Respecto del segundo tema, de la reingeniería del proyecto en tratamiento, ya se ha dicho mucho, pero creemos e insistimos que es poco y nada lo que se ha modificado de la Ley 6701. Solamente podría agregar que se están perdiendo una gran oportunidad de modernizar y democratizar la institución, ya que la razón de ser de la policía es la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, tema sobre el cual tal vez volvamos posteriormente.

El tercer tema al que refería el señor Senn se fundamentaba otra vez en la necesidad de una normativa ya vigente, la Ley 8574. Tendría que decir que se quedaron en la declamación, ya que cuando se trata de incorporar estas Juntas de Participación Ciudadana al sistema provincial de seguridad las dejan como órganos auxiliares, como ya decía un legislador del Partido Nuevo. Este orden jerárquico, en cuanto a la integración del sistema de seguridad, nuevamente sienta sus bases en una política represiva y no preventiva, en una política cerrada y no participativa.

Señor presidente: en varias oportunidades desde la Unión Cívica Radical les hemos manifestado a los integrantes del bloque de la mayoría lo mismo que expresamos hace dos semanas cuando solicitaron una preferencia de 14 días para el tratamiento de este proyecto en el sentido que, aunque más no sea, esos días no fueran utilizados por el Gobierno y el bloque mayoritario solamente para fines publicitarios, que no los utilizaran solamente por problemas coyunturales, que aprovecháramos ese tiempo para que en el seno de la Comisión se presentara el ministro de Seguridad, además de todas las organizaciones relacionadas e interesadas en la materia a los fines de que pudiéramos elaborar una ley de seguridad que fuera considerada verdaderamente una política de Estado.

Les decíamos también que sentíamos la necesidad de que se aprovechara ese tiempo para que no se hiciera esta mera compilación de leyes que ahora estamos tratando y, fundamentalmente, para que la ciudadanía y el Gobierno de Córdoba -pero principalmente la ciudadanía- después de 6

años de gobierno tuvieran la posibilidad de gozar de una política de seguridad.

Señor presidente: la Unión Cívica Radical considera que hablar de seguridad es hablar de una política de Estado. Pero me quedo en el asombro con lo que escuché o interpreté del presidente de la Comisión de Legislación General, legislador Arias, cuando, muy suelto de cuerpo, dijo que este proyecto es política de Estado.

Me voy a permitir humildemente dar algunas pautas de lo que es la política de Estado para que se den cuenta realmente –como lo dije recién– que en seis años no la hemos tenido, como tampoco políticas de seguridad.

Señor presidente: política de Estado no es un término meramente jurídico sino además una verdadera construcción social y política. Una verdadera política de Estado, por consiguiente, debe guardar coherencia y estar articulada con las demás políticas; existir y exhibir consenso, legitimidad, continuidad y proyección a largo plazo.

Decimos que política de Estado, históricamente, es una expresión utilizada para reseñar cuestiones de la que dependen la supervivencia misma de un Estado como tal; esto es, una situación en la que resulta imprescindible dejar de lado los personalismos, los partidismos y hacer uso del patriotismo para solucionarlos.

Una política de Estado implica un desafío programático, establecer criterios ordenadores, horizontes estratégicos, objetivos del Estado en la materia a través de un programa de trabajo que comprometa una labor intersectorial, y todo esto se logra a través de la convocatoria de todos y cada uno de los sectores, gobierno, partidos políticos, intendentes, universidades, organizaciones no gubernamentales; en definitiva, de un amplio espectro de actores sociales, para así llegar a grandes acuerdos como los que requiere este importante tema.

Señor presidente: creo que si partimos de estas consideraciones, de lo que significa una política de Estado, podemos afirmar con certeza que el oficialismo no superó el desafío que implica diseñar una verdadera política; es más, limitó el alcance de la seguridad al fenómeno de la violencia y de la delincuencia.

Señor presidente: desde la Unión Cívica Radical hubiésemos querido que avancemos ha-

cia una política de seguridad ciudadana desde una perspectiva amplia relacionada con el conjunto de sistema de protección de la vida y de los bienes de los ciudadanos ante los diferentes sectores de riesgo.

El concepto de seguridad irrumpe como una cuestión política y social; como una de las sensibles problemáticas que debe satisfacer nuestro Estado de Derecho. Todo esto involucra, por un lado, una ponderación compleja del problema entre los derechos de la gente, como derechos inherentes a la persona; y, por el otro, la protección de esos derechos como condición imprescindible para su efectiva realización.

Todo esto nos lleva a afirmar que cuando hablamos de seguridad el bien protegido no es el orden normativo preestablecido sino los derechos y las libertades de las personas.

Señor presidente: decimos que urge una política de Estado en materia de seguridad ciudadana que surja luego de un diagnóstico técnicamente sólido que especifique objetivos medibles, con plazos definibles, que establezca responsabilidades, que logre consensos importantes, que coordine todos los niveles de gobierno y los tres Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en su proyección trascienda los períodos de gobierno de las actuales autoridades.

Dije que debería elaborarse, previo al diseño de la política de seguridad, un serio diagnóstico. Esto es imprescindible si tenemos en cuenta que la criminalidad es un fenómeno heterogéneo que responde a procesos complejos, multicausales, en el que resulta sumamente difícil identificar los factores que expliquen el incremento de esta cuestión. Sin embargo, se pueden precisar algunos elementos asociados al crecimiento de la criminología, como son: el incremento de las tasas de desempleo, el consumo de drogas y la concentración geográfica de los delincuentes en determinados barrios o comunidades.

Entonces, señor presidente, nos preguntamos ¿qué se ha hecho desde el oficialismo para elaborar este diagnóstico? ¿Dónde está reflejado en la ley este diagnóstico o algo parecido? No lo vemos.

Por otro lado, decimos que es incomprensible, en la búsqueda de mejores niveles de seguridad para la población, involucrar no solamente a

distintos sectores del Gobierno Provincial, sino a las sociedades, a las organizaciones y a las comunidades, así como a las autoridades locales, es decir, a los municipios, ya que la característica del problema delictivo varía fuertemente de un lugar a otro, lo cual hace imprescindible que se aborde localmente. Decía el miembro informante que lo estaban realizando, pero tenemos que ser honestos, no pasa por llevarlo a cabo en uno o dos municipios, o con una patrulla rural, porque a esto lo hacen por lo general por iniciativa de algunos intendentes porque se ven preocupados y forzados por la situación. Que se haga alarde de algunas cosas que se hacen circunstancialmente, no me parece que tengan que ver o estén insertos en un programa de seguridad, o en un programa de política de Estado, sino que me parece que son parches.

Nosotros decimos que los municipios -si están dentro de un programa- podrían establecer, por ejemplo, sus propias prioridades y planes de acción, realizando desde su ámbito diagnósticos y estrategias a través de espacios abiertos para la comunidad.

En esto de que no haya estrategias o coordinaciones me preocupa un tema particular, cual es el de la ciudad Capital de Córdoba, donde las disputas o las diferencias entre el Gobernador y el Intendente, advierto, hacen imposible un verdadero diseño prevencional. Quisiera citar como ejemplo las declaraciones relativas a la instalación de las cámaras de vigilancia, se comparta o no el fondo de la cuestión. Cuando el señor ministro de Seguridad dijo que se iban a instalar las cámaras, acto seguido, el señor Intendente dice: "si no me piden permiso, las voy a sacar".

Señor presidente, producir seguridad es generar un bien social similar a la educación, la salud o el trabajo, es decir, la política de seguridad ciudadana debe considerar la prevención y el control de la delincuencia y la violencia, así como el temor asociado a ambas, que es la sensación de inseguridad.

Por las largas estadísticas que nos dio el miembro informante de la mayoría, y que es imposible contestar en el recinto, tengo la sensación -sin petulancia- que no tuvo en cuenta este término, esta sensación de inseguridad sobre la cual no hay estadísticas porque no se puede computar. Dicen, fundamentalmente los psicólogos, que esta sensación de inseguridad no proviene sólo de la delincuencia en sí misma sino del temor a la de-

linuencia. Señor presidente: de esto también se debe hacer cargo el Estado porque afecta, de manera importante, la calidad de vida de los ciudadanos.

Lejos de estos conceptos está el despacho en tratamiento. Pocos son los artículos nuevos respecto de la normativa vigente, a más de no sentar bases específicas para la modernización, el fortalecimiento, la democratización y menos aun para la reforma de la seguridad pública.

A grandes rasgos, en la parte primera del anteproyecto en tratamiento, artículo 1º a 6º de la parte general, se define lo que es seguridad pública para este Gobierno y se establecen sus objetivos. Podemos decir que nuevamente se quedó en el maquillaje, pues al determinar los integrantes del sistema de seguridad, contestes -por supuesto- con la ideología del Gobierno, no se incluye a los funcionarios políticos, a los gobernadores, a los legisladores, al Fiscal General ni a los intendentes, entre otros. Además, en esta parte, se divide a sus integrantes en dos categorías: los principales -Policía y Servicio Penitenciario- y los auxiliares, en los que incluye, entre otros, a las Juntas de Participación Ciudadana.

Como se ha abundado respecto de la segunda parte de la parte primera -artículos 7º al 14, Plan Estratégico Provincial- solamente voy a decir que es bueno que se hayan incluido en este proyecto las Juntas de Participación para la Prevención Integral o de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, según lo definía la Ley 8574. Aplaudimos que los legisladores oficialistas hayan reconocido la existencia de esta ley, aunque se olvidaron de la prevención, ya que al copiarla derogan la incorporación de la problemática de la prevención del delito y la seguridad ciudadana en programas y proyectos educativos e institucionales, tal cual lo establecía el artículo 6º de esta ley.

El legislador Arias dijo que esta ley fue reglamentada en 1999 y que era del Gobierno del doctor Mestre; después la criticó porque no se aplicaba, y dijo que la iban a modificar. Al respecto quiero decir que fue sancionada el 12 de diciembre de 1996, es decir, cuando las circunstancias eran bastante distintas a las de ahora, y no puedo menos que decir que fue de avanzada. No vaya a ser cosa que ahora el oficialismo la modifique, le haga críticas, la amplíe, y nunca pueda aplicar estas "Juntas de Participación", o como quieran llamarlas.

Al comienzo de mi alocución me refería a la segunda parte del proyecto -artículos 15 a 47- y creo que poco y nada se cambia respecto de la vieja Ley 6701. Sólo quiero hacer un agregado a todo lo que se dijo: es una lástima que se haya perdido la oportunidad de elaborar un sistema de información criminal, o de inteligencia criminal, que es un insumo básico para lograr un mayor grado de eficiencia en las instituciones encargadas de la prevención y el control delictual. La inteligencia policial y gestión de la información, es decir la prevención estratégica, permite incidir sobre los factores del delito a través de la capacidad de anticipación de los mismos, reduciendo con ello los hechos delictuales.

Por último, respecto de la tercera parte del proyecto, relacionada con el Servicio Penitenciario, debo decir también que poco se ha cambiado. Entre lo mencionado y lo que podemos ver se ha traspasado el juzgamiento del personal penitenciario al Tribunal de Conducta, creado por Ley 9120. ¡Qué desperdicio!, señor presidente: hoy sancionamos una ley que reglamenta el Servicio Penitenciario y no cambiamos nada.

Tengo la sensación que a este Gobierno no le fueron suficientes los motines, en particular el de la cárcel de San Martín, las brutales agresiones de los internos, las irregularidades en el traslado de los presos, las fugas inexplicables que, según parece, se transformaron en una costumbre. Todos estos acontecimientos dejan al descubierto gruesas fallas; realmente hubiera sido el momento de tomar conciencia y diseñar una política carcelaria inserta en una verdadera política de seguridad, que tienda a minimizar estas situaciones. Ya lo dijimos en este recinto en alguna otra oportunidad: no alcanza con firmar convenios, con recibir fondos de la Nación hacia la Provincia; es necesario aplicar esos fondos en el marco de una estrategia global de seguridad.

Otra de las cuestiones fundamentales respecto del Servicio Penitenciario es, sin duda, la relacionada con la ejecución de las penas privativas de la libertad. En este sentido, el proyecto en tratamiento deja mucho que desear. En primer lugar, se desconoce la legislación provincial que rige la materia, Ley 8812, por la cual la Provincia adhirió a la Ley 24.660, y la Ley 8878, que regula específicamente la aplicación de la ley nacional en nues-

tra Provincia. Estas leyes, tanto la nacional como la provincial, han representado un verdadero avance en la defensa de los derechos humanos en lo relativo al tratamiento de los penados. Parece que aquí eso no se ve; concretamente, es como si se desconociera la existencia de la Ley 8878 o, al menos, no se la tuvo en cuenta para la redacción de este proyecto cuando hace mención a las disposiciones relativas a la ejecución de las penas privativas de la libertad, es decir, los artículos 1º a 17 de dicha ley, ni se la tiene en cuenta cuando se desarrolla la Orgánica del Servicio Penitenciario en lo que respecta a los establecimientos penitenciarios, artículos 20 y 24 de la Ley 8878, ni vemos que se mencione al Instituto de Capacitación Penitenciaria, artículos 18 y 19 de dicha ley.

Nos preguntamos: ¿todos estos elementos son parte integrante del sistema de seguridad provincial? ¿Por qué no se incorporaron estas disposiciones? ¿Quedarán implícitamente derogadas?

Por último, qué tanto dice la miembro informante del bloque de la mayoría respecto del régimen de servicios de prestación privada de seguridad, vigilancia e investigación, Ley 8908, porque que yo sepa esta ley ya se sancionó; no estamos sancionando toda la ley, pues ya existe. Nos alegramos de que la oposición haya hecho recepción de las críticas que en su momento nuestro partido hizo en oportunidad del tratamiento de la Ley 8908 respecto del uso de armas de fuego. Aplaudo que se haya eliminado la posibilidad que personal de agencias de seguridad puedan usar armas de fuego por vía de excepción y quede sólo la expresa prohibición. Repito, me alegra que se hayan hecho eco de lo que en su momento nuestro bloque expresaba.

Por otro lado, señor presidente, sobre esta misma ley, no puedo dejar de mencionar la relación que se establece entre el monto de las sanciones y la tasa de habilitación. Creo que se desconoce que la pena debe estar en relación con el hecho en sí, con el hecho contravencional y no con la posibilidad de actuación en el ramo específico de que se trata. Basta con mencionar, por ejemplo, como podría ser el Código de Faltas Provincial.

Señor presidente, señores legisladores, porque este proyecto carece de una efectiva con-

ducción política del sistema de seguridad, de un verdadero programa de profesionalización policial y formación en el Estado de Derecho, de mecanismos ciertos y activos de participación ciudadana, porque no prioriza verdaderas acciones de prevención, no contiene una visión integral de la función penitenciaria, porque no contiene normas específicas de respeto por el Estado de Derecho, porque no promueve cambios en el ámbito institucional social, porque, en definitiva, no establece una verdadera política de Estado en materia de seguridad ciudadana, es que este bloque de la Unión Cívica Radical no acompañará el proyecto en tratamiento.

Muchas gracias.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra el señor legislador Karl.

**Sr. Karl.**- Señor presidente, en consonancia con lo que acaba de expresar brillantemente la legisladora Bianciotti, y por tratarse de un tema con la trascendencia que tiene la seguridad en esta Provincia, que es la preocupación diaria de los cordobeses, la decisión de mi bloque de participar en este debate se debe a las firmes convicciones que me alientan sobre este tema, contrarias en su mayoría a las propuestas mágicas que se venden por aquí y en todos los lugares del mundo por supuestos esclarecidos, que traen las magníficas soluciones que brindan institutos como el Manhattan u otros que aparecieron últimamente, al igual que cuando tratamos la Ley de Jurados Populares, con extrañas presencias en esta Legislatura de grandes vendedores de humo con propuestas de neto corte neoliberal, que ven sólo aspectos individuales en el fenómeno de la inseguridad. Ni siquiera toman en cuenta las profundas causas sociales que tiene el problema que hoy tratamos.

Un destacado sociólogo francés, en oposición a la tristemente célebre frase de Datoli Medina, cuando se refirió a los limpiavidrios como potenciales terroristas urbanos, en su libro "Las Cárceles de la Miseria" describe la transición de las sociedades organizadas desde una gestión social o asistencial de la pobreza hacia una gestión punitiva, por medio de las policías y las cárceles.

De esta manera, se expresó que la mutación política en que se inscribe esta transición se podría resumir en la siguiente fórmula: borramiento del estado económico, achicamiento del estado social y fortalecimiento del estado penal. Estas tres transformaciones están íntimamente ligadas

entre sí y en lo esencial son la resultante de la conversión de las clases dirigentes de la ideología neoliberal. Lo afirmaba también la presidenta del Colegio de Psicólogos de nuestra Provincia, la licenciada Silvia Storni.

Sucede que tenemos distintas concepciones sobre la seguridad con respecto al oficialismo, las cuales se evidencian clara y palmariamente en la manera en que se aborda la problemática. Por un lado, el oficialismo propone una ley cosmética y, por el otro, tenemos el intento de la oposición de crear los consensos necesarios sobre la seguridad, lo cual debe ser tratado como tema de Estado.

No podemos hoy abandonar el intento, aunque más no sea, de alcanzar un sistema de seguridad que contemple tanto la prevención como la persuasión; un sistema que posibilite disminuir los índices delictivos a partir del convencimiento de que si el delincuente viola la ley será encarcelado, juzgado, condenado y cumplirá con el castigo de manera íntegra, más allá de su condición social.

Es importante recordar que las causas generales que provocan la inseguridad son la pobreza inalterable, la desocupación y la ruptura de la cultura del trabajo en importantes franjas de la sociedad de nuestra provincia. Es éste el esquema que impone su lógica y logra expulsar a las víctimas hacia un desgraciado asistencialismo, perpetuo y clientelar, donde se incubaba una de las causas principales o una de las razones más ostensibles del aumento de la delictuosidad.

Hoy, queridos legisladores, avanzan con este proyecto, pero sin eufemismos quiero decir que para mejorar los índices delictivos no sólo hacen falta estrategias sino compromiso para actuar sobre las causas. La persona que se siente insegura sabe que no es libre; ésta es la razón por la cual la seguridad está hoy planteada como una de las exigencias más severas que la sociedad requiere de sus gobernantes.

No sé si desde mi bancada lograré llamar a la reflexión pero lo estamos intentando porque si miramos la historia con atención veremos que invariablemente la inseguridad generalizada y el caos social, derivado por supuesto del desorden, han llevado a la Republica Argentina y a esta provincia a la instauración de regímenes totalitarios.

No es posible que sin asombrarse y sin ponerse colorados Unión por Córdoba esté hoy

aprobando casi en soledad el proyecto 6567/04, una ley inocua que intenta modificar las condiciones de un tema trascendente que, como lo dijo la legisladora Bianciotti, requiere ser tratado como una fundamental cuestión de Estado; un tema que requiere que el Gobierno y todas las fuerzas políticas y sociales coincidan en un diseño, al margen de una discusión meramente política. Pero claro, ese consenso requiere condiciones verdaderamente importantes. Primero, eliminar la hipocresía, sobre todo aquella que se sustenta en el hecho de que desconozcamos la realidad como algo que no es propio, transfiriendo o delegando las responsabilidades a los demás, como una manera de evadir el tratamiento profundo de este tema, muchas veces -quizás no sabiéndolo- encubriendo a los responsables de distintas actuaciones, que no necesariamente siempre son delincuentes sino que no están a la altura y necesidad de las circunstancias.

Así como muchas veces se quiere comprar la solución enlatada, muchas otras, lamentablemente, se actúa haciendo depender las acciones de Gobierno del humor social que se desprende de las encuestas. De esta manera, nadie se anima a tomar verdaderas decisiones, aquellas que con el tiempo nos traerían la solución a los problemas, por más que puedan ser impopulares.

Por eso, concretamente, proponemos sorrear que el tema sea político, y entre todos los sectores involucrados afrontaremos decididamente los costos; y si es desde la política, también lo hagamos señor presidente.

Decía un amigo, el doctor Capdevila, que "el delito es la fiebre que da aviso a una enfermedad social". Por eso resulta inadmisibles que no se haga nada o, como en el caso del proyecto que hoy nos ocupa, no se haga nada verdaderamente profundo y significativo, optándose por un camino publicitario y sin sentido.

Si nos quedamos sin hacer nada, señor presidente, si nos quedamos esperando el milagro -sepámoslo todos-, estamos condenados a vivir en el actual estado de cosas, donde la inseguridad y el desorden serán los más eficaces abortivos para cualquier atisbo de progreso y desarrollo.

Otro aspecto importante -que quizás no sea este el ámbito para abordarlo-, es tratar de desmitificar algunos temas. Por ejemplo, se ha compra-

do y mucho el sofisma que dice que si aumentamos las penas disminuye el delito. Quiero expresar, señor presidente, que no existe experiencia en el mundo que avale esta afirmación.

La última inflación legislativa, provocada por la mediocridad política y el efecto Blumberg, privó a nuestro Código Penal de sus valores más sobresalientes: de claridad y de fundamentales garantías constitucionales, como la que reza que ningún habitante "de esta querida" Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe; principio afectado cuando la ley se vuelve confusa, señor presidente.

Todo, lamentablemente, ha sido en vano. Hay que entenderlo: las penas no modifican la decisión del delincuente, sólo lo hace la percepción por parte del delincuente de que va a ser atrapado si delinque.

El tratamiento del proyecto en cuestión fue desmenuzado magistralmente por la legisladora Bianciotti, mientras que otros miembros de mi bloque, si hace falta, intervendrán posteriormente, pero quiero marcar algunas falencias graves de esta propuesta que estamos analizando. No hay una verdadera modernización, fortalecimiento y reforma de la Policía, por lo que quiero hacer algunas propuestas, ya que parece que todo el peso de la seguridad recae en la Policía. Quiero acentuar que ésta carece de un control cívico, mientras que los mecanismos de participación ciudadana no alcanzan. Ya tenemos instrumentado lo que hoy nos están proponiendo.

Otra cuestión preocupante, señor presidente, es que hay un soslayo de los derechos humanos, y no quiero pensar que es una forma doctrinaria de este Gobierno, porque eso sí sería muy peligroso. Lo que noto ausente es la capacitación permanente y el aumento necesario del personal en ciertas fuerzas de seguridad.

Para hacer un debate serio sobre esta materia vital no debemos dejar de considerar como eje central que el policía es el hombre que convive con el delito, al que se le deben procurar bases fundamentales y sólidas en la barrera que se le debe poner para que no caiga en ilícitos. Y quiero que este concepto sea escuchado con mucha atención porque esta barrera que separa el correcto accionar del policía del ilícito debe ser construida y no impuesta; construida con una academia

permanente y un seguimiento continuo de su realidad socioambiental y familiar; con la carrera y el escalafón policial y la no afectación al régimen de retiros policiales.

Además, obviamente, se debe destacar la importancia de los establecimientos educativos con que deben contar oficiales, suboficiales y agentes, como ha habido en esta Provincia durante muchos años. ¿Por qué no pensar también en convenios con la Universidad Nacional para que los hombres de las fuerzas policiales estudien derecho procesal penal y derecho constitucional?

Señor presidente: es sumamente importante la plena vigencia de la carrera policial. El policía debe tener la más completa tranquilidad, para que se traduzca en un buen comportamiento, porque si se capacita y es correcto en el cumplimiento de su función va a gozar de todas las garantías para progresar en su carrera y, por lo tanto, será merecedor de ascensos y promociones.

Es decir, son muchas las medidas que se deben tomar de afuera de la Policía, pero están ausentes en este debate por la pobreza de los postulados de la ley que tratamos.

Hasta aquí, señor presidente, los elementos del debate que hoy forman la materia con la que podemos contar en nuestras bancas; lo demás corresponde a otras funciones del Estado.

No quiero con esto parcializar el debate, pero no es la oposición -que hoy no comparte este proyecto- quien debe propiciarlo. Invitamos al bloque de la mayoría, al Poder Ejecutivo, al Ministerio Público y al Poder Judicial todo para que convoquen a completar la trama ineludible que garantice la vida civilizada en esta Córdoba agobiada por la inseguridad.

Creemos que esta es parte o la totalidad del debate que irremediablemente debe darse en lugar de tratar de tapar el sol con las manos trayendo este proyecto de ley que nada aporta, más allá del marketing político de este Gobierno.

Señor presidente: como paradigma de la inseguridad de nuestra Provincia recuerdo el terrible motín en la penitenciaría de barrio San Martín y lo que el periodista cordobés Alejandro Mareco dijo: "Lo que asomaba del techo de la penitenciaría que todos pudimos ver, a través de todos los canales de televisión, era la punta del iceberg de un estado de cosas que revuelve a la sociedad y su conciencia".

Quiero agregar, refiriéndome a lo expresa-

do por la licenciada Silvia Stornig, que frente a tanta pobreza, indigencia, desocupación, subocupación, falta de acceso a bienes y servicios, las cárceles se convierten en refugios donde se ocultan estas miserias, para las cuales algunos reclaman soluciones de fondo y otros mano dura privilegiando la represión.

Señor presidente, señores legisladores: esta ley va a ser votada y aprobada por la mayoría, la tendremos que dejar pasar -entre comillas- porque en la democracia -forma de vida que elegimos los cordobeses y los argentinos- lo más importante es el debate y desde nuestro bloque lo propiciamos para el futuro, sin eufemismos, con la participación de todos los sectores, proponiendo que se agoten todas las instancias del diálogo para generar consensos; si lo logramos, estaremos reformando de verdad el flagelo de la seguridad en nuestra Provincia.

Muchas gracias.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra el señor legislador Sella.

**Sr. Sella.**- Señor presidente: se encuentra en tratamiento el despacho de la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización referido al proyecto 6567/E/04, Ley de Seguridad.

Con mucho respeto al trabajo realizado hasta hoy por la Comisión citada, nuestro bloque del Partido País solicita autorización para abstenerse de votar el proyecto en tratamiento atento a las siguientes consideraciones.

No ignoramos la importancia de este proyecto, que es de gran trascendencia, como tampoco lo hacemos con el flagelo y la sensación de inseguridad que crece día a día, entendiendo que es responsabilidad de quien gobierna prevenirla. Tampoco ignoramos que son innumerables las recetas encontradas, con una carga ideológica importante y difícil de compatibilizar.

Nuestro bloque siempre se ha expedido a favor o en contra de las leyes que hemos tratado, pero entendemos que en esta oportunidad se hace necesario un estudio más profundo del tema en cuestión sin dejar de reconocer todo lo receptado por la Comisión, la que se ha abocado al estudio del proyecto contando con la opinión de algunos sectores que -como bien se dijo aquí- seguramente pueden o no enriquecerlo pero que deben ser receptadas y escuchadas.

La urgencia de un proyecto no significa



apresuramiento y nuestro bloque ha dejado sentado ese criterio en este recinto en más de una oportunidad, máxime si consideramos la trascendencia que tiene la ley en tratamiento.

Si bien es cierto que el proyecto ingresó el 17 de noviembre del año 2004, hace más de 5 meses, no es menos cierto que unas semanas más de estudio, como esta ley lo amerita, permitiría su enriquecimiento, mejores resultados y cumplir los objetivos que la sociedad reclama de los legisladores, con un mayor beneficio para todos los cordobeses e incluso para quien gobierna.

Señor presidente: por las dudas que nos genera el proyecto y por estas breves consideraciones es que nuestro bloque solicita autorización para abstenerse de votar el proyecto de ley en tratamiento, tanto en la persona del exponente como de la legisladora Alicia Menta, ambos integrantes del bloque Partido País.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Señor legislador, oportunamente vamos a poner en consideración la moción de abstención.

Tiene la palabra el señor legislador Gastaldi.

**Sr. Gastaldi.**- Señor presidente, en representación del bloque Recrear adelantamos nuestro rechazo al proyecto en tratamiento.

Más allá de nuestra opinión sobre los beneficios o perjuicios que la aplicación de esta norma pueda acarrear, queremos expresar nuestro rechazo porque creemos firmemente que este proyecto de ley no hace otra cosa que consolidar la situación existente en materia de seguridad.

Este proyecto es negativo para toda la sociedad y el Estado cordobés por las siguientes razones: 1) Simplemente formaliza la realidad existente en las organizaciones depositarias de la fuerza pública, sin que nada cambie de manera sustantiva; 2) mantiene en status quo el esquema organizativo de la Policía y del Servicio Penitenciario de la Provincia basado en un modelo de tipo napoleónico, tal como lo denominan los principales especialistas internacionales; 3) no resuelve los problemas estructurales de la seguridad pública de la Provincia; 4) consolida el perfil paramilitar de la organización policial penitenciaria de la Provincia; 5) no garantiza a la sociedad un sistema de seguridad pública eficiente acorde con sus necesidades; 6) mantiene la no separación del con-

cepto de investigación como función judicial con la inseguridad pública en la instrumentación orgánica de la Policía de la Provincia, a pesar de que esta separación conceptual fue la que oportunamente justificó la creación de la Policía Judicial; 7) el proyecto no posee una redacción estándar para organizar tanto a la Policía como al Servicio Penitenciario; 8) los organismos policiales que conforman la Policía de la Provincia no tienen claramente fijadas sus responsabilidades y, por lo tanto, estas quedan sujetas al libre arbitrio de la autoridad de aplicación y eventualmente en manos del propio jefe de la Policía de la Provincia; 9) mantiene estructuras de inteligencia en la Orgánica de la Policía de la Provincia en contra de la tendencia que marcan las reformas de Estado que se han realizado en la mayoría de los países desarrollados...

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Perdón, señor legislador, la legisladora Bianciotti le está solicitando una interrupción. ¿Se la concede?

**Sr. Gastaldi.**- Si, señor presidente.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Pido por favor a los señores legisladores que guarden silencio en sus bancas.

Tiene la palabra la señora legisladora Bianciotti.

**Sra. Bianciotti.**- Disculpe la interrupción, señor legislador Gastaldi, pero recién entramos la mayoría de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical muy preocupados porque mientras en este recinto estamos hablando de seguridad, en mi oficina, número nueve, han violentado la ventana y han robado la cartera de mi secretaria, razón por la cual sugiero, señor presidente, que autorice a los legisladores para que cada uno vaya a ver si en su oficina no falta nada.

Nada más, señor presidente.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Inmediatamente vamos a disponer que el personal policial de la Casa se aboque a la investigación.

Continúa con el uso de la palabra el señor legislador Gastaldi.

**Sr. Gastaldi.**- Señor presidente, 10) no desconcentra ni descentraliza la responsabilidad de la seguridad pública, fortaleciendo el modelo político feudal de la Provincia; 11) no da una adecuada cabida a la participación ciudadana para dotarla del verdadero control ciudadano sobre la

fuerza policial; 12) las Juntas de Participación Ciudadana previstas carecen de verdadero poder sobre la organización policial; 13) no organiza de manera adecuada al Ministerio de Seguridad ni a la Secretaría de Justicia de la Provincia; 14) fortalece la debilidad estructural del Ministerio de Seguridad para conducir y controlar a la policía y al servicio penitenciario. 15) Para el personal policial y penitenciario, de manera increíble, este proyecto de ley fija un sistema pero no regula el régimen profesional ni establece principios básicos para la acción profesional de las fuerzas policiales y penitenciarias de la Provincia que conforman el sistema creado por este proyecto. 16) No incluye nuevos estándares de calidad para mejorar el desempeño profesional de las fuerzas policiales y penitenciarias de la provincia.; 17) no se basa en las tendencias mundiales de profesionalización de las fuerzas policiales y de los servicios penitenciarios y correccionales; adolece de un correcto asesoramiento profesional en la materia; 18) no garantiza la protección de los derechos humanos, civiles e individuales de los habitantes de la Provincia. El problema de la seguridad que aqueja a nuestra sociedad es de origen estructural, por lo tanto, requiere de soluciones estructurales.

Por otro lado, para formular un sistema de seguridad es necesario tener una visión sistémica del problema y de la solución. Por ello, para encontrar una solución real y sustentable a los problemas de seguridad pública de los cordobeses, es necesario que permita modificar las responsabilidades y funciones que hoy en día están a la cabeza del Poder Ejecutivo de manera exclusiva y centralizada, cuando la dinámica de este siglo XXI requiere que muchas de ellas sean desconcentradas y descentralizadas. También es necesario introducir modificaciones orgánicas importantísimas en la organización del Poder Ejecutivo, más precisamente en el Ministerio de Seguridad y en la actual Secretaría de Justicia.

Hablar de un sistema de seguridad para la Provincia implica, indefectiblemente, hablar de la descentralización de la seguridad pública que hoy le cabe, de manera exclusiva, al señor Gobernador de la Provincia.

La dinámica actual de los delitos hace que los intendentes y jefes comunales no puedan ni deban quedar exentos de responsabilidad en materia de seguridad. Esta dinámica también hace sumamente vulnerable a las organizaciones poli-

ciales estructuradas verticalmente de manera paramilitar. Por ello, casi todos los países desarrollados tienden a adoptar el modelo policial anglosajón -así ocurre en España, Grecia, Francia, Alemania, etcétera-, basado en la descentralización, la organización horizontal, la profesionalización y la desmilitarización de las fuerzas policiales y penitenciarias.

Nuevos perfiles profesionales se han generado en estos cuerpos, muy diferentes a los que poseemos en nuestra Provincia. En todos los países desarrollados la participación ciudadana es un elemento clave, pero la experiencia internacional demuestra que sólo es efectiva si tiene correlato con un poder real para modificar el accionar de la fuerza pública y ejercer un control ciudadano objetivo.

Hechos como el ocurrido en la cárcel de San Martín, o más recientemente en Coronda, Provincia de Santa Fe, debe ser una alerta roja para todas las clases políticas, en especial para este Cuerpo legislativo. Este proyecto de ley es una mala señal de ceguera de nuestra parte hacia el resto de los ciudadanos cordobeses.

Por otra parte, diariamente los ciudadanos de toda la Provincia conviven con la inseguridad en el campo y en la ciudad. Es evidente que la policía de la Provincia necesita profundos cambios en sus hábitos, organización, medios y procedimientos. El Servicio Penitenciario de la Provincia tampoco puede quedar exento de estos cambios.

Por todo lo expuesto, señor presidente, nuestro bloque propone, sin entrar a detallar particularidades, lo siguiente: 1) desconcentrar y descentralizar la responsabilidad de la seguridad pública, que actualmente ejerce de manera exclusiva el Poder Ejecutivo de la Provincia; 2) fortalecer institucionalmente el Ministerio de Seguridad de la Provincia; 3) transformar la Secretaría de Justicia de la Provincia en Ministerio; 4) rediseñar orgánicamente el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia; 5) transformar la actual Policía de la Provincia en varias organizaciones policiales de seguridad; 6) crear una fuerza policial de despliegue rápido, dependiente del Ministerio de Seguridad; 7) crear una Policía metropolitana para la ciudad de Córdoba, dependiente de su intendente; 8) crear juntas departamentales de seguridad en cada departamento provincial, a los efectos que se constituyan en una autoridad colegiada de intendentes y jefes comunales con responsabilidad en

materia de seguridad; 9) crear una Policía departamental por cada departamento provincial, dependiente orgánicamente de la Junta Departamental de Seguridad y funcionalmente del Ministerio de Seguridad de la Provincia; 10) crear una Agencia de Investigación de la Provincia, dependiente del Ministerio de Justicia, siguiendo un modelo organizativo y de asistencia al Poder Judicial similar a organismos existentes en países de la Comunidad Económica Europea, que hemos señalado anteriormente, pero a nivel provincial y teniendo en cuenta la configuración de nuestro sistema de Justicia; 11) transformar el Servicio Penitenciario en uno menos militarizado y más profesional, dependiente del Ministerio de Justicia; 12) realizar una enorme inversión en infraestructura, tecnología y medios; 13) cambiar la formación, capacitación y el accionar operativo de las fuerzas policiales y penitenciarias, acorde con los modernos conceptos policiales y penitenciarios que se emplean en los principales países desarrollados; 14) generar un nuevo marco de regulación profesional y establecer nuevos parámetros y principios básicos para el accionar policial y penitenciario en la jurisdicción provincial; 15) fortalecer la participación ciudadana, para que ejerza un control ciudadano objetivo sobre las fuerzas policiales y la calidad del servicio de seguridad pública que recibe en compensación de sus impuestos.

Para finalizar, señor presidente, reiteramos que los problemas de seguridad que aquejan a la sociedad de Córdoba en su conjunto son de orden estructural, que obedece, básicamente, a los graves problemas sociales y culturales, a modificaciones imprescindibles en la estructura del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de la legislación vigente. El recrudecimiento del delito, en todas sus formas, no es un hecho aislado de la sociedad cordobesa, tampoco exclusivo de la sociedad argentina; es un fenómeno de orden global.

Frente a esta compleja problemática, los estados tratan de organizarse contra el flagelo de la delincuencia que azota a sus sociedades de la manera más efectiva que pueden. Algunos de ellos lo han hecho de manera exitosa, efectuando profundas reformas organizacionales y aplicando una visión realista frente a la situación a modificar; otros han fracasado rotundamente, en tanto que muchos insisten en constituirse en modelos -como

el caso del proyecto en tratamiento- y probablemente están destinados a consolidar el fracaso y la decadencia.

Respecto del proyecto de ley sobre seguridad privada, también adelantamos nuestro rechazo. No podría ser de otra manera, habida cuenta que hemos planteado un proyecto de seguridad pública diametralmente opuesto al proyecto en tratamiento. Si lo hemos planteado de la manera enunciada es porque creemos firmemente que mediante las propuestas señaladas mejoraría sustancialmente la seguridad en la Provincia, mientras que la seguridad privada perdería gradualmente la preponderancia que tiene en la actualidad, predominio dado por las deficiencias crónicas que tiene el sistema de seguridad pública en nuestra Provincia de Córdoba.

Muchas gracias.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.

**Sra. Olivero.**- Señor presidente, nuestro bloque no ignora la importancia que el sentimiento de seguridad y la inseguridad misma tienen para la calidad de vida, y no menospreciamos su significación especialmente en los ciudadanos de menores recursos. Lo conocemos por los ríos de tinta, por las horas de televisión, de radio y por las principales preocupaciones de la población que indican las encuestas, y porque además no estamos ajenos al contacto diario con la gente.

El problema de la inseguridad viene ocupando, desde hace tiempo, todo este espacio sin que el Ejecutivo de la Provincia de Córdoba pueda solucionarlo. Han fracasado promocionados planes —no me voy a detener a decir cuáles, ustedes los conocen- y el reemplazo de funcionarios de algunos sectores de las cúpulas policiales tampoco logró nada; sigue la violencia, los robos, los asesinatos y el gatillo fácil. No sólo están asoladas las zonas residenciales y los countries, sino que en los barrios pobres la vida no vale nada. Las ciudades pequeñas y el ámbito rural hasta hace poco se sentían seguras, pero hoy no escapa nadie. Sólo basta hacer un seguimiento cotidiano de los diarios para conocer la realidad.

En medio de este flagelo que afecta especialmente a las clases populares, la derecha -avalada por los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, junto a los petitorios del Ingeniero

Blumberg y compañía- insiste con salidas que ya demostraron ser inútiles y fracasadas, que en realidad apuntan a castigar a los más pobres al no atacar las causas de fondo que provocan la inseguridad.

Señor presidente, ¿cuáles son las bases de la inseguridad que se niega a discutir el Ejecutivo, que tampoco ataca el Gobierno nacional y menos aún lo hace Blumberg y compañía, ni otros políticos que se postulan para las elecciones de octubre? En primer lugar, el aumento de graves situaciones sociales límites y de los niveles de desocupación, que llevan a millones de argentinos a sobrevivir en la peor de las indigencias y el hambre. No se trata aquí de asociar delito con pobreza sino de que esta situación de penuria es un caldo de cultivo para los que lucran con la delincuencia, que por cierto no son los pobres ni los desocupados, pues detrás, se esconden señores de traje y corbata con fachada de dignos capitalistas.

En segundo lugar, existe el reino de la impunidad que rodea a los grandes delincuentes que están libres. No obstante, la violencia, los robos, los asesinatos y la presión a la que son sometidos los barrios populares son posibles porque tienen otro componente de impunidad. Está a la vista un sistema mafioso de recaudación, asentada desde hace tiempo en tres pilares: en algunos sectores de la fuerza de seguridad, en la Justicia —y en algunos de sus jueces corruptos— y en el poder político que ha protegido a ambos.

Es notorio como en la absoluta mayoría de los ilícitos participan agentes de la fuerza de seguridad, ya que tanto en secuestros como en otros delitos casi siempre hay policías involucrados. Si quieren podemos recordar algunos casos como las denuncias de tráfico de personas, las tratas de blancas, el narcotráfico, los piratas del asfalto, las coimas...

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Perdón señora legisladora, le voy a solicitar a los legisladores y público presente que guarden silencio para poder escuchar el informe de la señora legisladora.

Continúa en el uso de la palabra la legisladora Olivero.

**Sra. Olivero.**- Señor presidente, me refería al tema de las coimas en las rutas cordobesas denunciado por la Cámara de Autotransporte, al robo de armas de los precintos policiales o a las denuncias de entidades agrarias, como las que se hicieron en Río Segundo, y ni qué hablar del tráfi-

co dentro de las cárceles. Pero esta no es la única manera en que participan las fuerzas, también hacen inteligencia, permiten zonas liberadas y facilitan infraestructura, entre otras cosas.

Lo mismo ocurre con muchos jueces. El sistema judicial está preparado para castigar duramente a los ladrones de gallinas y no encarcelar a los delincuentes de guantes blancos. Tenemos muchos ejemplos: jueces que no pueden ser removidos, que actúan de por vida sin correr el riesgo de ser destituidos; jueces y fiscales que manejan una lista de precios con la que cotizan las sentencias, como lo desnuda el caso del fiscal Nieves o las denuncias de Cruz del Eje; jueces que sólo pueden ser echados por Jurys de Enjuiciamiento que no prosperan, ya sea por acción u omisión de algunos funcionarios del poder político que los protegen, conformando este triángulo que parece el "Triángulo de las Bermudas".

En este escenario tampoco dan mayor seguridad el endurecimiento o aumento de las penas y de las leyes, ni la rebaja de la edad de imputabilidad. No es preocupación hoy del delincuente cómo será su situación legal; se preocupa por contactar al comisario que le va a liberar la zona, al juez que lo va absolver y al político que lo va a proteger si alguno de los anteriores le falla. La mano dura nunca fue usada contra las mafias sino contra los pobres, los trabajadores, los sectores populares, los desocupados y los jóvenes.

Para atacar de verdad y seriamente el problema de la inseguridad se debe proceder en el marco del profundo respeto a los derechos y garantías democráticas y constitucionales. Este proyecto propone una legislación que afecta directamente la vigencia y el respeto de estas garantías, más aún, desconoce garantías constitucionales básicas.

Hacemos nuestras las palabras de profesionales especialistas que se detuvieron a analizar el proyecto; me estoy refiriendo a los doctores Gustavo Cosacov y Hernán Bouvier: "con este proyecto se pretende otorgar facultades de inspección, control y almacenamiento de datos a las fuerzas policiales y al Ministerio de Seguridad por encima de los límites conferidos por las Constituciones nacional y provincial, y por la letra del Código Procesal Penal de la Provincia".

Con la excusa de propender a fines preventivos, la legislación referida se permite intervenir en la libertad de reunión y deliberación, en la liber-

tad de movimiento y de locomoción y en la intimidad de las personas, no ante la inminencia o efectiva comisión de un delito sino ante cualquier actividad que podría eventualmente constituirse en la supuesta comisión de algún delito, es decir, “por las dudas”. Es la propia Policía y el Ministerio de Seguridad quienes decidirán bajo qué condiciones; sin control alguno se encuentra justificado actuar por razones de seguridad pública, en violación flagrante del principio de división de Poderes.

Con este proyecto el Poder Ejecutivo no pretende brindar seguridad integral sino que busca avanzar en poner a la ciudadanía de Córdoba en “libertad condicional vigilada”. Asimismo, permite recolectar datos que sirvan para solucionar problemas de la seguridad pública sin aclarar que los únicos datos que la policía puede recabar son aquellos relacionados con delitos y sólo en la medida en que se trate de conductas delictivas e información referida al hecho y no al autor.

Esta Legislatura, si se proclama realmente garante del respeto irrestricto de la Constitución y del proceso de fortalecimiento democrático institucional, bajo ningún concepto podría aprobar este proyecto de ley. Desde nuestro punto de vista, para atacar de verdad el grave problema de la inseguridad hay que hacer todo lo opuesto a lo que propone el Ejecutivo de Córdoba, es decir, empezar a tomar las medidas urgentes y de fondo.

Creemos férreamente que se necesita abrir un debate profundo, serio, político y público con la sociedad, en relación al sistema de justicia penal y también de los procedimientos. Hubiese sido muy oportuno y positivo haber garantizado este debate; muchos son los actores sociales que tienen cosas para aportar y lamentablemente no han sido escuchados.

En términos generales, este proyecto es ecléctico, demagógico y hace una utilización antojadiza, que no es casual, del concepto de seguridad. Como muy bien lo apuntó la doctora Lylian Luque, de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, en el proyecto incluso se utiliza la expresión “seguridad humana”, bastardeándola, otorgándole una acepción y un contenido completamente distintos al concebido por las Naciones Unidas, que –según Juan Carlos Domínguez Lostaló en su obra “Hacia un Programa Integral de Desarrollo Comunitario para la Seguridad

Humana en Latinoamérica-“ la Revista alternativa número 1 la entiende como: “El derecho que tienen las personas de vivir seguros y en paz, lo que debe ser conciliado e implementado desde el marco normativo de los derechos humanos. Estos son defendidos en todas sus manifestaciones en las áreas de salud, de educación, de justicia, seguridad y acción social en términos de acceso igualitario –decimos nosotros- para todos los habitantes, sin generar discriminaciones que puedan llegar a favorecer a personas o grupos. Entonces, la seguridad humana, mediante la protección de los derechos humanos, sustenta: el imperio de la ley, la democratización, la solución pacífica de los conflictos.”

El proyecto en tratamiento, desde su enunciado, se contrapone al concepto de seguridad humana que define la ONU, el cual hace referencia a la eficacia de las políticas públicas que son, en definitiva, las que reducirán a largo plazo la conflictividad social. “Si la pretensión es desarrollar un plan integral de seguridad y una acción conjunta citando los conceptos de seguridad humana, habría que partir de analizar si el resto de las políticas sociales implementadas desde el Estado provincial son consecuentes con la intención manifiesta”, palabras dichas por representantes del Colegio de Abogados en ocasión del estudio de este proyecto en tratamiento.

Categoricamente nuestro bloque manifiesta que no es así. Durante esta gestión, en innumerables circunstancias, el bloque de Izquierda Unida ha puesto en evidencia que en lo concreto y en lo cotidiano la política de esta administración en nada se condice con estos postulados, y no voy a entrar a detallar cada uno de los ítem.

Para nosotros, este proyecto viene a reafirmar el concepto de seguridad nacional ligado a las etapas más nefastas de nuestra historia. En líneas generales y pese a la terminología usada y desvirtuada por el proyecto, se puede decir que el mismo constituye un intento de copia del retrógrado modelo neoyorquino. Este ha suscitado grandes críticas debido a la fuerte estigmatización que ha ejercido sobre los sectores más vulnerables socialmente y también por estar nutrido de teorías criminológicas de corte naturista, que llevan hacia una fuerte fragmentación cultural entre los habitantes de la ciudad.

Me he tomado el trabajo de estudiar a Loic Wacquant que tiene muchos escritos sobre esta temática. El dice textualmente: "Esta teoría, nunca confirmada empíricamente, sirve de coartada criminológica para la reorganización de la actividad policial. El objetivo de esta reorganización es calmar el temor de las clases medias y altas mediante el hostigamiento permanente a los pobres en los espacios públicos, en las calles, en las plazas, en las estaciones, ómnibus y subterráneos. Para ello se emplean tres medios: la multiplicación de los efectivos y el equipamiento de las brigadas; la reasignación de las responsabilidades operativas a los comisarios de barrios, con la obligación de obtener resultados en términos cuantitativos; y un relevamiento informatizado, con un archivo central señalético y cartográfico que puede consultarse en las microcomputadoras instaladas en los patrulleros, que permiten el redespiegue constante y la intervención casi instantánea de la fuerza del orden, y redundan en una aplicación inflexible de la ley contra las infracciones menores, como la ebriedad, el ruido, la mendicidad, los atentados a las costumbres, las meras amenazas y otros comportamientos antisociales vinculados a las personas sin techo, según la terminología de Kelling", concluye Wacquant en la página 29, a la que sin duda para nosotros este proyecto tiende explícitamente.

"El modelo implementado por la dupla Rudolph Giuliani y William Bratton, con sus fundamentos en los principios de la criminología neo-conservadora elaborada en centros de estudio e investigación, como el Manhattan Institute y la Heritage Foundation, representan una clara combinación de nuevas tecnologías y técnicas de policiaamiento con una fuerte concepción de la criminalidad como fenómeno individual, producto de la no adaptación de las personas a los valores del mercado. De esta forma, se invierte la ecuación pobreza-delito, llegando a la conclusión de que los pobres y delincuentes se encuentran en esta situación debido a que son naturalmente inferiores al resto de la población". Estas también son palabras de Wacquant en su estudio del año 2000.

Otra de las grandes críticas que ha suscitado el modelo de Nueva York consiste en el enorme aumento de la población carcelaria y, por ende, de toda la industria -paradójicamente privada- de la prisión.

Entre los distintos modelos de seguridad

pública aplicados en las ciudades norteamericanas se observa que aquellas que han utilizado modelos de policía comunitaria, como San Diego o Boston, poseen un número promedio considerablemente menor que las políticas de mano dura seguidas en Nueva York.

Este es el fundamento ideológico del proyecto en discusión, fundamento que consideramos completamente inaceptable en el marco de un proceso de consolidación democrática.

Para empezar a hablar de seguridad pública, tenemos que cambiar las condiciones sociales imperantes. Pero, junto con ello, se debe avanzar en el desmantelamiento del aparato represivo que data de la última dictadura militar, y esto no es una novedad. La permanente violación a los derechos humanos, tal como fue advertido y denunciado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en oportunidad de la presentación del último informe que hizo en nuestro país sobre la vigencia del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, exige la inmediata investigación de toda denuncia y la separación del cargo de todos los involucrados en dichas violaciones. Lamentablemente debemos traer el caso de David Moreno y de Sergio Ferreyra, aún impunes, y donde reconocen responsabilidad desde el propio señor Gobernador de la Provincia de Córdoba y el aparato represivo.

En igual sentido, venimos a expresar a esta Legislatura que este no es el proyecto de seguridad para los ciudadanos en democracia. Un proyecto de seguridad humana, integral, preventivo, con verdadera participación ciudadana, pasa por implementar, en primer lugar, un plan de emergencia para la creación de trabajo genuino, de salario decente, de más salud y más educación para salir de la miseria, de la pobreza y de la indigencia, terminando, de una vez por todas, con las políticas que excluyen socialmente a la mayoría de los argentinos.

Pero también hay medidas específicas que queremos proponer, que se pueden aplicar y que deben partir de la investigación seria de las conductas de todos los agentes involucrados en garantizar la seguridad de los ciudadanos, buscando erradicar definitivamente todo enriquecimiento ilícito y toda fuente de corrupción a los fines de lograr el desmantelamiento de la estructura policial mafiosa, que son los comisarios de grandes casas-quinta, de camionetas 4x4 y de cuentas en el exterior, como Sobrado -aunque Sobrado no solamen-

te es de Buenos Aires porque lo tenemos en Córdoba también- son los que tienen que demostrar que son inocentes; mientras no puedan hacerlo hay que echarlos, hay que expropiarles los bienes mal habidos y encarcelarlos.

Por otra parte, hay que avanzar en la elección directa de los comisarios y de los jueces para que el pueblo, después que los elija, pueda revocarles el mandato cuando no cumplen con las tareas asignadas.

Señor presidente, vemos propicia la sindicalización de las fuerzas policiales para que puedan ser considerados trabajadores de primera, empleados públicos con funciones específicas y no trabajadores de cuarta como lo son actualmente, con derechos, con garantías, con derecho a un salario y a una jubilación digna para que puedan cubrir sus necesidades, con respeto a la jornada de trabajo, a los descansos pertinentes, con la posibilidad de que puedan estar con sus familias, son derecho a la capacitación permanente, a la posibilidad de una carrera profesional única, sin discriminaciones. Que tengan la posibilidad de negarse a cumplir órdenes que violenten los derechos y las garantías constitucionales, por ejemplo, reprimiendo en las protestas sociales o cuando los obligan -como muchas veces ha sucedido- a recaudar para los superiores de turno.

Esta propuesta, señor presidente, se basa en un frondoso cuerpo legal, sustentado constitucionalmente en el Derecho Internacional y en experiencias concretas, como la agremiación policial en las Provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán y Río Negro, sólo para nombrar algunos casos. Negar a los policías su condición de ciudadanos, de trabajadores, de empleados públicos, prohibirles actuar con fines sectoriales -como lo plantea expresamente el artículo 19 del proyecto en tratamiento-, vulnerando el derecho constitucional de la representación colectiva, evidencia el profundo desprecio que tiene esta gestión por los derechos y garantías constitucionales en una manifiesta actitud autoritaria. A los policías se les deben reconocer los mismos derechos -y no voy a decir los mínimos, como se dice en España- que se pretende ellos defiendan.

El delasotismo exige la neutralidad y la necesidad de mantener al margen de la política a la fuerza de seguridad; la policía no puede ni debe

ser neutral, no mezclar a las fuerzas de seguridad con la política es una consigna hipócrita de los sirvientes de los grandes grupos de poder que en los hechos siempre han mezclado a la policía con la política reaccionaria y han convertido a la policía de la Provincia en servidores de las centurias negras y cómplices del Estado policíaco.

La clave es una verdadera participación comunitaria que bajo ningún concepto puede estar condicionada ni subordinada a ministerio u organismo estatal alguno.

Este proyecto no otorga un rol participativo concreto a organismos u otros sectores de la ciudadanía; sólo alude vagamente a ello a través de las Juntas de Participación Ciudadanas y organismos del tercer sector, quienes podrán actuar como órganos auxiliares, consultivos, no vinculantes a la hora de decidir sobre las políticas de seguridad, recopilación de datos, control, etcétera; nada más ni nada menos que "vigilantismo". Es más, deja en manos del Ministerio de Seguridad determinar las competencias, los procedimientos y prioridades de este pretendido plan. La clave es la participación barrial independiente para delinear políticas preventivas frente al delito y contralor férreo de las comisarias.

En los lugares donde esta experiencia se ha ido forjando han bajado los índices de inseguridad; ésta es la movilización que hace falta, no las marchas reclamando mano dura, policías y balas que, al fin y al cabo, no resuelven el problema de fondo y terminan siendo un arma contra los sectores más humildes de la población. Sólo rompiendo este triángulo de impunidad en el que hoy se asienta la inseguridad se podrá realmente encarar una solución efectiva para evitar secuestros, robos, asesinatos, gatillo fácil, etcétera. En este sentido nos parece que los trabajadores y los sectores populares deben organizarse para conseguirlo.

En lo relativo a la organización del Servicio Penitenciario de Córdoba, haciendo nuestras las observaciones y aportes brindadas por la Comisión Intersectorial para la Observación y Seguimiento de la Situación Carcelaria en Córdoba, consideramos que denominarlo como Institución Civil Armada dependiente del Ministerio de Seguridad se opone al fin legal de la pena privativa de la libertad consagrado tanto en la Ley nacional 24.660 como en la provincial 8878 y en este pro-

yecto.

Es decir, el fin de la ejecución de la pena no es la seguridad en sí misma, y el uso de las armas debe estar vinculado solamente a la seguridad externa del establecimiento penal. Además, no estipula en qué forma controlarán los jueces de ejecución penal el funcionamiento del organismo penitenciario, vedando la posibilidad del control jurisdiccional del funcionamiento de las cárceles.

Por otro lado, consideramos que, teniendo en cuenta el fin de reinserción social previsto en la legislación vigente, el diseño de la política penitenciaria y el planeamiento de la misma no deben dejarse sólo a cargo del Ministerio de Seguridad; en realidad deberían depender del organismo de justicia y requieren fundamentalmente del aporte de distintas disciplinas y de distintas instituciones vinculadas a problemáticas sociales, a los fines de trabajar seriamente en pos del cumplimiento efectivo del objetivo constitucional, que es el de la inserción social.

Asimismo, y tomando lo expresado por la licenciada Roxana Gauna, presidenta de la Casa del Liberado, advertimos que la función de mejorar las condiciones morales de las personas alojadas en establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario -enumera entre las funciones de este servicio- no corresponde. No corresponde y es contraria a los objetivos de la pena de prisión previstos tanto en nuestra legislación nacional como en la normativa internacional, siendo además violatoria del principio constitucional de reserva y de respeto a la privacidad que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional, según el cual todas las personas son libres en su accionar mientras no perjudiquen a un tercero. La corrección moral, señor presidente, señores legisladores, es una finalidad ya superada que corresponde a los establecimientos penitenciarios carcelarios de mediados del siglo XIX.

Consideramos que con el modo de regular los salarios de los internos, de acuerdo al presupuesto previsto, sin tener en cuenta la normativa legal nacional y constitucional vigente, se está violando dichas normativas. Entendemos que es inconstitucional y que se opone al fin de reinserción social que incluye el abordaje del trabajo en condiciones similares a la vida libre.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Perdón, señora legisladora. Solicito a los legisladores y público presente que guarden silencio a efectos de escu-

char a quien está en uso de la palabra.

Continúe, señora legisladora.

**Sra. Olivero.**- Gracias, señor presidente. Sé que estamos cansados, pero todos hemos escuchado las distintas intervenciones.

Con respecto a la legislación que aprueba la vigencia de las agencias de seguridad privada como organismos prácticamente parapoliciales, muestra a las claras la ineficacia y la incapacidad de este Poder Ejecutivo para resolver el problema de seguridad que tiene la Provincia de Córdoba de acuerdo con el mandato constitucional. Es un acto de irresponsabilidad política entregar la obligación indelegable del Estado de proveer seguridad a los ciudadanos en manos privadas, bajo la falacia del supuesto control estatal.

No desconocemos el importante número de trabajadores que sin otras oportunidades laborales prestan servicios en ellas, situación que para nada justifica admitirlas legalmente; cuando más, señor presidente, expresan el fracaso de una política de seguridad o, cuando menos, reflejan la falta de recursos policiales acordes con la realidad.

Para cerrar, en la discusión de este megaproyecto que el oficialismo pretende aprobar -una vez más en soledad- queremos afirmar que se confrontan dos modelos políticos, dos doctrinas conceptuales completamente distintas, antagónicas e irreconciliables para nosotros. Una es la de ustedes, la otra es la nuestra.

Más allá de las eventuales falacias del oficialismo -como que de ahora en adelante se democratizan las fuerzas de seguridad porque nombran civiles frente a las instituciones y porque mandan a civiles a hacer tareas administrativas en nombre del Estado policiaco; o se reformula la Orgánica de la Policía- no se discute la esencia del problema de fondo, del legítimo reclamo de seguridad que tiene la mayoría de los ciudadanos de Córdoba. La esencia es el modelo que se pretende instrumentar, que no es otro que el de la seguridad nacional, de la tolerancia cero, de la discriminación, del policiamiento ciudadano, de la criminalización de la pobreza, de la tercerización de la seguridad por la vía privada, es decir, de la profundización de la inseguridad jurídica, política y social de la mayoría de los cordobeses.

Por todo lo expuesto, señor presidente, el bloque de Izquierda Unida va a rechazar esta mega ley propuesta por el oficialismo.

Muchas gracias.



**Sr. Presidente (Fortuna).**- Gracias, señora legisladora.

Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.

**Sr. Mosquera.**- Gracias, señor presidente.

Desde hace algún tiempo a esta parte es cucho, no con algún grado de sorpresa, algunos adjetivos calificativos que se ciernen sobre nuestra Córdoba.

El año pasado un matutino nacional calificaba a la ciudad de Río Cuarto como la capital nacional de la prostitución infantil. Hace pocas sesiones, en oportunidad que esta Legislatura tratara un convenio suscripto entre la Lotería de Córdoba y la empresa adjudicataria del juego en la Provincia, se adjetivaba nuevamente a Córdoba como el garito más grande de Argentina. Y en el transcurso de esta sesión no han faltado los discursos que han hablado de corrupción policial, narcotráfico, corrupción política, jueces corruptos. ¡Esta no es mi Córdoba! Admitir que esa es nuestra Córdoba sería tan falaz como negar el problema de la seguridad.

Se han hecho consideraciones políticas de todo tipo, muchas de las cuales no comparto. El legislador Fonseca, que en este momento no está lamentablemente, le atribuía a un gobierno anterior los males de la Argentina, pero guardaba silencio en relación a sus venerados Verbinsky o Chacho Álvarez, cuando huyeron del gobierno generando la crisis social, política y cultural más profunda de los últimos tiempos.

Si vamos a hablar de la problemática de seguridad, hagámoslo como corresponde, sin intentar sacar provechos mezquinos que infecten el análisis adecuado.

También debo admitir que se han cometido inexactitudes. El legislador Abelardo Karl dijo que el texto legal soslaya los derechos humanos en relación a los deberes de la Policía de la Provincia, y esto no es así. En el artículo 23, a instancias de este bloque y con la anuencia de los integrantes de la Comisión del bloque de la mayoría, se estableció textualmente en el último inciso, en el que se especifican los deberes de la Policía de la Provincia de Córdoba: "Observar y hacer observar, en cuanto de la institución dependa, los derechos humanos". Entonces, tengo la impresión que se omiten aviesamente algunos aspectos sobresa-

lientes de esta ley.

Permítame, señor presidente, calificar esta ley como un verdadero avance jurídico en relación a las instituciones sobre las que versa. Córdoba vive, desde hace algunos años, un verdadero y profundo proceso de renovación y cambio de las instituciones, empezando por el Poder Legislativo y siguiendo por el Poder Judicial. Es hora entonces de que el proceso de modernización del Estado llegue también a una institución centenaria como es la Policía de la Provincia de Córdoba.

Lejos de alarmarme la primera plana de La Voz del Interior, me gratifica, señor presidente. No me asusta -y a nadie debe asustar- la alternativa remota pero posible de que un civil conduzca los destinos de la Policía de la Provincia de Córdoba. ¿Y sabe por qué no le temo, señor presidente? Porque a las autoridades de la Provincia, legal y constitucionalmente constituidas, no se les teme, se las respeta. Y esto no puede ser motivo para generar intranquilidades de ninguna naturaleza; es un reclamo, desde hace ya tiempo, que muchos policías afectados a tareas administrativas pasen a cumplir el objetivo específico para el que han sido formados; y esta ley lo prevé, aspecto éste que me parece sobresaliente.

Estoy convencido, señor presidente, de que este es un fuerte y verdadero avance para incorporar definitivamente el valor de la seguridad y la reconciliación de la Policía de la Provincia de Córdoba con la sociedad civil. No comparto aquello que demagógicamente se dice, que no es con más efectivos o con más patrullaje como se contribuye a evitar el delito; creo que muchas veces es necesario contar con mayor cantidad de efectivos y de patrullaje.

En lo que respecta al Capítulo del Servicio Penitenciario, también se han cometido inexactitudes. Se expresó, por ejemplo, que esta ley omitía expresamente los postulados de la Ley nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. No es verdad. El artículo 52, en su inciso I), establece expresamente: "Al servicio penitenciario de la Provincia le compete asegurar el cumplimiento de las disposiciones que en materia de educación, asistencia espiritual, trabajo y observancia irrestricta de los derechos humanos, establece la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Ley Nacional 24660). "

Ese fue uno de los reclamos que realizó en el día de ayer, en el seno de la Comisión de Legislación General, la Sala de Criminología y Derechos Humanos del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba, y aquí está recepcionado.

Por eso es que verdaderamente no coincido con las calificaciones de algunos medios, que juzgan a esta ley como "polémica Ley de Seguridad".

La política de Estado es aquella que instrumenta un gobierno legítimamente electo y el pueblo la hace propia. No es necesario que sea producto de los consensos previos porque nosotros legislamos en abstracto y luego a estos instrumentos hay que aplicarlos en la práctica, y es allí cuando se verá si realmente se incorpora en el espíritu del cuerpo social como una política de Estado. La reticencia al cambio -creo que es la primera bolilla, en Sociología de la Facultad de Derecho-, inexorablemente genera actitudes reticentes, fundamentalmente de aquel sector donde ese cambio va a repercutir.

Finalmente, y en relación al capítulo que versa sobre la seguridad privada, se ha dicho que aprobar este plexo es prácticamente otorgarle un carácter parapoliciaco, y si precisamente en algo avanza esta ley es en restarle este carácter ya que no pueden llevar armas, deben estar incorporadas en el Registro abierto a tal fin, deben regularizar su estado muchas de aquellas que hoy están operando sin estar debidamente registradas, con la imposibilidad de utilizar distintivos o uniformes similares a las Fuerzas Oficiales de Seguridad. ¿Por qué no tener una visión totalizadora del problema de la seguridad e imaginar que estos 4 o 5 mil vigiladores privados no pueden contribuir decididamente en un proceso de mancomunidad para garantizar la seguridad pública?

No soy un enemigo de la Policía de la Provincia de Córdoba. He escuchado discursos harto contradictorios; he escuchado -porque no se animan a decir todo lo que piensan- que la Policía de la Provincia de Córdoba es una centenaria institución y tras cartón hablar de la Policía represiva de la Provincia de Córdoba.

La Policía de la Provincia de Córdoba es un reflejo de nuestra sociedad y desde el año 1983 a la fecha, lentamente pero sin pausas, ha ido adquiriendo los mismos valores democráticos que el conjunto del pueblo de Córdoba, quizás esta ley pueda contribuir definitivamente a ese proceso de

democratización.

Porque así verdaderamente lo considera el bloque de Córdoba Justicialista, adelanto el voto afirmativo a este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra el legislador Trad.

**Sr. Trad.**- Señor presidente: luego de escuchar el pormenorizado y convincente análisis realizado por mi compañero de bancada, doctor Luis Arias, resulta escaso el margen que nos queda para incursionar en algún tema específico contenido en el instrumento jurídico sometido a consideración de esta Legislatura.

La importancia del tema, su repercusión social, los sagrados intereses colectivos en juego y especialmente la naturaleza jurídica de la cuestión objeto de tratamiento, me obligan a irrumpir brevemente en el análisis de un instituto novedoso plasmado en el proyecto y que tiene, a criterio del suscripto, enorme trascendencia.

Me estoy refiriendo, obviamente, a la constitución de las Juntas de Participación Ciudadana para la prevención integral, sistematizada en un capítulo específico de la Ley de Seguridad, contenido en el título del Plan Estratégico Provincial.

El reconocimiento legal de la participación ciudadana en todos los órdenes ha sido -y lo es desde siempre- para este Gobierno de Córdoba una constante política de estado. Sólo a título de ejemplo me voy a permitir manifestar que no hace mucho tiempo esta misma Legislatura sancionó la ley que instrumenta la instauración de los Jurados Populares, cuyos integrantes son ciudadanos comunes que tendrán a su cargo la responsabilidad de juzgar a delincuentes autores, entre otros, de delitos de corrupción y los más aberrantes reprimidos por nuestra ley penal.

Esta política de estado implementada por nuestro Gobierno en el sentido expresado merece una especial consideración en razón del interés general en juego, circunstancia ésta que me ha impulsado a hacer algunas otras reflexiones que solidifican aún más los contundentes argumentos expresados con anterioridad por el compañero legislador Arias.

En ese entendimiento resulta oportuno previamente preguntarse cuál es la significación que tiene la participación ciudadana en el quehacer de la comunidad. No tengo dudas que la presencia ciudadana en la toma de decisiones de los asun-

tos públicos es uno de los fundamentos básicos sustentables para alcanzar la gobernabilidad democrática. A medida que el ejercicio del poder está más legitimado en la voluntad obtenida a través del consenso social, mayores son las posibilidades de visualizar las aspiraciones de los diferentes sectores sociales.

Es evidente que la realización progresiva de los derechos humanos está en relación directamente proporcional al aumento de la calidad de la participación ciudadana. Tal representación, manifestada a través de las organizaciones locales y regionales -como sabiamente lo destaca el proyecto en tratamiento-, debe ser generosa, teniendo especial cuidado de no caer en la cultura de la exclusión de algunos sectores en la toma de decisiones, porque en la medida que disminuye el ámbito de participación, el consenso se reduce a minorías que no representan la sustentabilidad de los intereses de la sociedad.

El conocido abogado costarricense doctor Rafael González Ballard define la participación ciudadana como un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando en forma conjunta en la toma de decisiones, la fiscalización, el control y la ejecución de las acciones en asuntos públicos y privados que afectan en lo político, económico, social y ambiental, para permitir su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve.

Todo lo manifestado es válido al tiempo de incursionar en la seguridad pública como eje sustentable del bienestar general. La participación ciudadana en tal campo de acción responde a estrategias globales de seguridad íntimamente vinculadas a un plan integral abarcativo de políticas que tienen que ver con la prevención y no solamente con aquellas relacionadas a la represión.

En el proyecto objeto de tratamiento encontramos los elementos jurídicos indispensables que tienden a potenciar los niveles de relaciones existentes entre los diferentes organismos de participación de los municipios, comunas, legisladores nacionales, provinciales, clubes, etcétera, tal como lo señala el artículo 13 del proyecto; que tienden a colaborar en el proceso de descentralización contribuyendo a horizontalizar la participación ciudadana y a valorizarla como una contribución

destinada a la proyección y ejecución de acciones futuras; que tienden a optimizar los recursos existentes en cada región, barrio o comunidad; y, por último, que tienden a institucionalizar una visión de la comunidad como un sistema donde cada subsistema -escuelas, municipios, comunas, ONGs, etcétera- se acople sin perder su singularidad, generando de ese modo acciones comprometidas, solidarias y consensuadas.

Señores legisladores, la participación hace también a la protección de los ciudadanos en el ámbito de la seguridad y de la convivencia, facilitando, sin lugar a dudas, el ejercicio de los derechos y libertades mediante la eliminación de la violencia en las relaciones sociales, y también contribuye a la remoción de obstáculos que se opongan a la plenitud de dichas libertades y derechos.

En este proyecto encontramos el sustento jurídico dentro del cual se puede encuadrar el accionar de la comunidad organizada en defensa de los propios derechos manteniendo así un positivo equilibrio entre la libertad y la seguridad. En definitiva, resulta ser precisamente el espíritu del que está impregnado el cuerpo normativo del debate: la participación ciudadana comprometida, responsable, organizada y solidaria con el medio social en el que vive a fin de superar la inseguridad, el miedo y la desesperanza, logrando así el referencial de una sociedad justa, democrática y participativa.

Señores legisladores: estamos frente a la gran oportunidad de hacer realidad un viejo sueño de la sociedad cordobesa. Estoy convencido de que no la perderemos por el solo hecho de anteponer al interés general los mezquinos intereses de algunos pocos. La sensibilidad e inteligencia de los legisladores, en perfecta consonancia con la realidad que vivimos, prevalecerán sin duda alguna al momento de la votación afirmativa del proyecto y nos habremos convertido, de ese modo, en los protagonistas comunes de todos los cordobeses.

Gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra el señor legislador Massei.

**Sr. Massei.**- Señor presidente, vamos concluyendo el debate en el cual todos los bloques hemos podido participar extensamente opinando sobre esta importante ley, no sólo para el

Gobierno sino para, al ser una política de Estado, los futuros gobiernos de la Provincia.

Quisiera hacer un breve racconto de los objetivos que planteamos en esta ley a la que dimos en considerar como una democratización de las políticas de seguridad y del accionar policial, que tiene dos cuestiones básicas y fundamentales: esta ley va de la represión a la prevención, teniendo como segundo ítem fundamental el desarrollo humano como única garantía de paz y convivencia social.

El proyecto de ley que estamos tratando, se desarrolla a través de tres ejes fundamentales. Uno de ellos, muy importante, es el Tribunal de Conducta Policial, que se traduce en un control ciudadano objetivo sobre la institución policial como garante de honestidad y legalidad del accionar policial y penitenciario, ya que hemos incluido al Servicio Penitenciario en las atribuciones de la Ley del Tribunal de Conducta Policial. La Policía de la Provincia y el Servicio Penitenciario ya no se controlan ni se juzgan a sí mismos; son los civiles, a través del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, en el Tribunal de Conducta, quienes van a juzgar su honestidad, su honra y su conducta.

El segundo eje importante es la modernización, capacitación, especialización y eficientización de la Policía Preventiva para mejorar las técnicas y las tácticas, dotándolas de los más modernos medios de prevención e investigación.

El tercer elemento, desarrollado muy bien por los legisladores preopinantes de mi bloque -especialmente por el legislador Trad- es la participación activa y comprometida de la ciudadanía en las políticas de prevención.

Se ha hablado mucho del control del Ministerio de Seguridad sobre estas políticas de participación activa; creemos que debe haber un apoyo interdisciplinario e interministerial coordinado con el Ministerio de Seguridad. Pero esa coordinación no da órdenes, señor presidente, sólo es a los fines de la organización.

Cuando desarrollamos el proyecto de ley, se concibió un Plan Estratégico de Prevención Integral, donde establecemos un Gabinete Social para la Prevención, en el que habrá un equipo técnico también interministerial que interactuará, a través de la firma de convenios, con municipios y comunas o con las Juntas de Participación Ciudadana que se integren en cada uno de los barrios

de Córdoba o en parte o en todas las pequeñas comunas, localidades o municipios. Allí pueden participar organizaciones no gubernamentales, instituciones de culto y toda otra institución pública o privada que pueda llevar adelante la tarea preventiva. En ese plan también está integrada la Policía, no para ordenar y decir qué es lo que se tiene que hacer, sino para llevar adelante esta política de prevención que quiere la ciudadanía.

Cuando hablamos de Gabinete Social para la Prevención, tenemos que dejar muy claro algunos conceptos aquí vertidos. Si hay un delito, señor presidente, derivado de la pobreza y la marginación, no se combatirá con represión. Nosotros estamos totalmente convencidos de eso, aunque algunos legisladores opositores hayan deslizado una opinión contraria. El delito derivado de la pobreza y la marginación no se puede reprimir, sino que se tiene que prevenir con políticas sociales, y eso es lo que efectivamente nosotros hacemos. Ejemplos a la vista: erradicación de villas miseria, expropiación de terrenos para que esa gente que está viviendo en terrenos ajenos y con casas prefabricadas tengan la posibilidad de que les lleguen los servicios básicos indispensables, etcétera. De esa manera trabajamos contra el delito no organizado derivado de la pobreza y la marginalidad.

Por eso, a la participación ciudadana a través de las redes comunitarias que van a ir entrelazándose le damos una especial importancia. Es un diseño de estrategia de prevención que forma el corazón de la ley; debe ser integral y estar promovida no sólo a través del texto de la ley sino por nuestro Gobierno y sostenida con el compromiso y la acción de todos los actores comunitarios.

Seguramente, toda esta política de Estado tiene que dar una respuesta a la prevención de la violencia, de las adicciones, del delito; a la sensibilización y la capacitación y, fundamentalmente, al abordaje social de grupos vulnerables.

Por eso, señor presidente, a pesar de que respetamos y valoramos la lucha del señor Blumberg, esto no tiene nada que ver con el Manhattan Institute ni con la Ley de "Tolerancia Cero" aplicada por el alcalde de Nueva York, Giuliani. Y digo que no tiene nada que ver porque vamos de la represión a la prevención, elaboramos un proyecto y un plan estratégico de seguridad cordobés, que creo es el primero a nivel nacional, ojalá muchas provincias nos imiten.

No me voy a extender mucho más, pero

quiero recordar que hubo muchos hechos trágicos en la historia pasada y reciente que tienen que ver con desgracias ocurridas a los cordobeses y, tal vez, relacionados con algún problema de la policía. Hemos tenido hechos trágicos, como la represión de la dictadura de 1976, donde la Policía jugó un eje fundamental o, ya en democracia, el crimen de Maders; también, haciendo una autocrítica, durante nuestro Gobierno los muertos de la penitenciaría o la muerte del joven hincha de fútbol.

Pero creemos que tenemos que hacer una política de Estado donde la policía esté subordinada al poder civil. Cuando digo subordinada al poder civil digo política de Estado, digo subordinada al Gobierno y a su política de seguridad.

Para terminar, señor presidente, quiero expresar que respeto y valoro lo planteado por algunos bloques de las minorías al fundamentar el rechazo a este proyecto de ley, lo hago teniendo en cuenta el punto de vista de su idiosincrasia y de su ideología; en base a eso es muy difícil que nos acompañen.

He escuchado muchas críticas constructivas, algunas otras políticas, desde distintas concepciones ideológicas, pero lo que nuestro bloque no ha escuchado es una propuesta alternativa, atendiendo a que este proyecto lleva seis meses en esta Cámara ya que tuvo ingreso en noviembre.

Respetamos y valoramos las críticas constructivas y políticas pero tenemos que avanzar y darle a nuestro Gobierno provincial -del cual este bloque de Unión por Córdoba es parte- los elementos que necesita, porque no nos caracterizamos precisamente por ser un Gobierno de inacción o sin ideas sino por hacer, aunque nos equivoquemos, por construir y tratar de dar respuesta a los problemas.

Un legislador preopinante dijo que las leyes pueden ser muy buenas pero lo que importa es poder aplicarlas. Nosotros le tenemos que dar al Gobierno esta herramienta porque ha sido elegido para gobernar y dar respuestas a las inquietudes de todos los ciudadanos de Córdoba.

Vamos a llevar adelante todos los proyectos que posibiliten al Gobernador De la Sota contar con las herramientas necesarias para cumplir con el pueblo que confió en nosotros y está esperando mayor seguridad y satisfacción. En este ca-

so vamos a darle esta herramienta aunque no nos acompañen algunos bloques de la minoría.

Destaco y valoro el acompañamiento del bloque de Córdoba Justicialista, respeto la abstención del bloque del Partido País y la concepción ideológica de los partidos que rechazan este proyecto, que tienen sus motivos, aunque la nuestra para llevarlo adelante es el compromiso con el pueblo.

Muchas gracias.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra el señor legislador Karl.

**Sr. Karl.**- Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical está convencido de que la política de Estado no es de un solo bloque. Por lo tanto, vamos a mocionar que la votación del proyecto 6567/E/04 sea nominal.

Muchas gracias.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra el señor legislador Arias.

**Sr. Arias.**- Señor presidente: advierto que en el artículo 23 del proyecto se ha deslizado un error material puesto que del inciso n) se pasa al inciso o). En virtud de ello, solicito que se autorice a la Secretaría para salvar ese error y agregar el inciso ñ).

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Así se hará, señor legislador.

En consideración la abstención solicitada por el bloque País.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobada.

En consideración la moción de votación nominal formulada por el legislador Karl.

-Se vota y rechaza.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Rechazada.

En consideración el despacho emitido en general...

Tiene la palabra el señor legislador Massa.

**Sr. Massa.**- Señor presidente, es una breve interrupción para solicitar la votación por vía electrónica.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Así se hará, señor legislador.

En consideración, en primer lugar, el despacho en general para la primera propuesta de ley contenida en el proyecto de ley 6567/E/04, referida a Seguridad Pública.

La votación se hará por el sistema digital.

Los señores legisladores que estén por la afirmativa sírvanse presionar el botón verde, los que estén por la negativa sírvanse presionar el botón rojo y los que se abstengan no tienen que presionar ningún botón.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

Ha habido 40 votos por la afirmativa, 19 por la negativa y 2 abstenciones.

Tiene la palabra la señora legisladora Taquela.

**Sra. Taquela.**- Señor presidente, evidentemente debe haber habido alguna falla en el sistema. Solicito por favor, en nombre del bloque del Frente Nuevo, que chequee la votación de la banca 67 que aparentemente no habría sido registrada.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Me informan por Secretaría que la legisladora se levantó en el momento de la votación y quedó como que no estaba.

Tiene la palabra el señor legislador Massei.

**Sr. Massei.**- Señor presidente, hemos terminado de votar. Si la legisladora ha votado negativamente, que deje constancia en la versión taquigráfica del voto negativo y se terminó el tema. Nosotros hemos votado como corresponde.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Así se hará si no hay objeciones por parte del Frente Nuevo.

Tiene la palabra el señor legislador Karl.

**Sr. Karl.**- Es a los efectos de solicitar, a través de la Presidencia, la reconsideración de la votación del proyecto.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración la moción de reconsideración efectuada por el legislador Karl.

Los señores legisladores que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Rechazada.

Solicito a los señores legisladores que esperen hasta que la Presidencia les de la palabra.

Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.

**Sra. Olivero.**- Señor presidente: deseo plantear que si éramos 21 y uno de los legisladores no se cuenta porque no estaba en la banca, siguen quedando 20, y en la pantalla figuraban 19; debe haber otro voto que no está registrado.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Pudo existir otra dificultad; pudo suceder que no se haya pulsado el

botón o que se haya votado a favor.

Tiene la palabra el señor legislador Massei.

**Sr. Massei.**- Señor presidente, quiero dejar muy clara esta votación. El bloque de Unión por Córdoba, juntamente con el voto afirmativo de Córdoba Justicialista, tiene absoluta mayoría. Hemos votado bien, y si alguien más votó a favor del bloque de Unión por Córdoba nos alegramos.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Si no se hace uso de la palabra, vamos a pasar a la votación en particular. Se votará a mano alzada y por Título.

En consideración la Parte I, Título I, artículos 1º al 6º.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

En consideración el Título II, artículos 7º al

14.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

En consideración la Parte II, Título I, artículos 15 al 24, con la modificación solicitada por el legislador Luis Arias con respecto al artículo 23.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

En consideración el Título II, artículos 25 al

47.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

En consideración la Parte III, Título I, artículos 48 al 54.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

En consideración el Título II, artículos 55 al

83.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

En consideración la Parte IV, Título I, artículos 84 al 87.

Los que estén por la afirmativa sírvanse

expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

El artículo 88 es de forma. Queda aprobado en general y en particular.

Se comunica al Poder Ejecutivo provincial.

En consideración en general la segunda propuesta contenida en el despacho del proyecto 6567, referido al Régimen de los Servicios de Prestación Privada de Seguridad, Vigilancia e Investigación.

Vamos a votar a mano alzada. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado en general.

Si no hay objeciones haremos la votación en particular por Capítulo.

En consideración el Capítulo Primero, artículos 1º al 8º.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

En consideración el Capítulo Segundo, artículo 9º.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

En consideración el Capítulo tercero, artículo 10.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

En consideración el Capítulo Cuarto, artículos 11 al 14.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

En consideración el Capítulo Quinto, artículos 15 al 29.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

En consideración el Capítulo Sexto, artículo 30.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

En consideración el Capítulo Séptimo, artículo 31.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

En consideración el Capítulo Octavo, artículo 32.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

En consideración el Capítulo Noveno, artículos 33 al 35.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

En consideración el Capítulo Décimo, artículos 36 al 40.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

En consideración el Capítulo Undécimo, artículos 41 al 44.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

En consideración el Capítulo Décimo Segundo, artículos 45 al 50.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

En consideración el Capítulo Décimo Tercero, artículos 51 y 52.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- El artículo 53 es de forma.

Queda aprobado el proyecto en general y en particular.

Se comunica al Poder Ejecutivo provincial.

Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.

**Sr. Nicolás.-** Señor presidente: solicito que Secretaría me informe, a través de la Presidencia, el resultado de la votación que se acaba de realizar, capítulo por capítulo, porque se hizo con una velocidad increíble.

-La Presidencia consulta con el Secretario sobre el resultado.

**Sr. Nicolás.-** ¿Cómo puede haber dado por aprobado el proyecto si no conoce el resultado?

**Sr. Presidente (Fortuna).-** Le solicité a Secretaría que me informara para corroborar el resultado que obtuve al contar cuando levantaron las manos.

-Secretaría informa a la Presidencia el resultado.

**Sr. Presidente (Fortuna).-** Secretaría me informa que el resultado es 40 votos por la afirmativa, 19 por la negativa y 2 abstenciones.

#### PROYECTO DE LEY – 06567/E/04 MENSAJE

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba, con su consecuente exposición de motivos, en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 144 inciso 3º de la Constitución Provincial.

Desde el inicio del nuevo mandato institucional y con la creación del Ministerio de Seguridad, se comenzó a diseñar una política de Estado en materia de Seguridad basada en la concurrencia de los tres poderes del Estado, en su discusión y en la participación multisectorial. Ahora es el momento que esa política de Estado adquiera cohesión a través de la adecuación del andamiaje normativo. Ello implica devolverle la tranquilidad a los ciudadanos que temen por su seguridad y por lo tanto significa legislar de manera ordenada y sistemática, escuchando a la gente y desarrollando mecanismos cada vez más ágiles que garanticen la disuasión, la prevención, la conjuración temprana del delito y su represión efectiva. En este sentido el presente proyecto persigue la unificación legislativa en materia de seguridad, a los efectos de evitar la dispersión normativa, vicio que generalmente impide una adecuada inteligencia de los fines de la norma.

En este proyecto de ley se establecen en una primera parte los fines y el objeto de una política de seguridad como Política de estado y se señalan los organismos comprometidos con la obtención del orden y la tranquilidad pública, así como también las relaciones entre ellos. Especialmente el manejo racional de los datos del delito, que permita la toma de decisiones acertadas y oportunas en la lucha contra la inseguridad, todo ello a través de un centro de concentración de datos, con el cual se hallan comprometidos todos los integrantes del

sistema provincial de seguridad pública.

Dentro de estos organismos, la Institución policial es uno de los pilares fundamentales de la seguridad pública, por lo que en este proyecto de ley se establece la estructura orgánica de la fuerza, la que permitirá reorganizar los recursos policiales a los fines de posibilitar una más ágil y eficiente lucha contra el delito, mediante la readecuación de los recursos, evitando el sobredimensionamiento de tareas administrativas en el personal de la fuerza e insertando el planeamiento Ministerial en la determinación de la política criminal.

Asimismo este proyecto reconoce la necesidad del involucramiento de la sociedad civil en la reducción de las inconductas, por lo que se establecen ámbitos no burocratizados, a través de un plan de participación ciudadana, que permita escuchar a los vecinos, garantizando así la participación de la comunidad, estableciendo espacios eficaces para la reconstitución de redes sociales que hagan efectiva la prevención integral en pos de la seguridad humana.

Dentro de los esfuerzos institucionales que en este sentido ya se han instrumentado, se encuentra la creación del Tribunal de Conducta Policial, órgano responsable del efectivo control civil de la fuerza policial y encargado del juzgamiento de las inconductas de los efectivos policiales en materia de faltas leves, graves y gravísimas, como así también el control de gestión y la formación de la fuerza policial. Se pretende por el presente darle fuerza normativa a una estructura que ya ha demostrado excelentes resultados en materia de control civil y republicano de la fuerza.

De igual manera, este proyecto propugna extender los efectos de la aplicación del paradigma del no-autocontrol al Servicio Penitenciario, en cuanto éste constituye un organismo de vital importancia para la reinserción social del condenado en la procura de obtener el respeto a la ley.

También se regula otra manera de injerencia privada en materia de seguridad como son las Agencias de Servicios de Vigilancia, las que como auxiliares del sistema de seguridad pública se encuentran contempladas en el presente proyecto.

Ello se integra con la profundización ya lograda en la participación de la ciudadanía en el Poder Judicial haciendo obligatoria la integración en mayoría de jurados populares para que el pueblo juzgue a los sometidos a proceso en casos de corrupción y delitos aberrantes.

Estas medidas son las que permiten hablar, con base en la realidad incontestable de los hechos, de una verdadera Política de Estado en Materia de Seguridad en la Provincia de Córdoba.

Saludan al Sr. Presidente con su mayor consideración.

**José Manuel De la Sota, Carlos Alessandri.**



**LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
SANCIONA CON FUERZA DE  
LEY:**

**LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA  
PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA**

**PARTE I  
DEL OBJETO DE LA LEY Y DEL SISTEMA  
PROVINCIAL  
DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**TÍTULO ÚNICO**

**Capítulo Primero  
De la Seguridad Pública**

**Artículo 1.-** La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular la prestación del servicio de seguridad pública, los servicios privados de seguridad; y las relaciones que surjan entre los integrantes del Sistema Provincial de Seguridad Pública, las autoridades provinciales y la comunidad, con motivo de la prestación de este servicio.

**Artículo 2.-** Para los efectos de esta Ley, la seguridad pública es la función a cargo exclusivo del Estado Provincial que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública, cuya vigencia se alcanza dentro del Estado de Derecho, mostrándose como el goce y pleno ejercicio por parte de las personas de las libertades, derechos y garantías constitucionalmente consagradas.

**Artículo 3.-** La seguridad pública es un servicio cuya prestación tiene por objeto:

I. Mantener el orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la Provincia de Córdoba;

II. Proteger la integridad física de las personas así como sus bienes;

III. Promover y coordinar los programas de disuasión y prevención de contravenciones y delitos;

IV. Establecer los mecanismos de coordinación y colaboración para la investigación y conjuración temprana de contravenciones y delitos, la persecución y sanción de sus autores, así como para el intercambio de información delictiva en los términos de esta Ley;

V. Dirigir y coordinar los organismos de ejecución de pena, a los fines de lograr de la reinserción social del condenado, en cumplimiento de la legislación vigente; y

VI. Señalar los mecanismos de coordinación entre las diversas autoridades para apoyo y auxilio a la población en casos de siniestros o desastres, conforme a

los ordenamientos legales de la materia.

**Artículo 4.-** El Ministerio Público Fiscal, además de las atribuciones que le corresponden, coadyuvará, en el ámbito de su competencia, a alcanzar los fines y al cumplimiento del objeto de la presente Ley.

**Artículo 5.-** Los Integrantes del Sistema Provincial de Seguridad Pública son:

I. La Policía de Seguridad, a través del Ministerio de Seguridad;

II. El Tribunal de Conducta Policial, a través de su Presidente; y

Los demás que se constituyan de acuerdo a la Ley.

**Artículo 6.-** Son Integrantes auxiliares del Sistema Provincial de Seguridad Pública:

I. La Dirección de Defensa Civil;

II. Los Cuerpos de Bomberos y Rescate;

III. Las Juntas de Participación Ciudadana para la Prevención por la Paz y la Convivencia Social;

IV. El Servicio Penitenciario Provincial;

V. La Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito;

VI. La Gerencia de Seguridad Náutica;

VII. La Gerencia de Agencias Privadas; y

VIII. Los demás que se constituyan de acuerdo a la Ley.

**Artículo 7.-** El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Seguridad, podrá concertar y coordinar con las municipalidades las medidas tendientes al efectivo cumplimiento de los fines de la presente Ley.

**Capítulo Segundo**

**Relaciones entre los Integrantes del Sistema  
Provincial de Seguridad Pública**

**Artículo 8.-** Los Integrantes del Sistema Provincial de Seguridad Pública, a que se refieren los artículos anteriores, para el cumplimiento de los fines de seguridad pública, desempeñarán sus funciones bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad. A tales fines créase en el ámbito del Ministerio de Seguridad el Centro de Obtención, Almacenamiento y Análisis de Datos, el que tendrá a su cargo la administración de la información relativa a la Seguridad Pública. Los Integrantes del Sistema Provincial de Seguridad Pública deberán proporcionar al referido Centro los datos que la reglamentación establezca y en la manera en que la misma lo disponga.

**Capítulo Tercero**

**Relación entre la Policía de Seguridad y la  
Policía Judicial**

**Artículo 9.-** La Policía Judicial y la Policía de la Provincia procurarán llevar a cabo sus funciones específicas de manera coordinada, priorizando el trabajo en conjunto y la colaboración mutua, en procura de lograr

sus respectivos objetivos con la máxima eficacia y eficiencia.

**Artículo 10.-** Tanto la Policía de la Provincia como la Policía Judicial procurarán facilitarse mutuamente la información proveniente de registros o bases de datos confeccionados en sus respectivos ámbitos, cuando dicha información resulte útil para la organización de operativos o medidas de prevención del delito o para la investigación de hechos delictivos ya cometidos.

En particular, la Policía Judicial facilitará a la Policía de la Provincia la información surgida de las denuncias de hechos delictivos receptadas en las unidades judiciales, que resulte necesaria para la conformación de herramientas a aplicar en la prevención de delitos, como mapeos criminales. Por su parte, la Policía de la Provincia facilitará a la Policía Judicial la información surgida de las actuaciones labradas por contravenciones, que resulte necesaria para tareas de análisis criminal vinculadas a la investigación de delitos. Cuando se trate de datos sobre denuncias contra un funcionario público o un agente de la Policía de Seguridad, de la Policía Judicial, del Servicio Penitenciario o de otras fuerzas de seguridad, deberán excluirse de la información a facilitar los datos personales del denunciado y del denunciante.

En todas las investigaciones de delitos en que la Policía de la Provincia intervenga en colaboración con la Policía Judicial, ambas procurarán actuar en forma coordinada, facilitándose mutuamente toda la información pertinente y útil para la investigación.

Deberán, asimismo, llevar a cabo los actos que le son propios respetando los límites funcionales establecidos en la legislación vigente y en la presente.

**Artículo 11.-** El Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal llevarán adelante conjuntamente los procesos de modernización tecnológica de la Policía de Seguridad y la Policía Judicial que, por sus características, correspondan a las funciones específicas de una y otra, como informatización, compra o puesta en marcha de registros digitalizados de información útil para la prevención y la investigación del delito, etc., facilitando las condiciones formales y materiales necesarias.

**Artículo 12.-** Las autoridades garantizarán que tanto la Policía de la Provincia como la Policía Judicial tengan iguales posibilidades de acceso a registros nacionales de información útil para la prevención e investigación del delito.

**Artículo 13.-** La Policía Judicial no interviene en la organización de tareas de prevención del delito, sin perjuicio de los deberes de colaboración señalados en los artículos precedentes. Por regla, los integrantes de la Policía Judicial no están autorizados a portar armas en su quehacer investigativo, salvo en determinados casos concretos, cuando, por sus características, pueda estar en riesgo la integridad física de aquellos, y siempre que medie expresa autorización del Sr. Fiscal General de la Provincia, y cuyo uso no podrá exceder estrictos fines de

defensa personal.

## PARTE II DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

### Título ÚNICO DEL PLAN PROVINCIAL ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN INTEGRAL POR LA PAZ Y LA CONVIVENCIA SOCIAL

**Artículo 14.-** Créase en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, el Plan Provincial Estratégico de Prevención Integral por la Paz y la Convivencia Social.

**Artículo 15.-** El Plan tiene por finalidad, promover el desarrollo humano en un proceso que estimule el compromiso social y reconstituya redes sociales que privilegien una acción preventiva de anticipación de conflictos y la atención de las personas en condiciones de vulnerabilidad social.

**Artículo 16.-** El Plan tiene los siguientes objetivos:

- a) Estimular y promover una cultura de la prevención a través de la sensibilización de la comunidad y la capacitación de los actores sociales;
- b) Promover la participación y el compromiso social para el diseño e implementación de estrategias de prevención integral;
- c) Desarrollar estrategias sociales, educativas, culturales, organizativas y toda otra que, con la intervención participativa de la comunidad, tiendan a modificar las condiciones que impulsan a la violencia y al delito;
- d) Articular el accionar de las distintas áreas gubernamentales y de instituciones públicas y privadas para fortalecer la base institucional existente y así responder con un enfoque multisectorial a la problemática de la violencia y el delito; y
- e) Estimular y apoyar las iniciativas y acciones de prevención de la violencia y del delito que los vecinos o instituciones de bien público realicen, enmarcadas en el irrestricto respeto por los Derechos Humanos.

**Artículo 17.-** El Ministerio de Seguridad propiciará la constitución de Juntas de Participación Ciudadana para la Prevención por la Paz y la Convivencia Social como ámbitos de encuentro comunitario donde se desarrollen los programas, proyectos y actividades que garanticen el cumplimiento de los objetivos del Plan.

**Artículo 18.-** Las Juntas de Participación Ciudadana para la Prevención por la Paz y la Convivencia Social, deberán constituirse a los fines de atender las específicas problemáticas regionales - locales, para lo cual el Estado Provincial, a través del Ministerio de Seguridad aportará los medios necesarios para la realización de programas y proyectos de autogestión comunitaria con el apoyo de las distintas áreas gubernamentales.

**Artículo 19.-** Las Juntas de Participación Ciudadana para la Prevención por la Paz y la Convivencia So-

cial podrán tener como sede de reunión locales municipales, escuelas, comisarias, centros vecinales, clubes, o todo lugar que favorezca y estimule la participación de la comunidad.

**Artículo 20.-** El Ministerio de Seguridad será asistido por un equipo técnico interdisciplinario para el diseño de las estrategias, metodologías de actuación y control de gestión del Plan.

**Artículo 21.-** El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad, establecerá la forma de articular la acción de los distintos Ministerios en apoyo al Plan Provincial Estratégico de Prevención Integral por la Paz y la Convivencia Social.

### PARTE III DE LAS BASES Y LINEAMIENTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN PARA LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

#### TÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES

##### Capítulo Primero

##### Misión

**Artículo 22.-** La Policía de la Provincia de Córdoba es una institución civil armada, depositaria de la fuerza pública, que tiene por misión el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, ejerciendo las funciones que la legislación establezca para resguardar la vida, los bienes y los derechos de la población.

**Artículo 23.-** La Policía de la Provincia de Córdoba coopera, como integrante del Sistema Provincial de Seguridad Pública, con el Poder Judicial, y mantiene relaciones con los Organismos de la Administración Pública, Fuerzas Armadas, de Seguridad y otras Policías nacionales o extranjeras, con fines de cooperación y coordinación, intercambio cultural y profesional.

**Artículo 24.-** La Policía de la Provincia de Córdoba ejerce sus funciones en todo el territorio de la Provincia, excepto los casos de jurisdicción Federal o Militar, en los que sin embargo, deberá intervenir:

a) En virtud de orden emanada de autoridad competente;

b) En ausencia, impedimento o insuficiencia de personal competente; y

c) En caso de flagrancia.

En estas hipótesis, informará inmediatamente a la autoridad competente y pondrá a su disposición las personas privadas de libertad, los objetos e instrumentos del hecho, y las actuaciones instruidas.

**Artículo 25.-** Cuando la Policía de la Provincia deba intervenir en territorio de otra jurisdicción, se ajustará a las normas procesales en ella aplicables, y a los convenios y prácticas policiales interjurisdiccionales.

El procedimiento se comunicará inmediatamente

a la Policía del lugar, indicando sus causas y resultados.

**Artículo 26.-** La Policía de la Provincia no actúa con fines políticos partidarios, ni en funciones que no estén establecidas en esta Ley.

#### Capítulo Segundo

##### Dependencia

**Artículo 27.-** La Policía de la Provincia de Córdoba es una unidad de organización centralizada del Poder Ejecutivo, que depende del Ministerio de Seguridad, y actuará en el ámbito del territorio provincial de acuerdo a la política de seguridad y al planeamiento diseñados por dicho Ministerio, procurando el cumplimiento de los fines de la presente Ley.

**Artículo 28.-** El Poder Ejecutivo Provincial por intermedio del Ministerio de Seguridad, formulará el anteproyecto de Presupuesto de la Institución, a los efectos de dotarla de las asignaciones presupuestarias pertinentes que permitan el cumplimiento de sus fines y objetivos.

#### Capítulo Tercero

##### Policía de la Provincia

**Artículo 29.-** La función de Policía de la Provincia consiste, esencialmente, en el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, en la prevención y juzgamiento de las contravenciones y en la disuasión, prevención y conjuración temprana del delito, como así también su investigación cuando corresponda de acuerdo a la ley.

**Artículo 30.-** A tales fines, la Policía de la Provincia deberá:

a) Dictar las reglamentaciones internas que fueran necesarias;

b) Prevenir toda perturbación del orden público, garantizando la tranquilidad de la población, la seguridad de las personas y la propiedad;

c) Prevenir todo atentado o acción terrorista, actos de sabotaje y cualquier hecho que conlleve o propugne subvertir el orden constitucional;

d) Proveer a la seguridad de los bienes del Estado Provincial;

e) Proveer la custodia policial del Gobernador, de sus ministros, y de funcionarios de nivel equivalente, cuando le sea requerido;

f) Asegurar el orden en las elecciones nacionales, provinciales y municipales y la custodia de los comicios, conforme a las disposiciones que establezca la legislación respectiva;

g) Controlar el tránsito público y aplicar las disposiciones que lo rigen, de acuerdo a la legislación vigente;

h) Controlar la venta, tenencia, portación, transporte y demás actos que se relacionen con armas de uso

civil y explosivos, fiscalizando el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones respectivas, y otorgando permisos para la adquisición y portación de armas de uso civil, de acuerdo a la legislación vigente;

i) Colaborar con los organismos de la minoridad;  
j) Vigilar las reuniones públicas, adoptando las medidas necesarias para asegurar su normalidad;

k) Recoger las cosas perdidas y abandonadas, procediendo de conformidad a las leyes respectivas;

l) Colaborar con las medidas preventivas y la organización del servicio de lucha contra el fuego y otros estragos, en coordinación con las autoridades nacionales, provinciales, municipales o de defensa civil competentes en la materia;

m) Proveer servicio de policía adicional, en los casos y formas que determine la legislación;

n) Inspeccionar, con finalidad preventiva, vehículos en la vía pública, talleres, garajes públicos, locales de venta y estacionamiento o guarda de vehículos;

ñ) Inspeccionar con finalidad preventiva, casas de hospedaje y establecimientos afines, controlar el movimiento de pasajeros, huéspedes y pensionistas, en cuanto intereses a la función de policía de seguridad y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes;

o) Organizar registros de vecindad conforme a la reglamentación respectiva. Dichos registros incluirán, además, centros vecinales, clubes, cooperadoras e industrias; y

p) Conocer y juzgar administrativamente las faltas cuyo conocimiento le atribuye el código de la materia y leyes complementarias, de conformidad a los procedimientos en ellos establecidos.

## TÍTULO II ORGANIZACIÓN POLICIAL

### Capítulo Primero Organización y Medios

**Artículo 31.-** La Policía de la Provincia de Córdoba se organizará en forma centralizada en lo administrativo y descentralizada en lo funcional, conforme la estructura orgánica establecida en el Anexo I de la presente Ley.

**Artículo 32.-** El orden de prelación de los organismos que componen la estructura orgánica de la Institución, se determinará en los siguientes niveles:

- a) Jefatura;
- b) Subjefatura;
- c) Estado Mayor Policial;
- d) Direcciones Generales;
- e) Subdirecciones Generales;
- f) Direcciones y Unidades Regionales Departamentales;
- g) Departamentos;
- h) Divisiones y Comisarías; e
- i) Secciones y Subcomisarías.

Las Unidades Especiales tendrán el nivel orgánico que por reglamentación se establezca, conforme las funciones y medios asignados.

**Artículo 33.-** La Policía de la Provincia dispondrá de fondos y recursos humanos y materiales, destinados a satisfacer sus requerimientos funcionales y servicios auxiliares, conforme a los créditos asignados por la Ley de Presupuesto.

**Artículo 34.-** Los recursos humanos asignados a la Policía de la Provincia, se agruparán en Personal Policial Superior y Subalterno.

**Artículo 35.-** La escala jerárquica del Personal Policial, se organizará en las siguientes categorías:

1) Personal Superior:

- a) Oficiales Superiores;
- b) Oficiales Jefes; y
- c) Oficiales Subalternos.

2) Personal Subalterno

- a) Suboficiales Superiores;
- b) Suboficiales Subalternos; y
- c) Agentes.

**Artículo 36.-** Las tareas meramente administrativas, incluidas las profesionales o técnicas, serán desempeñadas por personal designado por el Poder Ejecutivo, el que no tendrá estado policial y en ningún caso podrán ser llamados a ejercer funciones de policía de seguridad. Excepcionalmente se podrá asignar tareas administrativas a personal policial, de acuerdo a sus capacidades previa conformidad del Sr. Ministro de Seguridad.

## Capítulo Segundo Comando Superior de la Policía de la Provincia

**Artículo 37.-** El cargo de Jefe de Policía de la Provincia será ejercido por un funcionario designado por el Poder Ejecutivo.

La Jefatura de Policía tendrá su asiento en la ciudad Capital de la Provincia.

**Artículo 38.-** Corresponderá al Jefe de Policía conducir operativamente la Institución, y ejercer su representación.

**Artículo 39.-** A los fines del Artículo anterior, tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Disponer la organización y control de los servicios de la Institución;
- b) Ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentaciones le otorguen en cuanto a la oportunidad de inversión de las partidas presupuestarias que le sean asignadas;
- c) Propiciar ante el Poder Ejecutivo las reformas correspondientes a la organización y funcionamiento de los organismos y unidades principales de la Policía de la Provincia, y disponer, las reformas correspondientes hasta el nivel de Dirección, en ambos casos con la anuencia del Sr. Ministro de Seguridad;
- d) Adoptar por sí o gestionar del Poder Ejecutivo,

cuando excedan de sus facultades, las medidas tendientes al mejoramiento de los servicios y la situación del personal;

e) Proponer al Ministerio de Seguridad los cursos obligatorios a dictarse en los Institutos Policiales, su duración y contenido programático;

f) Proponer al Poder Ejecutivo las designaciones, ascensos, retiros y bajas del personal, en los casos previstos por la legislación, previo dictamen del Tribunal de Conducta Policial;

g) Disponer la asignación y los cambios de destino del personal, conforme a lo previsto en la legislación respectiva; y

h) Acordar las licencias al personal, conforme lo establece la legislación.

**Artículo 40.-** Para el cumplimiento de sus funciones, el Jefe de Policía de la Provincia contará con la cooperación del Sub-Jefe de Policía, será asesorado por el Estado Mayor Policial y, en los aspectos técnicos-jurídicos, por la Dirección de Asesoría Letrada.

**Artículo 41.-** El cargo de Sub-Jefe de Policía será ejercido por un Oficial Superior en actividad, designado por el Poder Ejecutivo.

Tendrá su asiento en la ciudad Capital de la Provincia y serán sus funciones:

a) Colaborar con el Jefe de Policía, y reemplazarlo en caso de ausencia o impedimento transitorio;

b) Ejercer la Jefatura del Estado Mayor, con las facultades y alcances establecidos en la presente Ley; y

c) Participar en la fiscalización e intervenir en el funcionamiento operativo y administrativo de las dependencias que le están subordinadas; cooperar y proponer las modificaciones que estime convenientes para la mejora o actualización de los servicios.

En caso de ausencia o impedimento transitorio, será reemplazado por el Comisario General más antiguo en actividad.

### **Capítulo Tercero Estado Mayor Policial**

**Artículo 42.-** El Estado Mayor Policial es el organismo que proporciona asesoramiento y asistencia al Jefe de Policía, con el fin de asegurar la oportuna y eficaz intervención de la Institución, en todos los asuntos de su competencia.

**Artículo 43.-** El Estado Mayor Policial dirigirá fundamentalmente su accionar a la organización, coordinación y control de todas las actividades que en materia policial se desarrollen en la Provincia.

Estará integrado por:

a) El Jefe del Estado Mayor Policial; y

b) Los Directores Generales.

**Artículo 44.-** La Jefatura del Estado Mayor Policial tendrá a su cargo la coordinación general de las acti-

vidades asignadas por la presente Ley al Estado Mayor Policial.

**Artículo 45.-** En ausencia del Jefe del Estado Mayor Policial ejercerá sus funciones el Director General de Tácticas Operativas.

**Artículo 46.-** La Jefatura del Estado Mayor Policial propenderá a la obtención de los objetivos que en materia de seguridad pública y política institucional impartía el Ministerio de Seguridad.

### **Capítulo Cuarto Órganos de Conducción Superior**

**Artículo 47.-** Las Direcciones Generales son los organismos de conducción superior, que tendrán a su cargo la organización, coordinación, ejecución y control de las actividades que les asigna la presente Ley. En los asuntos técnicos de su competencia, impartirán directivas obligatorias para todas las dependencias policiales.

**Artículo 48.-** Las Direcciones Generales dependerán del Sub-Jefe de Policía y estarán a cargo de un Oficial Superior en actividad designado por el Poder Ejecutivo. El Jefe de Policía podrá proponer un orden de mérito no vinculante.

**Artículo 49.-** La Policía de la Provincia contará con las siguientes Direcciones Generales:

- a) Dirección General de Tácticas Operativas;
- b) Dirección General de Investigaciones Criminales;
- c) Dirección General Departamentales Norte;
- d) Dirección General Departamentales Sur;
- e) Dirección General de Formación Profesional; y
- f) Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico.

El Ministerio de Seguridad podrá producir modificaciones a la estructura orgánica hasta el nivel de Dirección, a excepción de las dispuestas por esta Ley.

### **Capítulo Quinto Unidades Regionales Departamentales**

**Artículo 50.-** El territorio de la Provincia se dividirá en un Departamento Capital y en veinticinco (25) Unidades Regionales Departamentales, coincidiendo con el mapa político provincial. El Ministerio de Seguridad podrá modificar esta división de acuerdo a las necesidades del servicio, teniéndose en cuenta los siguientes factores: territorio, población y actividad delictiva.

**Artículo 51.-** Las Unidades Regionales Departamentales tendrán a su cargo la ejecución de las operaciones generales y especiales de la Policía de la Provincia. A tales fines cada una de ellas dispondrá sobre la oportunidad de inversión de las partidas presupuestarias que le sean asignadas.

**Artículo 52.-** Las Unidades Regionales Departamentales tendrán nivel de dirección, y dependerán del

Sub-Jefe de Policía. Estarán a cargo de Oficiales Superiores designados por la Jefatura de Policía "ad referendum" del Sr. Ministro de Seguridad, y serán asistidas por el Estado Mayor Policial, y por las unidades especiales y de orden público necesarias para su funcionamiento.

### **Capítulo Sexto Direcciones**

**Artículo 53.-** La Dirección de Logística y Administración y la Dirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales e Institucionales estarán a cargo de un Director designado por el Poder Ejecutivo. Las Direcciones restantes estarán a cargo de un Oficial Superior o Jefe, nombrado por el Jefe de Policía.

## **PARTE IV DEL CONTROL CIVIL Y REPUBLICANO DE LA POLICÍA Y EL SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA**

### **TÍTULO ÚNICO TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO**

#### **Capítulo Primero Composición**

**Artículo 54.-** El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario tendrá competencia para entender en la inspección y control interno de la prestación regular de los servicios policiales y penitenciarios, en la gestión de los niveles ejecutivos, y en la observación, prevención, detección y sanción de las conductas reprochables, como así también en la planificación y acción concreta en cuanto a la adecuada formación ética y promoción de la debida disciplina y sujeción a las leyes y reglamentos por parte de los cuadros policiales y penitenciarios, procurando a su vez estimular, mediante un sistema de premios extraordinarios, el accionar eficiente y conforme a la ley.

**Artículo 55.-** El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario estará integrado por tres (3) miembros titulares y un (1) suplente por cada titular, con la siguiente conformación:

1. Un representante del Poder Ejecutivo;
2. Un Legislador Provincial; y
3. Un representante de la Fiscalía General de la Provincia.

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario se pronunciará en todas las cuestiones de su competencia con el acuerdo de al menos dos de sus miembros, salvo disposición expresa en contrario.

**Artículo 56.-** Los integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario son designados de la siguiente forma, a saber:

1. Los representantes del Poder Ejecutivo por el

Ministerio de Seguridad;

2. Los Legisladores por la Legislatura Provincial; y

3. Los representantes de la Fiscalía, por el Fiscal General de la Provincia.

**Artículo 57.-** Los miembros del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario duran dos (2) años en sus funciones, a contar desde la fecha de su designación, siempre que mantengan su calidad funcional. Cesan en sus funciones el mismo día en que expira el período por el que fueron designados y perciben por sus funciones un sueldo no inferior al de Director General, salvo que, al momento de ser designados, ejercieran ya un cargo público con remuneración mayor, en cuyo caso la continuarán percibiendo, no recibiendo ni sueldo ni honorarios adicionales por su función en el Tribunal.

**Artículo 58.-** El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario actuará en pleno o a través de sus oficinas.

Son oficinas del Tribunal las siguientes:

a) Oficina de Investigaciones y Aplicación de Sanciones;

b) Oficina de Inspección e Inteligencia Interna;

c) Oficina de Control de Gestión; y

d) Oficina de Formación Ética y Democrática.

Los integrantes del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario y los titulares de las Secretarías, en el ejercicio de sus funciones, procurarán mantener con el personal policial y penitenciario la comunicación y coordinación necesarias en orden a lograr objetivos de excelencia en el funcionamiento de los cuadros policiales y penitenciarios, sin perjuicio de aplicar todo el rigor de la ley en todo caso en que, por acción u omisión, se incumpla o pretenda incumplirse este objetivo.

### **Capítulo Segundo De la Oficina de Investigaciones y Aplicación de Sanciones**

**Artículo 59.-** La Oficina de Investigaciones y Aplicación de Sanciones tendrá a su cargo la investigación de las faltas disciplinarias y toda otra clase de irregularidades cometidas por personal policial y penitenciario, sea en ejercicio de sus funciones o fuera de ellas, así como el juzgamiento y sanción de las faltas leves y graves.

La Dirección de la Oficina de Investigaciones y Aplicación de Sanciones estará a cargo de un miembro del Tribunal, que será elegido por sus pares.

**Artículo 60.-** La Oficina de Investigaciones y Aplicación de Sanciones contará con dos (2) Secretarías, a saber:

a) Secretaría de Actuaciones por Faltas Leves y Graves; y

b) Secretaría de Actuaciones por Faltas Gravisimas.

El Poder Ejecutivo designará y removerá a los Secretarios, quienes deberán ser abogados, con no me-

nos de cuatro (4) años de antigüedad en el título y experiencia en investigaciones administrativas y/o judiciales, ajenos a la institución policial y penitenciaria y sin antecedentes de sanciones penales o administrativas. Su remuneración será equivalente a la de Gerente General. En sus funciones durarán dos (2) años, plazo que será prorrogado si cumplimentaren su función eficientemente y con respeto irrestricto a la ley.

### Capítulo Tercero

#### De la Oficina de Inspección e Inteligencia Interna

**Artículo 61.-** La Oficina de Inspección e Inteligencia Interna tendrá a su cargo las siguientes funciones:

a) INSPECCIÓN: Inspeccionar periódicamente todas las reparticiones policiales y penitenciarias, con el objeto de controlar el estricto cumplimiento de la ley y de los reglamentos vigentes por parte del personal policial y penitenciario en el ejercicio de sus funciones. Con ese objeto podrá realizar una revisión exhaustiva de toda la documentación llevada por la repartición inspeccionada, así como interrogar al personal en forma individual o conjunta, y recibir de parte de éste, en forma pública o reservada, todos los comentarios, propuestas, quejas e inquietudes respecto de la forma en que se lleva a cabo el servicio. Todo integrante de la institución policial o penitenciaria podrá, por su parte, comunicar a esta Oficina en todo momento y espontáneamente, en forma oficial o reservada, cualquier comentario, propuesta, queja o inquietud relacionada con el servicio. El Director de esta Oficina pondrá en conocimiento de la Oficina de Control de Gestión, espontáneamente o a requerimiento de esta última, todos aquellos datos que se consideren relevantes para la función propia del control de gestión. Para el cumplimiento de lo establecido en este inciso la Secretaría de Inspección elaborará un cronograma anual de inspecciones, que incluirá inspecciones pautadas y sorpresivas y garantizará que todas las reparticiones policiales y penitenciarias de la provincia sean inspeccionadas; y

b) INTELIGENCIA INTERNA: Realizar en forma permanente tareas de inteligencia dentro de la Institución Policial y Penitenciaria, con el objeto de prevenir y detectar la comisión de faltas gravísimas, especialmente aquellas que a prima facie constituyan delitos penales. Para ello contará con personal perteneciente y ajeno a la institución policial y penitenciaria, en actividad o retiro, que obrará reservadamente, pudiendo actuar incluso como agente encubierto en caso de ser necesario. Los resultados de estas tareas pueden dar lugar a la apertura de sumarios administrativos y ser utilizados en ellos como prueba. Se mantendrá siempre en reserva la identidad del personal actuante, que quedará exento de sanción disciplinaria si, para realizar adecuadamente su trabajo, se viera obligado a participar en la comisión de al-

guna falta disciplinaria. Si se tratara de delitos, en la primera oportunidad de conocerse la posibilidad de su existencia se dará noticia a la Fiscalía y/o Juzgado de Instrucción que corresponda, para asegurar tanto el valor probatorio de los elementos a recabar como el resguardo de las garantías constitucionales del imputado.

La Dirección de la Oficina de Inspección e Inteligencia Interna estará a cargo de un miembro del Tribunal, que será elegido por sus pares.

**Artículo 62.-** La Oficina de Inspección e Inteligencia Interna contará con dos (2) Secretarías, a saber:

a) Secretaría de Inspección; y

b) Secretaría de Inteligencia Interna.

Los Secretarios serán designados de la misma forma y con idénticos requisitos, duración y remuneración a los previstos en el Artículo 60 de la presente Ley.

### Capítulo Cuarto

#### De la Oficina de Control de Gestión

**Artículo 63.-** La Oficina de Control de Gestión tendrá por función establecer objetivos y estándares de eficacia y eficiencia en la prestación del servicio de las instituciones policial y penitenciaria, y controlar su cumplimiento por parte de todas las reparticiones, distinguiendo su cumplimiento y observando su incumplimiento. Podrá asimismo hacer constar los incumplimientos en que incurran los titulares de las Secretarías del Tribunal de Conducta, a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 60, última parte.

Por “eficacia” se entiende el logro de los objetivos establecidos por la Oficina. Por “eficiencia” se entiende el cumplimiento de esos objetivos de la manera más inmediata y productiva y con el menor costo posible, de acuerdo a los estándares que la Oficina determine.

La Oficina de Control de Gestión elaborará un cronograma anual de control, que incluirá controles pautados y sorpresivos y garantizará que todas las reparticiones de la provincia sean controladas.

Sólo las reparticiones policiales y penitenciarias - no el personal individualmente- puede ser distinguidas o castigadas por cumplimiento o incumplimiento de objetivos y estándares de eficacia y eficiencia, sin perjuicio de la incidencia individual indirecta que resulte de la aplicación de las distinciones conforme surge del párrafo siguiente.

Las reparticiones distinguidas por su eficacia y eficiencia ingresarán a un orden de mérito, que será especialmente tenido en cuenta para la asignación de puntaje a sus integrantes para el régimen de ascensos.

Las reparticiones que no cumplan con los objetivos y estándares de eficacia y eficiencia ingresarán a un orden de incumplimiento según el grado de éste, de mayor a menor. La Oficina de Control de Gestión determinará qué condiciones son necesarias para que una reparti-

ción que haya integrado el orden de incumplimiento pueda ingresar al orden de mérito, tras la superación de los incumplimientos en que hayan incurrido y el logro de los objetivos y estándares establecidos.

Asimismo la Oficina de Control de Gestión establecerá los estándares y pautas de conformidad con los cuales la Junta de Retiros y Calificaciones calificará al personal para su promoción. Tales estándares y pautas tendrán en cuenta prioritariamente el mérito en el servicio y deberán orientarse a evaluar las aptitudes profesionales, intelectuales, psicofísicas y éticas demostradas en el desempeño del grado. La antigüedad en él podrá ser considerada como pauta complementaria, pero no valdrá en ningún caso como pauta única de promoción.

Todos los organismos de la Policía y el Servicio Penitenciario pondrán a disposición de la Oficina de Control de Gestión toda la documentación e información que les sea requerida por su Director, y colaborarán en la tarea de control de gestión del modo en que sea establecido por la Oficina.

La Dirección de la Oficina de Control de Gestión estará a cargo de un miembro del Tribunal, que será elegido por sus pares.

**Artículo 64.-** La Oficina de Control de Gestión contará con una Secretaría, cuyo titular será designado por el pleno del Tribunal. Deberá poseer título universitario o reconocida experiencia en la materia, y tendrá la duración y la remuneración previstas en el Artículo 60 de la presente Ley.

### **Capítulo Quinto**

#### **De la Oficina de Formación Ética y Democrática**

**Artículo 65.-** La Oficina de Formación Ética y Democrática tendrá por función organizar los eventos, cursos, seminarios, etc., y estructurar los programas que considere necesarios para la formación ética y democrática del personal policial y penitenciario, conforme a las pautas que se fijen al respecto desde el Ministerio de Seguridad.

La Dirección de la Oficina de Formación Ética y Democrática estará a cargo de un miembro del Tribunal, que será elegido por sus pares.

**Artículo 66.-** La Oficina de Formación Ética y Democrática contará con una Secretaría cuyo titular será designado por el pleno del Tribunal. Deberá poseer título universitario o reconocida experiencia en la materia, y tendrá la duración y la remuneración previstas en el Artículo 60 de la presente Ley.

### **PARTE V**

#### **RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS DE PRESTACIÓN PRIVADA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN.**

#### **TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES**

### **Capítulo Primero**

#### **Objeto y Ámbito de Aplicación**

**Artículo 67.-** Las personas físicas o jurídicas que presten dentro del ámbito del territorio provincial servicios de: vigilancia directa e indirecta, investigaciones, custodia de personas y de bienes muebles, seguridad interna y externa en establecimientos industriales y comerciales, en bienes inmuebles públicos y privados, en espectáculos públicos y otros eventos o reuniones análogas, se regirán por las disposiciones de la presente Ley, aunque fueren sucursales, u otro tipo de organizaciones vinculadas a otra ya habilitada en extraña jurisdicción.

Queda expresamente prohibida la prestación de los servicios de Seguridad y Vigilancia Privada en la vía pública.

**Artículo 68.-** La Administración Central, sus entes autárquicos y descentralizados y las municipalidades y comunas de la Provincia, podrán contratar la provisión de los servicios mencionados en el Artículo 67 de esta Ley. Asimismo, el Poder Ejecutivo podrá conceder o autorizar, en los términos de la Ley N° 8836, -a empresas habilitadas conforme a la presente Ley-, la prestación de servicios de custodia, guarda y seguridad sobre personas, cosas y/o bienes inmuebles propios o de aquellos que conforme a normas vigentes, estén bajo su responsabilidad. Deberá considerarse como tal, el servicio prestado por entidades autorizadas, previamente contratado por un comitente. En tal sentido, el mismo será considerado como complementario, subordinado y llevado a cabo en estrecha colaboración con las tareas que realiza el Estado, a través de sus fuerzas públicas, conformando ambos en su conjunto el concepto mayor de seguridad.

**Artículo 69.-** Defínase como vigilancia directa la tarea de custodia de personas y cosas, que haya sido previamente encomendada y contratada. Comprende los servicios prestados en ámbitos cerrados o abiertos, reuniones públicas o privadas, espectáculos, inmuebles públicos o privados, sede de establecimientos comerciales e industriales, de instituciones, custodias en locales bailables, bares, restaurantes y todo aquel otro lugar destinado a la recreación, etc.

Estas prestaciones pueden extenderse a áreas concesionadas, anexas o distantes del domicilio principal, a petición fundamentada, lo que en cada caso será considerado por la Autoridad de Aplicación.

Cada bien, conjunto de bienes, persona o conjunto de personas que sea objeto de vigilancia directa por prestadores de servicios de seguridad privada en el ámbito espacial o domiciliario ocupado por aquellos constituirá un "objetivo". Para todo objetivo de vigilancia directa los prestadores deberán contar con la constancia de "alta de objetivo", expedida por la Autoridad de Aplicación previo pago de la tasa administrativa correspondiente.



**Artículo 70.-** Defínase como vigilancia indirecta la tarea de custodia llevada a cabo a través del monitoreo y registro de medios electrónicos, ópticos, electro-ópticos y centrales telefónicas. La tarea también comprende la comercialización, instalación y mantenimiento de equipos, dispositivos y sistemas aptos para la vigilancia de personas, bienes y de la ocurrencia de todo tipo de siniestros.

Rigen para la vigilancia indirecta las mismas disposiciones sobre alta y rechazo de objetivos establecidas en el Artículo 69.

Este tipo de vigilancia no comprende lo regulado por Ley N° 7899 y su Decreto Reglamentario N° 927/93, y sus modificatorias.

**Artículo 71.-** La actividad de las personas mencionadas en el Artículo 67, revestirá carácter comercial y los prestadores, personas físicas deberán estar inscriptos en el Registro Público de Comercio, mientras que las personas jurídicas constituidas bajo los distintos regímenes societarios, en los registros correspondientes.

**Artículo 72.-** Las personas prestadoras de los servicios enumerados en el Artículo 67, con autorización otorgada en otros estados del país; a los fines de actuar en el territorio de la Provincia, deberán cumplimentar con todos los requisitos fijados en la presente Ley, debiendo además, agregar copia autenticada de los instrumentos legales por los cuales obtuvieron las habilitaciones respectivas.

**Artículo 73.-** Quedan excluidas del presente régimen legal, las personas físicas o jurídicas que desarrollen las siguientes actividades:

a) Servicios de vigilancia, protección interna, ronda, higiene en lugares comunes y otros menesteres similares, efectuados en plantas industriales, centros comerciales, comercios, industrias, instituciones, sociedades, empresas u organismos públicos y privados, consorcio de propietarios de edificio, etc., siempre que el personal afectado a dichas tareas, actúe en relación de dependencia directa con esas entidades;

b) Los servicios adicionales de seguridad y vigilancia que preste la Policía y/o el Servicio Penitenciario de la Provincia;

c) Servicio de Transporte de Caudales (Ley N° 19.130) y Decretos Reservados N° 2625/73 y N° 1398/74; y

d) Los servicios prestados por las Agencias de Informes Comerciales.

## Capítulo Segundo

### Respeto a Garantías Constitucionales

**Artículo 74.-** Las personas físicas o jurídicas habilitadas para prestar los servicios que se enumeran en el Artículo 67, como asimismo sus dependientes; deberán respetar en su accionar todas las garantías constitu-

cionales, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria y/o discriminatoria que entrañe violencia física y/o moral, privilegiando el proceder preventivo y disuasivo, antes que el uso de la fuerza, procurando siempre preservar la vida y la libertad de las personas. Particularmente, no podrán violar la dignidad e integridad de las personas, su honor, intimidad y domicilio, el secreto de los papeles privados, la correspondencia y las comunicaciones por medios telegráficos, telefónicos, télex, fac-símil, informáticos o satelitales. Por otra parte, quienes se consideren aludidos o perjudicados, tendrán acceso al conocimiento pleno de toda información que se maneje en forma de registro por parte de las personas antes citadas, pudiendo ejercer el derecho a la rectificación y actualización de los datos consignados. Las transgresiones a estas garantías constitucionales se considerarán infracciones "muy graves".

**Artículo 75.-** Las entidades regidas por la presente Ley, deberán proteger toda información que obtengan a través de su accionar y guardar el más estricto secreto, respecto a datos o documentos relativos a la materia de su actividad. Sólo podrán tomar conocimiento de las mismas la autoridad judicial y los comitentes, sin perjuicio de los recursos que pudieren interponer quienes consideren lesionado su derecho. Dicha información deberá ser conservada por un término no menor a cinco (5) años. Toda violación a estas garantías constituye infracción "muy grave".

## Capítulo Tercero

### Autoridad de Aplicación

**Artículo 76.-** Será Autoridad de Aplicación en materia de seguridad privada el Ministerio de Seguridad, a través de la Gerencia de Prestadores Privados de Seguridad o dependencia que se designe en el futuro; la que autorizará la habilitación e instalación y fiscalizará el funcionamiento de las personas mencionadas en el Artículo 67.

De la Autoridad de Aplicación dependerá un cuerpo de inspectores, que tendrá a su cargo el control del cumplimiento, por parte de los prestadores de servicios de seguridad privada, de las obligaciones y requisitos establecidos por la presente Ley y fijados por la Gerencia de Prestadores Privados de Seguridad.

El procedimiento y la actuación del cuerpo de inspectores será determinado mediante resolución de la Autoridad de Aplicación.

## Capítulo Cuarto

### Registro Público Permanente de Empresas y Personal de Seguridad Privada

**Artículo 77.-** Funcionará en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, un Registro Público Permanente de Empresas y Personal de Seguridad Privada.

**Artículo 78.-** El Registro nominado en el Artículo anterior, tendrá carácter público, y en él se inscribirán obligatoriamente todas las personas previstas en el Artículo 67, que hayan obtenido su habilitación para funcionar y se asentarán todas las actividades relacionadas a las mismas.

**Artículo 79.-** Los prestadores de servicios de seguridad privada están obligados a solicitar al Registro Público Permanente de Empresas y Personal de Seguridad Privada, un "certificado anual de renovación de la habilitación", que acredite que el prestador está registrado en ese organismo y habilitado para funcionar por la Autoridad de Aplicación.

### Capítulo Quinto

#### Tasas

**Artículo 80.-** Queda facultada la Autoridad de Aplicación a exigir y percibir el cobro de las siguientes tasas administrativas, a saber:

1.- Por autorización, homologación y/o habilitación:

- a) De Empresas;
- b) De Centros de Capacitación;
- c) De personal dependiente;
- d) Objetivos;
- e) Medios o Instrumental Material o Técnico; Y
- f) Automóviles, Vehículos de mayor porte o Motocicleta.

2.- Por solicitud de renovación

- a) De personal (cada dos (2) años); y
- b) Renovación anual de habilitación de Empresa.

3.- Solicitud de baja de empresa.

4.- Solicitud de informes.

5.- Certificado de aprobación de cursos de capacitación por persona.

Los montos de las tasas administrativas referidas precedentemente, serán fijados anualmente en el Código Tributario Provincial y, lo recaudado por tal concepto deberá ser depositado en el Banco de la Provincia de Córdoba, e ingresará a una cuenta especial que determine la Autoridad de Aplicación.

### Capítulo Sexto

#### De los Prestadores del Servicio

##### Sección 1ª: De las condiciones

**Artículo 81.-** Podrán ser prestadores de los servicios enumerados en el Artículo 67, las personas físicas o jurídicas que reúnan las condiciones exigidas por la presente Ley, enmarquen su accionar a sus normas y sean previa y expresamente autorizadas por la Autoridad de Aplicación; las que en ningún caso podrán contar con más de mil (1.000) vigiladores.

**Artículo 82.-** Las personas físicas y los representantes de las personas jurídicas que soliciten la habilitación para prestar uno, algunos o todos los servicios

enumerados en el Artículo 67; deberán cumplimentar con los siguientes requisitos:

1.- Personas Físicas:

a) Ser ciudadano argentino mayor de veintiún (21) años de edad;

b) No estar comprendido en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño de los servicios de seguridad privada previstos por los artículos 97 y 98 de la presente Ley;

c) No registrar antecedentes penales; y

d) Encontrarse inscripto en el Registro Público de Comercio.

2.- Personas Jurídicas:

a) Estar constituida de acuerdo a la Ley de Sociedades Comerciales;

b) Copia del contrato social inscripto en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, legalizada o certificada por ese mismo organismo. Si se tratare de personas jurídicas habilitadas en otras provincias o en el extranjero, presentar copia certificada de los instrumentos mediante los cuales obtuvieron esa habilitación en sus lugares de origen; y

c) No encontrarse comprendida en los supuestos establecidos en la Ley Nacional Nº 24.522.

Además de los requisitos exigidos para las Personas Físicas y Jurídicas en particular, deberán:

1) Acreditar inscripción en los organismos tributarios nacionales, provinciales y municipales; sin perjuicio de que la Autoridad de Aplicación efectúe requerimientos adicionales en la materia, si lo considera necesario;

2) Acreditar que no se encuentran inhabilitados, ni inhabilitados Civil ni Comercialmente;

3) Constituir Seguros de Caución y Responsabilidad Civil exigidos por los artículos 83 y 84 de la presente Ley; y .

4) Constituir domicilio real y legal en la Provincia de Córdoba.

##### Sección 2ª: Garantías

**Artículo 83.-** Las personas físicas o jurídicas constituirán una garantía real como respaldo al cumplimiento total de sus obligaciones de origen laboral, previsional, y/o de las que pudieren derivar de decisiones judiciales favorables a terceros afectados. Podrán otorgar: hipoteca en primer grado de uno o varios inmuebles a nombre del responsable del servicio, o certificado de seguro de caución renovable automáticamente, o boleta de depósito en efectivo. Dicho fondo se constituirá a favor de la Provincia de Córdoba, Ministerio de Seguridad (Fondo de Garantía de Empresa Privada de Seguridad e Investigaciones), y su determinación y graduación será fijada por la Autoridad de Aplicación.

**Artículo 84.-** Deberá constituirse y mantenerse en vigencia un seguro de responsabilidad civil por el monto que periódicamente fijará la Autoridad de Aplica-

ción, con criterio de razonabilidad y proporcionalidad a la potencialidad riesgosa de la actividad que desarrolla.

### Sección 3º: Nomenclatura

**Artículo 85.-** Todo aquello que identifique a la empresa, deberá coincidir con la denominación que figura en el instrumento legal que dicte la Autoridad de Aplicación al momento de otorgar la habilitación y con el que figurará en el Registro Permanente. No podrán usarse las menciones: "República Argentina", "Nación", "Nacional", "Provincia de Córdoba", "Policía", "Policía Privada", "Policía Particular", "Seguridad", "Autorizada", "Supervisada" o toda otra denominación, o siglas, o formatos de escudos o identificaciones, que por su similitud con las usadas por Organismos de Seguridad del Estado, puedan inducir a error o confusión, haciendo suponer tal carácter.

### Sección 4º: Instrumental o Equipos de Comunicación

**Artículo 86.-** La nómina de todo instrumental de comunicaciones, fijo, móvil y portátil a utilizar por el prestador, deberá ser denunciada a la Autoridad de Aplicación, bajo las formas que ésta establezca y el pago de la tasa correspondiente.

**Artículo 87.-** Las personas físicas o jurídicas habilitadas para prestar los servicios enumerados en el Artículo 67, deberán obligatoriamente llevar los siguientes Libros:

- a) De Personal;
- b) De Misiones y Funciones;
- c) De vehículos afectados a la prestación del servicio; y
- d) De Inspecciones.

Los mismos deberán estar rubricados y foliados por la Autoridad de Aplicación, u organismo en quien ésta delegue dicha tarea.

### Sección 5º: Publicidad

**Artículo 88.-** Las empresas reguladas por esta Ley, podrán efectuar publicidad de los servicios que prestan por cualquier medio de comunicación que estimen conveniente; pero será sancionada quien ofrezca efectuar tareas no contempladas, o prohibidas por esta Ley.

### Sección 6º: Del Personal

**Artículo 89.-** El personal que preste servicios en el ámbito de la seguridad privada, se dividirá en las siguientes categorías:

- a) Director Técnico, Responsable y Sustituto;
- b) Personal de Vigilancia (Vigilador);
- c) Escolta privada; y
- d) Detective privado.

El personal nombrado en el inciso a) deberá cada dos (2) años acreditar que se encuentra en condiciones técnicas y psicofísicas para continuar ejerciendo sus tareas, mediante el examen correspondiente, que deberá ser practicado por profesionales designados por la Autoridad de Aplicación previo a decidirse la renovación de su licencia. Los mencionados en los incisos b), c) y d) deberán cumplimentar el mismo requisito cada un (1) año. Todos ellos deberán acreditar que cuentan con título, certificado o experiencia en la materia suficiente que permita considerarlo idóneo en la función correspondiente, y abonar la Tasa de Renovación determinada para cada caso.

**Artículo 90.-** Los Directores Técnicos - Responsable y Sustituto-, al solicitar su habilitación e inscripción como personal de seguridad privada, deberán reunir los siguientes requisitos:

- a) Ser ciudadano argentino, tener como mínimo treinta (30) años de edad y tener domicilio real acreditado en la Provincia; y
- b) Cumplimentar con los requisitos establecidos en el inciso 1 apartados: b), c) y d) del Artículo 82 de la presente Ley.

**Artículo 91.-** El Director Técnico -Responsable y/o Sustituto-, es conjunta y solidariamente responsable con él o los propietarios del servicio, por la observancia de la presente Ley.

**Artículo 92.-** Para poder desempeñarse como personal dependiente (Vigilador, Escolta Privada, Detective Privado) de una entidad de las mencionadas en el Artículo 67, los interesados deberán cumplimentar los siguientes requisitos:

- a) Ser mayor de veintiún (21) años de edad; y
- b) Cumplimentar con los requisitos establecidos en el inciso 1 apartados: b), c) y d) del Artículo 82 de la presente Ley.

**Artículo 93.-** Todo el personal está obligado a mostrar cada vez que le sea requerida la credencial que lo habilita a pertenecer a un servicio de vigilancia. La misma será otorgada por la Autoridad de Aplicación, o por quien ésta delegue, debiendo ser renovada cada dos (2) años.

**Artículo 94.-** Las personas físicas o jurídicas comprendidas en esta Ley, están obligadas a organizar centros o cursos de capacitación para su personal. Está permitido que dos o más empresas organicen colectivamente los cursos en cuestión. La Autoridad de Aplicación determinará mediante resolución el diseño de la estructura curricular, así como los requisitos, contenidos mínimos, duración, tipo y cantidad de exámenes parciales y finales y estrategias pedagógicas y didácticas que deben reunir los planes y cursos de capacitación formulados por los prestadores para obtener la aprobación por parte de aquella.

**Capítulo Séptimo****Prohibición del Uso de Armas**

**Artículo 95.-** Queda expresamente prohibido para los prestadores de los servicios enumerados en el Artículo 67 de la presente, el uso de cualquier tipo de armas. Las habilitaciones que en virtud de la presente Ley, conceda la Autoridad de Aplicación a las personas citadas en el Artículo 67 y a sus dependientes, serán otorgadas con la mención expresa: "sin autorización para el uso de armas".

**Capítulo Octavo****Responsabilidad de los Usuarios**

**Artículo 96.-** Cualquier persona "física o jurídica" que contrate servicios de seguridad privada, estará obligada a exigir al prestador, que acredite fehacientemente encontrarse habilitado por la Autoridad de Aplicación. La contratación de este tipo de servicios con un prestador no habilitado, las hará pasibles de las mismas sanciones aplicables al prestador.

**Capítulo Noveno****Inhabilitaciones e Incompatibilidades**

**Artículo 97.-** Queda prohibido al personal en actividad de la Policía de la Provincia, Policía Judicial, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, del Servicio Penitenciario y de Organismos de Inteligencia, y a quienes hayan sido dados de baja de los citados organismos, por causas graves, constituir personas jurídicas, gestionar, instalar, realizar o promocionar, por sí o por interpósita persona, los servicios citados en el Artículo 67, ni desempeñarse en los mismos o en tareas relacionadas. Las transgresiones a estas disposiciones se considerarán infracciones "muy graves".

**Artículo 98.-** Tampoco podrán desempeñarse en tareas relacionadas con el ámbito de la seguridad privada, las siguientes personas:

a) Quienes se beneficiaron con las Leyes Nº 23.492 y/o Nº 23.521 e indultados por hechos que constituyan violación a los derechos humanos;

b) Quienes posean antecedentes por condenas o procesos judiciales en trámite por delitos dolosos, y/o culposos. Excepcionalmente, podrá la Autoridad de Aplicación, a pedido del interesado, habilitarlo en los casos de delitos culposos que no afecten el objeto de la presente Ley; y

c) Quienes hayan sido inhabilitados por infracciones a la presente Ley.

**Capítulo Décimo****De las Infracciones**

**Artículo 99.-** Las infracciones a las distintas disposiciones de la presente Ley, serán consideradas como: "muy graves", "graves" y "leves".

**Artículo 100.-** Se considerarán infracciones

"muy graves" a las siguientes:

a) La prestación de servicios careciendo de la habilitación correspondiente o encontrándose ésta cancelada definitivamente;

b) El incumplimiento del Artículo 84 de la presente Ley;

c) La utilización de medios materiales y técnicos no autorizados, no homologados o prohibidos por la Autoridad de Aplicación;

d) La utilización de cualquier tipo de armas;

e) No transmitir a la Policía de la Provincia, las señales de alarma que registren sus sistemas instalados, o transmitirlos con retraso injustificado;

f) No comunicar en tiempo y forma a la autoridad que correspondiere, todo presunto hecho delictivo del que tomaran conocimiento sus integrantes o dependientes, en el ejercicio de sus funciones;

g) La contratación de personal de agentes vigiladores no inscriptos en el Registro Permanente de Empresas y Personal de Seguridad Privada a que se refiere el Artículo 78 de esta Ley;

h) La negativa de facilitar y/o entregar a la Autoridad Judicial o Policial -que la requiera por escrito-, información o documentación relativa a misiones cumplidas o que se estén cumpliendo; y

i) La comisión de una segunda infracción "grave" en el período de un (1) año.

**Artículo 101.-** Se considerarán infracciones "graves", las siguientes:

a) La violación a las disposiciones del Artículo 72 de la presente Ley;

b) El incumplimiento de las obligaciones prescriptas por los artículos 88 y 94 de la presente Ley;

c) La ejecución de misiones o prestaciones de servicios de características para las que no estén habilitadas;

d) La omisión de denunciar ante a la Autoridad de Aplicación, un contrato de servicio;

e) El incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidas en la presente Ley;

f) Encontrarse en mora con el cumplimiento de las obligaciones tributarias de orden provincial; y

g) La comisión de una tercera infracción "leve" en el período de un (1) año.

**Artículo 102.-** Se considerarán infracciones "leves", el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos en la presente Ley y su reglamentación, siempre que no constituya infracción "grave" o "muy grave".

**Artículo 103.-** Las infracciones cometidas en contra de cualquiera de las disposiciones de la presente Ley, serán sancionadas con:

a) Apercibimiento por escrito;

b) Multa;

c) Inhabilitación de personas responsables y/o Directores Técnicos; y

d) Cancelación definitiva de la habilitación para funcionar.

#### **Capítulo Undécimo De las Sanciones**

**Artículo 104.-** Sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieran corresponder, la Autoridad de Aplicación podrá aplicar las siguientes sanciones:

1) Empresas autorizadas:

- Por la comisión de infracciones "muy graves":

a) En el caso de la primera infracción constatada, se aplicará una sanción pecuniaria cuyo monto será equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del valor de la tasa establecida para la habilitación de una empresa de seguridad;

b) En el caso de reincidencia, que se considerará tal, cuando se cometiere una nueva infracción dentro de los dieciocho (18) meses de cometida la primera, se aplicará una sanción pecuniaria cuyo monto será equivalente al cien por ciento (100 %) del valor de la tasa establecida para la habilitación de una empresa de seguridad; y

c) En el caso de una tercera infracción dentro del término establecido en el apartado anterior, corresponderá la sanción conjunta de "multa y cancelación definitiva" para funcionar.

- Por la comisión de infracciones "graves":

a) En el caso de primera infracción constatada, se aplicará una sanción pecuniaria cuyo monto será equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor de la tasa establecida para la habilitación de una empresa de seguridad;

b) En el caso de reincidencia, de acuerdo a lo establecido en el apartado b) de las sanciones "muy graves", se aumentará la pena a un cincuenta por ciento (50 %), del importe de la tasa a que hace referencia el apartado anterior; y

c) La comisión de una tercera infracción "grave" en el término de dieciocho (18) meses de constatada la primera infracción, será considerada primera infracción "muy grave".

- Por la comisión de infracciones "leves":

a) En el caso de la primera infracción constatada, se aplicará "apercibimiento" por escrito;

b) En caso de reincidencia, de acuerdo a lo establecido en el apartado b) de las sanciones "muy graves", se aplicará una sanción pecuniaria cuyo monto será equivalente al cinco por ciento (5 %) del importe de la tasa a abonar para la habilitación de una empresa de seguridad; y

c) La comisión de una tercera infracción "leve" en el término de un (1) año de cometida la primera infracción, será considerada primera infracción "grave".

2) Empresa No Autorizada o definitivamente Cancelada:

En todos los casos las infracciones serán consideradas "muy graves", correspondiéndole una sanción pecuniaria equivalente al cien por ciento (100%) del importe de la tasa que se deberá abonar para la habilitación de una empresa de seguridad. Deberá, asimismo, procederse a la clausura de las dependencias de la entidad y al secuestro preventivo de los bienes utilizados para la prestación del servicio. Esto último se aplicará sin perjuicio de la sanción de multa y sólo en caso de persistir en la infracción. Los bienes secuestrados serán restituidos una vez que se satisfaga íntegramente el importe de la sanción pecuniaria.

La persona "física o jurídica" que contrate servicios de seguridad privada, con prestadores no habilitados por la Autoridad de Aplicación, será pasible solidariamente de las mismas sanciones pecuniarias aplicables al prestador.

**Artículo 105.-** La "cancelación" de la habilitación para funcionar, es la sanción que impide en forma definitiva la continuación de la prestación de los servicios regulados por esta Ley. Esta sanción traerá aparejada la prohibición absoluta, para que los Directores Técnicos - responsable y sustituto - puedan desempeñarse como tales en cualquier otra empresa del mismo tipo, por el término de tres (3) años.

**Artículo 106.-** Para la graduación de sanciones, la Autoridad de Aplicación tendrá en cuenta la gravedad y trascendencia del hecho, el posible perjuicio para el interés público, la situación de riesgo creada para personas o bienes y el volumen de actividad de la agencia contra quien se dicte la resolución sancionatoria. Además, cuando por la misión de las infracciones se hubieran generado beneficios económicos para sus autores, las multas podrán incrementarse hasta cinco (5) veces en las cifras fijadas.

**Artículo 107.-** Las sumas devengadas por multa, ingresarán a una cuenta especial que será designada por el Ministerio de Seguridad.

#### **Capítulo Duodécimo De la Verificación de Infracciones y Sanciones**

**Artículo 108.-** La verificación de las infracciones a la Parte V de la presente Ley, se realizará mediante acta de comprobación, con indicación del nombre y domicilio de los testigos, si los hubiere. El funcionario actuante, especialmente afectado por la Autoridad de Aplicación, en el mismo acto notificará al presunto infractor, si se encontrare presente.

La Autoridad de Aplicación citará al infractor o persona responsable, en su caso, para que se notifique del acta de comprobación y para que en plazo de cinco (5) días hábiles presente por escrito su defensa y ofrezca

prueba de descargo.

La prueba deberá producirse en el término de diez (10) días hábiles, prorrogables por la Autoridad de Aplicación cuando haya motivos justificados.

**Artículo 109.-** Vencido el plazo para diligenciar la prueba, el instructor asentará esta circunstancia y elevará lo actuado a la autoridad que deba dictar resolución definitiva.

**Artículo 110.-** Dictada la resolución, se notificará al supuesto infractor o al responsable del contenido de la misma. Si la pena fuese de multa, el responsable de su cumplimiento deberá depositar en el plazo de quince (15) días hábiles el monto fijado en cuenta bancaria habilitada a tal efecto.

**Artículo 111.-** En contra de la resolución, se admitirán los recursos de reconsideración y jerárquico ante el Sr. Ministro de Seguridad. El procedimiento a seguir será el establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba.

**Artículo 112.-** Las resoluciones tendrán ejecutoriedad una vez que la resolución haya quedado firme.

Cuando la sanción sea de multa, para poder recurrir se deberá depositar el treinta (30%) por ciento del importe de la misma en la cuenta bancaria especial, en caso contrario no se dará trámite al recurso y se lo tendrá por desistido, quedando firme la resolución.

**Artículo 113.-** La falta de pago de la multa hará exigible su cobro por el procedimiento de ejecución fiscal, constituyendo título suficiente de ejecución el testimonio de la resolución condenatoria firme expedida por el organismo de juzgamiento.

La procuración fiscal de las multas estará a cargo del cuerpo de abogados designados por el Ministerio de Seguridad al efecto.

Las sumas devengadas de tal procuración, se destinarán a una cuenta especial del Ministerio de Seguridad.

## PARTE VI ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

### TÍTULO I

#### Capítulo Primero Misión y Dependencia

**Artículo 114.-** El Servicio Penitenciario de Córdoba es una institución civil armada que, en su carácter de fuerza de seguridad provincial, es depositario en su ámbito de la fuerza pública, y tiene como misiones la guarda y custodia de detenidos, procesados y condenados alojados en establecimientos carcelarios de la Provincia, así como la ejecución de las sanciones penales y contravencionales impuestas, con la finalidad de que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social y

promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad.

**Artículo 115.-** Como Unidad de Organización centralizada del Poder Ejecutivo, depende del Ministerio de Seguridad. Actuará en el ámbito del territorio provincial de acuerdo a la política penitenciaria y al planeamiento diseñados por dicho Ministerio, procurando el cumplimiento de los fines de la presente Ley.

#### Capítulo Segundo Funciones

**Artículo 116.-** Son funciones de la Institución Penitenciaria:

- a) Velar por la seguridad y custodia de las personas alojadas en establecimientos de su dependencia, procurando mediante el sistema, regímenes y tratamientos en cada caso aplicable, preservar y mejorar sus condiciones morales, su educación y su salud;
- b) Promover la readaptación social de los condenados a penas privativas de libertad y coordinar con la Dirección de Reinserción Social del Liberado las acciones tendientes a dar efectivo cumplimiento a las previsiones que sobre la materia contiene la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad;
- c) Asesorar al Poder Ejecutivo en asuntos referidos a Política Penitenciaria;
- d) Colaborar en la proposición de políticas tendientes a la prevención de la criminalidad;
- e) Asesorar en materia de su competencia, a otros organismos oficiales;
- f) Propiciar convenios con la Nación y las restantes provincias, en materia de organización carcelaria, régimen de la pena, y alojamiento de detenidos, procesados y condenados;
- g) Llevar estadísticas penitenciarias e intercambiar información de interés científico o técnico, con otras administraciones penitenciarias;
- h) Propiciar la creación de establecimientos penitenciarios;
- Atender al reclutamiento, selección, formación y perfeccionamiento del personal penitenciario;
- i) Contribuir al estudio y perfeccionamiento de las disciplinas penitenciarias y criminológicas, como también de la legislación que comprende al Derecho de Ejecución Penal;
- j) Coordinar acciones con los restantes Servicios Penitenciarios, Federal y Provinciales, y con instituciones intermedias de los distintos ámbitos, a los fines de un mejor desenvolvimiento institucional; y
- k) Proveer servicio de seguridad y vigilancia adicional, de conformidad a las normas que lo regulen.

#### Capítulo Tercero Personal, Uniformes e Insignias

**Artículo 117.-** El personal de la Institución, a excepción del personal contratado y el personal civil designado en las Direcciones de Administración, Asuntos Ju-

rídicos, Secretaría General y Formación Penitenciaria, está investido de estado penitenciario y tiene, -como depositario de la fuerza pública-, las obligaciones y derechos, así como las facultades y atribuciones que resultan de las misiones y funciones asignadas, y los que sean consecuencia de las normas que, como complementarias de la presente, se dicten.

**Artículo 118.-** Los uniformes, insignias y símbolos asignados al Servicio Penitenciario de Córdoba para uso de la Institución y de su personal, como así también las características identificatorias de sus vehículos y equipos son exclusivos y no podrán ser utilizados en forma igual o similar por otra Institución Pública o Privada.

#### **Capítulo Cuarto Medios**

**Artículo 119.-** El Servicio Penitenciario de Córdoba se organizará en forma centralizada en lo administrativo y descentralizada en lo funcional.

**Artículo 120.-** El Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Seguridad, formulará el anteproyecto de Presupuesto de la Institución, a los efectos de dotarla de las asignaciones presupuestarias pertinentes que permitan el cumplimiento de sus fines y objetivos, conforme la estructura orgánica establecida en la presente; y dispone de los recursos, humanos y materiales necesarios a los fines de satisfacer sus requerimientos funcionales, conforme se determina en la Ley de Presupuesto.

### **TITULO II ORGANIZACIÓN**

#### **Capítulo Primero Estructura Orgánica**

**Artículo 121.-** EL Servicio Penitenciario está integrado por:

- a) Jefatura;
- b) Subjefatura;
- c) Consejo Superior Penitenciario;
- d) Dirección General de Técnica Penitenciaria y Criminológica;
- e) Dirección General de Seguridad;
- f) Dirección General de Trabajo Penitenciario y Obras;
- g) Dirección de Administración;
- h) Dirección de Asuntos Jurídicos;
- i) Dirección de Secretaría General;
- j) Dirección de Formación Profesional; y
- k) Establecimientos Penitenciarios.

**Artículo 122.-** El desarrollo orgánico funcional de cada una de las unidades de organización precedentemente establecidas, en todo aquello que no resulte previsto en la presente, así como las consecuentes correla-

ciones grado-función, serán determinados mediante disposición de la Jefatura del Servicio Penitenciario, a propuesta del Consejo Superior Penitenciario.

#### **Capítulo Segundo Jefatura**

**Artículo 123.-** La Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba será ejercida por un funcionario designado por el Poder Ejecutivo.

**Artículo 124.-** La Jefatura es el órgano responsable de conducir la institución y bajo su dependencia se encuentran todas las unidades de organización que la componen.

**Artículo 125.-** Compete al Jefe del Servicio Penitenciario:

- a) La conducción, contralor e inspección superiores de la Institución;
- b) Ejercer la representación de la Institución;
- c) Fijar la administración y política de personal, su reclutamiento, como así también, proponer al Poder Ejecutivo las designaciones, ascensos, retiros y bajas del personal de la Institución, de conformidad con las correspondientes disposiciones legales y reglamentarias;
- d) Fijar los destinos del personal penitenciario y las funciones de los Oficiales Superiores y Jefe de la Institución;
- e) Ejercer las potestades disciplinarias que tiene asignadas;
- f) Proponer al Poder Ejecutivo la reglamentación de esta Ley y de aquellas que se dicten en consecuencia, y dictar mediante disposición los reglamentos internos que sean menester;
- g) Resolver en última instancia dentro del ámbito provincial el alojamiento o traslado de internos condenados; y
- h) Fijar, dentro de las previsiones presupuestarias, las retribuciones de los internos, que desarrollen tareas remuneradas en el ámbito institucional.

#### **Capítulo Tercero Subjefatura**

**Artículo 126.-** La Subjefatura de la Institución será ejercida por un funcionario designado por el Poder Ejecutivo. La designación recaerá en un Oficial Superior del grado máximo del Servicio Penitenciario de Córdoba, en actividad.

**Artículo 127.-** El Subjefe del Servicio Penitenciario como inmediato colaborador del Jefe de la Institución, debe cumplir con todas las funciones que éste le encomienda y reemplazarlo, con las atribuciones que le son propias, en caso de ausencia, impedimento transitorio o vacancia.

**Artículo 128.-** Compete asimismo al Subjefe del Servicio Penitenciario:

a) Ejercer el comando del Consejo Superior Penitenciario;

b) Participar en la fiscalización e intervenir en el funcionamiento técnico, operativo y administrativo de las dependencias de la Institución, propiciando en su caso mejoras o actualizaciones que resulten convenientes; y

c) Verificar que el tratamiento brindado a los internos se ajuste a las normas y políticas criminológicas y penitenciarias vigentes.

**Artículo 129.-** En caso de ausencia, enfermedad o vacancia, el Subjefe será reemplazado interinamente por el Oficial Superior más antiguo en actividad.

**Artículo 130.-** El Subjefe, con el asesoramiento del Director General de Seguridad, propone al Jefe del Servicio Penitenciario los destinos y funciones en su caso, del personal de la Institución.

#### **Capítulo Cuarto Consejo Superior Penitenciario**

**Artículo 131.-** El Consejo Superior Penitenciario es el órgano de control y coordinación de todas las actividades que desarrolla la Institución, a fin de lograr un mejor servicio y el mayor aprovechamiento de sus medios, y propenderá a la obtención de los objetivos que en materia penitenciaria y política institucional impartan la Jefatura y el Ministerio de Seguridad. Está comandado por el Subjefe del Servicio Penitenciario e integrado por los titulares de las Direcciones Generales. En caso de ausencia del Subjefe, es reemplazado por el Oficial de mayor grado y antigüedad de entre sus miembros.

**Artículo 132.-** Compete al Consejo Superior Penitenciario el estudio, análisis y formulación de proposiciones en los distintos asuntos que hacen a la marcha de la Institución, así como otras funciones que pueden asignarle las normas que como consecuencia de la presente se dicten.

**Artículo 133.-** Para el tratamiento de cuestiones cuya especificidad o importancia tornen necesario el concurso de alguno de los restantes titulares de Direcciones y/o del cuadro de Oficiales Superiores, la Jefatura y/o Subjefatura del Servicio Penitenciario podrán resolver la convocatoria del Consejo Superior Penitenciario, con indicación de los asuntos a considerar y de los miembros a incorporar, los que en tal caso actuarán con iguales facultades que los miembros natos del Consejo Superior Penitenciario.

#### **Capítulo Quinto Direcciones**

**Artículo 134.-** Las Direcciones son los órganos de conducción superior que tienen a su cargo la organización, ejecución y control de las actividades que les asignan la presente y demás normas que se dicten en consecuencia.

En los asuntos de su competencia, imparten directivas de observancia obligatoria para todas las de-

pendencias de la Institución.

**Artículo 135.-** Las Direcciones Generales estarán a cargo de Oficiales Superiores.

**Artículo 136.-** La Dirección General de Técnica Penitenciaria y Criminológica tiene a su cargo la organización y fiscalización del sistema, regímenes, trato, tratamiento y asistencia aplicable a los internos detenidos, procesados y condenados, de conformidad a las normas que regulan estas materias y a la política penitenciaria establecida.

También está a su cargo la confección y actualización de los legajos criminológicos de los internos y la efectivización de la coordinación del accionar institucional con los Tribunales de la Provincia y del Fuero Federal con asiento en la misma.

**Artículo 137.-** La Dirección General de Seguridad tiene a su cargo todo lo relacionado con la seguridad en el ámbito institucional; y colabora con la Jefatura en el reclutamiento, selección de recursos humanos y lo referido al bienestar social del personal penitenciario y su grupo familiar.

**Artículo 138.-** La Dirección General de Trabajo Penitenciario y Obras tiene a su cargo la organización, orientación, fiscalización y capacitación de los internos afectados al trabajo penitenciario, y la administración, comercialización y disposición del producido de dicho trabajo. Tiene también a su cargo la ejecución de los estudios, proyectos, obras y tareas de mantenimiento que en materia edilicia sean necesarios a la Institución.

**Artículo 139.-** Las Direcciones estarán a cargo de personal civil designado por el Poder Ejecutivo.

**Artículo 140.-** La Dirección de Administración tiene a su cargo la formulación técnica del proyecto de planificación anual y su expresión presupuestaria, la administración de los programas del área y la fiscalización y análisis del sistema administrativo, y demás funciones que le asignen otras normas.

**Artículo 141.-** La Dirección de Asuntos Jurídicos tiene a su cargo asesorar jurídicamente a la Jefatura del Servicio Penitenciario, al Consejo Superior Penitenciario, demás Direcciones y establecimientos carcelarios. Asimismo, informa sobre la interpretación y aplicación de normas. Deberá registrar, coordinar y mantener actualizadas las normas que regulan la actividad de la Institución, formulando los proyectos que la jefatura pueda propiciar o dictar.

Está a su cargo también, la supervisión y dictamen de los sumarios administrativos y, cuando así se disponga, la substanciación de los mismos.

Le compete, además, la defensa penal o contravencional del personal penitenciario que resulte imputado a causa o con motivo del cumplimiento de sus funciones específicas, salvo caso de colisión de intereses entre la sociedad y la Institución.

**Artículo 142.-** La Dirección de Secretaría General tiene a su cargo el registro, movimiento y archivo de



las actuaciones administrativas de la Jefatura de la Institución, las relaciones externas del Servicio Penitenciario, las áreas de Planeamiento y de Informática, la edición de Órdenes del Día y de Boletines Penitenciarios, y el Mantenimiento y Servicios de la Sede de la Jefatura de la Institución.

Tiene a su cargo además todo otro asunto que no compela a área determinada.

**Artículo 143.-** La Dirección de Formación Profesional tiene a su cargo la capacitación y perfeccionamiento del personal penitenciario propendiendo a lograr los niveles de profesionalidad acordes a la política institucional en materia penitenciaria.

### Capítulo Sexto

#### Establecimientos Penitenciarios

**Artículo 144.-** Los Establecimientos Penitenciarios están destinados a alojar personas, mayores de edad y menores adultos (dieciocho (18) a veintiún (21) años) privadas de su libertad, y en los mismos se cumplen las misiones determinadas en el Artículo 116 de la presente, de conformidad a las previsiones legales y reglamentarias vigentes.

Su desarrollo orgánico-funcional y las consecuencias correlaciones grado-funciones serán fijados en las formas dispuestas en el Artículo 124 de la presente.

**Artículo 145.-** Los establecimientos penitenciarios de máximo nivel estarán a cargo de Oficiales Superiores.

#### DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

##### Modificación a la Ley Nº 8831

**Artículo 146.-** Modifíquese el Artículo 2º de ley Nº 8831, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 2.- “Créase el Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior que estará integrado por el Sr. Ministro de Seguridad, quien será el Coordinador, el Sr. Secretario de Seguridad, el Sr. Jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba y la máxima autoridad de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina, destinadas en la Provincia de Córdoba.”

**Artículo 147.-** Hasta tanto se produzcan, respecto del Servicio Penitenciario Provincial, las reformas legales y reglamentarias pertinentes, las competencias que a ese respecto son otorgadas por esta Ley al Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario seguirán siendo ejercidas por las autoridades penitenciarias actualmente competentes.

**Artículo 148.-** Todo lo actuado por la Gerencia de Prestadores Privados de Seguridad a la fecha de la presente, con relación al Registro Público Permanente de Empresas y Personal de Seguridad Privada, queda

ratificado por la presente Ley.

**Artículo 149.-** Hasta tanto sea reglamentada la presente Ley, regirán supletoriamente las normas reglamentarias en vigencia.

**Artículo 150.-** Deróganse las leyes Nros. 6701, 8816, 8908, 9120 y toda otra Ley o disposición dictada sobre la materia y que se oponga a la presente.

**Artículo 151.-** Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

*José Manuel De la Sota, Carlos Alessandri.*

#### DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestra Comisión de **LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN**, al dictaminar acerca del **Proyecto de ley nº 06567/E/04**, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo la Ley de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba, **OS ACONSEJA**, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante y por cuestiones de técnica legislativa y una mejor comprensión, **LE PRESTÉIS APROBACIÓN**, desdoblándolo en dos leyes, de la siguiente manera:

#### LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE LEY

#### LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARTE I

#### SISTEMA PROVINCIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

#### TÍTULO I

#### OBJETIVOS – INTEGRACION - COORDINACION

#### Capítulo Primero

##### De la Regulación e Interrelaciones

**LA** presente Ley tiene como objetivo el de regular el Sistema de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba y las relaciones que surjan entre sus integrantes, las autoridades provinciales y la comunidad.

**LA** seguridad pública estará a cargo exclusivo del Estado Provincial y tendrá los siguientes objetivos, a saber:

- 1) Salvarguardar y proteger la integridad física de las personas como así también sus derechos y bienes.
- 2) Mantener el orden, la tranquilidad y la paz pública en todo el territorio provincial.
- 3) Promover y coordinar los programas de disuasión y prevención de contravenciones y delitos.
- 4) Establecer los mecanismos de coordinación y colaboración para la conjuración temprana, investiga-

ción, persecución y sanción de los autores y responsables de contravenciones y delitos.

5) Intercambiar todo tipo de información sobre materia delictiva en los términos de la presente Ley.

6) Dirigir y coordinar los organismos de ejecución de penas, a los fines de lograr la reinserción social del condenado, y

7) Señalar los mecanismos de coordinación entre las diversas autoridades con el objeto de brindar apoyo y auxilio a la población en casos de siniestros o desastres, conforme a las normas legales vigentes en la materia.

A los efectos previstos en el artículo anterior, se implementarán políticas públicas tendientes a asegurar la convivencia y a fortalecer la cohesión social dentro del estado de derecho, posibilitando a todas las personas el goce y pleno ejercicio de las libertades, derechos y garantías consagradas constitucionalmente.

## **Capítulo Segundo**

### **De sus Integrantes y Auxiliares**

EL Sistema Provincial de Seguridad Pública estará integrado por la Policía de la Provincia y el Servicio Penitenciario Provincial.

LA Dirección de Defensa Civil, los Cuerpos de Bomberos y Rescate, las Juntas de Participación Ciudadana para la Prevención Integral, la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito y las dependencias encargadas de la Seguridad Náutica y del control de los prestadores privados de seguridad son órganos Auxiliares del Sistema Provincial de Seguridad Pública.

## **Capítulo Tercero**

### **Dependencia y Coordinación**

LOS Órganos Integrantes y Auxiliares del Sistema Provincial de Seguridad Pública dependerán del Ministerio de Seguridad, quien coordinará el ejercicio de sus respectivas funciones para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente ley.

## **TÍTULO II**

### **PLAN ESTRATÉGICO PROVINCIAL**

#### **Capítulo Primero**

##### **Prevención Integral**

EL Ministerio de Seguridad elaborará el Plan Estratégico Provincial para la Prevención Integral (P.E.P.P.I.).

EL Plan Estratégico Provincial tiene como finalidad –en general- la de desarrollar una política de estado en materia de prevención, que atienda, de manera integral, la problemática de la seguridad pública y articule los esfuerzos de los distintos organismos gubernamentales en el desarrollo de estrategias que tengan, como eje, la participación ciudadana en la reconstitución de redes comunitarias y la promoción del desarrollo humano para

el logro de una mejor calidad de vida, y –en particular- persigue los siguientes objetivos, a saber:

Estimular y promover una cultura de la prevención a través de la sensibilización de la comunidad y la capacitación de los actores sociales.

Promover la participación y el compromiso social para el diseño e implementación de estrategias de prevención integral.

Desarrollar estrategias sociales, educativas, culturales, organizativas y toda otra que, con la intervención participativa de la comunidad, tiendan a modificar las condiciones que generan los problemas de la seguridad.

Articular el accionar de las distintas áreas gubernamentales y de organizaciones públicas y privadas para fortalecer la base institucional existente, a fin de responder –con un enfoque multisectorial- a la problemática de la violencia y la inseguridad social.

Estimular y apoyar las iniciativas y acciones de prevención que impulsen o realicen los vecinos o instituciones de bien público, enmarcadas en el irrestricto respeto por los derechos humanos y el estado de derecho, y,

Coordinar con los Municipios y Comunas todo lo atinente a la prestación de los servicios públicos que incidan, esencialmente, en la seguridad pública, como –por ejemplo- el alumbrado, limpieza y desmalezado.

EL Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, establecerá la forma de articular la acción de los distintos Ministerios en apoyo al Plan Estratégico Provincial para la Prevención Integral.

EL Ministerio de Seguridad será asistido por:

Un Equipo Técnico Interdisciplinario para el diseño de los programas, subprogramas, estrategias y metodologías de actuación y control de gestión del Plan Estratégico Provincial, y

Un Consejo Asesor integrado por las áreas preventivas de la Policía de la Provincia de Córdoba: Coordinación Comunitaria, Prevención Social de Drogas Peligrosas, Patrulla Ambiental, las áreas de apoyo técnico de la Dirección General de Investigaciones Criminales y las áreas de prevención que se constituyan a tal fin.

EL Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, podrá celebrar convenios con las Municipalidades y Comunas, a fin de concertar y coordinar las medidas tendientes al efectivo cumplimiento de la presente Ley.

## **Capítulo Segundo**

### **Participación Ciudadana**

EL Ministerio de Seguridad propiciará la constitución de Juntas de Participación Ciudadana para la Prevención Integral, como ámbitos de encuentro comunitario donde se desarrollen los programas, subprogramas, proyectos y actividades que garanticen el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Provincial.

LOS representantes de las Municipalidades y

Comunas, Centros Comunitarios, Centros Educativos, Centros Vecinales, Centros Religiosos, Clubes o cualquier otro tipo de Organizaciones No Gubernamentales u Organizaciones Sociales Civiles y los Legisladores Nacionales, Provinciales y Concejales podrán integrar las Juntas de Participación Ciudadana.

**LAS** Juntas de Participación Ciudadana, deberán constituirse a los fines de atender las específicas problemáticas locales y/o regionales y -a los fines de su funcionamiento- podrán tener, como sede de reunión, los locales municipales, escuelas, comisarías, centros vecinales, clubes y todo otro lugar que favorezca y estimule la participación de la comunidad.

## PARTE II

### POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

#### TÍTULO I

#### BASES DE FUNCIONAMIENTO

##### Capítulo Primero

##### Misiones

**LA** Policía de la Provincia es una institución civil armada que ejerce sus funciones en todo el territorio provincial y tiene por misión el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, a través del ejercicio de las competencias que la legislación establezca para resguardar la vida, los bienes y los derechos de la población.

**LA** Policía de la Provincia coopera, como integrante del Sistema Provincial de Seguridad Pública, con el Poder Judicial y mantiene relaciones con los Organismos de la Administración Pública Provincial, con las Fuerzas Armadas, de Seguridad y otras policías provinciales, nacionales o extranjeras, con fines de cooperación y coordinación e intercambio cultural y profesional.

**LA** Policía de la Provincia de Córdoba –por vía de excepción- solo podrá intervenir y ejercer sus funciones en casos de Jurisdicción Federal o Militar, en los siguientes casos, a saber:

En virtud de orden emanada de autoridad competente.

En ausencia, impedimento o insuficiencia de personal federal o militar competente, y

En caso de flagrancia.

En estas hipótesis, informará inmediatamente a la autoridad competente y pondrá a su disposición las personas privadas de libertad, los objetos e instrumentos del hecho y las actuaciones que se hubieran labrado.

**EN** los casos que la Policía de la Provincia deba intervenir en territorio de otra jurisdicción, deberá ajustar su accionar a las normas procesales de aplicación en la misma y a los convenios y prácticas policiales interjurisdiccional.

El procedimiento, además, deberá comunicarse

en forma inmediata a la autoridad judicial y policial con jurisdicción en el lugar, indicando sus causas y resultados.

**LA** Policía de la Provincia solamente podrá actuar en cumplimiento de las funciones y competencias establecidas en la presente Ley.

##### Capítulo Segundo

##### Dependencia

**LA** Policía de la Provincia es un organismo centralizado del Poder Ejecutivo, que depende operativamente del Ministerio de Seguridad y actuará funcionalmente descentralizada en el ámbito del territorio provincial de acuerdo a la política de seguridad y a la planificación diseñada por el citado Ministerio.

**EL** Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Seguridad, formulará el anteproyecto anual de previsiones presupuestarias de la Policía de la Provincia, a efectos de dotarla de los recursos económicos adecuados que le permitan el cumplimiento de sus fines y objetivos.

##### Capítulo Tercero

##### Competencias

**A** la Policía de la Provincia le compete -en general- el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, la disuasión, prevención y conjuración temprana del delito, como así también su investigación cuando corresponda de acuerdo a la ley, la prevención y juzgamiento de las contravenciones y -en particular- lo siguiente, a saber.

Dictar las reglamentaciones internas que fueran necesarias.

Prevenir toda perturbación del orden público, garantizando la tranquilidad de la población, la seguridad de las personas y la protección de sus bienes.

Prevenir actos de sabotaje o terrorismo, atentados y cualquier hecho que conlleve o pretenda subvertir el orden constitucional.

Proveer a la seguridad de los bienes del Estado Provincial.

Proveer la custodia policial de funcionarios cuando así le sea requerido por los titulares de los Poderes del Estado.

Asegurar el orden en las elecciones nacionales, provinciales y municipales y la custodia de los comicios.

Ejercer las funciones de prevención y control del tránsito automotor en las rutas provinciales y nacionales, cuando le sean asignadas por el Poder Ejecutivo.

Intervenir en materia de agresión al medio ambiente de acuerdo a la legislación vigente.

Ejercer las actividades y actos administrativos que le sean inherentes en materia de venta, tenencia, portación, transporte y demás actos que se relacionen

con armas de uso civil y explosivos.

Colaborar con los organismos de la minoridad.

Adoptar las medidas necesarias para asegurar la normal realización de reuniones públicas.

Recoger las cosas que se presuman perdidas o abandonadas.

Colaborar con las medidas preventivas y la organización del servicio de lucha contra el fuego y otros estragos, en coordinación con las autoridades nacionales, provinciales, municipales o de Defensa Civil competentes en la materia.

Proveer servicio de policía adicional, en los casos y formas que determine la legislación.

Verificar preventivamente la documentación de vehículos en la vía pública, talleres, garajes públicos, locales de venta y estacionamiento o guarda de vehículos.

Verificar preventivamente los registros de pasajeros, huéspedes y pensionistas de hoteles, casas de hospedaje y establecimientos afines.

Conocer y juzgar administrativamente las faltas cuya competencia le atribuye el Código de la materia y leyes complementarias, de conformidad a los procedimientos establecidos en ellas.

Proceder -con carácter de excepción- al allanamiento de moradas en la forma y en los casos previstos en el Artículo 206 de la Ley nº 8123, y

Ejercer las atribuciones conferidas por el Artículo 324 de la Ley nº 8123, hasta que llegue al lugar la Policía Judicial o el Fiscal de Instrucción.

Ejercer todas las atribuciones que le confiera específicamente la legislación vigente.

## **TÍTULO II ORGANIZACIÓN**

### **Capítulo Primero Estructura Orgánica**

**LA** Policía de la Provincia se organizará en forma centralizada en lo administrativo y descentralizada en lo funcional, conforme la estructura orgánica establecida en la presente Ley.

**LA** estructura orgánica de la Policía de la Provincia estará compuesta según el orden de prelación que se determina en los siguientes niveles, a saber:

Jefatura;

Subjefatura;

Direcciones Generales;

Subdirecciones Generales;

Direcciones y Unidades Regionales Departamentales;

Departamentos;

Divisiones y Comisarías, y

Secciones y Subcomisarías.

**LOS** recursos humanos asignados a la Policía de la Provincia se agrupan en Personal Policial Superior y Personal Subalterno.

**LA** escala jerárquica del Personal Policial Superior se organiza en las siguientes categorías, a saber:

**a)** Oficiales Superiores.

**b)** Oficiales Jefes, y

**c)** Oficiales Subalternos.

**LA** escala jerárquica del Personal Subalterno se organiza en las siguientes categorías, a saber:

**a)** Suboficiales Superiores.

**b)** Suboficiales Subalternos, y

**c)** Agentes

EL personal de seguridad que cumplan guardias, horarios y misiones similares, están investidos de "estado policial" y tienen las obligaciones, derechos y atribuciones que resultan de las misiones y funciones asignadas.

**LAS** tareas administrativas, profesionales y técnicas serán desempeñadas por personal designado por el Poder Ejecutivo, el que no tendrá "estado policial" y en ningún caso podrán ser llamados a ejercer funciones de seguridad.

En forma excepcional el Ministerio de Seguridad podrá asignar tareas administrativas, profesionales o técnicas a personal policial, de acuerdo a sus profesiones o capacitación.

### **Capítulo Segundo Comando Superior**

**EL** cargo de Jefe de Policía de la Provincia de Córdoba será ejercido por un funcionario designado por el Poder Ejecutivo.

**LA** Jefatura y Subjefatura de Policía tendrán su asiento en la Ciudad de Córdoba o en el lugar que decida fijarlo el Poder Ejecutivo.

**AL** Jefe de Policía de la Provincia le compete – en general- ejercer la representación de la Institución y conducirla tanto operativa cuanto administrativamente y, en particular, tendrá las siguientes atribuciones:

Disponer la organización y control de los servicios de la Policía de la Provincia.

Ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentaciones le otorguen en cuanto a la oportunidad de inversión de las partidas presupuestarias que le sean asignadas a la Institución.

Disponer las reformas correspondientes hasta el nivel de Dirección, a excepción de las dispuestas en la presente ley, previa autorización del Ministerio de Seguridad.

Propiciar ante el Ministerio de Seguridad las reformas correspondientes a la organización y funcionamiento de los organismos, unidades principales y unidades especiales de la Policía de la Provincia de Córdoba.

Adoptar por sí las medidas tendientes al mejoramiento de los servicios y la situación del personal o gestionarlo ante el Ministerio de Seguridad cuando ello exceda de sus facultades.

Proponer al Ministerio de Seguridad los cursos

obligatorios a dictarse en los Institutos Policiales, su duración y contenido programático.

Proponer al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, las designaciones, ascensos, retiros y bajas del personal, en los casos previstos por la legislación, previo informe del Tribunal de Conducta Policial.

Disponer la asignación y los cambios de destino del personal, y

Acordar las licencias al personal.

A los fines del debido cumplimiento de sus funciones, el Jefe de Policía de la Provincia cuenta con la cooperación del Subjefe de Policía, es asesorado por el Estado Mayor Policial y, en los aspectos técnicos-jurídicos, por la Dirección de Asesoría Letrada.

EL cargo de Subjefe de Policía será ejercido por un Comisario General, en actividad, del Escalafón Seguridad, designado por el Poder Ejecutivo.

EL Subjefe de Policía de la Provincia tiene las siguientes funciones, a saber:

Colaborar con el Jefe de Policía y reemplazarlo en caso de ausencia transitoria, impedimento o vacancia.

Ejercer la Jefatura del Estado Mayor Policial, con las facultades y alcances establecidos en la presente Ley.

Participar en la fiscalización e intervenir en el funcionamiento operativo y administrativo de las dependencias que le están subordinadas, y

Cooperar y proponer las modificaciones que estime convenientes para la mejora o actualización de los servicios.

### **Capítulo Tercero Estado Mayor Policial**

EL Estado Mayor Policial estará integrado por los Directores Generales y será comandado por el Subjefe de Policía de la Provincia.

EL Estado Mayor Policial es el organismo que proporciona asesoramiento y asistencia al Jefe de Policía de la Provincia, con el fin de asegurar la oportuna y eficaz intervención de la Institución en todos los asuntos de su competencia.

EL Estado Mayor Policial dirigirá fundamentalmente su accionar a la organización, coordinación y control de todas las actividades que se desarrollen en la Provincia en materia policial.

LA Jefatura del Estado Mayor Policial tendrá a su cargo la coordinación general de las actividades asignadas por la presente Ley al Estado Mayor Policial y propenderá a lograr los objetivos que –en materia de seguridad pública y política institucional- fije el Ministerio de Seguridad.

EN caso de ausencia transitoria, impedimento o vacancia del Subjefe de Policía de la Provincia, será re-

emplazado en sus funciones por el miembro de mayor grado y antigüedad que integre el Estado Mayor Policial.

### **Capítulo Cuarto Órganos de Conducción Superior**

LA Policía de la Provincia contará con las siguientes Direcciones Generales, a saber:

Dirección General de Tácticas Operativas.  
Dirección General de Investigaciones Criminales.  
Dirección General Departamentales Norte.  
Dirección General Departamentales Sur.  
Dirección General de Formación Profesional, y  
Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico.

LA Policía de la Provincia contará con las siguientes Subdirecciones Generales, a saber:

Subdirección General de Policía de Córdoba Capital, y

Subdirección General de Investigaciones Criminales.

LA reglamentación específica determinará el marco de actuación y competencias que corresponden a cada una de las Direcciones y Subdirecciones Generales creadas en los artículos precedentes.

LAS Direcciones Generales dependen del Subjefe de Policía y serán ejercidas, cada una de ellas, por un Comisario General, en actividad, designado por el Poder Ejecutivo. El Jefe de Policía podrá proponer un orden de mérito no vinculante.

LAS Direcciones Generales son los organismos de conducción superior, que tendrán a su cargo la organización, coordinación, ejecución y control de las actividades que les asigna la presente Ley.

En los asuntos técnicos de su competencia, impartirán directivas de observancia obligatoria para todas las dependencias policiales.

### **Capítulo Quinto Unidades Regionales Departamentales**

EL territorio de la Provincia de Córdoba se dividirá en veintiséis (26) Unidades Regionales Departamentales, correspondiendo cada una de ellas con cada uno de los Departamentos que integran el mapa político provincial.

EL Ministerio de Seguridad podrá modificar la división establecida en el artículo anterior de acuerdo a las necesidades del servicio, teniendo en cuenta la realidad geográfica territorial, el factor población y el mapa de la actividad delictiva.

LAS Unidades Regionales Departamentales tendrán a su cargo la ejecución de las operaciones generales y especiales de la Policía de la Provincia y –a tales fines- cada una de ellas dispondrá sobre la oportunidad de invertir las partidas presupuestarias que le sean asignadas.

nadas.

**LAS** Unidades Regionales Departamentales tendrán nivel de Dirección, dependerán de las Direcciones Generales Norte ó Sur y estarán a cargo de Oficiales Superiores designados por el Jefe de Policía, ad referendum del Ministerio de Seguridad, y serán asistidas por las unidades especiales necesarias para su funcionamiento.

### **Capítulo Sexto**

#### **Direcciones**

**LA** Dirección de Logística y Administración y la Dirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales e Institucionales, estarán a cargo de un titular designado por el Poder Ejecutivo.

**LAS** Direcciones restantes estarán a cargo de un Oficial Superior o Jefe, nombrados por el Jefe de Policía de la Provincia.

## **PARTE III SERVICIO PENITENCIARIO TÍTULO I**

### **BASES DE FUNCIONAMIENTO**

#### **Capítulo Primero**

##### **Misiones**

**EL** Servicio Penitenciario de la Provincia tiene - como misión específica- la guarda y custodia de detenidos, procesados y condenados que deban alojarse en establecimientos carcelarios de la Provincia.

**EL** Servicio Penitenciario de la Provincia, además de la misión encomendada en el artículo anterior, procurará que los detenidos, procesados y condenados alojados adquieran la capacidad de respetar la ley y logren una adecuada reinserción social, promoviendo - para ello- la comprensión y el apoyo de la comunidad.

#### **Capítulo Segundo**

##### **Dependencia**

**EL** Servicio Penitenciario de la Provincia es un organismo centralizado del Poder Ejecutivo, que depende operativamente del Ministerio de Seguridad, y actuará funcionalmente descentralizado en el ámbito del territorio provincial de acuerdo a la política penitenciaria y a la planificación diseñada por el citado Ministerio.

**EL** Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Seguridad, formulará el anteproyecto anual de previsiones presupuestarias para el Servicio Penitenciario, a los efectos de dotarlo de los recursos económicos adecuados que le permitan el cumplimiento de sus fines y objetivos.

#### **Capítulo Tercero**

##### **Competencias**

**AL** Servicio Penitenciario de la Provincia le compete -en general- velar por la seguridad y custodia de las

personas alojadas en los establecimientos de su dependencia, procurando -mediante el sistema, regímenes y tratamientos en cada caso aplicable- preservar y mejorar sus condiciones morales, su educación y salud; y -en particular- lo siguiente, a saber:

Promover la readaptación social de los condenados a penas privativas de libertad y coordinar, con la dependencia encargada de la reinserción social del liberado, las acciones tendientes a dar efectivo cumplimiento a las previsiones que -sobre la materia- contiene la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Ley Nacional N° 24.660 ó el cuerpo legal que la sustituya).

Asesorar al Poder Ejecutivo en asuntos referidos a política penitenciaria.

Colaborar con la propuesta de políticas tendientes a la prevención de la criminalidad.

Asesorar en materia de su competencia a otros organismos oficiales.

Propiciar con el Estado Nacional y las restantes Provincias la celebración de convenios en materia de organización carcelaria, régimen de la pena y alojamiento de detenidos, procesados y condenados.

Llevar estadísticas penitenciarias e intercambiar información de interés científico o técnico, con otras administraciones penitenciarias.

Promover la creación de nuevos establecimientos penitenciarios.

Atender al reclutamiento, selección, formación y perfeccionamiento del personal penitenciario.

Contribuir al estudio y perfeccionamiento de las disciplinas penitenciarias y criminológicas, como también de la legislación que comprende al Derecho de Ejecución Penal.

Coordinar acciones, a los fines de un mejor desenvolvimiento institucional, con los restantes Servicios Penitenciarios -tanto Federal cuanto Provinciales- y también con instituciones intermedias de los distintos ámbitos.

Proveer servicio de seguridad y vigilancia adicional, de conformidad a las normas que lo regulen, y,

Ejercer todas las atribuciones que le confiera específicamente la legislación vigente.

## **TÍTULO II ORGANIZACIÓN**

### **Capítulo Primero Estructura Orgánica**

**EL** Servicio Penitenciario de la Provincia se organizará en forma centralizada en lo administrativo y descentralizada en lo funcional, conforme a la estructura orgánica establecida en la presente ley.

**LA** estructura orgánica del Servicio Penitenciario de la Provincia estará compuesta según el orden de prelación que se determina en los siguientes niveles, a saber:

Jefatura.  
 Subjefatura.  
 Direcciones Generales.  
 Subdirecciones Generales.  
 Direcciones, Unidades Especiales y Direcciones de Establecimientos Penitenciarios.  
 Subdirecciones.  
 Departamentos.  
 Divisiones, y  
 Secciones.

LA Jefatura y Subjefatura del Servicio Penitenciario de la Provincia, tendrá sueldos, bonificaciones y compensaciones iguales a las que perciban la Jefatura y Subjefatura de la Policía de la Provincia.

**EL** desarrollo orgánico funcional de cada una de las unidades de organización precedentemente establecidas, en todo aquello que no resulte previsto en la presente Ley, así como las consecuentes correlaciones grado-función, serán determinadas mediante disposición de la Jefatura del Servicio Penitenciario de la Provincia, a propuesta del Consejo Superior Penitenciario, y previa aprobación del Ministerio de Seguridad.

**EL** personal de seguridad que cumpla guardias, horarios y misiones similares, están investidos de “estado penitenciario” y tienen las obligaciones, derechos y atribuciones que resultan de las misiones y funciones asignadas.

**LAS** tareas administrativas, profesionales y técnicas serán desempeñadas por personal designado por el Poder Ejecutivo, el que no tendrá “estado penitenciario” y -en ningún caso- podrán ser llamados a ejercer funciones de seguridad.

En forma excepcional el Ministerio de Seguridad podrá asignar tareas administrativas, profesionales o técnicas a personal penitenciario, de acuerdo a sus profesiones o capacitación.

## Capítulo Segundo

### Jefatura

**EL** cargo de Jefe del Servicio Penitenciario de la Provincia será ejercido por un funcionario designado por el Poder Ejecutivo.

**LA** Jefatura y Subjefatura del Servicio Penitenciario de la Provincia tendrán su asiento en la Ciudad de Córdoba o en el lugar que decida establecerlo el Poder Ejecutivo.

**LA** Jefatura del Servicio Penitenciario de la Provincia es el órgano responsable de conducir la Institución y bajo su dependencia se encuentran todas las unidades de organización que la componen.

**AL** Jefe del Servicio Penitenciario de la Provincia le compete –en general- ejercer la representación de la Institución y conducirla tanto operativa cuanto administrativamente y, en particular, tendrá las siguientes atribuciones:

ciones:

Ejercer el contralor e inspección superior de la Institución.

Ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentaciones le otorguen en cuanto a la oportunidad de inversión de las partidas presupuestarias que le sean asignadas a la Institución.

Propiciar ante el Ministerio de Seguridad las reformas correspondientes a la organización y funcionamiento de los organismos y unidades del Servicio Penitenciario.

Proponer al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, las designaciones, ascensos, retiros y bajas del personal, en los casos previstos en las disposiciones legales y reglamentarias, previo informe del Consejo Superior Penitenciario.

Adoptar por sí las medidas tendientes al mejoramiento de los servicios y la situación del personal o gestionarlas ante el Ministerio de Seguridad cuando ello exceda de sus facultades.

Fijar la política de recursos humanos y acordar las licencias del personal.

Determinar los destinos del personal penitenciario y las funciones de los Oficiales Superiores y Jefes de la Institución.

Resolver, en última instancia dentro del ámbito provincial, el alojamiento o traslado de internos condenados.

Elevar al Ministerio de Seguridad, dentro de las previsiones presupuestarias, las propuestas para retribuir a los internos que desarrollen tareas remuneradas en el ámbito de la institución.

Dictar los reglamentos internos que sean necesarios, y

Proponer al Ministerio de Seguridad los cursos obligatorios a dictarse en los Institutos Penitenciarios, su duración y contenido programático.

## Capítulo Tercero

### Subjefatura

**EL** cargo de Subjefe del Servicio Penitenciario de la Provincia será ejercido por un Oficial Superior del grado máximo del Servicio Penitenciario Provincial, en actividad, designado por el Poder Ejecutivo.

**EL** Subjefe del Servicio Penitenciario de la Provincia, como inmediato colaborador del Jefe de la Institución, debe cumplir con todas las funciones que éste le encomiende, y reemplazarlo, con las atribuciones que le son propias, en caso de ausencia transitoria, impedimento o vacancia.

**EL** Subjefe del Servicio Penitenciario de la Provincia tiene las siguientes atribuciones, a saber:

Ejercer el Comando del Consejo Superior Penitenciario.

Participar en la fiscalización e intervenir en el funcionamiento técnico, operativo y administrativo de las dependencias de la Institución, propiciando en su caso mejoras o actualizaciones que resulten convenientes, y

Verificar que el tratamiento brindado a los internos se ajuste a las normas y políticas criminológicas y penitenciarias vigentes.

**EN** caso de ausencia transitoria, impedimento o vacancia, el Subjefe será reemplazado interinamente por el Oficial Superior más antiguo en actividad.

**EL** Subjefe, con el asesoramiento del Director General de Seguridad, propone al Jefe del Servicio Penitenciario Provincial, los destinos y funciones del personal de la Institución.

#### **Capítulo Cuarto**

##### **Consejo Superior Penitenciario**

**EL** Consejo Superior Penitenciario estará integrado por los titulares de las Direcciones Generales y será comandado por el Subjefe del Servicio Penitenciario de Córdoba.

**EL** Consejo Superior Penitenciario es el organismo que proporciona asesoramiento y asistencia al Jefe del Servicio Penitenciario de la Provincia, con el fin de lograr un mejor servicio y el mayor aprovechamiento de sus medios en todos los asuntos de su competencia.

**EL** Consejo Superior Penitenciario dirigirá fundamentalmente su accionar al estudio, análisis y formulación de proposiciones en los distintos asuntos que hacen a la marcha de la Institución, así como otras funciones que pueden asignarle las normas reglamentarias que como consecuencia de la presente Ley se dicten.

**PARA** el tratamiento de cuestiones cuya especificidad o importancia tornen necesario el concurso de alguno de los restantes titulares de Direcciones y/o del cuadro de Oficiales Superiores, la Jefatura y/o Subjefatura del Servicio Penitenciario de la Provincia, podrán resolver la convocatoria del Consejo Superior Penitenciario, con indicación de los asuntos a considerar y de los miembros a incorporar, los que -en tal caso- actuarán con iguales facultades que los miembros natos del Consejo Superior Penitenciario.

**EN** caso de ausencia transitoria del Subjefe, es reemplazado en sus funciones por el Oficial de mayor grado y antigüedad entre los miembros del Consejo Superior Penitenciario.

#### **Capítulo Quinto**

##### **Órganos de Conducción Superior**

**EL** Servicio Penitenciario de la Provincia contará con las siguientes Direcciones Generales, a saber:

Dirección General de Técnica Penitenciaria y Criminológica.

Dirección General de Seguridad.

Dirección General de Tratamiento Penitenciario y Obras, y

Dirección General de Formación Profesional.

**LA** Dirección General de Técnica Penitenciaria y Criminológica tiene a su cargo la organización y fiscalización del sistema, regímenes, trato, tratamiento y asistencia aplicable a los internos detenidos, procesados y condenados, de conformidad a las normas que regulan estas materias y a la política penitenciaria establecida.

También tendrá a su cargo la confección y actualización de los legajos criminológicos de los internos y la efectivización de la coordinación del accionar institucional con los Tribunales de la Provincia y del Fuero Federal con asiento en Córdoba.

**LA** Dirección General de Seguridad tiene a su cargo todo lo relacionado con la seguridad en el ámbito institucional y colabora, con la Jefatura, en la selección de recursos humanos y lo referido al bienestar social del personal penitenciario y su grupo familiar.

**LA** Dirección General de Tratamiento Penitenciario y Obras tiene a su cargo la organización, orientación y fiscalización de la capacitación laboral de los internos afectados al trabajo penitenciario, coadyuvando a la misión de la Dirección de Trabajo, Producción y Comercialización, como así también la ejecución de los estudios, proyectos, obras y tareas de mantenimiento que en materia edilicia sean necesarias a la Institución.

**LA** Dirección General de Formación Profesional tiene a su cargo la capacitación y perfeccionamiento del personal penitenciario, propendiendo a lograr los niveles de profesionalidad acordes a la política institucional en materia penitenciaria.

**LAS** Direcciones Generales serán ejercidas, cada una de ellas, por Oficiales Superiores, en actividad, designados por el Poder Ejecutivo. El Jefe del Servicio Penitenciario Provincial podrá proponer un orden de mérito no vinculante.

**EL** Servicio Penitenciario de la Provincia contará con las siguientes Direcciones, a saber:

Dirección de Administración.

Dirección de Asuntos Jurídicos.

Dirección de Secretaría General.

Dirección de Trabajo, Producción y Comercialización Penitenciaria.

Dirección de Unidades Especiales, y

Dirección de Establecimientos Penitenciarios.

**LAS** Direcciones de Administración, de Asuntos Jurídicos, de Secretaría General y de Trabajo, Producción y Comercialización Penitenciaria, estarán a cargo de un titular designado por el Poder Ejecutivo.

Las Direcciones restantes estarán a cargo de un Oficial Superior o Jefe designado por el Jefe del Servicio Penitenciario de la Provincia.

**LA** Dirección de Administración tiene a su cargo la formulación técnica del proyecto de planificación anual y su expresión presupuestaria, la administración de los programas del área y la fiscalización y análisis del sistema administrativo y demás funciones que le asignen



otras normas.

**LA** Dirección de Asuntos Jurídicos tendrá a su cargo –en general– el asesoramiento jurídico a la Jefatura del Servicio Penitenciario de la Provincia, al Consejo Superior Penitenciario, demás Direcciones y establecimientos carcelarios y –en particular, las siguientes funciones, a saber:

**a)** Informar sobre la interpretación y aplicación de normas.

**b)** Registrar, coordinar y mantener actualizadas las normas que regulan la actividad de la Institución, formulando los proyectos que la Jefatura pueda propiciar o dictar.

**c)** Supervisar y dictaminar los sumarios administrativos y, cuando así se disponga, sustanciar los mismos.

**d)** Defender en los fueros penal, civil y/o contravencional al personal penitenciario que resulte imputado a causa o con motivo del cumplimiento de sus funciones específicas, salvo casos de colisión de intereses entre el agente y la Institución.

**LA** Dirección de Secretaría General tiene a su cargo el registro, movimiento y archivo de las actuaciones administrativas de la Jefatura de la Institución, las relaciones externas del Servicio Penitenciario de Córdoba, las áreas de Planeamiento y de Informática, la edición de Órdenes del Día y de Boletines Penitenciarios, y el mantenimiento y servicios de la Sede de la Jefatura de la Institución.

Tiene a su cargo además todo otro asunto que no competa a área determinada.

**LA** Dirección de Trabajo, Producción y Comercialización Penitenciaria tiene a su cargo la planificación, ejecución y control de la actividad laboral de los internos, la comercialización de los productos y servicios concebidos y la administración de los ingresos resultantes, a través de la Cuenta Especial que se crea en la presente Ley.

**LA** Dirección de Unidades Especiales Penitenciarias tiene a su cargo la formación de las técnicas y tácticas operativas de los Equipos y Cuerpos Especiales, tendientes a la consecución de los objetivos específicos. Tendrá dependencia directa de la Subdirección General de Seguridad.

**LAS** Direcciones Generales y las Direcciones son los órganos de conducción superior que tienen a su cargo la organización, coordinación, ejecución y control de las actividades que les asigna la presente Ley y demás normas reglamentarias que se dicten en consecuencia.

En los asuntos técnicos de su competencia, impartirán directivas de observancia obligatoria para todas las dependencias de la Institución.

## Capítulo Sexto Cuenta Especial

**CRÉASE** una CUENTA ESPECIAL denominada “**Trabajos Penitenciarios**”, en la que ingresará el producido de la venta de bienes y servicios realizados por la Dirección de Trabajo, Producción y Comercialización Penitenciaria. Con dichos ingresos se atenderán prioritariamente las necesidades de insumos, maquinarias y capacitación de recursos humanos que requiera dicha Dirección.

## PARTE IV

### DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

**LA** presente ley es de orden público y ninguna persona puede alegar en su contra derechos adquiridos.

**TODO** conflicto normativo relativo a su aplicación deberá resolverse en beneficio de la presente ley, debiendo interpretarse que la misión fundamental de las fuerzas de seguridad pública consiste en la protección de la persona humana, de las organizaciones sociales de la comunidad, el resguardo de sus patrimonios, la defensa de la democracia y de las instituciones que la componen.

**EL** Ministerio de Seguridad o el organismo que en el futuro lo sustituya o reemplace en sus competencias actuales, será la autoridad de aplicación de la presente ley.

**SUSTITUYESE** el artículo 2º de ley nº 8831, por el siguiente texto, a saber:

“**Artículo 2º.- CRÉASE el CONSEJO PROVINCIAL DE COMPLEMENTACIÓN PARA LA SEGURIDAD INTERIOR**, el cual estará integrado por el Ministro de Seguridad, quien será el Coordinador, el Secretario de Seguridad, el Jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba y por las máximas autoridades de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina, destinadas en la Provincia de Córdoba.”

**ESTABLECESE** que la Ley nº 9120 será de aplicación al Servicio Penitenciario de la Provincial, debiendo entender el TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL, con su competencia, en todas las causas que se encuentren en trámite y en las que se susciten a partir de la vigencia de la presente Ley.

**DERÓGANSE** las Leyes Nº 6701, 8574, 8816 y toda otra Ley o disposición normativa que se oponga a los contenidos de la presente.

**LA** presente ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

**COMUNIQUESE** al Poder Ejecutivo Provincial.

**DIOS GUARDE A V. H.**

**Arias, Costa, María I. Fernández, Fontanini, Mussi, Sánchez, Guzmán, Taquela, Bianciotti, Martí-**

nez, Mosquera

- 12 -

**OBRAS VIALES Y DE VIVIENDAS. LLAMADO A LICITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.**

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Corresponde el tratamiento del punto 15 del Orden del Día, expediente 6266.

Tiene la palabra la señora legisladora Taquela.

**Sra. Taquela.**- Señor presidente: en octubre del año 2004 promoví la presentación del pedido de informes contenido en el proyecto en tratamiento. En aquel momento me resultó verdaderamente llamativa la anulación, por parte del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba, de 7 llamados a licitación para adjudicar obras viales correspondientes al puente sobre el río Carcarañá, la pavimentación del camino La Bolsa-Alta Gracia, la pavimentación de la ruta provincial número 24, Pavín-Huanchilla, y trabajos de cobertura en zona 6 (A y B) y zona 1.

En aquel momento –reitero-, octubre de 2004, el señor ministro de Obras y Servicios Públicos, Oscar Santarelli, manifestó públicamente que la anulación de estas licitaciones tenía como origen el sobreprecio del orden del 40 por ciento con relación al presupuesto oficial establecido para dichos proyectos, agregando sus sospechas acerca de una maniobra de cartelización por parte de las empresas que participaron en ellas. Ante esta situación, grave de por sí, y teniendo en cuenta que algunas de estas empresas eran adjudicatarias de obras en ejecución de otras obras adjudicadas por el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, consideré necesario acceder a información más detallada y precisa sobre el particular, en salvaguarda de los dineros del erario público, máxime si se tenía en cuenta que, según había trascendido, las cotizaciones efectuadas por las empresas rondaban, en promedio, los 6 millones de pesos por encima de la cotización consignada en los pliegos de las distintas licitaciones.

La anulación de las licitaciones dispuesta por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos el año pasado, obviamente iba a producir el atraso en la ejecución de estas obras hasta tanto se hiciera una nueva convocatoria a licitación. Entonces, era necesario conocer cuál iba a ser la fecha

del nuevo llamado a licitación, sobre todo teniendo en cuenta el inminente inicio del período de lluvias en la Provincia.

Señor presidente, me fue adelantado en la reunión de Labor Parlamentaria que este proyecto va a ser remitido a archivo porque no tiene respuesta. Pese a las gestiones que se realizaron por parte de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de esta Legislatura provincial desde el mes de octubre de 2004, no se ha obtenido respuesta a las preguntas contenidas en este pedido de informes.

Cuando un proyecto toma estado parlamentario deja de pertenecer al autor que lo impulsa para transformarse en un proyecto del Cuerpo, de modo que esta Legislatura de la Provincia de Córdoba no va a tener respuesta, no va a saber cuáles fueron las empresas que se presentaron al llamado a licitación de las 7 obras viales que antes detallé. Nos vamos a quedar sin saber cuáles fueron las empresas ejecutoras de obras públicas en la Provincia. Nos vamos a quedar sin saber, señor presidente...

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Solicito a los señores legisladores guarden silencio.

Continúe, señora legisladora Taquela.

**Sra. Taquela.**- Gracias señor presidente.

Nos vamos a quedar sin saber si estas empresas -a las que les anularon las adjudicaciones oportunamente efectuadas y eran ejecutoras de obras públicas en la Provincia- habían pedido o no mayores costos en los contratos que estaban ejecutando. Nos vamos a quedar sin saber en qué tipos de rubros pidieron mayores costos; a cuanto ascendían éstos y si fueron pagados o no por la Provincia.

Me resulta muy difícil aceptar, señor presidente, que por cumplir con las disposiciones del Reglamento -y no teniendo otra posibilidad que dirigirme a la Presidencia- sienta que usted no atiende lo que estoy planteando.

Nos vamos a quedar sin saber cuáles fueron las empresas adjudicatarias de las obras el año pasado para la construcción de 2.800 viviendas, que posteriormente fueron anuladas por los sobreprecios consignados y también nos vamos a quedar sin saber para cuándo se prevé la convocatoria de las nuevas licitaciones públicas.

Sé que en general los acuerdos de Labor Parlamentaria no se cambian, pero es necesario en este caso hacer una apelación, fundamental-

mente al bloque de la mayoría, para pedirle que revea su posición y no sólo no envíe este proyecto al archivo sino que le dé aprobación.

Quiero recordar que al inicio de esta sesión, al momento de tratar los distintos puntos que contenían el temario, en virtud del artículo 146 del Reglamento Interno se aprobó el proyecto de resolución 7100/L/05, correspondiente al punto 29 del Orden del Día, iniciado por los legisladores Castro, Santos, Bianciotti, Ciocatto, Dressino, Nicolás, por el cual solicitan al Poder Ejecutivo Provincial informe sobre la desnutrición infantil y los programas de asistencia alimentaria. Este proyecto no obtuvo respuesta, por lo que el presidente de la comisión que lo tenía para su tratamiento decidió, en el plenario de la comisión, traerlo al recinto y solicitar su aprobación.

Si pudiéramos trasladar esta situación a lo que se hace en los estrados judiciales, diría que estamos frente a sentencias contradictorias, porque en situaciones exactamente iguales: dos pedidos de informes que se han gestionado y no tienen respuesta, en una se resuelve darle aprobación en el recinto y en otra enviarlo a archivo.

Más allá de ser la autora de este proyecto y quien lo promoviera, el proyecto pertenece a la Legislatura. Quienes integramos este Cuerpo hemos jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución de la Provincia, y hay un incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo provincial al no evacuar el pedido de informes. Por lo tanto, a los fines de no caer en una situación que va a resultar inexplicable -por lo menos para el bloque de la mayoría- solicito la aprobación del proyecto.

Muchas gracias.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Debo aclararle que usted solicitó la palabra, yo se la concedí y comenzó a informar el proyecto. Previamente debíamos poner la Cámara en Comisión porque el proyecto no cuenta con despacho.

Corresponde poner la Cámara en estado de Comisión.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

-CAMARA EN COMISION-

**Sr. Presidente (Fortuna).**-Tiene la palabra la legisladora Taquela.

**Sra. Taquela.**- Señor presidente: cumplidas las formalidades, no tengo ningún inconveniente

reiterar nuevamente mi alocución en el sentido que lo hice.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra el legislador Fernández.

**Sr. Fernández.**- Señor presidente: he solicitado la palabra a efectos formales, para solicitar nuevamente que el proyecto sea tratado, e insistiendo en su importancia, pedirle al bloque de la mayoría su aprobación. Existe una denuncia de un ministro y un pedido de informes por parte de la Legislatura, por lo tanto, insistimos en la aprobación de este proyecto.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra el legislador Garavaglia.

**Sr. Garavaglia.**- Señor presidente: en nombre del bloque de Unión por Córdoba voy a exponer los motivos que nos llevan a rechazar el presente proyecto de resolución.

Este proyecto, que lleva el número 6266/L/04, tiene por objeto conocer diversos aspectos relacionados con algunos procesos licitatorios que ha realizado en materia de construcción de viviendas, ejecución, mantenimiento, repavimentación y construcción de rutas provinciales el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba y/o la Agencia Córdoba de Inversiones y Financiamientos (ACIF) Sociedad de Economía Mixta, y que por diversos motivos fueron declarados desiertos o, más precisamente, fracasados por inconveniencias de los precios presentados por las empresas oferentes.

Nuestro bloque no comparte la iniciativa planteada por la legisladora autora del proyecto porque, como bien se expresara en las reuniones de la Comisión de Obras Públicas de esta Legislatura en oportunidad de haberse conservado el objeto del proyecto en tratamiento, estos actos administrativos expresos o procesos licitatorios son absolutamente públicos.

La convocatoria o llamada a licitación pública para la construcción de una obra o la provisión de materiales se realiza mediante publicaciones en el Boletín Oficial o en los periódicos de mayor circulación, por lo cual queda garantizada su publicidad.

Luego, la conclusión del proceso -es decir, el acto administrativo expreso que tiene por objeto adjudicar, declarar desierto el proceso adjudicatario o bien fracasado el mismo por no convenir a

los intereses económicos del Estado o resultar perjudicial para el erario público- también fue publicada en el Boletín Oficial a fin de garantizar su publicidad.

Lo expresado se relaciona con el proyecto en tratamiento precisamente porque todos estos aspectos legales fueron cumplidos acabadamente por el organismo licitante, fundamentados por las resoluciones tomadas en cada expediente licitatorio en particular, y publicitados. Además, como se desprende de dichos instrumentos, los fundamentos están encuadrados en los márgenes de discrecionalidad que la ley confiere al organismo interviniente para decidir sobre estos temas.

De la información recogida y la lectura de las resoluciones publicadas debemos inferir que el Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio competente, procedió conforme a derecho dejando cubiertos los intereses del Estado provincial y en buen resguardo jurídico los derechos de las empresas participantes, motivo por el cual desde este bloque no existe interés por transformar esta iniciativa particular de la legisladora autora del proyecto en una resolución de la Cámara.

No obstante lo expresado, debo recordar que el artículo 102 de la Constitución provincial le confiere a los legisladores el derecho de requerir esta información en forma individual sin la necesidad expresa de que los mismos deban ser aprobados por la Cámara en su conjunto, es decir, cualquier legislador puede tener una inquietud o la necesidad de informarse sobre un tema en particular. Ahora bien, cuando el pedido se instrumenta a través de un proyecto de resolución, como en el caso que nos ocupa, para hacerse efectivo requiere de la aprobación de esta Cámara, y para que ello ocurra debe ser de interés de la mayoría de los legisladores de este Cuerpo legislativo.

Como bien lo expresara anteriormente, el bloque de Unión por Córdoba no comparte la iniciativa, motivo por el cual propongo como despacho de la Cámara constituida en comisión rechazar el presente proyecto de resolución.

Muchas gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra la señora legisladora Taquela.

**Sra. Taquela.**- Señor presidente, es de mi conocimiento, y así se pacta generalmente en Labor Parlamentaria, lo que sucede en caso que se resuelva el rechazo de un proyecto como efectivamente veo va a ocurrir -pese a mi apelación-

con el proyecto objeto de tratamiento.

En primer lugar, quisiera decir en términos genéricos, que la respuesta del legislador preopinante del bloque de la mayoría es absolutamente impertinente en relación a que no tiene pertenencia con el objeto y las preguntas que se hicieron en el pedido de informes objeto de mi intervención.

En segundo lugar, quiero decir que si el legislador preopinante y presidente de la comisión que tenía en sus manos el tratamiento de este proyecto hubiera cumplido con el Reglamento Interno, que expresa que cuando se pone en tratamiento un proyecto debe invitarse al autor del mismo para explicarlo, posiblemente el bloque de la mayoría tendría mayor claridad sobre esta situación.

Que no se me haga decir a través de las expresiones y de las manifestaciones del legislador preopinante cuestiones que no están en la letra ni en el espíritu del proyecto de mi autoría. Aquí es claro que un ministro del Poder Ejecutivo provincial denunció una maniobra de cartelización. No estoy cuestionando, al contrario, la decisión del Poder Ejecutivo provincial de haber procedido a la anulación de las licitaciones porque, obviamente, si existían sobreprecios, si había un acuerdo entre las empresas que eran adjudicatarias u oferentes de estas obras que se iban a entregar en adjudicación o que se habían preadjudicado, era necesario anular todo el proceso licitatorio. Sobre esto es que estamos pidiendo información, no estamos cuestionando la anulación.

No es un invento. Vimos a Santarelli por todos los canales de televisión denunciar las maniobras de cartelización, manifestando que eran las mismas empresas que ya tenían obras en ejecución en la Provincia; sin embargo se está haciendo decir cosas que mi proyecto no dice en su letra ni en su espíritu, ni lo he dicho en las manifestaciones que aquí he vertido.

Insisto en la necesidad de que este proyecto se apruebe o al menos vuelva a comisión para su tratamiento efectivo, porque se está planteando una situación contradictoria en dos proyectos sin respuesta, uno que se aprobó hoy por el artículo 146 y otro se envía al archivo simplemente por no estar de acuerdo.

Conozco el Reglamento, sé que tengo derecho de pedir un informe de manera directa, pero me parece realmente vergonzoso que desde octu-

bre estemos con este proyecto porque, en última instancia, si el bloque de la mayoría no acordaba con el espíritu ni la letra del mismo lo hubieran despachado directamente por la negativa.

Muchas gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra el señor legislador Cid.

**Sr. Cid.**- Señor presidente, no sólo avalo las manifestaciones del legislador del bloque de Unión por Córdoba sino que además expreso mi sorpresa con respecto a los dichos de la legisladora, que habla de contradicciones. Diría que más que mirar la paja en el ojo ajeno habría que ver la viga en el propio cuando se habla de contradicciones, porque la misma legisladora que votó y argumentó en contra de la inmunidad de opiniones en este recinto, no tuvo la misma opinión cuando se trató el caso Viqueira-Cossio.

Muchas gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración la moción del bloque de Unión por Córdoba de adoptar como despacho de la Cámara en comisión el rechazo del expediente 6266.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobada.

Corresponde levantar el estado de la Cámara en comisión.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

-CAMARA EN SESION-

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración el despacho emitido por la Cámara en comisión, que aconseja el rechazo del proyecto 6266.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

Queda en consecuencia rechazado el proyecto.

**PROYECTO DE RESOLUCION – 06266/L/04  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CORDOBA  
RESUELVE:**

Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial en los términos del art. 102 de la Constitución Provincial, para que a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y en el término de SIETE (7) DÍAS, proceda a INFORMAR sobre los siguientes puntos, a saber:

1.- Remita listado de las empresas que se presentaron al llamado de licitación para la adjudicación de la ejecución de obras viales en la Provincia, la que poste-

riormente fue anulada por sobreprecios.

2.- Indique qué empresas, de las referidas en el punto 1.- del presente, son actualmente ejecutoras de obras públicas que oportunamente le fueran adjudicadas por el Superior Gobierno de la Provincia.

3.- Si en las obras que dichas empresas ejecutan actualmente, se han pactado contractualmente mayores costos a pagar en los contratos oportunamente suscritos y, en su caso, si los mismos han sido reclamados por las empresas, por cuáles de ellas lo fueron, a cuánto ascienden los mismos y si dichos mayores costos fueron pagados por la Provincia.

4.- Cuáles fueron las empresas adjudicatarias de las obras para la construcción de 2.800 viviendas el año ppdo. y que posteriormente se anulara por los sobreprecios consignados por dichas empresas.

5.- Indique fecha de próxima convocatoria a licitación pública para la realización de las obras viales correspondientes al puente sobre el río Carcarañá, la pavimentación del camino La Bolsa-Alta Gracia; pavimentación de la ruta provincial 24 Pavín-Huanchilla y trabajos de cobertura zona 6, 6ª y 6B y Zona Uno.

**María Taquela.**

**FUNDAMENTOS**

Ha resultado llamativa la anulación por parte del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de siete licitaciones para adjudicar obras viales que corresponden al puente sobre el río Carcarañá, la pavimentación del camino La Bolsa-Alta Gracia; pavimentación de la Ruta Provincial 24, Pavín-Huanchilla y trabajos de Cobertura Zona 6, 6A y 6B y Zona Uno.

A estar de las declaraciones del Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos, Oscar Santarelli, dicha anulación se funda en el sobreprecio del orden del 40% en relación al presupuesto oficial para dichos proyectos. Y según los dichos del Ministro, habría sospechas de una maniobra de cartelización entre las empresas que participaron en las licitaciones de que se trata.

Ante esta situación, de por sí grave, y teniendo en cuenta que algunas de las empresas que estarían involucradas en la supuesta maniobra serían actuales ejecutoras de distintas obras públicas en la Provincia, resulta necesario acceder a información más detallada y precisa sobre el particular en salvaguarda de los dineros del erario público. Máxime si se tiene en cuenta que, según trascendidos, las cotizaciones efectuadas por las empresas que estarían involucradas, rondan los seis millones de pesos por encima de la cotización consignada en los pliegos de la licitación.

La anulación de las licitaciones de referencia dispuesta por la Provincia, producirá como consecuencia el atraso en la ejecución de las obras de que se trata, por lo que resulta necesario conocer la fecha del nuevo

llamado a licitación para la ejecución de las mismas, máxime si se tiene en cuenta el inminente comienzo de la época de lluvias en la Provincia.

Por los fundamentos antes apuntados, se solicita el acompañamiento de los pares para la aprobación del presente Proyecto de resolución.

**María Taquela.**

- 13 -

## ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Por Secretaría se dará lectura a los últimos asuntos ingresados a última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

LVII

**07301/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por los Legisladores Feraudo y Basso, por el cual adhiere al "Día Mundial de la Libertad de Prensa", conmemorado el 3 de Mayo.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Queda reservado en Secretaría.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

LVIII

**07302/L/05**

**Proyecto de ley:** Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que establece la ley de prevención y sanción de la violencia laboral de los superiores jerárquicos hacia el personal dependiente de cualquier organismo instituidos por los Títulos Primero y Segundo de la Segunda Parte de la Constitución Provincial.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Se gira a las comisiones de Legislación del Trabajo y de Legislación General.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

LIX

**07303/L/05**

**Proyecto de declaración:** Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual expresa beneplácito y adhiere a la conmemoración del "Día Mundial de la Libertad de Prensa".

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Queda reservado en Secretaría.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

LX

**07304/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores Fonseca, Valinotto y Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de la Solidaridad (Art. 102 C.P.), informe sobre subsidios, fondos, planes sociales o cualquier tipo de ayuda material o en efectivo distribuida en la Localidad de Dalmacio Vélez Sársfield, entre el 1º de Marzo y el 24 de Abril del año en curso.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Queda reservado en Secretaría.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

LXI

**07306/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández y Prato, por el cual solicita al Ministerio de la Producción y Trabajo (Art. 102 C.P.), informe sobre las medidas de promoción industrial que han sido comprometidas a la Cristalería Quilino.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Queda reservado en Secretaría.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

LXII

**07307/L/05**

**Proyecto de resolución:** Iniciado por los Legisladores Bianciotti, Santos, Dressino, Ciocatto, Nicolás, Luján, Poggio y Castro, por el cual solicita al Ministerio de la Producción y Trabajo (Art. 102 C.P.), informe sobre la radicación de empresas e industrias en el marco del denominado Plan de Promoción Industrial y sobre la ayuda monetaria o de otra naturaleza que haya recibido la Empresa Indu-Agro S.A. de Quilino.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Queda reservado en Secretaría.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

LXIII

**Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos**

**1)06990/P/05**

**Del Poder Ejecutivo Provincia – Pliego :** Solicitando Acuerdo para designar a la Señora Abogada Emma del Valle Mercado, como Juez de Primera Instancia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la Novena Circunscrip-

ción Judicial, con asiento en la Ciudad de Deán Funes.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Queda reservado en Secretaría.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

**2)06992/P/05**

**Del Poder Ejecutivo Provincia – Pliego :** Solicitando Acuerdo para designar al Señor Abogado Rafael Garzón, como Juez de Primera Instancia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia de Segunda Nominación de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Río Tercero.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Queda reservado en Secretaría.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

**3)07165/N/05**

**Del Poder Ejecutivo Provincial:** Solicitando Acuerdo para designar como Síndico Titular de la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E., al Dr. Héctor Enrique Valfré.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Queda reservado en Secretaría.

- 14 -

**A) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y DE FAMILIA, DE LA NOVENA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES. DESIGNACIÓN.**

**B) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y DE FAMILIA, DE SEGUNDA NOMINACIÓN DE LA DÉCIMA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DESIGNACIÓN.**

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Se encuentra reservada en Secretaría una nota por la que se formula moción de tratamiento sobre tablas de los pliegos despachados por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos que será leída a continuación.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

Córdoba, 04 de mayo de 2005.

**Señor Presidente de la  
Legislatura de la Provincia de Córdoba  
Cr. Juan Schiaretti**  
S / D

De mi mayor consideración:

En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a Ud. a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas de los pliegos iniciados por el Poder Ejecutivo provincial, N° 6990/P/05, solicitando acuerdo para designar a la Sra. abogada Emma del Valle Mercado como Juez de Primera Instancia del Juzgado de Primera Instancia con Competencia Múltiple de la Novena Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Deán Funes; Expte. 6992/P/05, solicitando acuerdo para designar al Sr. abogado Rafael Garzón como Juez de Primera Instancia del Juzgado de Primera Instancia y Segunda Nominación con Competencia Múltiple de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero.

Contando con despacho favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, se considera oportuno dar tratamiento a los mencionados pliegos en la presente sesión ordinaria. Asimismo, se solicita el tratamiento en conjunto de dichos acuerdos y la votación por separado.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

**Juan Carlos Massei**  
Legislador provincial

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída por Secretaría.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobada.

Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria y a los usos de la Unicameral, los pliegos y las solicitudes de acuerdos para nombramientos de magistrados en el Poder Judicial se tratan en conjunto y se votan por separado, sin perjuicio que en la discusión se haga mención a mociones concretas sobre cada uno de los pliegos.

Tiene la palabra el señor legislador Jacobo Trad.

**Sr. Trad.**- Señor presidente: estamos dando tratamiento al pedido de acuerdo solicitado por

el Poder Ejecutivo para la designación del abogado Rafael Garzón como Juez de Primera Instancia del Juzgado de Primera Instancia y Segunda Nominación, con competencia en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas, de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero; y de la abogada doctora Emma del Valle Mercado, como Juez de Primera Instancia del Juzgado de Primera Instancia, con competencia en lo Civil y Comercial, de Familia y Concurso, de la Novena Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Deán Funes, tal como dan cuenta los pliegos condensados en los expedientes 6992/P/05 y 6990/P/05, respectivamente.

El pedido de acuerdo fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos junto a los antecedentes documentados de los postulados, encontrándose incorporada a los expedientes la resolución referida al orden de mérito asignado por el Consejo de la Magistratura. Como dato ilustrativo, resulta importante destacar la excelente impresión dejada por los profesionales al concretarse la entrevista personal con los miembros de la comisión.

Tales referencias, y aquellas que surgen de las constancias, certificaciones e informes obrantes que tuvimos bajo estudio, como lo son los antecedentes curriculares y los emitidos entre otros por la Dirección Nacional de Estadísticas y Reiniciencia Criminal; por la AFIP, respecto del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre los Bienes Personales; por el Registro General de la Provincia, sobre inhabilidades, etcétera, han permitido, luego de un cuidadoso análisis, la formación de criterios sobre las condiciones éticas, doctrinarias, académicas y jurídicas de los postulados, habiéndose llegado a la conclusión de que los mismos se encuentran perfectamente legitimados y habilitados para ejercer los cargos de magistrados para los cuales fueron propuestos.

En función de ello, señor presidente, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos aconseja a los señores legisladores prestar el acuerdo en la forma y con los alcances solicitados.

Gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.

**Sra. Leiva.**- Señor presidente: en representación del bloque del Frente Nuevo, respecto a los

pliegos para la designación de los doctores Rafael Garzón y Emma del Valle Mercado, vamos a prestar el acuerdo solicitado por el Ejecutivo provincial.

Los abogados propuestos han sido debidamente entrevistados y se ha efectuado el concurso de antecedentes y oposición ante el Consejo de la Magistratura, reuniendo las condiciones necesarias para el ejercicio de la función para la cual han sido propuestos.

Nada más.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.

**Sra. Dressino.**- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical vamos a expresar nuestro voto afirmativo para la designación de los doctores Rafael Garzón y Emma del Valle Mercado tal como lo fundamentara el señor miembro informante de la Comisión, entendiendo que ambos abogados han reunido las condiciones legales y de idoneidad que la ley exige para el ejercicio de los cargos en cuestión.

Gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra el señor legislador Sella.

**Sr. Sella.**- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo del bloque del Partido País de los pliegos en tratamiento, en concordancia con el despacho unánime de la Comisión de Asuntos Constitucionales y con lo expresado por los legisladores preopinantes.

Gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Por Secretaría se dará lectura al despacho del expediente 6990.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

#### DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando acerca del Expediente N° 06990/P/05, Pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando Acuerdo para designar a la Señora Abogada Emma del Valle Mercado, como Juez de Primera Instancia del Juzgado de Primera Instancia con competencia múltiple de la Novena Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Deán Funes, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:

#### LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA RESUELVE:

**Artículo 1º.**- PRESTAR Acuerdo, en los términos del Artículo 104 Inciso 42 de la Constitución de la Pro-



vincia de Córdoba, para designar Juez de Primera Instancia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia, de la Novena Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Deán Funes (Acuerdo N° 108), a la Señora Abogada EMMA DEL VALLE MERCADO – D.N.I. 14.567.996.

**Artículo 2º.-** DE FORMA.

**DIOS GUARDE A V.H.**

**Carbonetti, Cid, Ruiz, Trad, Dressino.**

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración el pliego correspondiente al expediente número 6990 leído por Secretaría.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

Queda prestado el acuerdo para que la abogada Emma del Valle Mercado sea designada Juez de Primera Instancia.

Se comunica al Poder Ejecutivo provincial.

Por Secretaría se dará lectura al despacho del expediente 6992.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

#### DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando acerca del Expediente N° 06992/P/05, Pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando Acuerdo para designar al Señor Abogado Rafael Garzón, como Juez de Primera Instancia del Juzgado de Primera Instancia y Segunda Nominación con competencia múltiple de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Río Tercero, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:

#### LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA RESUELVE:

**Artículo 1º.-** PRESTAR Acuerdo, en los términos del Artículo 104 Inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Primera Instancia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia, de Segunda Nominación de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Río Tercero (Acuerdo N° 108), al Señor Abogado RAFAEL GARZÓN – D.N.I. 22.035.343.

**Artículo 2º.-** DE FORMA.

**DIOS GUARDE A V.H.**

**Carbonetti, Cid, Ruiz, Trad, Dressino.**

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración el pliego correspondiente al expediente 6992 leído por Secretaría.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

Queda prestado el acuerdo para que al abogado Rafael Garzón sea designado Juez de Primera Instancia.

Se comunica al Poder Ejecutivo provincial.

Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.

**Sra. Dressino.**- Señor presidente: pido disculpas por hacer este planteo en un momento que no es el oportuno.

Solicito que el expediente 7302, que tuvo ingreso como asunto de última hora, referido a la violencia del sector público, sea remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Así se hará, señora legisladora.

- 15 -

#### SÍNDICO DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO. DESIGNACIÓN. ACUERDO.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que se mociona el tratamiento sobre tablas del expediente 7165, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la cual será leída a continuación.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

Córdoba, 04 de mayo de 2005.

**Señor Presidente de la  
Legislatura de la Provincia de Córdoba  
Cr. Juan Schiaretti  
S. / D.**

De mi mayor consideración:

En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas de la Nota 7165/N/05 iniciada por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Dr. Héctor En-

rique Valfré como Síndico de la Lotería de Córdoba S.E.

Contando con despacho favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, se considera oportuno dar tratamiento a la mencionada solicitud en la presente sesión ordinaria.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

**Juan Carlos Massei**

Legislador provincial

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que recién acaba de ser leída por Secretaría.

Los señores legisladores que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobada.

Tiene la palabra el señor legislador Trad.

**Sr. Trad.**- Señor presidente, hoy nos hemos ganado el sueldo.

Corresponde a esta Legislatura dar acuerdo a la designación de síndico de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, según lo establece el artículo 14 del estatuto social de la misma y el artículo 144, inciso 10) in fine de la Constitución provincial.

Esta designación se debe a la necesidad de cubrir la vacante que se produce ante la renuncia del actual síndico, doctor Carlos Venancio Beltrami, por acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria.

Cabe destacar que la asamblea societaria aprobó la propuesta del doctor Enrique Valfré por unanimidad, en consideración a las condiciones de idoneidad suficientes que ostenta para ser designado en el cargo propuesto. En efecto, el doctor Valfré se ha desempeñado en distintas funciones en el ejercicio de la profesión de abogado, tanto en el ámbito público como privado, tal como surge de los antecedentes que fueran remitidos por el Poder Ejecutivo y confirmados a la hora de realizarse la entrevista en el día de ayer en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

Por otra parte, señor presidente, debe mencionarse su especial vinculación con la materia administrativa demostrada a través de diversas actividades, entre las que se destacan su desempeño como adscripto a la Cátedra de Derecho Administrativo y como miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Asociación Argentina de Dere-

cho Administrativo.

Habiendo emitido la comisión mencionada despacho favorable por mayoría al acuerdo para su designación, solicito a mis pares la aprobación del mismo.

Gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.

**Sra. Leiva.**- Señor presidente, quiero manifestar, en representación del bloque del Frente Nuevo, que no vamos a acompañar la designación en tratamiento.

La Ley 8837 establece, entre algunas atribuciones del Poder Ejecutivo, la posibilidad de otorgar título habilitante para las instalaciones de casinos, salas de bingo y máquinas de juego – slots-, aspectos respecto de los cuales nuestro bloque ha manifestado fundadas objeciones en reiteradas oportunidades.

La Lotería de la Provincia de Córdoba por Ley 8665 propone al Poder Ejecutivo el establecimiento de casinos, de salas de bingo y de otros locales de juegos; además, es la autoridad de aplicación, conforme a la Ley 8837, en materia de juegos, con atribuciones de control, de fiscalización y de recaudación tributaria.

Al síndico lo designa el Poder Ejecutivo, dura tres años en sus funciones y puede ser reelegido indefinidamente. La oposición carece de posibilidad cierta de control interno de la Lotería de Córdoba, motivo por el cual este bloque –como manifestara anteriormente- no va a acompañar la designación en tratamiento.

Muchas gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.

**Sra. Dressino.**- El tema en cuestión está referido al acuerdo que debe dar esta honorable Legislatura al doctor Héctor Enrique Valfré en su carácter de síndico de la Lotería de Córdoba.

Señor presidente: es bien conocido por esta Cámara que cuando esta Legislatura trató el paquete de leyes referidas a la Carta del Ciudadano, a la Modernización del Estado y a la Incorporación de Capital Privado a las empresas del Estado, la Unión Cívica Radical manifestó su oposición a las normas en cuestión atento que, precisamente a través de lo que después fuera la Ley 8837, se procedió a la modificación del Ley 8665, que hace referencia a las instituciones de la Lotería de Córdoba.

En este caso la designación del síndico responde a lo que establecen las normas de la Ley 19550. En su artículo 284, esta ley establece la posibilidad de la designación de uno o más síndicos, los que serán designados en asamblea – como en el caso en cuestión-, y se prescribe que se deberán designar igual número de suplentes al respecto.

Insistimos en la necesidad que la oposición esté integrada en los organismos de control, en este caso específico se trata de la Sindicatura de la Lotería de Córdoba.

Queremos decir que no tenemos nada que objetar ni discutir acerca de la persona del doctor Héctor Enrique Valfré en cuanto a sus cualidades personales y profesionales, pero entendemos que no es el momento para su designación, atento que el señor síndico titular debe permanecer en su función hasta tanto se designe nuevo síndico. Entendiendo que la cuestión no es de urgencia manifiesta porque el acta de asamblea tiene fecha 21 de marzo del corriente año y el proyecto en cuestión ingresó a esta Legislatura con fecha 20 de abril.

Vamos a solicitar formalmente la vuelta a comisión de la presente designación a los efectos de poder presentar un proyecto en términos similares al proyecto 6803/98, cuyo enunciado dice: “En todas las empresas del Estado, organismos y sociedades del Estado provincial, con conducciones colegiadas, como así también en aquellas en que el Estado tenga participación societaria o sea accionista mayoritario, será obligatoria la designación de dos miembros nominados por las dos primeras minorías de la oposición política con representación parlamentaria, uno de ellos en los entes de conducción y otro de ellos en los organismos de contralor”.

Esencialmente el proyecto en cuestión tiende a garantizar la transparencia y el control que la oposición debe ejercer en estas sociedades del Estado. Vamos a presentar un proyecto similar al que presentara un colega, ex legislador conocido por muchos en esta Cámara y amigo personal de varios de nosotros, con el cual compartimos plenamente esta propuesta, el doctor José Tanús Rufeil, quien, en su calidad de presidente del bloque del Partido Justicialista, insistió en más de una oportunidad en la necesidad de que la oposi-

ción estuviera representada.

Además hay un hecho notable, esto es que cuando el doctor Rufeil planteaba la participación de la minoría, allá por el año 1998, la Lotería de la Provincia no estaba privatizada y tampoco estaban ampliados los juegos, como ocurrió después de la célebre “Ley Bodega” que esta Cámara sancionara. Para ello, señor presidente, como solía decir un viejo dirigente político, ex presidente de la República -a lo mejor no lo digo con precisión, pero éste es el sentido-: “Todos los hombres son honestos, pero si los controlan es mejor”. Así decía “el General”. Por eso nosotros creemos que todos son honestos, pero si los controlan es mejor.

De manera que, señor presidente, dejando a salvo las cualidades personales del doctor Héctor Enrique Valfré, pedimos la vuelta a comisión del presente proyecto a efectos de poder discutir la incorporación de la oposición en los organismos de control y de conducción de la Lotería, y proceder a la modificación de su estatuto.

Gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Quiero hacerle una consulta, señora legisladora Dressino: mientras usted estaba haciendo el informe, ¿solicitó la vuelta a comisión del proyecto?

**Sra. Dressino** (Fuera de micrófono).- Sí, señor presidente.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración, en primer lugar, la moción de vuelta a comisión del proyecto en tratamiento, que formulara la legisladora Ana Dressino.

-Se vota y rechaza.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Rechazada.

Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.

**Sr. Mosquera.**- Señor presidente: tomando en cuenta que el aspirante Héctor Enrique Valfré cumple las condiciones objetivas y subjetivas requeridas para el cargo, adelanto mi voto afirmativo a su designación.

Muchas gracias.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Por Secretaría se va a dar lectura al despacho.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

**Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca del expediente 7165/N/05.**

**LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
RESUELVE:**

Prestar acuerdo, conforme lo dispuesto por el artículo 14 del Estatuto de la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, aprobada por Ley número 8665, y el artículo 144 inciso 10) in fine de la Constitución Provincial, para designar como Síndico Titular de la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, al doctor Héctor Enrique Valfré, matrícula individual 10.184.689.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración el acuerdo correspondiente al expediente 7165/N/05 leído por Secretaría.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

Queda así prestado el acuerdo para que el doctor Héctor Enrique Valfré sea designado Síndico de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado.

Se comunica al Poder Ejecutivo provincial.

Quiero hacer una aclaración: la legisladora Ana Dressino había solicitado que el proyecto número 7302 fuera también remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero como hay otro proyecto en el mismo sentido, el 7286, corresponde que también sea girado a la misma Comisión. Con esa aclaración, continuamos con el tratamiento del temario.

- 16 -

**A) 5º ANIVERSARIO DE LA PLAZA FEDERAL, EN SAN ROQUE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.**

**B) CAMPEONATO MUNDIAL 2005 DE VUELO LIBRE, EN EMBALSE DE RÍO TERCERO. INTERÉS LEGISLATIVO.**

**C) DÍA DE LA MINERÍA. INTERÉS LEGISLATIVO Y ADHESIÓN.**

**D) TRATADO CONSTITUCIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA. INCLUSIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS, SÁNDWICH Y GEORGAS DEL SUR. RECHAZO.**

**E) CAMPEONATO MUNDIAL DE AEROMODELISMO VUELO LIBRE FIA-FIB-FIC, EN EMBALSE. ADHESIÓN.**

**F) DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.**

**G) HINCHAS DE TALLERES. PORTACIÓN DE BANDERAS CON LAS CRUCES ESVÁSTICAS. ACTITUD. REPUDIO.**

**H) SR. ORESTE BERTA. TÍTULO DE DOCTOR HONORIS CAUSA, OTORGADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA POR SU TRAYECTORIA A LA INVESTIGACIÓN DE LA INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOVILÍSTICA. BENEPLÁCITO Y FELICITACIONES.**

**I) ISLAS MALVINAS, SÁNDWICH Y GEORGAS DEL SUR. INCLUSIÓN EN LA CONSTITUCIÓN PREVISTA PARA LA COMUNIDAD EUROPEA. REPUDIO E INDIGNACIÓN. PODER EJECUTIVO NACIONAL. INSTANCIA PARA AGOTAR LAS INSTANCIAS DIPLOMÁTICAS PARA SALVAGUARDAR LOS INTERESES DEL PAÍS.**

**J) TENISTAS ARGENTINOS DAVID NALBANDIAN, EN ALEMANIA Y GASTÓN GAUDIO, EN PORTUGAL. TRIUNFO OBTENIDO. BENEPLÁCITO.**

**K) ISLAS MALVINAS, SÁNDWICH Y GEORGAS DEL SUR Y ANTÁRTIDA ARGENTINA. INCLUSIÓN EN LA CONSTITUCIÓN PREVISTA PARA LA COMUNIDAD EUROPEA. OBJECCIÓN. REINO DE INGLATERRA. PROPUESTA DE INCLUIRLAS COMO TERRITORIOS BRITÁNICOS. ACTITUD. REPUDIO.**

**L) CÓRDOBA SUBSEDE DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE TANGO, EN VILLA DOLORES, FINALIZANDO EN LA SALA MAYOR DEL TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN DE CÓRDOBA. ADHESIÓN.**

**M) BANDERAS CON LAS CRUCES ESVÁSTICAS. EXHIBICIÓN POR GRUPÚSCULO DE PERSONAS EN UN ESTADIO DE FÚTBOL. MANIFESTACIONES RACISTAS, DISCRIMINATORIAS Y DELICTIVAS. REPUDIO.**

**N) TENISTA DAVID NALBANDIAN. VICTORIA EN EL ABIERTO DE TENIS DE MUNICH. BENEPLÁCITO Y FELICITACIONES.**

**O) ESCRITORAS MUGAS, TAGLIASACHI Y VALIDAKIS. SELECCIÓN PARA PARTICIPAR EN DISTINTAS ANTOLOGÍAS QUE EDITARÁ NUEVO SER EDITORIAL DE BUENOS AIRES. BENEPLÁCITO.**

**P) DON JORGE ABOD. INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE MELO. FALLECIMIENTO. PESAR.**

Q) FESTIVAL DE BANDAS EN EL ESTADIO CHATEAU CARRERAS DE CÓRDOBA. ADHESIÓN.

R) I.P.E.M. 177 ANTONIO SOBRAL, DE LABOULAYE. ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.

S) MAESTRÍA EN POLÍTICA Y GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL, APROBADA POR LAS UNIVERSIDADES NACIONALES DE CÓRDOBA Y VILLA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.

T) ENCUENTRO ARGENTINO DEL INSTITUTO JACQUES MARITAIN “LOS DERECHOS HUMANOS EN LATINOAMÉRICA”, EN CÓRDOBA. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.

U) LEVANTAMIENTO DEL GHETTO DE VARSOVIA Y DEL IOM HA SHOA, DÍA DE RECORDACIÓN DEL HOLOCAUSTO. ANIVERSARIO. ACTOS CONMEMORATIVOS. ADHESIÓN. VÍCTIMAS DEL HORROR NAZI. HOMENAJE.

V) ISLAS MALVINAS, SÁNDWICH Y GEORGIAS DE SUR Y DEL TERRITORIO ANTÁRTICO. INCLUSIÓN EN EL TRATADO CONSTITUCIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA COMO TERRITORIO DE ULTRAMAR DE GRAN BRETAÑA. RECHAZO. PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA. ABSTENCIÓN DE RATIFICAR LA CONSTITUCIÓN EUROPEA EN ESTOS TÉRMINOS. SOLICITUD.

Tratamiento conjunto sobre tablas.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes 7202, 7234, 7240, 7246, 7247, 7253, 7257, 7259, 7260, 7261, 7263, 7264, 7265, 7267, 7273, 7281, 7287, 7289, 7290, 7293, 7294, 7295, 7301 y 7303, con sus correspondientes pedidos de tratamiento sobre tablas, que serán leídos a continuación.

**Sr. Secretario (Núñez).**- (Leyendo):

Expte. 7202 /L/05

Córdoba, mayo 4 de 2005.

*Señor Presidente de la  
Legislatura de la Provincia de Córdoba.  
Cr. Juan Schiaretta.*

S. / D.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 7202/L/05, iniciado por la legisladora Domínguez, por el cual adhiere y expresa beneplácito al 5º Aniversario de la Plaza Federal, ubicada en la comuna de San Roque, Departamento Punilla, a conmemorarse el 5 de mayo del corriente año.

Motiva la presente solicitud la importancia que reviste dicha plaza, no sólo para la comunidad de San Roque sino para el país en su conjunto, en tanto simboliza la unión de las 23 provincias argentinas con lazos de fraternidad y hermandad.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

**Juan Carlos Massei**  
Legislador provincial

Expte. 7247/L/05

Córdoba, Mayo 02 de 2005.

*Señor Presidente de la  
Legislatura de la Provincia de Córdoba.  
Cr. Juan Schiaretta.  
S. / D.*

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitar que se incluya dentro del temario de la 15ª Sesión Ordinaria del día 4 de mayo del corriente año, el tratamiento del proyecto de declaración 7247/L/05, que declara adhesión al Campeonato Mundial de Aeromodelismo, Vuelo Libre FIA-FIB-FIC, organizado por la Federación Argentina de Aeromodelismo a realizarse del 21 al 27 de mayo del 2005 en la localidad de Embalse.

Motiva el pedido del tratamiento sobre tablas, la proximidad a la fecha, ya que es la última sesión previa al evento de referencia.

Sin más, saluda a usted cordialmente.

**Juan Carrillo**  
Legislador provincial

Se extiende al proyecto 7234/L/05.

Expte. 7240/L/05

Córdoba, mayo 2 de 2005.

*Señor Presidente de la*

**Legislatura de la Provincia de Córdoba****Cr. Juan Schiaretti.****S. / D.**

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración de mi autoría que lleva el número 7240/L/05, adhiriendo al Día de la Minería, en la 15ª sesión ordinaria del 127 período legislativo, del 4 de mayo del corriente.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

**Argentino Recalde.**

Legislador provincial.

**Expte. 7295/L/05**

Córdoba, mayo 4 de 2005.

**Señor Presidente de la  
Legislatura de la Provincia de Córdoba.**

**Cr. Juan Schiaretti.****S. / D.**

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 7295/L/05, iniciado por los legisladores Massei, Scarlatto y Ciocatto, por el cual rechaza la inclusión de las Islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur y del Territorio Antártico en el tratado Constitucional de la Unión Europea, como territorio de ultramar de Gran Bretaña y solicita a los países miembros de la Unión Europea se abstengan de ratificar la Constitución Europea en estos términos.

Motiva la presente solicitud la necesidad de manifestar nuestro rechazo a la inclusión de las Islas Malvinas en la Constitución Europea, desconociendo que esta jurisdicción está en litigio y por ende avalando la estrategia política de Gran Bretaña.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

**Juan Carlos Massei.**

Legislador provincial.

**Expte. 7246/L/05**

Córdoba, Mayo 03 de 2005.

**Señor Presidente de la  
Legislatura de Córdoba.**

**Cr. Juan Schiaretti.****S. / D.**

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 7246/L/05, por el cual la Legislatura expresa su más profundo y contundente rechazo a la inclusión de las Islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur en el Tratado Constitucional de la Unión Europea, al pretender formar parte del territorio antártico británico y por ende europeo, violando con ello la soberanía argentina.

Por ello, se hace indispensable que esta Legislatura se pronuncie frente a un acto de estas características, en un intento de salvaguardar la soberanía sobre una parte muy sentida de nuestro territorio argentino y mantener viva la memoria por aquellos que lucharon por este mismo fin.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

**Eduardo Fernández**

Legislador provincial.

**Expte. 7260/L/05**

Córdoba, mayo 4 de 2005.

**Señor Presidente de la  
Legislatura de la Provincia de Córdoba.**

**Cr. Juan Schiaretti.****S. / D.**

De mi mayor consideración:

En mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas en la décima quinta sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 7260/L/05, por el cual se expresa repudio e indignación por la inclusión de las Islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur en la Constitución prevista para la Comunidad Europea, instando al Poder Ejecutivo nacional a agotar las instancias diplomáticas para salvaguardar los intereses del país.

Por motivos que oportunamente expondremos en el recinto, es que solicito la moción de tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto.

Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.

Atentamente.

**Nélida Beatriz Luján.**

Legisladora provincial.

**Expte. 7263/L/05**

Córdoba, mayo de 2005.

**Señor Presidente de la  
Legislatura Provincial.**

**Cr. Juan Schiaretti**

S. / D.

De mi más distinguida consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle contemple la posibilidad de proponer el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 7263/L/05, repudiando la actitud del Reino Unido de incluir a las Islas Malvinas como territorio británico de ultramar.

Este requerimiento se encuentra fundado en razones temporales, circunstancia que impide que el mencionado proyecto sea tratado de otra manera.

Sin otro motivo, saludo a usted muy cordialmente.

**Graciela Gaumet.**

Legisladora provincial.

**Expte. 7301/L/05**

Córdoba, 4 de mayo de 2005.

**Señor Presidente de la  
Legislatura de la Provincia de Córdoba  
Cr. Juan Schiaretti**

S. / D.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 7301/L/05, iniciado por los legisladores Feraudo y Basso, por el cual adhiere al "Día Mundial de la Libertad de Prensa", a conmemorarse el 3 de mayo.

Acompañamos esta conmemoración defendiendo la libertad de prensa como herramienta fundamental de la democracia, bajo la convicción que la misma debe estar basada en la verdad, el respeto, los deberes y derechos y en el manejo objetivo de la información.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

**Juan Carlos Massei**

Legislador provincial

**Expte. 7253/L/05**

Córdoba 2 de Mayo de 2005

**Señor Presidente de la  
Legislatura Unicameral  
Cr. Juan Schiaretti**

S. / D.

Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento

sobre tablas del proyecto de declaración 7253/L/05, según lo dispone el artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura.

Dicho proyecto adhiere al Día Mundial de la Libertad de Prensa a celebrarse el martes 3 del corriente.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos que se ha incorporado en nuestra Constitución Nacional, en su artículo 19 establece que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión." Si bien en nuestro país no son habituales los ataques criminales a periodistas y medios de comunicación, sí sufren otro tipo de agresiones bajo la forma de presiones de todo tipo que intentan limitar, desde el poder, la libertad de informar.

Nuestra provincia no ha sido ajena a este tipo de hechos, es por eso que es importante un pronunciamiento de esta Legislatura en ese sentido.

Sin otro particular, saludo a usted con atenta consideración.

**Mónica Gutiérrez**

Legisladora provincial

**Expte. /L/05**

Córdoba, 4 de mayo de 2005.

**Señor Presidente de la  
Comisión de Labor Parlamentaria  
Cr. Juan Schiaretti**

S. / D.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en los términos del artículo 109 del Reglamento Interno, a los efectos de solicitar que esta Comisión disponga el ingreso fuera de término de los proyectos que acompaño en soporte papel y magnético, a los fines de que tomen estado parlamentario en la sesión del día de la fecha, a saber:

1.- Proyecto de ley 7302/L/05, para prevenir la Violencia Laboral en el sector Público de la Provincia.

2.- Proyecto de declaración 7303/L/05, adhiriendo al "Día Mundial de la Libertad de Prensa".

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

**Nora del Valle Castro**

Legisladora provincial

**Expte. 7265/L/05**

Córdoba, mayo 4 de 2005

**Señor Presidente de la  
Legislatura de la Provincia de Córdoba  
Cr. Juan Schiaretti  
S. / D.**

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 7265/L/05, iniciado por los legisladores Massei y Fortuna, por el cual repudia las manifestaciones racistas, discriminatorias y delictivas que realizó un grupúsculo de personas al exhibir en un estadio de fútbol dos banderas con las cruces esvásticas.

Resulta oportuno expresarnos en relación a estas manifestaciones racistas y discriminatorias que agravan y no deben tolerarse en el marco de la democracia, la libertad y el respeto por la vida y la dignidad de las personas.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

**Juan Carlos Massei**  
Legislador provincial

**-Se extiende al proyecto 7257/L/05.**

**Expte. 7259/L/05**

Córdoba, mayo 2 de 2005.

**Señor Presidente del  
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba  
Cr. Juan Schiaretti  
S. / D.**

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente solicito a usted en virtud por el artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 7259/L/05, de beneplácito por el título de doctor honoris causa que la U.N.C. entregó a Oreste Berta.

Sin más saludo a usted cordialmente.

**Luis E. Carrara.**  
Legislador provincial.

**Expte. 7261/L/05**

Córdoba, 3 de mayo de 2005.

**Señor Presidente de la**

**Legislatura Provincial  
Cr. Juan Schiaretti  
S. / D.**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial, del proyecto 7261/L/05, beneplácito por el triunfo de los tenistas Nalbandian y Gaudio.

Motiva este pedido la proximidad de la fecha de tratamiento. Sin otro particular y agradeciendo su cordialidad lo saludo muy atentamente.

**Norma Ceballos**  
Legisladora provincial

**-Se hace extensivo al Expte. 7267/L/05**

**Expte. 7264/L/05**

Córdoba, mayo 3 de 2005.

**Señor Presidente de la  
Legislatura Provincial.  
Cr. Juan Schiaretti  
S. / D.**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial, del proyecto 7264/L/05, adhesión Córdoba Subsede del Campeonato Mundial de Tango.

Motiva este pedido la proximidad de la fecha del tratamiento.

Sin otro particular, y agradeciendo su cordialidad lo saludo muy atentamente.

**Norma Ceballos.**  
Legisladora provincial.

**Expte. 7273/L/05**

Córdoba, 4 de mayo de 2005.

**Al Señor Presidente  
de la Legislatura de la Provincia  
Cr. Juan Schiaretti  
S. / D.**

Enrique Sella, legislador provincial, en su carácter de presidente del bloque País, se dirige a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento interno de esta Legislatura, con el fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto 7273/L/05.



Motiva dicha petición el reconocimiento ya concretado de la selección de las escritoras riocerenses María Cristina Mugas, Arminda Tagliaschi y Cristina Validakis, para participar en distintas antologías que editará Nuevo Ser Editorial de la ciudad de Buenos Aires.

Sin otro particular le saluda atentamente.

**Enrique Sella**

Legislador provincial

**Expte. 7281/L/05**

Córdoba, mayo 3 de 2005.

**Señor Presidente del  
Poder Legislativo.**

**Cr. Juan Schiaretti**

**S. / D.**

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente solicito a usted en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 7281/L/05, expresando pesar por el deceso del intendente de Melo, don Jorge Abod.

Sin más, saludo a usted cordialmente.

**Enrique Carrara.**

Legislador provincial.

**Expte. 7287/L/05**

Córdoba, 3 de mayo de 2005.

**Señor Presidente de la  
Legislatura Provincial**

**Cr. Juan Schiaretti.**

**S. / D.**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial, del proyecto 7287/L/05, adhesión al "IV Festival de Bandas" que se desarrollará en el Estadio Córdoba.

Motiva este pedido la proximidad de la fecha en tratamiento. Sin otro particular y agradeciendo su cordialidad, lo saludo muy atentamente.

**Norma Ceballos**

Legisladora provincial

**Expte. 7289/L/05**

Córdoba, mayo de 2005.-

**Señor Presidente de la  
Legislatura Provincial**

**Cr. Juan Schiaretti**

**S. / D.**

De mi más distinguida consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitarle contemple la posibilidad de proponer el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 7289 adhiriendo al 20º Aniversario, el próximo 7 de mayo, del IPEM 177 de Laboulaye.

Este requerimiento se encuentra fundado en razones temporales, circunstancia que impide que el mencionado proyecto sea tratado de otra manera.

Sin otro motivo, saludo a usted muy cordialmente.

**Graciela Elba Gaumet**

Legisladora provincial

**Expte. 7290/L/05**

Córdoba, 4 de mayo de 2005.

**Señor Presidente de la  
Legislatura de la Provincia de Córdoba**

**Cr. Juan Schiaretti**

**S. / D.**

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 7290/L/05, iniciado por los legisladores Feraudo, Rosas, Ceballos, Podversich, Poggio, Romero y Sánchez, por el cual declara de interés legislativo la "Maestría en Política y Gestión de Desarrollo Local", carrera aprobada por las Universidades Nacionales de Córdoba y Villa María.

Resulta auspicioso acompañar esta iniciativa educativa que apunta a la excelencia y a la calidad de los futuros profesionales.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

**Juan Carlos Massei**

Legislador provincial

**Expte. 7293/L/05**

Córdoba, 3 de mayo de 2005

**Señor Presidente Provisorio  
de la Legislatura de Córdoba**

**Dr. Francisco Fortuna**

S. / D.

De mi mayor consideración:

En mi carácter de autor del proyecto de declaración 7293 me dirijo a usted a fin de solicitar quiera tener a bien arbitrar los medios necesarios a fin de que se considere la posibilidad que el proyecto mencionado sea tratado sobre tablas de la sesión del miércoles 4 de mayo del 2005.

Motiva esta petición la circunstancia de que el encuentro al que se hace referencia en el proyecto se realizará los días 6 y 7 de mayo del corriente año.

A fin de que la declaración no pierda actualidad solicito su tratamiento sobre tablas.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a usted con distinguida consideración.

**Santiago Luis Soleri**

Legislador provincial

**Expte. 7294/L/05**

Córdoba, 4 de mayo de 2005

**Señor Presidente**

**de la Legislatura de Córdoba**

**Cr. Juan Schiaretti**

S. / D.

De mi mayor consideración.

Me dirijo a usted en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 7294/L/05 iniciado por los legisladores Massei y Fortuna, por el cual adhiere a los actos conmemorativos del 62º Aniversario del Levantamiento del Ghetto de Varsovia y del Ion Ha Shoa, Día de Recordación del Holocausto y rinde homenaje a todas las víctimas del horror nazi.

Recordar estos hechos del ayer signados por el horror y la irracionalidad, involucra a todos los seres humanos, sin importar sexo, religión, nacionalidad ni raza ya que recuerda la muerte de millones de personas a causa del genocidio desatado por el nazismo, y precisamente este ejercicio de la memoria a la que nos invita toda conmemoración es la que permite la concientización para que los mismos no vuelvan a repetirse.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

**Juan Carlos Massei**

Legislador provincial

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Corresponde poner en consideración la moción de tratamiento sobre tablas de los proyectos leídos por Secretaría.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobada.

Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.

-Se vota y aprueba.

-CAMARA EN COMISION-

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra el legislador Recalde.

**Sr. Recalde.**- Señor presidente: mediante este proyecto adherimos al Día de la Minería que se celebra el 7 de mayo. Esta fecha se debe a que la Asamblea Constituyente del año 1813 dictó la primera Ley de Fomento Minero Nacional.

Destacamos la importancia de esta actividad madre de las industrias, cuyas materias primas minerales son la base de la industria pesada. De este modo, podemos destacar la fábrica de cementos, cales y pinturas que significan una gran actividad industrial en el país y particularmente en nuestra provincia.

Además, se destaca la gran explotación de rocas de aplicación como granito, mármoles, basaltos, arenas, etcétera, así como los minerales metalíferos hierro, manganeso y wolframio, imprescindibles para las industrias metalúrgicas y particularmente siderúrgicas.

El conjunto de la población no conoce acerca de la producción minera, como por ejemplo que en nuestra Provincia se explotan los cuarzos de alta calidad en cercanías de Serrezuela, materia prima que se utiliza para producir silicio metálico mediante un proceso industrial que se desarrolla en la ciudad de San Juan. Este producto también se exporta para aleaciones de motores de automóviles. Podemos dar otros ejemplos que demuestran las reservas minerales que poseemos y el ciclo tecnológico que en algunos casos se cierra en nuestro país.

La minería argentina se ha debatido históricamente con distintas alternativas, teniendo en cuenta la condición de actividad subordinada a un país netamente agrícola ganadero. Es así que en la década del '90 se da un hecho histórico, con la política orientada hacia la estabilidad y seguridad jurídica, condición sine qua non para que pueda desarrollarse la minería dado que ésta es una actividad de alto riesgo y largo plazo.

En base a esta estabilidad jurídica se desarrolla el proyecto de Bajo La Lumbra en la Provincia de Catamarca, con una inversión de 650 millones de dólares y desde la cual el país, por pri-

mera vez en su historia, produce cobre con accesorios de oro y plata. Igualmente importante es la minería que se desarrolla en el Cerro Vanguardia, con una inversión de 350 millones de dólares.

No obstante ello, es de criticar la política de esa década, puesto que no se desarrolló la pequeña minería y la minería artesanal, la cual se realiza con fomento y promoción minera, y que lamentablemente no se llevó a cabo.

En otras épocas, como en la década peronista, se explotaron sustancias minerales en nuestra provincia. Es de destacar la actividad desarrollada en Potrero de Garay, Departamento Santa María, desde donde se exportaba mica, así como la exportación de wolframio desde las distintas producciones mineras de la Provincia de Córdoba y también de otros minerales como el espodumeno, mineral de litio y el berilo de la mina Las Tapias, en el Departamento San Javier, que eran explotados y exportados hacia el exterior. Tenemos que tener en cuenta que la minería ha tenido distintas alternativas, algunas positivas y otras negativas.

Volviendo al hecho histórico, esta Ley de Promoción Minera del año 13 permitió que se dictaran numerosas medidas para orientar los trabajos de investigación, exploración y explotación de los recursos geológicos de nuestro subsuelo como minerales, agua y petróleo.

Muchas resoluciones y normativas fueron impulsadas después de esta ley fundacional logrando lo que hoy es la ley máxima que regula la minería, el Código de Minería de la Nación, y la referencia sobre los recursos naturales incorporados a la Constitución nacional y nuestra Constitución provincial.

Al respecto es conveniente aprovechar la oportunidad para aclarar que este Código Minero es una joya legislativa que con sucesivas reformas constituye una legislación que beneficia enormemente las actividades, cuya falta de desarrollo se debe a otros factores que no son motivo de detallar en esta oportunidad.

Para terminar me gustaría recordar un pensamiento del General Perón que en el año 53 decía: “Tenemos necesidad de todos los minerales que poseemos; poseemos todos los minerales que necesitamos. Tenemos una industria que alimentar y si tuviéramos un mineral sin una industria

que lo utilizara, habría que crear la industria; si tuviéramos una industria sin minerales habría que buscarlos porque esta tierra tiene, afortunadamente, todo lo que necesitamos”.

Por la trascendencia de esta conmemoración, y los argumentos expresados, solicito a mis pares la aprobación del proyecto.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión los proyectos en tratamiento, con las compatibilizaciones solicitadas en la Comisión de Labor Parlamentaria.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobada.

Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobado.

-CAMARA EN SESIÓN-

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Contando con despacho, en consideración los proyectos 7202, 7234, 7240, 7246, 7247, 7253, 7257, 7259, 7260, 7261, 7263, 7264, 7265, 7267, 7273, 7281, 7287, 7289, 7290, 7293, 7294, 7295, 7301 y 7303, conforme los despachara la Cámara en estado de comisión.

-Se vota y aprueban.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobados.

**PROYECTO DE DECLARACION - 07202/L/05  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito al “5º aniversario de la plaza federal”, ubicada en la comuna de san roque, departamento Punilla, a conmemorarse el día 5 de mayo de 2005.

**Lucía Domínguez.**

**FUNDAMENTOS**

Hace ya cinco años de aquella inauguración, tan importante para el Pueblo de San Roque, como para el resto de la Provincia y el País, ya que este monumento pertenece a las 23 provincias de Argentina.

Esta bella plaza monumento, está enclavada en la Comuna de San Roque, a orillas del Lago del mismo nombre y representa al centro del país continental.

A partir de la inauguración de esta Plaza, se ha incrementado el caudal de turismo en la zona, ya que atraídos por su belleza, es parada obligatoria de todo vi-

sitante que pasa por el lugar, quienes recorren la misma, recordando el sacrificio y la sangre que costó la integración federal; y este monumento simboliza la unión de las 23 provincias argentinas con lazos de fraternidad y hermandad, cumpliendo el sueño de los próceres de nuestra historia Argentina.

Por considerar a esta plaza un hito importante para nuestra Comunidad toda, es que solicito la aprobación del presente proyecto.

**Lucía Domínguez.**

**PROYECTO DE DECLARACION - 07234/L/05  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

De Interés Legislativo el Campeonato Mundial 2005 de Vuelo Libre, a desarrollarse en la localidad de Embalse de Río Tercero de la Provincia de Córdoba, desde el 21 al 28 de mayo del corriente año.

**Enrique Gastaldi.**

**FUNDAMENTOS**

El aeromodelismo amateur en la Provincia de Córdoba, se inicia a partir de la década del '30, el 1º de Enero de 1942 se funda el Círculo Cordobés de Aeromodelismo, que cuenta con Personería Jurídica desde el 8 de Enero de 1945, siendo el club de aeromodelismo uno de los primeros en fundarse en la República Argentina y Sudamérica.

La actividad deportiva amateur, se realiza en el aeródromo "Brigadier Juan Ignacio San Martín" de la localidad de Juárez Celman, sede del Club de Planeadores Córdoba.

La Provincia de Córdoba cuenta con más de 500 aeromodelistas en actividad, distribuidos en distintas categorías a través de clubes y agrupaciones diseminados en toda la Provincia, los que han sido y continúan siendo activos participantes en las competencias nacionales e internacionales desde el año 1941, en donde nuestros deportistas han tenido destacada y relevante actuación.

Consideramos que esta actividad amateur, cumple y desarrolla una actividad deportiva y fundamentalmente social, ya que despierta en los niños y jóvenes su vocación aeronáutica, razón por la cual la Fuerza Aérea Argentina, reconoce al aeromodelismo como una de las cuatro disciplinas deportivas junto al vuelo con motor, vuelo a vela y paracaidismo.

El aeromodelismo es reconocido a nivel mundial como un deporte amateur y regula su actividad la FEDERACIÓN AERONAUTIQUE INTER-NATIONALE con asiento en Francia y en la Argentina a través de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE AEROMODELISMO como miembro activo desde el 19 de febrero de 1950.

La República Argentina fue designada por la

F.A.I. sede del mundial de aeromodelismo de vuelo libre en el año 1989, el cual fue llevado con total éxito en Embalse de Río Tercero y por los antecedentes favorables en la capacidad de organización, ha sido designada nuevamente como sede para organizar y realizar el CAMPEONATO MUNDIAL 2005 DE VUELO LIBRE, en la ciudad de Embalse de Río Tercero.

En función de las confirmaciones recibidas, se estima la visita y participación de 35 países representados con alrededor de 600 personas del exterior, que incluye participantes, jefes de equipos y ayudantes.

La capacidad hotelera de los hoteles 4 y 7 pabellón 43 del Complejo Hotelero de Embalse, tendrán su capacidad colmada y se calcula que entre los organizadores y equipos de ayudantes de Argentina, se sobrepasará las 800 personas en total.

Si tenemos en cuenta que el evento más importante que se realiza en la Provincia de Córdoba es el Campeonato Mundial de Rally, de ninguna manera reúne a tantos países ni a tantos participantes extranjeros, sin ningún lugar a dudas éste es el evento que mayor representatividad internacional, concentra en nuestro país.

Por todo lo expresado, es que solicito de mis pares, la aprobación del presente proyecto de declaración.

**Enrique Gastaldi.**

**PROYECTO DE DECLARACION - 07240/L/05  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

De Interés Legislativo y su adhesión a la celebración del Día de la Minería que se conmemora el día 7 de mayo.

**Argentino Recalde.**

**FUNDAMENTOS**

Este evento conmemorativo evoca la destacada actitud que tuvieron nuestros gobernantes en los albores de nuestra Patria, cuando el día 7 de mayo de 1813 es sancionada por la Asamblea constituyente, y a propuesta de la Junta de Gobierno, la Primera Ley de Fomento Minero Nacional como instrumento legal para promover el desarrollo de la actividad minera en nuestro territorio.

Esto permitió que se dictaran numerosas medidas para orientar los trabajos de investigación, exploración y explotación de los recursos geológicos de nuestro subsuelo como minerales, agua y petróleo.

Recordemos así que nuestra Provincia se vio favorecida particularmente con la explotación de las minas de oro, plata y plomo del noroeste (Departamentos Minas, Pocho y Cruz del Eje), donde aún se pueden ver las minas abandonadas, sus establecimientos y sus rudimentarios métodos de extracción, vistos, obviamente, desde nuestra óptica actual.

Muchas resoluciones y normativas fueron impulsadas después de esta Ley fundacional y que lograron lo que hoy es la Ley máxima que regula la minería: El Código de Minería de la Nación, y la referencia sobre los recursos naturales incorporados a la Constitución Nacional y nuestra Constitución Provincial (Artículos 11 y 68 respectivamente).

Al respecto, es conveniente aprovechar la oportunidad para aclarar que este Código Minero es una joya legislativa, que con sus sucesivas reformas constituye una legislación que beneficia enormemente esta actividad, cuya falta de desarrollo se debe a otros factores que no son motivo de detallar en esta oportunidad.

Y a modo de síntesis en esta conmemoración podemos decir que la actividad minera en nuestra Provincia a tenido históricamente distintas características: durante la colonización los jesuitas hicieron una intensiva exploración y explotación de minerales Metalíferos especialmente oro, plata y plomo. En el Siglo XIX y principio del XX el crecimiento de la Provincia demandó rocas de aplicación, tales como calizas y granitos, que sumados al descubrimiento de otros minerales como cuarzo, feldespato, mica, berilo, florita, etc. estaban indicando la variedad de recursos disponibles.

Ya por los años 40 comienza el desarrollo de los yacimiento de wolframio y manganeso, como así también mármoles y sales. Contemporáneamente y ante las necesidades energéticas, y paralelamente con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica por parte del gobierno peronista, se descubren yacimientos de uranio.

Finalmente y para terminar me gustaría recordar un pensamiento del General Perón que en el año 1953 decía: "Tenemos necesidad de todos los minerales que poseemos; poseemos todos los minerales que necesitamos. Tenemos una industria que alimentar; si tuviéramos un mineral sin una industria que la utilizara habría que crear la industria; si tuviéramos una industria sin minerales habría que buscarlos porque esta tierra tiene, afortunadamente, todo lo que necesitamos.

Por la trascendencia de esta conmemoración y los argumentos aquí expresados es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto.

**Argentino Recalde.**

**PROYECTO DE DECLARACION - 07246/L/05  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

Su más profundo y contundente rechazo a la inclusión de las Islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur, en el Tratado Constitucional de la Unión Europea, al pretender formar parte del territorio antártico británico y

por ende europeo, provocando que la mencionada Carta Magna rija también en parte de nuestro territorio violando con ello la soberanía Argentina.

**Eduardo Fernández, Mónica Prato, Ricardo Fonseca.**

**FUNDAMENTOS**

El 29 de octubre de 2004 la Unión Europea firmo el tratado constitucional, el cual fue publicado el presente mes, esta constitución, que regirá en todos los territorios pertenecientes a la Unión Europea, reza en el Anexo II del Título IV de la Parte III, Art. 286, de la futura Carta Magna la inclusión de las Islas Malvinas, Sándwich del Sur, y Georgias del Sur como territorio de ultramar del Reino Unido, y por ende de la Unión Europea.

Lo mismo es reafirmado en la Parte VI Art. 440, Apartado 3 donde incluye a las mencionadas islas como ámbito de aplicación de la mencionada Constitución.

Esta inclusión constitucional de nuestro Territorio Soberano, no es mas que un nuevo cachetazo al Pueblo Argentino y a los miles de Héroes que participaron en la gesta armada del 2 de Abril de 1982.

No podemos dejar de repudiar esta actitud de la Unión Europea, ya que las mencionadas Islas son y serán parte de nuestra soberanía nacional, y si en la actualidad no flamea nuestro pabellón es porque nos fueron arrebatadas por las Armas, por Gran Bretaña, país que históricamente se caracterizó por las prácticas piratas y colonialistas, robando territorios soberanos a muchas naciones utilizando su poderío armamentístico.

No podemos olvidar a los 750 mártires Argentinos, que dejaron sus vidas en esa porción de nuestra patria, no podemos olvidar a sus familias, que entregaron a sus hijos por la legítima defensa de nuestra soberanía, no podemos olvidar que las Malvinas, y las demás Islas del Atlántico Sur, son, fueron y serán ARGENTINAS, porque si bien en la actualidad no podemos ejercer nuestra soberanía en las mismas estarán siempre en lo mas profundo de los corazones de cada uno de los ARGENTINOS.

Por estos motivos y por lo que daremos oportunamente es que pido a esta Legislatura la aprobación de este proyecto.

**Eduardo Fernández, Mónica Prato, Ricardo Fonseca.**

**PROYECTO DE DECLARACION - 07247/L/05  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

Su adhesión a "El Campeonato Mundial De Aeromodelismo Vuelo Libre FIA-FIB-FIC" organizado por la

Federación Argentina de Aeromodelismo a realizarse del 21 al 27 de Mayo de 2005 en la localidad de Embalse.

**Juan Carrillo.**

#### **FUNDAMENTOS**

El próximo 21 al 27 de Mayo del 2005 en la localidad de Embalse, Departamento Calamuchita, se llevará a cabo "El campeonato Mundial de Aeromodelismo Vuelo Libre Fia-Fib-Fic", organizado por la Federación Argentina de Aeromodelismo.

La celebración de eventos de este nivel permite difundir actividades deportivas que en definitiva ayudan a la integración de las Naciones, además de permitir a nuestro País a conocer las potencialidades turísticas, técnicas y deportivas a nivel internacional.

Propugnado pues, por un desarrollo Turístico y Deportivo del Departamento Calamuchita, se lleva a cabo este Certamen . Dada la importancia del evento a nivel mundial , por la alta participación de delegaciones internacionales que prestigian con su presencia a nuestro pueblo, es que solicito al Sr. Presidente la adhesión a la presente.

**Juan Carrillo.**

#### **PROYECTO DE DECLARACION - 07253/L/05 LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DECLARA:**

Su adhesión al Día Mundial De La Libertad De Prensa que se celebra el martes 3 de mayo, así como la necesidad de que este valor fundamental sea respetado y considerado prioritario por los gobiernos en nuestro país.

**Mónica Gutiérrez, Ricardo Fonseca, Eduardo Fernández.**

#### **FUNDAMENTOS**

La iniciativa de promover el Día Mundial de la Libertad de Prensa surgió de la Conferencia General de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y se eligió esta fecha para conmemorar la Declaración de Windhoek, Namibia (África) para el "Fomento de una Prensa Africana Independiente y Pluralista".

La resolución de 1991, titulada "Fomento de la libertad de prensa en el mundo", reconoció que una prensa libre, pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad democrática. La Conferencia General invitó al Director General de la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General el deseo expresado por los Estados miembros de la UNESCO de que el 3 de mayo se proclamara "Día Internacional de la Libertad de Prensa". Así, la declaración fue aprobada el 3 de mayo

de 1991. El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por recomendación del Consejo Económico y Social, reconoció el día al declarar el 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa (decisión 48/432).

Como lo sostiene el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nuestro país ha incorporado a la Constitución Nacional, "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". Aún cuando felizmente en nuestro país no son habituales los ataques criminales a periodistas y medios de comunicación, éstos sí sufren de otro tipo de embestidas, sistemáticas y permanentes en algunos casos, bajo la forma de presiones de todo tipo que intentan limitar, desde el poder, la libertad de informar. Condicionamientos para contratar pauta oficial, quejas a los editores responsables cuando no pedidos a los empresarios para cesantear a periodistas, impermeabilidad de las fuentes de información son algunos de los métodos que suelen utilizar quienes gobiernan para que no se sepa la verdad, para que no se investigue, para que no se escuchen las voces de los que piensan distinto. Nuestra provincia no ha sido ajena a hechos como éstos, es por eso que un pronunciamiento de esta Legislatura no debe quedarse en un mero hecho formal de declaración ante unas efemérides más.

En tanto la libertad de prensa es un principio inherente a la vida democrática de los pueblos, es preciso instar a los gobiernos nacionales y provinciales de nuestro país para que lo hagan realidad en la práctica política de sus administraciones.

**Mónica Gutiérrez, Ricardo Fonseca, Eduardo Fernández.**

#### **PROYECTO DE DECLARACION - 07257/L/05 LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DECLARA:**

Expresando su más enérgico repudio a la actitud que, en día 28 de abril de 2005, tomara un minúsculo grupo de la hinchada de Talleres agitando banderas con la cruces esvásticas, en el partido que disputaba dicho club con Gimnasia Esgrima de Jujuy llevado a cabo en el Estadio Olímpico de Córdoba.

**Luis Carrara, Juan Echepare.**

#### **FUNDAMENTOS**

En momentos en que las expresiones racistas y xenófobas aumentan en todo el mundo del fútbol, Córdoba fue escenario de un episodio aberrante por culpa de unos pocos hinchas de talleres, quienes lejos de hon-

rar a su Club, flamearon banderas con cruces esvásticas. Símbolo que en la actualidad representan odio, violencia y racismo; actos que no concuerdan con estos tiempos, en donde día a día luchamos por erradicar todo tipo de discriminación tanto en el deporte, como en muchas otras actividades.

Más lamentable es que por la conducta de este pequeño grupo de hinchas, el Club Atlético Talleres podría llegar a ser sancionado por la AFA.

Por lo expresado precedentemente es que solicitamos se apruebe el presente proyecto.

**Luis Carrara, Juan Echebare.**

**PROYECTO DE DECLARACION - 07259/L/05  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

Su beneplácito y felicitaciones al Sr. Oreste Berta, por haber sido distinguido con la máxima jerarquía otorgada por la Universidad Nacional de Córdoba con el título de Doctor Honoris Causa, en virtud a su trayectoria en la investigación de la ingeniería mecánica automovilística, el pasado 26 de abril de 2005.

**Luis Carrara, Juan Carrillo.**

**FUNDAMENTOS**

El pasado martes 26 de abril, Oreste Berta recibió el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba en virtud a su trayectoria nacional e internacional en la investigación de la ingeniería mecánica automovilista y su valioso aporte a la formación universitaria en esta área.

Oreste Berta, un innovador permanente, siempre en la vanguardia del diseño, ingresó a trabajar a Industrias Kaiser Argentina (IKA) en 1962. Ahí fue nombrado adjunto a la gerencia General de IKA Renault. En 1965 fue designado adjunto a la dirección de Ingeniería y, en 1966, jefe de Desarrollos Avanzados, ámbito donde se abocó a la realización del diseño y construcción de maquinarias y componentes que equiparías, en especial, al Torino 380W.

En 1968 abandonó IKA y fundó en Alta Gracia Oreste Berta S.A. Desde allí se dedicó a la investigación y al desarrollo de tecnologías de avanzada, y a la preparación de automóviles de competición deportiva.

Entre 1969 y 1994 realizó importantes aportes al ámbito de la ingeniería automotriz. Paralelamente, y mediante convenios con las universidades Tecnológica Nacional y Regional Córdoba, nacionales de San Juan y de La Plata, implementó un sistema de becas y pasantías para estudiantes de ingeniería mecánica.

Por todas estas razones es que solicito a mis pa-

res la aprobación del presente Proyecto de declaración.

**Luis Carrara, Juan Carrillo.**

**PROYECTO DE DECLARACION - 07260/L/05  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

Repudio e indignación por la inclusión de las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur como territorio de ultramar al que se aplicaría la Constitución prevista para la Comunidad de Europa.

Y rechazar cualquier resolución que implique jurisdicción sobre nuestras islas, instando al Poder Ejecutivo de la Nación a agotar todas las instancias Diplomáticas tendientes a salvaguardar los intereses del País.

**Nélida Luján, Ana Dressino, Miguel Nicolás, Oscar Poggio, Nora Castro, Gustavo Santos, Isabel Bianciotti.**

**FUNDAMENTOS**

De los numerosos frentes internacionales a los que Argentina ha apelado por el tema Malvinas, el más importante sigue siendo el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, que desde hace más de dos décadas apoya la posición de nuestro país instando a las partes a negociar su disputa territorial.

Hoy lamentablemente debemos manifestarnos enérgicamente ante el avasallamiento de los intereses foráneos al incluir a las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur como territorio de ultramar al que se aplicaría la constitución prevista para la comunidad de Europa.

Pese a que aún no está aprobada, la nueva constitución para Europa, se estima que pueda ser aprobada si hay acuerdo para fin de año o el año que viene.

En la parte III-286, Anexo II, establece que tanto las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur como el territorio antártico reclamado por el Reino Unido forman parte de los "países y territorios de ultramar" de la Unión Europea.

Hasta ahora, seis países ratificaron la constitución de la UE: Lituania, Hungría, Eslovenia, España, Italia y Grecia y entrará en vigor una vez que haya sido ratificada por los parlamentos o en referéndum en los 25 Estados miembros del bloque.

Señores Legisladores, no sólo nuestros intereses han sido afectados, también se han incluido colonias ubicadas geográficamente en el continente americano como por ejemplo, Groenlandia, Aruba, Las Antillas Holandesas, Las Islas Caimán, Las Islas Vírgenes Británicas, Montserrat o las Bermudas.

Además se incluyen territorios de Oceanía como

Nueva Caledonia y sus dependencias o la Polinesia Francesa.

Pero también en Asia, donde se encuentran los Territorios Británicos del Océano Indico o en la Antártida, como las tierras Australes y Antárticas Francesas o el Territorio Antártico Británico.

No queremos dejar pasar por alto que mas allá de la profusa difusión de los medios y entendiendo las reservas que pueda haber tenido la Cancillería esta situación fue puesta en conocimiento del pueblo Argentino por el Instituto Buenos Aires de Planeamiento Estratégico (IBAPE) quien difundió el documento.

Por los fundamentos expuestos es que solicito a los señores Legisladores la aprobación del presente Proyecto de declaración.

**Nélida Luján, Ana Dressino, Miguel Nicolás, Oscar Poggio, Nora Castro, Gustavo Santos, Isabel Bianciotti.**

**PROYECTO DE DECLARACION - 07261/L/05  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

Su beneplácito, al doble triunfo obtenido para la Argentina, por los tenistas David Nalbandian en Munich (Alemania) y Gastón Gaudio en Estoril (Portugal).

**Norma Ceballos.**

**FUNDAMENTOS**

Nuestro país, está de fiesta en el plano deportivo. El unquillense David Nalbandian, luego de casi treinta meses sin obtener título, se consagró Campeón en el Torneo Abierto de Munich, tras vencer al rumano Andrei Pavel. Sumando a su carrera profesional su tercer título, quedando 16º en la Carrera de Campeones y manteniendo su 10º lugar en el Sistema de Entradas de la Asociación de Tenis Profesional.

En Portugal, Gastón Gaudio se adjudicó la 16ª edición del Abierto de Estoril, tras derrotar al español Tommy Robredo.

Para el quinto jugador del mundo, ésta fue la sexta conquista de su carrera y tercera de esta temporada, tras imponerse en los torneos de Viña del Mar y Buenos Aires.

Cabe recordar que este episodio, de ganar dos argentinos simultáneamente, es la segunda ocasión que sucede. En aquella oportunidad, en el año 1983, se consagraron los tenistas Guillermo Vilas y José Luis Clerc.

Mas allá de los resultados, estos episodios son muestras de ejemplos a seguir. Puesto que, estos jóvenes logran sus objetivos a través de la lucha y el esfuerzo diario, sembrando victorias por el mundo, en nombre de nuestra querida Argentina.

**Norma Ceballos.**

**PROYECTO DE DECLARACION - 07263/L/05  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

Repudiar la actitud del Reino de Inglaterra de proponer incluir como territorios británicos, a nuestras Islas Malvinas, Sándwich del Sur, Georgias del Sur y Antártida Argentina.

Repudiar la maniobra del gobierno inglés procurando extender a toda la Unión Europea, el conflicto que mantiene con la República Argentina por la soberanía de nuestros territorios insulares y antárticos.

Objetar la inclusión de parte del territorio nacional para la aplicación de la constitución de la Unión Europea, ignorando los reclamos de soberanía materializados por la República Argentina.

Ratificar la reivindicación de nuestros derechos soberanos sobre tales territorios.

**Graciela Gaumet, Eduardo Massa.**

**FUNDAMENTOS**

Ante la aberrante noticia surgida del seno del Parlamento de la Unión Europea y que luego fuera difundida por los diferentes medios de difusión sobre la inclusión de las Islas Malvinas y del Territorio Antártico como área de aplicación de la Carta Magna Europea, sin precisar que son territorios cuya soberanía está en litigio, nos vemos en la necesidad de pronunciarnos al respecto, ya que este es un acto manifiesto de formalizar la apropiación indebida de estos territorios, y de esa forma ampliar su jurisdicción sobre tierras en la que existe un litigio internacional por el cual no existe un pronunciamiento definitivo al respecto y en el que Argentina siente hoy más que nunca que estas tierras pertenecen al Estado argentino.

Inglaterra propone su inclusión como un renovado intento de trasladar a toda Europa el conflicto por la soberanía de nuestras islas propugnando un marco de legalidad al hecho de Usurpación ejercida antaño por el Imperio Británico, constituyendo así un grave error que desconoce absolutamente la realidad.

En conclusión queremos dejar sentado la voluntad de ratificar los derechos sobre los territorios insulares y antárticos, rechazar enfáticamente este nuevo intento de Inglaterra de apropiarse de ellos, y manifestar nuestro repudio sobre todo acto que intente violar el valor supremo de la soberanía.

Por las argumentaciones expresadas precedentemente, solicitamos la aprobación del Presente Proyecto.

**Graciela Gaumet, Eduardo Massa.**



**PROYECTO DE DECLARACION - 07264/L/05  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

Su adhesión al lanzamiento de “Córdoba subse-  
de del Campeonato Mundial de Tango”; al cual la provin-  
cia de Córdoba, por intermedio de la Agencia Córdoba  
Cultura se suma con orgullo debido a su carácter de  
subsede como Región Centro para la selección de dos  
parejas de baile de Tango que se presentarán en este  
encuentro internacional. Dicho certamen preliminar dará  
comienzo el 06 de Mayo en la Ciudad de Villa Dolores,  
luego de cinco rondas de selección habrá una gran gala  
final el 22 de Junio en la Sala Mayor del Teatro del Liber-  
tador.

**Norma Ceballos.**

**FUNDAMENTOS**

La propuesta de la 3ra edición del Campeonato  
Mundial de Tango, se sintetiza en la realización de una  
competencia en baile de tango en dos categorías: Tango  
de Salón y Tango de Escenario. Durante el período mar-  
zo-junio 2005 se desarrollarán en distintas ciudades del  
mundo una serie de Campeonatos Regionales que per-  
mitirán la preselección de parejas de bailarines cuyos  
ganadores concurrirán como semifinalistas al III Cam-  
peonato Mundial de Baile de Tango que se llevará a ca-  
bo entre el 13 y el 21 de Agosto del corriente año en Ca-  
pital Federal.

En Córdoba esta propuesta que lleva a cabo la  
Agencia Córdoba Cultura, beneficiará a numerosos afi-  
cionados del tango que residen en Córdoba como a los  
de otros puntos del país que estén más cerca de nuestra  
provincia que de Buenos Aires (sede central) para parti-  
cipar del certamen preliminar.

El mismo contará de cinco rondas y una gran fi-  
nal que se llevará a cabo el 22 de Junio en la Sala Mayor  
del Teatro del Libertador. Allí se elegirán a dos parejas  
que podrán seguir concursando en la competencia mun-  
dial.

Estas rondas se realizarán en la ciudad de Bell  
Ville, Deán Funes, Villa Dolores, San Francisco y Córdo-  
ba Capital. La primera fecha está prevista para el día 06  
de Mayo en Villa Dolores.

Repasando la historia del tango arribamos a la  
conclusión de que el baile en el tango siempre fue cru-  
cial. Fue tan fundamental la danza que permitió revivir al  
tango en sus numerosas crisis de manifestación cultural;  
además abrió fronteras en todo el mundo. Nació como  
una danza improvisada, con dos características bien pe-  
culiars. Una, hay una disociación entre lo que ocurre en  
las piernas y en el torso. Dos, mientras las danzas se  
apoyan en el ritmo, el tango lo hace en la melodía.

El principio del tango, se caracterizó por poseer  
códigos muy cerrados, sólo abordables por las clases  
trabajadoras. Por lo que su difusión fue complicada, y  
estuvo promovida básicamente a partir de la danza, que  
fue casi premonitoria al tango mismo en su modo musi-  
cal más característico. Lo que comenzó en la danza, fue  
luego madurando en las manos expertas de grandes  
hombres, que inspirados en “el caldo popular”, fueron  
plasmando en sus composiciones lo más rico de la cultu-  
ra porteña.

**Norma Ceballos.**

**PROYECTO DE DECLARACION - 07265/L/05  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

Su más enérgico repudio a las manifestaciones  
racistas, discriminatorias y delictivas que, amparados en  
el anonimato de una hinchada de fútbol, realizó un gru-  
púsculo de personas al exhibir en un estadio dos bande-  
ras con la cruz esvástica, el peor símbolo de la humilla-  
ción humana.

**Juan Massei, Francisco Fortuna.**

**FUNDAMENTOS**

Si los “fundamentos” de un proyecto de declara-  
ción son los motivos por los cuales un legislador quiere  
convencer a sus pares de la necesidad de aprobar dicha  
iniciativa, los fundamentos de esto proyecto son inneces-  
arios. Y es que toda la sociedad cordobesa y la opinión  
pública nacional ha repudiado a los dos tontos que, en el  
partido que disputaron Talleres y Gimnasia y Esgrima de  
Jujuy, hicieron flamear sendas banderas con la cruz ga-  
mada.

Va de suyo que este proyecto no es un repudio  
al Club Talleres —que de inmediato salió a repudiar esta  
provocación- ni a su hinchada, sino al hecho mismo de  
que sigan apareciendo este tipo de actitudes que, aun-  
que aisladas, deben provocar la reacción inmediata de la  
sociedad y de sus instituciones para que no se repitan y  
para que sus autores sepan del desprecio del pueblo y  
de la soledad en la que se encuentran.

Por las razones expuestas y las que se expon-  
drán en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares la  
aprobación del presente proyecto.

**Juan Massei, Francisco Fortuna.**

**PROYECTO DE DECLARACION - 07267/L/05  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

Beneplácito y felicitaciones al tenista David Nalbandian por la victoria obtenida en el Abierto de Tenis de Munich de la Asociación Tenistas Profesionales (A.T.P), que se realizó en la mencionada ciudad el día 1º de mayo de 2005.

**Juan Echepare.**

#### **FUNDAMENTOS**

El tenista cordobés David Nalbandian, se quedó con el Torneo Abierto de Tenis de Munich durante el encuentro que tuvo lugar el domingo 1º de mayo de 2005 en la mencionada ciudad, partido que jugó ante el tenista rumano Andrei Pavel.

De esta manera David suma su tercer título en torneos de la ATP, este triunfo lo confirma en su condición de favorito en estos torneos, después de haber estado inactivo un mes. Con esta victoria el unquillense asciende al lugar nº 16 en el ranking y 10º en el Sistema de Entradas de la ATP.

Nalbandian es oriundo de la localidad de Unquillo y es el orgullo de la Provincia de Córdoba pero, por sobre todo del Departamento Colón. Deportistas como David hacen crecer a nuestra región mediterránea, ya que nos representa en el exterior demostrando siempre y dejando sentado su condición de tenista internacional.

Ante lo anteriormente planteado resulta imperioso que la Legislatura de la Provincia de Córdoba apoye el esfuerzo, dedicación y ejemplo, de este deportista cordobés, David Nalbandian, que con este logro se constituye en un digno representante y ejemplo de esta disciplina.

Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito la aprobación del siguiente proyecto.

**Juan Echepare.**

#### **PROYECTO DE DECLARACION - 07273/L/05 LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DECLARA:**

Su beneplácito por la selección de las escritoras María Cristina Mugas, Armida Tagliasachi y Cristina Validakis, para participar en distintas antologías que editará Nuevo Ser Editorial de la ciudad de Buenos Aires.

**Enrique Sella, Alicia Menta.**

#### **FUNDAMENTOS**

Tres escritoras de la ciudad de Río Tercero, de nuestra provincia han sido seleccionadas, tras la realización de distintos certámenes internacionales de Poesía y Narrativa Breve de entre más de 2000 obras presentadas de autores de distintos países.

En el caso de la escritora Cristina Validakis se seleccionaron siete poesías e integrarán la antología "La

Nueva literatura de habla hispana", de la escritora María Cristina Mugas, se seleccionaron tres poesías y de la escritora Armida Tagliasachi dos poesías, y ambas integrarán la antología: "Letras del Mundo 2005".-

Entendemos que el Poder Legislativo, no puede menos que adherir a estos logros en un campo que debemos alentar y apoyar.

Por estas razones y las que oportunamente aportaremos es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.

**Enrique Sella, Alicia Menta.**

#### **PROYECTO DE DECLARACION - 07281/L/05 LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DECLARA:**

Su hondo pesar por el fallecimiento del Sr. Intendente de la localidad de Melo, Departamento Pte. Roque Sáenz Peña, Don Jorge Omar Abod, haciendo llegar a sus familiares sentidas condolencias.

**Luis Carrara.**

#### **FUNDAMENTOS**

El día 1 de mayo del corriente año, prematuramente a los 55 años de edad falleció Jorge Omar Abod, Intendente Municipal de la localidad de Melo, Departamento Pte. Roque Sáenz Peña, de la Provincia de Córdoba.

Fue elegido Intendente de su pueblo en el año 1999 y reelecto en el año 2003, militante Peronista, destacado por su honestidad tanto en su vida pública como privada.

En su última morada, acompañado por todos los habitantes del pueblo de Melo, se puso de manifiesto su transparencia en actos de gobierno.

Su lamentable desaparición no solo enluta a su pueblo sino a todos sus amigos y compañeros lo que amerita esta expresión de pesar por parte de esta Legislatura.

**Luis Carrara.**

#### **PROYECTO DE DECLARACION - 07287/L/05 LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DECLARA:**

Su adhesión al "IV festival de Bandas" que organiza el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el próximo sábado 07 de Mayo en el estadio "Chateau Carreras de Córdoba". Este encuentro tiene por finalidad conmemorar el 192º Aniversario de creación del Himno Nacional Argentino y unir a la familia en un acto lleno de patriotismo y tradición; en esta nueva edición que se viene realizando desde hace tres años.

**Norma Ceballos.**

#### FUNDAMENTOS

En un ambiente festivo los cordobeses nos reunimos para recordar el 11 de Mayo de 1813 fecha en la que la Asamblea General, sancionó como Himno Nacional Argentino la canción compuesta con versos de Vicente López y Planes y música de Blas Parera.

Esta fiesta convoca a miles de espectadores entre su gran mayoría escolares. Cuenta con la participación de más de 1.200 músicos, integrantes de bandas infanto-juveniles, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad quienes son los responsables de brindar un emotivo concierto a la multitud.

Himno Nacional Argentino  
(Versión que se canta actualmente)  
Letra: Vicente López y Planes  
Música: Blas Parera  
Oíd Mortales, el grito sagrado:  
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!  
¡Oíd el ruido de rotas cadenas:  
ved del trono a la noble Igualdad!

Ya su trono dignísimo abrieron  
las Provincias Unidas del Sud,  
y los libres del mundo responden  
¡Al gran Pueblo Argentino salud!  
Coro  
Sean eternos los laureles  
que supimos conseguir:  
coronados de gloria vivamos  
o juremos con gloria morir.

**Norma Ceballos.**

#### PROYECTO DE DECLARACION - 07289/L/05 LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DECLARA:

Su adhesión y beneplácito al cumplirse el próximo 7 de mayo del corriente año el 20º aniversario del Ipem Nº 177 “Antonio Sobral”, de la ciudad de Laboulaye de nuestra provincia de Córdoba, cuyos actos conmemorativos se llevarán a cabo el día 6 de mayo, en las instalaciones del mismo.

**Graciela Elba Gaumet.**

#### FUNDAMENTOS

El centro Educativo Ipem Nº 177 “Antonio Sobral” encuentra sus comienzos el 7 de mayo de 1985, contando sus aulas con un total de 28 alumnos y estando a

cargo del Sr. Erasmo Obligado, quien fuera el primer director del establecimiento.

A partir de esta fecha, la comunidad toda sería testigo de un enorme crecimiento ya que, después de 20 años, somos testigos, orgullosamente, de que a diario asisten a dicha institución 310 alumnos.

La educación es algo que involucra a todos y en todo momento. Demanda un constante compromiso de quienes estamos empeñados en afianzar este espacio de crecimiento y formación del cual no sólo participan alumnos y docentes, sino también sus familias y la sociedad en su conjunto.

Las instituciones educativas son, hoy, uno de los pocos lugares donde es posible pensar con esperanza en un proyecto de país y esta escuela, al igual que muchas otras, con su historia y su experiencia constituye un verdadero baluarte de los cordobeses en materia educativa.

Es por lo antes mencionado y por el destacado aporte educativo, cultural y social que la escuela brinda, de manera directa a quienes asiste a ella y de manera indirecta a la sociedad en general, que solicitamos la aprobación del presente proyecto.

**Graciela Elba Gaumet.**

#### PROYECTO DE DECLARACION - 07290/L/05 LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DECLARA:

De Interés Legislativo la Maestría en Política y Gestión de Desarrollo Local, carrera aprobada por las Universidades Nacionales de Córdoba y Villa María y que se comenzará a cursar en el presente año lectivo y que pretende “aportar al diseño de un modelo de desarrollo sostenible por parte de los municipios del país y la región, mediante la formación de cuadros de excelencia académica consustanciados con las más modernas visiones sobre la problemática de los gobiernos locales”.

**Evelina Feraudo, Blanca Rosas, Norma Ceballos, Norberto Podversich, Oscar Poggio, Juana Romero, Raúl Sánchez.**

#### FUNDAMENTOS

Feliz iniciativa la de las Universidades Nacionales de Córdoba y Villa María de generar un programa de Posgrado – Nivel Maestría en Políticas y Gestión de Desarrollo local.

Para este emprendimiento conjunto, la Universidad Nacional de Córdoba delegó en el Centro de Estudios Avanzados (CEA) y la Universidad Nacional de Villa María en el Instituto de Ciencias Sociales la responsabilidad del armado, selección de docentes y contenidos y

la puesta en marcha del programa.

Son sus objetivos:

Aportar al diseño de un modelo de desarrollo sostenible por parte de los municipios del país y la región, mediante la formación de cuadros de excelencia académica consustanciado con las más modernas visiones sobre la problemática de los gobiernos locales.

Proporcionar a los participantes del programa herramientas, conocimientos y habilidades que les permitan ser protagonistas activos en el fortalecimiento institucional y en los procesos de modernización necesarios para los gobiernos locales en escenarios de profundas transformaciones y cotidianos desafíos en los que se encuentran inmersos.

Promover valores como el asociativismo, la cooperación y el pensamiento estratégico en la implementación de políticas e instrumentos que consoliden los procesos de descentralización e integración puestos en marcha, situando al gobierno local como un protagonista activo del cambio.

Es Director de esta Maestría el Dr. Rubén Américo Martí: Ex Intendente de Córdoba, Ex Senador Nacional, Ex Presidente de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, Ex Presidente del Capítulo Latinoamericano de la IULA, Ex Presidente de la Federación Argentina de Municipios y Ex Subsecretario de Asuntos Municipales de la Nación; Director Alterno el Mter. Marcelo Bernal; siendo el Coordinador e Integrantes del Comité Académico, al igual que el cuerpo docente, profesionales y educadores de destacada trayectoria, a saber:

Coordinación: Mter. Andrea Mensa. Comité Académico: Antonio María Hernández; Myriam Consuelo Parmigiani de Bárbara; Raúl Hermida; Silvana López; Juan Carlos Bressán; Eduardo Dalmasso; Encarnación Sobrino; Oscar Madoery. Cuerpo Docente: Raúl Hermida; Antonio María Hernández; Dora Celton; Guillermo Marianacci; Aldo Isuani; Ramón Freddiani; Pablo Bracamonte; Marcelo Rubio; Comité Académico: Antonio María Hernández; Myriam Consuelo Parmigiani de Bárbara; Gustavo Luque; Carlos María Lucca; Carlos Juárez Centeno; María Susana Bonetto; María Teresa Piñero; Jorge Pérez; Alejandro Groppo; José Emilio Ortega; Silvana López; Marcelo Bernal y otros.

El Plan de estudio es de dos años, divididos en dos semestres y con cinco asignaturas en cada uno de ellos:

Primer Año  
Primer Semestre  
Derecho Público  
Políticas Públicas  
Economía Regional y Urbana  
Internacionalización, Globalización y Teorías del

desarrollo

Segundo Semestre  
Metodología de la Investigación  
Políticas de Desarrollo Local y Capital Social  
Desarrollo Económico Local y Regional

Modernización de los Gobiernos Locales

Seminario Obligatorio

Segundo Año

Primer Semestre

Insumos Sociológicos y Demográficos para la

Gestión Local

Planificación Estratégica para la Integración y el

Desarrollo

Gestión Financiera Local y Mecanismos Alternativos de Financiamiento

Gestión de Servicios Públicos

Seminario Obligatorio

Segundo Semestre

Taller de Elaboración de Tesis

Gestión y Ordenamiento del Territorio

Gestión de Políticas Ambientales

Formulación, Ejecución y Evaluación de Proyectos

tos

Seminario Obligatorio

Los alumnos que completen todos los requisitos académicos del programa, egresarán con el título de Magíster en Políticas y Gestión del Desarrollo Local otorgado conjuntamente por la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Villa María. Por ser la primera promoción, la acreditación de la presente carrera se encuentra en trámite ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEAU).

Proyectos como el presente preparan para recuperar el sentido auténtico de la gobernabilidad y de la política, y a moverse hacia el descubrimiento de la "Matética" que es el proceso de construir estrategias para la jerarquización gubernamental y política, dar "instrumentos" de conocimiento, "instrumentos" de habilidades, "instrumentos" de reflexión y de crítica e "instrumentos" de ética e "instrumentos" de liberación.

Que esta sea la iniciación de un sendero que conduzca a la autenticidad y al compromiso, base de la credibilidad que los gobiernos y los políticos necesitan sustentar.

Por las razones expuestas y las que se expresarán en oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.

**Evelina Feraudo, Blanca Rosas, Norma Ceballos, Norberto Podversich, Oscar Poggio, Juana Romero, Raúl Sánchez.**

#### PROYECTO DE DECLARACION - 07293/L/05

#### LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

#### DECLARA:

Su adhesión y beneplácito al Encuentro Argentino del Instituto Jacques Maritain "Los Derechos Humanos en Latinoamérica" a realizarse en la ciudad de Córdoba los días 6 y 7 de mayo de 2005 en el Salón Vélez Sársfield del Edificio del Rectorado de la Universidad

Nacional de Córdoba; procurando con ello propiciar un ámbito de reflexión, tendiente a resaltar la importancia de bregar por los derechos humanos y la democracia en Latinoamérica.

**Santiago Soleri.**

#### FUNDAMENTOS

El filósofo de este siglo que ha tenido mayor influencia en el pensamiento político cristiano es JACQUES MARITAIN. Ferviente seguidor de Santo Tomás de Aquino, revisó sus estudios para luego mostrar su vigencia en la época moderna, y darle mayor contenido al compromiso de los cristianos en la política, realizando excelentes aportes a la Doctrina Social Cristiana.

Y justamente este Encuentro Argentino del Instituto Jacques Maritain pretende resaltar la importancia y la vigencia de sus estudios para la realidad de nuestro país y Latinoamérica en el ámbito específico de los derechos humanos.

En esta oportunidad se busca reflexionar sobre los temas principales que se destacan en sus obras de mayor impacto tales como el "Humanismo Integral", ya que la misma sirvió para la acción de muchas personas y organizaciones sociales y políticas no sólo de América Latina sino también del resto del mundo.

"HUMANISMO INTEGRAL" se convirtió en un modelo, una escuela de formación, compromiso y vida, por su valiosa contribución en las responsabilidades que deben asumir los laicos en las diversas actividades, con un contenido definido : El Cristianismo Social."(José Gómez Cerda).

Asimismo, en otra de sus obras, titulada "EL HOMBRE Y EL ESTADO", Maritain trata sobre la racionalización moral en la vida política y se manifiesta en contra de aquellos que atentan a las prácticas democráticas y se benefician de la política, oponiéndose a la libertad y a los genuinos intereses de los pueblos. "Precisamente por ser una República de hombres libres deberá defenderse con especial energía frente a aquellos que, fuera de principios, se niegan a aceptar e incluso trabajan para destruir los fundamentos de la vida común de dicho régimen, fundamentos que no son sino la libertad y la práctica secular expresada en carta democrática", afirma.

En su obra "LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y LA LEY NATURAL", Maritain plantea los Derechos Humanos como fruto propio de una Comunidad de hombres libres, organizada en democracia. "La dignidad de la Persona Humana es una expresión que no quiere decir nada si no significa que, por la ley natural, la Persona Humana tiene derechos a ser respetada y es sujeto de derechos, posee derechos", destaca el filósofo.

José Gómez Cerda, en uno de sus artículos sobre Jacques Maritain reflexiona sobre este punto y recal-

ca que es el hombre quién exige la vida política, la sociedad, la justicia social y el bien común. Y agrega que los derechos de la Persona Humana deben servir para el desarrollo integral de cada persona, para que pueda participar en las actividades de la sociedad; asegurando, que la dignidad de la Persona Humana es el punto de partida de la Doctrina Social Cristiana.

En sus escritos Maritain declara que tanto el individualismo, como el materialismo y el totalitarismo se apoyan en la negación de la persona, en su destino y dignidad.

En el libro "CRISTIANISMO Y DEMOCRACIA", Maritain expresa que una de las tragedias más grande que tiene actualmente el mundo llamado "democrático" es que no ha podido realizar la democracia que desea el pueblo. El papel principal de la democracia debe ser ocupado por la Persona Humana. La primacía no es para el Estado, ni para el Capital, tampoco para el Mercado, como en otros sistemas.

Por todo ello, es que resulta de gran importancia fomentar espacios de reflexión que promuevan una verdadera Democracia que vele por EL BIEN COMUN y la JUSTICIA SOCIAL, valores permanentes para todas las Personas Humanas.

De esta manera, el Encuentro Argentino del Instituto Jacques Maritain tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia y la vigencia de dichas ideas en el contexto sociopolítico y económico de Latinoamérica, a través de conferencias dictadas por reconocidas personalidades del ámbito público local, nacional e internacional.

Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de declaración.

**Santiago Soleri.**

#### PROYECTO DE DECLARACION - 07294/L/05 LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos 62º Aniversario del Levantamiento del Ghetto de Varsovia y del Iom Ha Shoa, Día de Recordación del Holocausto, como así también su homenaje a todas las víctimas del horror nazi.

**Juan Carlos Massei, Francisco Fortuna.**

#### FUNDAMENTOS

Tanto el levantamiento del Ghetto de Varsovia, en el que los prisioneros del mismo heroicamente resistieron, combatieron y fueron muertos por los ocupantes nazis, como la recordación del Día del Holocausto, involucra a todos los seres humanos, sin importar sexo, reli-

gión, nacionalidad ni raza, ya que recuerda la muerte de millones de personas a causa del genocidio desatado por el nazismo.

No olvidar, es condición necesaria para que los horrores no se repitan.

Por las razones expuestas, y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.

**Juan Carlos Massei, Francisco Fortuna.**

**PROYECTO DE DECLARACION - 07295/L/05  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

El rechazo a la inclusión de las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur y del Territorio Antártico, en el Anexo II del Título IV de la Parte III 286 del Tratado Constitucional de la Unión Europea, como territorio de ultramar de Gran Bretaña.

Solicitando a los países miembros de la Unión Europea se abstengan de ratificar la Constitución europea en esos términos, sin que se incluya necesaria e indispensablemente un punto que deje constancia que ese territorio es una jurisdicción cuya soberanía está en litigio entre dos países.

**Juan Carlos Massei, José Scarlatto, Alider Cioccatto.**

**FUNDAMENTOS**

La Inclusión de las Islas Malvinas y del Territorio Antártico en la Carta Magna Europea como área de ultramar de Gran Bretaña, desconoce y avasalla la realidad, en tanto es un territorio cuya soberanía está en litigio, y como tal debe contemplarse esta situación, de lo contrario se está avalando la estrategia británica que puede convertirse en un hecho determinante a la hora de las definiciones.

Por otra parte este conflicto que mantiene nuestro país con el Reino Unido de Gran Bretaña no puede trasladarse a los 25 países que integran la Unión Europea, de aquí que desde el gobierno nacional y desde los distintos estamentos se están realizando todas las acciones diplomáticas para evitar que dicho tratado sea aprobado en los términos en los que está planteado el borrador.

Este tratado constitucional que incluye a las Islas Malvinas como territorio antártico británico fue firmado el 29 de octubre de 2004, y si hay acuerdo éste puede ser ratificado a fin de año o el año que viene. Hasta ahora, seis países convalidaron dicha constitución, por ello resulta oportuno y necesario que desde nuestro país se informe y difunda esta realidad, como así también se agoten todas las vías de reclamos y manifestaciones posibles, a fin de lograr que este tema quede subsanado.

En ese marco ratificamos nuestros derechos sobre los territorios insulares y antárticos, a la vez que rechazamos este nuevo intento de Inglaterra de apropiarse de ellos. Repudiamos una vez más esta pretensión de trasladar a toda Europa un conflicto que debe ser resuelto por las vías y los canales pertinentes, sin interferencias, sin artilugios y con el respeto y la dignidad que un litigio de esta naturaleza reviste.

Por las razones expresadas y las que se verterán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.

**Juan Carlos Massei, José Scarlatto, Alider Cioccatto.**

**PROYECTO DE DECLARACION - 07301/L/05  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

Su adhesión al "Día Mundial de la Libertad de Prensa", conmemoración surgida de una Resolución del 3 de mayo de 1991 de la 26ª Conferencia General de la UNESCO que fuera reconocida por la Asamblea General de la Naciones Unidas a través de la Resolución Nº 48/432, el 20 de diciembre de 1993.

**Evelina Feraudo, Omar Basso.**

**FUNDAMENTOS**

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reza en su Art. 19º: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión".

La iniciativa para promover el "Día Mundial de la Libertad de Prensa" surgió de la Conferencia General de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), para conmemorar la Declaración de Windbock, Namibia (Africa) para el "Fomento de una nueva Prensa Africana Independiente y Pluralista". La Resolución de 1991 titulada "Fomento de la Libertad de Prensa en el Mundo" reconoció que una prensa libre, pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad democrática.

A instancias de la Conferencia General, el Director General de la UNESCO transmitió a la Asamblea General la iniciativa de que el 3 de Mayo se proclamara "Día Internacional de la Libertad de Prensa". Dicha declaración fue aprobada el 3 de mayo de 1991 y el 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de la Naciones Unidas, por recomendación del Consejo Económico y Social, reconoció el día, al declarar por Resolución 48/432, el 3 de Mayo como "Día Mundial de la Libertad de Prensa".

El derecho de todos los ciudadanos a obtener una información objetiva y confiable depende de la responsabilidad y la integridad de los periodistas. A su vez la cultura democrática hace al respeto del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión.

La reciprocidad en el reconocimiento de deberes y derechos hace a una convivencia responsable y comprometida.

Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.

**Evelina Feraudo, Omar Basso.**

**PROYECTO DE DECLARACION - 07303/L/05  
LA LEGISLATURA DE LA  
PROVINCIA DE CÓRDOBA  
DECLARA:**

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración del "Día Mundial de la Libertad de Prensa" declarada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993, instituyendo como día para su celebración el 3 de mayo.

**Bloque de la U.C.R.**

**FUNDAMENTOS**

El 3 de mayo de 1991, un grupo de periodistas y editores africanos se reunió, aprovechando que se encontraban en una conferencia de la ONU en Namibia, para redactar un manifiesto. En él proclamaban la necesidad de una prensa independiente, pluralista y libre como componente esencial de cualquier proceso de desarrollo democrático y económico.

El manifiesto, conocido como la Declaración de Windhoek, pedía a la comunidad internacional que declarara ilegal la censura, por considerarla un atentado grave contra los derechos humanos, e incitaba a los estados a que garantizaran constitucionalmente la libertad de prensa.

El 20 de Diciembre de 1993, la Conferencia General de la UNESCO aprobó la Declaración e instauró el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa.

La libertad de expresar el pensamiento individual es, sin lugar a dudas, un fenómeno consustancial al ser, a la existencia, a entender al hombre como tal ya sea particular o colectivamente, de entender esta necesidad de libertad es lo que obliga a colocarla dentro del derecho, en busca de garantizar su permanencia.

"Cuando los periodistas son silenciados, ellos no son las únicas víctimas de las leyes y las prácticas represivas; también lo son los ciudadanos que se ven privados de su derecho a la información", ha afirmado Amnistía Internacional.

Por los fundamentos aquí vertidos y los que daré

al momento de su tratamiento solicito la aprobación del presente proyecto.

**Bloque de la U.C.R.**

**Texto definitivo aprobado de los proyectos  
compatibilizados 7253/L/05, 7301/L/05 y 7303/L/05  
La Legislatura de la Provincia de Córdoba**

**Declara**

Su adhesión al "Día Mundial de la Libertad de Prensa", que se conmemora 3 de mayo de cada año, en virtud de una resolución emanada en esa fecha en el año 1991 en oportunidad de la realización de la 26ª Conferencia General de la UNESCO, que fuera reconocida por la Asamblea General de la Naciones Unidas a través de la Resolución Nº 48/432, el 20 de diciembre de 1993, instando a que este valor fundamental sea considerado prioritario por los gobiernos en nuestro país.

**Córdoba, 4 de mayo de 2005.-**

**- 17 -**

**E.R.SE.P. FUNCIÓN QUE DESARROLLA O  
DESARROLLÓ PARA EL ESTUDIO JURÍDICO  
ARRIGONI Y ASOCIADOS. PEDIDO DE  
INFORMES.**

Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 7242, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

Córdoba 4 de mayo de 2005.

**Señor Presidente de la  
Legislatura de la Provincia de Córdoba  
Cr. Juan Schiaretta  
S. / D.**

De mi mayor consideración:

En mi carácter de legislador del Frente Nuevo, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 7242/L/05.

A los fines de contar con la información oficial para despejar dudas surgidas por la publicación periodística el día 27 de abril en el programa radial ADN con respecto a que el doctor Carlos Arrigoni, Procurador del Tesoro Provincial, mediante su estudio jurídico, hacía co-

branzas de multas realizadas a distintas empresas por parte del ERSEP, además de informarse que varios parientes directos de funcionarios del ERSEP trabajan en esa dependencia, por lo que se concluye existe un favoritismo a la hora de designar empleados en ese organismo, se solicita la aprobación del presente pedido de tratamiento sobre tablas.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

**Ricardo Fonseca**  
Legislador provincial.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas efectuada por el legislador Fonseca, leída por Secretaría.

-Se vota y rechaza.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Rechazada.

**- 18 -**

**REGLAMENTO INTERNO. ARTS. 47 Y 48  
(JEFATURAS Y DIRECCIONES).  
MODIFICACIÓN.**

Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 7283, con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

Córdoba, 4 de mayo de 2005

**Señor Presidente de la  
Legislatura de la Provincia de Córdoba  
Cr. Juan Schiaretti**  
S / D

De mi mayor consideración:

En mi carácter de legislador del Frente Nuevo y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 7283/L/05.

Este proyecto apunta a jerarquizar el área de prensa de la Legislatura de Córdoba, elevando su rango a Dirección, previa modificación del Reglamento Interno y agregando al mismo el artículo 48 bis.

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente

**Ricardo Fonseca**  
Legislador Provincial

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En considera-

ción la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Fonseca, recién leída por Secretaría.

-Se vota y rechaza.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Rechazada.

**- 19 -**

**TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL.  
PERSONAL POLICIAL SUMARIADO. PEDIDO  
DE INFORMES.**

Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 7284, con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

Córdoba, 4 de mayo de 2005

**Sr. Presidente de la  
Legislatura de la Provincia de Córdoba  
Cr. Juan Schiaretti**  
S / D

De mi mayor consideración:

En mi carácter de legislador del Frente Nuevo y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 7284/L/05.

El mencionado proyecto apunta a saber fehacientemente si un importante número de efectivos policiales se encuentra sumariado por el Tribunal de Conducta Policial, más allá de los plazos previstos por la ley (90 días), mora ésta que impide que efectivos policiales sospechados sean incorporados al servicio activo o exonerados, según corresponda, sin dilatar los plazos. Por ello es que requiero en forma urgente la información sobre este tema.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente

**Ricardo Fonseca**  
Legislador Provincial

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Fonseca, recién leída por Secretaría.

-Se vota y rechaza.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Rechazada.

**- 20 -**



**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA VIVIENDA.  
TRASLADO Y LICENCIAS COMPULSIVAS  
OTORGADAS AL PERSONAL. PEDIDO DE  
INFORMES.**

Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 7285, con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

Córdoba, 4 de mayo de 2005

*Señor Presidente de la  
Legislatura de la Provincia de Córdoba  
Cr. Juan Schiaretti  
S / D*

De mi mayor consideración:

En mi carácter de legislador del Frente Nuevo y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 7285/L/05.

Habiendo conocido que, luego de la publicación de diversas notas periodísticas publicadas en el matutino "La Voz del Interior" sobre irregularidades en el otorgamiento de créditos a los gremios SMATA y ALECYT por parte de la Dirección Provincial de la Vivienda, se ha desplazado o licenciado a personal permanente de esa dependencia, y considerando que tales movimientos serían una forma de amedrentar al personal acusándolo de ser quien informa a la prensa de estas irregularidades, solicito a esta Legislatura el acompañamiento para que el director de Vivienda dé las explicaciones del caso mediante el mecanismo constitucional pertinente.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente

**Ricardo Fonseca**  
Legislador Provincial

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Fonseca, recién leída por Secretaría.

-Se vota y rechaza.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Rechazada.

- 21 -

**SUBSIDIOS, FONDOS, PLANES SOCIALES O**

**CUALQUIER TIPO DE AYUDA MATERIAL O EN  
EFECTIVO DISTRIBUIDA EN DALMACIO VÉLEZ  
SÁRSFIELD. PEDIDO DE INFORMES.**

Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 7304, con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

Córdoba, 4 de mayo de 2005

*Sr. Presidente de la  
Legislatura de la Provincia de Córdoba  
Cr. Juan Schiaretti  
S / D*

De mi mayor consideración:

En mi carácter de legislador del Frente Nuevo y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 7304/L/05.

Este proyecto es un pedido de informes sobre la distribución de los planes y ayuda social desplegados por el Gobierno Provincial en la localidad de Dalmacio Vélez en los días previos al acto comicial del 24 de marzo donde se impuso el candidato de la UCR. Según se denunció desde ese partido, habría existido un descomunal despliegue de ayuda social distribuido de manera clientelar.

A los fines de contar con información para cumplir con el rol constitucional, solicitamos la aprobación del proyecto mencionado.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente

**Ricardo Fonseca**  
Legislador Provincial

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Fonseca, recién leída por Secretaría.

-Se vota y rechaza.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Rechazada.  
Se giran a la Comisión de Solidaridad.

- 22 -

**A) MEDIDAS DE PROMOCIÓN  
INDUSTRIAL COMPROMETIDAS A LA**

**CRISTALERÍA QUILINO. PEDIDO DE INFORMES.**

**B) PLAN DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL. RADICACIÓN DE EMPRESAS E INDUSTRIAS. EMPRESA INDU-AGRO S.A. DE QUILINO. AYUDA MONETARIA O DE OTRA NATURALEZA QUE HAYA RECIBIDO. PEDIDO DE INFORMES.**

Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes 7306 y 7307, con sus respectivas notas que mocionan el tratamiento sobre tablas, que serán leídas a continuación.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

**Expte. 7306/L/05**

Córdoba, 4 de mayo de 2005

*Al Señor Presidente de la  
Legislatura de Córdoba  
Cr. Juan Schiaretti  
S / D*

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 7306/L/05, por el cual se solicita al Ministerio de la Producción informe sobre diversos aspectos relacionados con la difícil situación que está atravesando la Cristalería de Quilino y las dudas que se han planteado sobre los beneficios otorgados a esa firma, en el marco de la Ley 9121 de Promoción Industrial, como también el grado de cumplimiento de los mismos.

Motiva la presente solicitud de tratamiento sobre tablas el saber cuanto antes cuál ha sido la verdadera incidencia de la ayuda oficial en esa empresa, cuando se ha dejado trascender la posibilidad cierta del cierre de sus puertas por demoras en la concreción del otorgamiento de los beneficios, lamentablemente a cargo de los propios organismos que deben implementarlos y cuando están en juego muchos puestos de trabajo en una zona por demás desfavorable.

Sin otro particular lo saludo con distinguida consideración

**Eduardo Fernández**  
Legislador Provincial

**Expte. 7307/L/05**

Córdoba, 4 de Mayo de 2005.

*Al Señor Presidente  
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba  
Cr. Juan Schiaretti  
S. / D.*

De mi mayor consideración:

En mi carácter de vicepresidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar la moción de tratamiento sobre tablas en la décimo quinta sesión ordinaria del día de la fecha del expediente 7307/L/05, por el cual se resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de la Producción, para que informe sobre el denominado Plan de Promoción Industrial, y en particular, sobre la empresa Induagro S.A., abocada a la producción de cristalería en Quilino.

Por motivos que oportunamente expondremos en el recinto, solicito la moción de tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto.

Sin otro particular, lo saludo con mi mayor respeto y consideración.

**Gustavo Santos**  
Legislador provincial.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas formuladas por los legisladores Fernández y Santos.

-Se votan y rechazan.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Rechazadas.  
Se giran a la Comisión de Industria y Minería.

Tiene la palabra el señor legislador Fernández.

**Sr. Fernández.**- Señor presidente: es para solicitar la reconsideración de la votación efectuada. Fundamento esto en que hace pocos minutos, cuando tratábamos la Ley de Seguridad, en la faz preventiva se hablaba justamente del rol social que tienen que jugar la sociedad y el Gobierno.

A través de este proyecto de resolución solicitamos información al Ministerio de la Producción sobre los beneficios otorgados y las características o problemáticas que han determinado que no se hayan complementado en su totalidad, por lo que me parece que es de interés de toda esta Cámara, máxime cuando en declaraciones periódicas el titular de la firma de la cristalería de Quilino manifestó que se encontraba demorado un crédito, por lo que va a tener que cerrar sus puertas.

Lo que llama mucho la atención es que están en juego empleos e inversiones efectuadas y, lo que es más importante aún, existe la palabra empeñada del Vicegobernador de la Provincia, comprometiéndose a otorgarle el crédito, cuando asistió a un acto que tuvo amplia publicidad.

De manera que considero que es de interés de esta Legislatura y también del bloque oficialista saber qué está pasando con el otorgamiento del crédito que complementaría la producción industrial y que preservaría puestos de trabajo en una firma en la que ya el Gobierno provincial ha invertido, dado que ha estado otorgándole subsidios. Además, la solución de esta cuestión es de suma importancia para toda la industria regional.

El proyecto presentado no tiene carácter partidario sino que sigue la política de control de esta Legislatura, sobre todo en un plan de fomento que el año pasado tenía 10 millones en su presupuesto y solamente ejecutó 798 mil pesos.

En consecuencia, como es de interés de todos los legisladores, solicito la reconsideración de la votación efectuada.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración la moción de reconsideración.

-Se vota y rechaza.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Rechazada.

Tiene la palabra la señora legisladora Vigo.

**Sra. Vigo.**- Señor presidente: aunque no es costumbre en esta Legislatura, quiero fundamentar mi voto negativo al pedido de reconsideración formulado por el legislador preopinante, habida cuenta que he sido una de las legisladoras que ha defendido e impulsado la Ley de Promoción Industrial que hoy está en la consideración del legislador que ha presentado este proyecto de resolución.

Además, quiero adelantar que lo vamos a discutir en las comisiones y decirle, a través suyo, que en el día de la fecha la señora ministra de la Producción ha planteado que la Cristalería Quilino ha solicitado un crédito al Banco de la Provincia de Córdoba sin tener las garantías necesarias para su otorgamiento.

Digo esto porque más allá de la palabra empeñada por el Gobierno, hay una ley que hemos votado en esta Legislatura....

-Murmillos en el recinto.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Pido a los señores

legisladores que guarden silencio para que la legisladora pueda continuar con su alocución.

Continúa en el uso de la palabra, señora legisladora.

**Sr. Fernández** (Fuera de micrófono).- Entiendo que se ha abierto el debate.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Voy a pedirle que concluya su alocución para continuar con el desarrollo de la sesión, señora legisladora.

**Sra. Vigo.**- Señor presidente: simplemente, y redondeando lo que decía al comienzo de mi exposición, quiero fundamentar mi voto negativo al pedido de reconsideración del legislador Fernández por las razones expuestas.

Antes de concluir, quiero señalar que es un tema que vamos a discutir en las comisiones a donde va a ser girado el proyecto, esperando que el legislador Fernández tenga los argumentos suficientes y las garantías necesarias que esa firma dice tener para el otorgamiento del crédito.

Nada más.

**Sr. Fernández** (Fuera de micrófono).- Señor presidente: he sido aludido.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Perdón señor legislador ¿me está solicitando el uso de la palabra?

**Sr. Fernández.**- Si, señor presidente.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra el señor legislador Fernández.

**Sr. Fernández.**- Señor presidente: quien se ha comprometido no he sido yo, por lo tanto no tengo por qué ofrecer ninguna garantía. Por su intermedio le digo a la señora legisladora que no corresponde su apreciación.

Sabían la situación en la que estaba esta cristalería porque es la primera empresa a la que se le adjudicó la promoción industrial en Córdoba; además el Gobierno provincial contó con el tiempo suficiente para analizar la situación.

Con gusto vamos a discutirlo en comisión, con madurez, argumentos concretos y pensando en el trabajo y la producción de Córdoba, como quiere la señora legisladora.

No acepto chicanas, creo que si tuvieran voluntad de discutirlo no votarían negativamente sino que tendríamos la información que el Ejecutivo provincial debería suministrar, basada en decretos y resoluciones, con relación a los beneficios otorgados y a las razones por las que no se otorgó

el crédito.

Gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Quiero aclarar a los señores legisladores que el pedido de reconsideración ha sido votado oportunamente.

Cuando se presenta este tipo de pedidos y hay algún legislador de cualquier otro bloque que solicita el uso de la palabra, debe hacerlo antes de la votación.

Hemos concluido con el debate y continuamos con el desarrollo de la sesión.

- 23 -

**PLAN DE ALFABETIZACIÓN CUBANO “YO SÍ PUEDO”, APLICADO EN ARGENTINA A TRAVÉS DE “UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE”. INTERÉS LEGISLATIVO.**  
**Moción de preferencia. Se aprueba.**

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 7268 con una moción de preferencia que será leída a continuación.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

**Expte. 7268/L/05**

Córdoba, 3 de mayo de 2005.

**Al Señor Presidente de la  
Legislatura de la Provincia de Córdoba  
Cr. Juan Schiaretti  
S / D**

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitar una preferencia de 7 días para el proyecto de declaración 7268/L/05, que declara de interés legislativo el Plan de Alfabetización Cubana “Yo sí puedo”, programa creado por el I.P.L.A.C. (Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño), aplicado en Argentina a través de “Un Mundo Mejor es Posible” (UMMEP), destinado a poner fin al analfabetismo en América Latina.

Dicho pedido se fundamenta en la necesidad de remitir a la mayor brevedad posible esta declaración a la UNESCO, puesto que el tiempo de evaluación y análisis concluyó el pasado 30 de abril, pero aún se cuenta con un mínimo plazo para la recepción de la documentación.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

**Eduardo Fernández.**  
Legislador Provincial

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración la moción de preferencia recién leída por Secretaría.

Los señores legisladores que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobada.

Se incorpora al Orden del Día de la 16º sesión ordinaria.

- 24 -

**PUESTOS DE PEAJE Y OTROS PUNTOS ESTRATÉGICOS. PLAN DE CONTROL VEHICULAR PERMANENTE PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO. IMPLEMENTACIÓN. SOLICITUD AL MINISTERIO DE SEGURIDAD.**  
**Moción de preferencia. Se aprueba.**

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 7282/L/05, con una moción de preferencia que se leerá a continuación.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

**Expte. 7282/L/05**

Córdoba, 3 de mayo de 2005

**Al Señor  
Presidente de la Legislatura de la Provincia  
Cr. Juan Schiaretti  
Presente**

De mi consideración:

Me dirijo al señor presidente a fin de solicitar preferencia por 7 días para el proyecto 7282/L/05, atento a lo habilitado por el artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, y en razón de poder expresar en tiempo y en forma se tomen los recaudos necesarios a fin de prevenir y evitar los accidentes de tránsito.

Sin otro particular, le saludo al señor presidente muy atentamente.

**Jorge Anselmo Valinotto**  
Legislador Provincial

**Sr. Presidente (Fortuna).**- En consideración la moción de preferencia recién leída por Secretaría.

Los señores legisladores que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Aprobada.

Se incorpora al Orden del Día de la 16ª sesión ordinaria.

- 25 -

**CONSTITUCIÓN PROVINCIAL. ARTÍCULO 51.  
REGLAMENTACIÓN. CÓDIGO PROCESAL  
PENAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.**

**ARTÍCULO 221. MODIFICACIÓN.**

Moción de preferencia. Se rechaza.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5340/L/04, con una moción de preferencia que se leerá a continuación.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

**Expte. 5340/L/04**

Córdoba, 2 de mayo de 2005

**Señor Presidente del Poder Legislativo  
de la Provincia de Córdoba**

**Cr. Juan Schiaretta**  
**S / D.**

De mi consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitarle una preferencia de 14 días en el tratamiento del proyecto de ley 5340/L/04, en los términos del artículo 122 del Reglamento Interno de este Cuerpo, esto es, para la 17ª sesión ordinaria del presente período legislativo.

El citado proyecto tiene por objeto la modificación de la Ley 8123, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, en lo que se refiere al secreto profesional periodístico, incluyendo a los periodistas en el grupo de sujetos obligados a abstenerse de declarar sobre las fuentes de informaciones.

Realizamos este pedido en el convencimiento de que es preciso dar respuesta al vacío legal que ocasionan los reiterados cercenamientos en el ejercicio de la profesión.

profesión.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

**Mónica Gutiérrez**

Legisladora Provincial.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Tiene la palabra la señora legisladora Bianciotti.

**Sra. Bianciotti.**- Señor presidente, el bloque de la Unión Cívica Radical quiere solicitar la rehabilitación del proyecto 4970/L/04 para que se trate conjuntamente con el proyecto 5340 ya que tiene un similar contenido, que es la modificación del segundo párrafo del artículo 220 de la Ley 8123, Código Procesal Penal.

Gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Así se hará, señora legisladora.

En consideración la moción de preferencia formulada por la legisladora Gutiérrez, recién leída por Secretaría.

Los señores legisladores que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Rechazada.

No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Luis Trad a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

-Así se hace.

**Sr. Presidente (Fortuna).**- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 23 y 29.

**Silvana Sabatini**

Directora del Cuerpo de Taquígrafos

---

**Juan Schiaretti**  
**Vicegobernador**

**Gustavo Eduardo Núñez**  
**Secretario de Coordinación**  
**Operativa y de Comisiones**

**Guillermo Arias**  
**Secretario Legislativo**